

ECONOMÍA CRIMINAL EN ANTIOQUIA: NARCOTRÁFICO

Jorge Giraldo Ramírez (editor académico)
Alberto Naranjo
Ana María Jaramillo
Gustavo Duncan



ECONOMÍA CRIMINAL EN ANTIOQUIA: NARCOTRAFICO

Jorge Giraldo Ramírez (editor académico)
Alberto Naranjo
Ana María Jaramillo
Gustavo Duncan



ECONOMÍA CRIMINAL EN ANTIOQUIA:
NARCOTRÁFICO

Primera edición
Medellín, marzo de 2011
© Centro de Análisis Político-Universidad Eafit

Editor académico:
Jorge Giraldo Ramírez

Autores:
Jorge Giraldo Ramírez
Alberto José Naranjo
Ana María Jaramillo
Gustavo Duncan

Editan:
Universidad Eafit
Fundación Proantioquia
Empresa de Seguridad Urbana

ISBN: 978-958-8719-02-3

Diseño e impresión:
Pregón Ltda.

Contenido

Presentación	5
Economía criminal en Antioquia y Valle de Aburrá: una aproximación	9
<i>Jorge Giraldo Ramírez - Alberto Naranjo</i>	
Introducción	11
Marco conceptual	14
Antioquia: aproximación a la industria de la coca.....	20
Bajo Cauca y Valle de Aburrá: otras industrias criminales e informalidad	36
Economía criminal: factor determinante del problema humanitario antioqueño.....	49
Los anudamientos entre las tres economías y la política.....	55
Líneas futuras de trabajo.....	59
Bibliografía	60

**Acerca de los estudios sobre conflicto armado
y violencia urbana en Medellín (1985-2009) 63**

Ana María Jaramillo

Resumen.....	65
Presentación.....	66
Características de la producción.....	67
Enfoques conceptuales.....	70
Enfoques metodológicos.....	76
Factores explicativos de la violencia urbana.....	78
La conflictividad violenta. Modalidades, actores y ciclos de la violencia urbana.....	85
Las modalidades de la violencia.....	86
Impactos del conflicto armado y las violencias en la sociedad.....	96
Respuestas de la sociedad y del Estado frente a la violencia.....	112
Conclusiones y recomendaciones.....	123
Referencias.....	130
Anexo	
Bibliografía de referencia.....	134

Crimen y poder:

El filtro del orden social 151

Gustavo Duncan

El paso de un umbral social (en busca del poder y la gloria).....	161
Los condicionamientos del contexto social.....	175
Las consecuencias de la desmesura.....	200
Una teoría sobre la difusión social del narcotráfico en Colombia.....	215
Epílogo: Una rebelión que se diluye a sí misma.....	244
Bibliografía.....	248

Nota de autores..... 255

Presentación

Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia.

Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños —académicos o no— hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad.

Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de dro-

gas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo.

Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln —que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera— queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen.

La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores.

El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar.

Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

Jorge Giraldo Ramírez
Abril del 2011

Economía criminal en Antioquia y Valle de Aburrá: una aproximación*

Jorge Giraldo Ramírez
Alberto Naranjo

* Este artículo hace parte de los resultados del proyecto “Economía ilegal en Antioquia” del grupo “Estudios sobre Política y Lenguaje” de la Universidad EAFIT, financiado por la Fundación Proantioquia. Los autores agradecen las contribuciones al mismo del Research in Spatial Economics de la Universidad EAFIT y a las investigadoras Ana María Jaramillo y Marcela Barón.

Introducción

A comienzos del 2010, un estado del arte de los estudios sobre violencia en Medellín concluyó que desde mediados de la década de 1990 –es decir, prácticamente, desde la desarticulación del cartel de Medellín– “no ha habido un seguimiento a los cambios ocurridos”, “ni tampoco una explicación más rigurosa de los procesos e interconexiones que han hecho posible la constitución del narcotráfico como un factor de poder en la ciudad, así como las articulaciones con otras formas delincuenciales que han hecho parte de la criminalidad organizada” (Jaramillo, 2010a: 38)¹.

Seguramente, este abandono del tema del narcotráfico y del crimen organizado en general se debe al escalamiento de la guerra interna en el país (1998-2005) –una cuarta parte de cuyos

1. Publicado en este volumen.

eventos ocurrieron en Antioquia— y al incremento de la violencia homicida en Medellín (2000-2003). Sin embargo, la mayor preocupación del sector público y de la academia antioqueña por el conflicto armado, perdió de vista el papel que el narcotráfico jugó en el fortalecimiento de los grupos guerrilleros y paramilitares y la dinámica que el desorden creado por la guerra le imprimía a las economías ilegales y a nuevos agentes del crimen organizado.

Ante este diagnóstico la Fundación Proantioquia y la Universidad Eafit decidieron unir esfuerzos para volver a examinar el problema del narcotráfico en Antioquia y, a partir de allí, abrir una reflexión sobre la importancia del mismo y la necesidad de que el Estado y la sociedad lo vuelvan a colocar en el primer lugar de sus preocupaciones. Desde el Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit se coordinaron los trabajos de investigadores de la universidad y varios expertos externos. Una primera presentación de los resultados se realizó ante la Junta Directiva de la Fundación Proantioquia y los mecanismos y alcances de una eventual socialización de ellos está por definirse.

Este trabajo no pretende llenar un vacío de casi década y media, con modestia busca apenas llamar la atención sobre la importancia que tiene en Antioquia la economía criminal, especialmente la de la producción y tráfico de cocaína, y sus articulaciones con el crimen organizado, los problemas humanitarios como el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersona, y las precarias capacidades del Estado en algunas regiones del departamento.

El mundo de la economía criminal es un auténtico “mundo oscuro” —como se lo llama en los relatos de ficción de J. R.

Tolkien o George Lucas. Penetrar en él solo es posible a partir de pequeñas muestras que empiezan a aparecer en los procesos judiciales o de reportes obtenidos en trabajo de campo². Curiosamente, el sector más visible de estos mercados ilegales, es el de los cultivos ilícitos y ello permite hablar con mayor propiedad de sus características. Por esta razón, buena parte de la información y el análisis que contiene este trabajo se dedica al cultivo de la hoja de coca en Antioquia y a la producción de pasta de coca y de cocaína.

Los datos más recientes considerados corresponden al 2009 y es posible que el decrecimiento en la producción de coca que se registró en ese año haya continuado hasta hoy. Esto, sin embargo, no debiera subestimar la importancia que la coca sigue teniendo en Antioquia, por dos razones: a) Los municipios del suroriente de Antioquia –en límites con Caldas– han empezado a tener mayor importancia como cultivadores y procesadores de hoja de coca; b) entre el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños existe un solo sistema productivo enlazado con el sur de Córdoba y el sur de Bolívar.

El trabajo delimita dos territorios a los que se presta más atención: la subregión Bajo Cauca y los municipios aledaños, y el valle de Aburrá. A renglón seguido, se indican otras economías informales y criminales en estas dos regiones, con muchas más restricciones en la información disponible. En el apartado siguiente, se muestra cómo los problemas de desplazamiento y accidentes con minas antipersona están directamente vinculados con el negocio de la coca, independientemente de que sus agentes sean grupos guerrilleros o bandas criminales emergentes.

2. Todos los reportes que se refieren en este trabajo provienen de fuentes oficiales clasificadas.

El trabajo comienza con un sucinto marco conceptual sobre las economías legal, informal y criminal, así como de las características que asumen la política y el mercado bajo la égida del crimen organizado y termina con una breve indicación, muy general, sobre las relaciones entre estos fenómenos. Una coda final, señala sumariamente algunas probables líneas de continuación para estos trabajos.

Estas páginas deben tomarse como un resumen ejecutivo de, al menos, cuatro artículos específicos sobre cultivos ilícitos, mercados ilegales, problemas humanitarios y la vinculación del crimen organizado a la política.

Marco conceptual

En principio, al abordar el problema de la “economía ilegal”, se suscita la necesidad de una conceptualización que permita delimitar los componentes o criterios que le dan contenido a la categoría e, inmediatamente, establecer las diferencias con otra con la que se relaciona íntimamente, y muchas veces se confunde, como es la de “economía informal”.

Es evidente que la globalización de los mercados, la pérdida de capacidad regulatoria del Estado y la internacionalización del crimen organizado –que se aceleraron en la década de 1980– pusieron de manifiesto que las tradicionales equiparaciones entre economía informal y economía ilegal se habían vuelto insostenibles (Sousa, 2004: 150; Portes y Haller, 2004: 10)³.

Esto condujo a una distinción entre la economía formal, economía informal y economía delictiva. Para Manuel Castells y

3. Tradicionalmente el término sector informal se refería a las actividades económicas “que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección” (Feige, 1990: 990).

Alejandro Portes la diferencia entre la economía formal y la informal “no guarda relación con las características del producto final sino con la forma en que este es producido o intercambiado” (Portes y Halle, 2004: 11). La diferencia entre economía informal y economía delictiva, en cambio, sí radicaría en la condición del producto final como lícito o ilícito (ver Tabla 1).

Tabla 1. Tipología de economías (Castells y Portes)

Economía	Producción y distribución	Producto final
Formal	Lícita	Lícito
Informal	Ilícita	Lícito
Delictiva	Ilícita	Ilícita

Fuente: Giraldo con base en Castells y Portes (Portes y Haller, 2004: 12).

Sousa critica severamente este enfoque porque “no da cuenta de situaciones en donde ciertos productos lícitos, como por ejemplo automóviles o armas, son comercializados por bandas del crimen organizado de manera ilícita. ¡El estatus del producto no parece tan importante en cuanto a la forma en que son efectuadas las transacciones!” (Sousa, 2004: 150). Para Sousa la propuesta de Castells y Portes falla al separar las esferas de la producción y el consumo y, además, pareciera separarse de ellos en cuanto le dan menos importancia al papel del Estado como el agente que tiene el mayor poder de definición respecto a la licitud o ilicitud de procesos, productos y consumos.

Para Sousa el factor fundamental para la diferenciación de las tres economías radica “en el poder del Estado y en la ‘confianza’ en la legitimidad de sus instituciones” (Sousa, 2004: 151). En términos más concretos, Sousa estima que un criterio más claro sería el de los medios a través de los cuales se regulan las transacciones y se pretende el cumplimiento de los contratos en

cada tipo de actividad. La economía lícita y la economía ilegal son contradictorias en tanto la primera cae en el ámbito de la coacción estatal mientras que la segunda está vinculada con el uso de la violencia ilícita agenciada por particulares (ver Tabla 2).

Tabla 2. Tipología de economías (R. Silva de Sousa)

Economía	Mecanismo de gestión de contratos	Forma de punición
Formal	Estado: ley, coacción legítima	Sanción legal (económica, prisión)
Informal	“Valor confianza” Principios de reciprocidad	Exclusión de relaciones Privación de medios
Ilegal	Uso racionalizado de la violencia ilegítima	Expropiación Muerte

Fuente: Giraldo con base en Sousa (2004).

Paralelamente –aunque sin referencia directa a Castells y Portes– Michel Misse se propone “romper con la naturalización economicista y legalista” que, según él, “ha dificultado la comprensión de la emergencia y desarrollo de formas de mercado ilegal que se alejan brutalmente del ideal capitalista moderno” (Misse, 2009: 111). La falacia economicista se refiere a la idea de que las reglas de mercado funcionan bien en los campos propios de las economías informal e ilegal, e ignora la existencia de lo que llama “mercancías políticas”. La falacia legalista supone que no existe ninguna diferencia entre “criminalización conceptual” y “criminalización real” (Misse, 2009: 109). Para los propósitos de este trabajo utilizaremos la expresión “ilegal” para el primer caso, y “criminal” (o “criminalizado”) para el segundo. La diferencia entre delito y criminalización supone que desde el Estado y/o la sociedad existen tolerancias e inculpaciones preferenciales sobre intercambios o productos

que son formalmente ilegales. De esta manera, se generaría una matriz como la que aparece en la (Tabla 3).

Tabla 3. Tipología de economías (M. Misse)⁴

Economía	Intercambio	Producto
Formal	Lícito	Lícito
Informal	Tolerado (abierto o regulado)	Lícito (abierto o protegido)
	Tolerado	Ilícito
Ilegal	Criminalizado	Criminalizado

Fuente: Giraldo con base en Misse (2009).

Varias cosas se ponen de presente con los aportes de Sousa y Misse a la discusión:

- a. La economía informal no es sólo una anomalía respecto a las legislaciones domésticas y a las leyes del mercado; constituye un campo propio de la vida económica y social con mayor presencia en los países del mundo en desarrollo pero cada vez más generalizado en otros ámbitos.
 - b. La presencia de mecanismos violentos e ilegales de regulación –gestionados por particulares– modifican sustancialmente conceptos usados en el mundo desarrollado tales como: corrupción, caza de rentas (*rent-seeking*) o captura del Estado (Garay *et al*, 2010: 15-23). En particular, el concepto “crimen organizado” cobra relevancia para el análisis de las economías ilegales.
 - c. En virtud de estos factores es pertinente la introducción del concepto de economía criminal –con sus variaciones semánticas como mercado o economía ilícitos, ilegales,
-
4. El caso de un intercambio regulado se ejemplifica por la venta de medicamentos o armas (bajo prescripción médica o autorización) o de mercancías con carga impositiva o con cualquier tipo de restricción al público. El caso de un producto lícito protegido cubre, por ejemplo, todas aquellas mercancías sobre las que existen derechos de autor.

delictivos, etc.— para aludir a un sector específico, con cualidades distintas a la economía informal que, por definición, es ilegal en diversos grados.

- d. A su vez, la distinción entre lo formalmente ilícito y lo realmente criminal, pone de presente que en la sociedad existe una distinción entre lo ilícito tolerado y lo ilícito criminalizado, y que la gestión de esa criminalización depende de las autoridades administrativas de diverso orden, incluyendo a los gobiernos locales, la clase política y la fuerza pública. Este fenómeno vincula el clientelismo político y el concepto de “mercancía política” con el tema de la economía criminal (Misse, 2009: 124-125).

En consecuencia, los conceptos centrales concernientes a este trabajo son los de economía informal, economía (o mercado) criminal⁵, crimen organizado y mercancía política.

Economía informal. Cubre todas las actividades económicas que hacen caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social” y están excluidas de la protección de aquellas (Portes y Haller, 2004: 10-11).

Economía criminal. Cubre las actividades económicas que, desarrolladas por fuera de los marcos legales, asegura los acuerdos entre los agentes del mercado ilegal principalmente (también puede acudir a la corrupción u otros métodos) mediante la amenaza o el uso de la violencia por parte de grupos particulares (Sousa, 2004: 153, 163; Garzón, 2008: 148). Se trata de

5. En adelante utilizaremos el término economía criminal propuesto por Ghezzi y Mingione, 1990 (Sousa, 2004: 150).

un mercado triplemente ilegal: mercancías criminalizadas, que forzosamente se distribuyen y consumen de forma ilícita, en un circuito económico protegido por grupos armados ilegales⁶.

Crimen organizado. Es un sistema de relaciones establecido para “suministrar bienes y servicios ilegales en un mercado diverso; con capacidad de coacción y uso de la violencia contra quienes le retan (grupos criminales privados o el Estado); durante cierto tiempo –en todo caso longevo” (Garzón, 2008: 38). La *Commission on Organized Crime* señala que el crimen organizado tiene seis características: “continuidad, estructura, membrecía definida, criminalidad, violencia y poder como su objetivo” (OCR, 2010)⁷. La Conferencia Ministerial Mundial identificó también seis características similares: criminalidad, control, violencia y corrupción, lavado de activos, expansión transnacional y cooperación con otros grupos (Dómine, 2006: 95)⁸. El crimen organizado permite la transferencia de tecnologías delictivas y transmisión como aprendizaje.

Mercancía política. El sociólogo brasileño Miche Misse ha propuesto el concepto mercancía política para nombrar los servicios que, tanto grupos armados ilegales como agentes públicos, ofrecen en el mercado criminal en relaciones de intercambio libres o forzadas y siendo recursos políticos se traducen en “valor econó-

-
6. No sobra señalar que existe otro fenómeno diferente: “La criminalidad económica es la degeneración de la actividad económica, el fenómeno por el cual las diversas actividades productivas de expresión socialmente positiva se degeneran en factores de daño o peligro para los intereses penalmente tutelados” (Dómine, 2006: 87-88).
 7. La *Commission on Organized Crime* (COC) fue un órgano gubernamental estadounidense creado durante la Administración Reagan en 1984. Estas definiciones son más potentes que la que ofrece la Resolución 55/25 del 2000 de Naciones Unidas que elude la mención directa de los dos factores clave: violencia y poder (Unodc, 2004: 5).
 8. La Conferencia se reunió en Nápoles en 1994 y produjo el *Plan de acción global contra el crimen organizado transnacional*.

mico y cálculo monetario” (Misse, 2009: 116). Mercancías políticas son todos los servicios que surgen de “la apropiación privada de los medios de incriminación, como [de] la expropiación de recursos políticos monopolizados por el Estado para la obtención de beneficios económicos” (Misse, 2009: 120). Los ejemplos de mercancía política van desde los servicios asociados clásicamente con la corrupción, hasta la extorsión y el secuestro, pasando por el empleo no legítimo de la violencia (tanto por agentes públicos como privados)⁹. Típicamente el crimen organizado es un proveedor de una mercancía política llamada protección, que convierte a sus organizaciones en “empresarios de la violencia”, aclarando, “no empresarios violentos” (Gambetta, 2007: 137)

Capitalismo político. Así, siguiendo la estela de Max Weber, existirían dos tipos de capitalismo: el capitalismo moderno que se ha racionalizado a través de la historia como esfera económica autónoma pero apoyada en el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado; y el capitalismo político que se apoya para producir ganancias en la violencia, la explotación y la fuerza (Misse, 2009: 110-111).

Antioquia: aproximación a la industria de la coca

El objetivo de este apartado es describir la dinámica de los cultivos de coca en Antioquia, por municipios y a nivel veredal, para después explorar las dimensiones de la industria de la coca en el departamento.

9. La COC plantea que la noción de crimen organizado requiere la coordinación de dos componentes, el grupo propiamente criminal y el “buffer”, que es el encargado de neutralizar la acción del Estado mediante la corrupción de agentes públicos y privados.

El cultivo de coca en Antioquia y su dinámica espacial

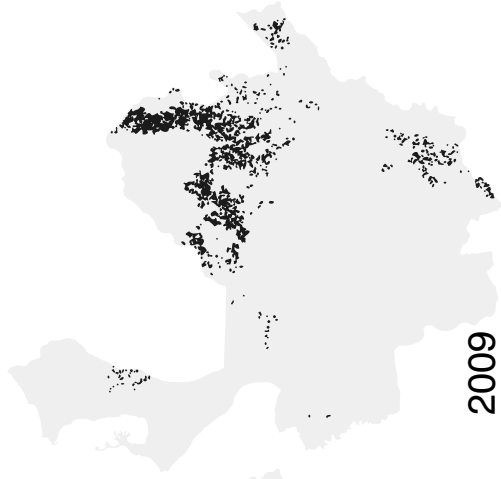
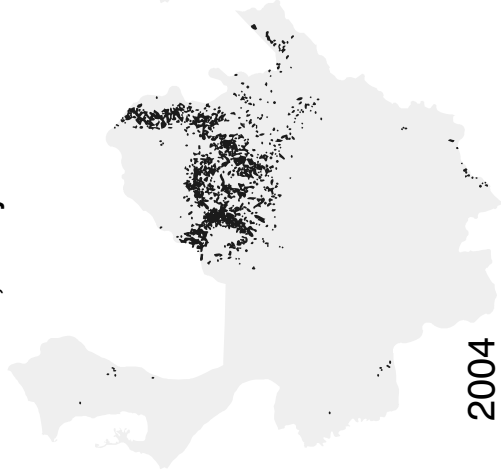
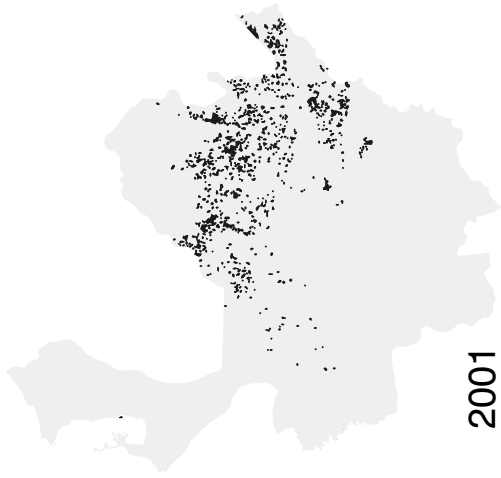
La dinámica de los cultivos de coca en Colombia y sus efectos sociales y económicos siguen siendo de gran importancia para la política pública colombiana. Esto se refleja en la magnitud de recursos que se han destinado a los diversos programas asociados en los últimos 15 años y, en especial, desde la implementación del Plan Colombia. También se hace evidente en Antioquia donde, sólo la Gobernación, invertirá en el 2010 95 mil millones de pesos en la erradicación de los cultivos de coca y en desarrollo alternativo (Portafolio, 2010).

La explicación de este proyecto departamental puede deducirse de la presencia de los cultivos de coca en Antioquia en el periodo 2001-2009 (Mapas 1, 2 y 3).

Pero tal vez el factor más importante sea que Antioquia, en la última década, ha cobrado mayor importancia relativa en el país como uno de los principales departamentos con presencia de cultivos de coca. Si comparamos año a año el lugar que ocupa el departamento en área cultivada con coca, se aprecia cómo Antioquia en el 2001 ocupaba el noveno puesto, en el 2004 el quinto puesto, en el 2008 el cuarto puesto y en 2009 el séptimo en importancia a nivel nacional (Tabla 1). Esta relevancia de Antioquia se debe a dos factores: uno, el crecimiento del área cultivada – que fue de un 116% en el periodo– y, dos, los éxitos en el control de los cultivos ilícitos en otras regiones del país¹⁰.

10. Es de anotar que las labores de erradicación en el departamento no han sido despreciables. Para 2009 el total de hectáreas erradicadas en Antioquia fue de 7.202,53 y representó el 11,8% del total erradicado en 29 departamentos (PCI, 2010). Estos éxitos nacionales se corresponden con una tendencia mundial ya que el cultivo de coca cayó en un 28% en la década pasada (Unodc, 2010: 4).

**Mapas 1, 2 y 3. Cultivo de coca en Antioquia
2001, 2004 y 2009**



Fuente: Naranjo (2010).

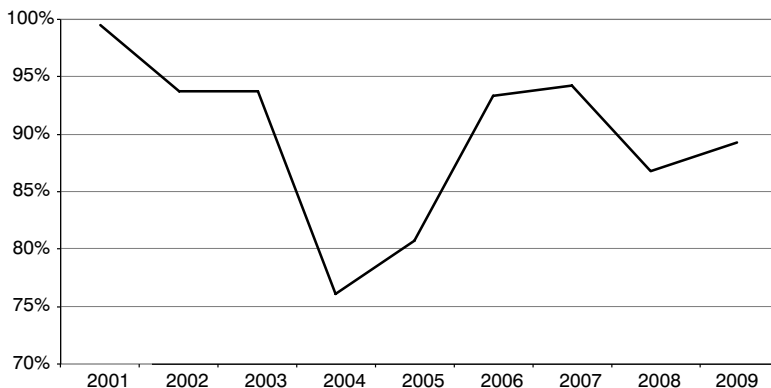
La dinámica de los cultivos de coca se comprende mediante la aproximación a tres aspectos: la estabilidad de los cultivos, la reutilización de viejos cultivos y la creación de nuevos cultivos.

El cultivo estable, que se usa por dos años consecutivos, presentó extraordinario crecimiento del 6286% entre 2001 y 2004, años en los que escaló el conflicto armado en el departamento, y después se redujo en un 34% hasta el 2008. Sin embargo, su importancia relativa es muy baja. En efecto, los cultivos nuevos (aquellos en áreas que no se utilizaron en el año inmediatamente anterior) promedian el 90% del área cultivada anualmente en este periodo (Gráfico 1) y crecieron un 44% entre 2001 y 2008, con más rapidez en la segunda mitad del periodo (2004-2008). Los cultivos de coca reutilizados (aquellos abandonados por un año y cultivados de nuevo al año siguiente) representaron en promedio el 3% del total durante el periodo 2000-2008 y, aunque representan muy poco dentro del total de área cultivada, crecieron un 200% durante la segunda parte del periodo (2004-2008).

Cuadro 1. Posición departamental en área cultivada de coca. 2000-2009

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PUTUMAYO	PUTUMAYO	GUAVIARE	NARINO	META	META	NARINO	NARINO	NARINO	NARIÑO
CAQUETA	GUAVIARE	PUTUMAYO	GUAVIARE	NARINO	NARINO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	GUAVIARE
GUAVIARE	CAQUETA	NARINO	META	GUAVIARE	GUAVIARE	META	META	GUAVIARE	CAUCA
META	NORTE DE SANT.	META	PUTUMAYO	VICHADA	VICHADA	GUAVIARE	GUAVIARE	ANTIOQUIA	PUTUMAYO
NARINO	META	CAQUETA	CAQUETA	ANTIOQUIA	PUTUMAYO	CAQUETA	ANTIOQUIA	BOLIVAR	BOLIVAR
NORTE DE SANT.	VICHADA	NORTE DE SANT.	NORTE DE SANT.	PUTUMAYO	ANTIOQUIA	VICHADA	VICHADA	META	META
BOLIVAR	NARINO	VICHADA	ANTIOQUIA	CAQUETA	CAQUETA	ANTIOQUIA	CAQUETA	CAUCA	ANTIOQUIA
VICHADA	BOLIVAR	ANTIOQUIA	BOLIVAR	BOLIVAR	BOLIVAR	BOLIVAR	BOLIVAR	CAQUETA	CAQUETA
CAUCA	ANTIOQUIA	BOLIVAR	VICHADA	NORTE DE SANT.	CORDOBA	CAUCA	CAUCA	VICHADA	VICHADA
SANTANDER	CAUCA	CAUCA	CAUCA	ARAUCA	CAUCA	ARAUCA	ARAUCA	NORTE DE SANT.	NORTE DE SANT.
ANTIOQUIA	ARAUCA	ARAUCA	VAUPES	CORDOBA	ARAUCA	SANTANDER	NORTE DE SANT.	CHOCO	CORDOBA
VAUPES	VAUPES	VAUPES	CORDOBA	CAUCA	SANTANDER	CORDOBA	SANTANDER	CORDOBA	CHOCO
ARAUCA	GUAINIA	GUAINIA	SANTANDER	SANTANDER	AMAZONAS	AMAZONAS	CORDOBA	SANTANDER	SANTANDER
GUAINIA	CORDOBA	AMAZONAS	SANTANDER	VAUPES	CHOCO	GUAINIA	CHOCO	VALLE	VALLE
CESAR	AMAZONAS	MAGDALENA	AMAZONAS	GUAINIA	GUAINIA	CHOCO	GUAINIA	AMAZONAS	ARAUCA
BOYACA	MAGDALENA	SANTANDER	BOYACA	AMAZONAS	NORTE DE SANT.	NORTE DE SANT.	AMAZONAS	GUAINIA	GUAINIA
LA GUAJIRA	CHOCO	CORDOBA	ARAUCA	MAGDALENA	VAUPES	BOYACA	VALLE	VAUPES	VAUPES
CORDOBA	LA GUAJIRA	LA GUAJIRA	MAGDALENA	LA GUAJIRA	BOYACA	VAUPES	VAUPES	MAGDALENA	AMAZONAS
MAGDALENA	VALLE	BOYACA	LA GUAJIRA	CHOCO	LA GUAJIRA	CALDAS	MAGDALENA	ARAUCA	LA GUAJIRA
CUNDINAMARCA	SANTANDER	VALLE	CHOCO	BOYACA	MAGDALENA	MAGDALENA	CUNDINAMARCA	BOYACA	BOYACA
VALLE	BOYACA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	CALDAS	CALDAS	VALLE	BOYACA	CALDAS	MAGDALENA
AMAZONAS	CUNDINAMARCA	HUILA	CALDAS	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA	LA GUAJIRA	LA GUAJIRA	CALDAS
CHOCO	CALDAS	CHOCO	VALLE	VALLE	VALLE	LA GUAJIRA	CALDAS	CESAR	-
CALDAS	CESAR	CALDAS	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CUNDINAMARCA	-
HUILA	HUILA	CESAR	HUILA	HUILA	HUILA	HUILA	HUILA	HUILA	-

Fuente: Naranjo (2010).

Gráfico 1. Porcentaje de área con coca nueva sobre el total del área cultivada en Antioquia

Fuente: Naranjo (2010).

Tratándose del nivel municipal, durante el periodo 2000-2009 han sido 54 municipios (43%) los que han presentado alguna vez algún cultivo de coca, mientras que 28 municipios (22,5%) han tenido en promedio cultivos que sobrepasaron las diez hectáreas en alguno de estos años.

En cuanto al área total del cultivo de coca, la posición relativa año por año de los municipios en Antioquia evidencia la importante participación de los municipios Anorí, El Bagre, Tarazá, Cáceres y Zaragoza en todos los años, las variaciones de Segovia, Valdivia y Nechí, la estabilidad de Ituango y la declinación de Remedios (Tabla 2). En número de cultivos de coca, hubo muchas variaciones en los subperiodos lo que refleja una dinámica significativa de los cultivos en el departamento.

Cuadro 2. Posición relativa municipal y anual según tamaño de área de coca cultivada

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
El Bagre	Remedios	Anorí	Tarazá	Tarazá	Anorí	Zaragoza	Tarazá	El Bagre
Remedios	Zaragoza	Cáceres	Anorí	Anorí	Segovia	Tarazá	Anorí	Tarazá
Tarazá	Segovia	El Bagre	Cáceres	Cáceres	El Bagre	El Bagre	El Bagre	Cáceres
Zaragoza	Anorí	Tarazá	El Bagre	Zaragoza	Cáceres	Valdivia	Cáceres	Ituango
Segovia	El Bagre	Zaragoza	Valdivia	El Bagre	Zaragoza	Nechí	Zaragoza	Valdivia
Ituango	Tarazá	Remedios	Zaragoza	Valdivia	Tarazá	Anorí	Valdivia	Segovia
Anorí	Ituango	Ituango	Ituango	Segovia	Amalfi	Cáceres	Ituango	Nechí
Cáceres	Cáceres	Turbo	Nechí	Nechí	Nechí	Segovia	Segovia	Zaragoza
Valdivia	Amalfi	Valdivia	Segovia	Ituango	San Luis	Amalfi	Yondó	Anorí
Caucasia	Vegachí	Nechí	Amalfi	Remedios	Remedios	Bricerío	San Luis	Yondó
Yolombó	Nechí	Yondó	Yondó	Amalfi	San Francisco	Remedios	San Francisco	San Luis
Vegachí	Yondó	Amalfi	Remedios	Bricerío	Ituango	Ituango	Nechí	Remedios
Yalí	Valdivia	Necocli	Bricerío	San Luis	Sonsón	San Luis	Amalfi	Amalfi
San Roque	Yalí	Segovia	Campamento	Yondó	Nariño	San Francisco	Remedios	Nariño
Amalfi	Caucasia	Vegachí	Yarumal	Vegachí	San Carlos	Vegachí	Bricerío	San Francisco
Bricerío	Bricerío	Sonsón	Vegachí	San Francisco	Puerto Nare	Campamento	Sonsón	Dabeiba
San Francisco	Campamento	Yalí	Yalí	Sonsón	Valdivia	Yalí	Puerto Nare	San Carlos
Nechí	Yolombó	Bricerío	Argelia	Campamento	Vegachí	Puerto Nare	Nariño	Turbo
San Luis	San Roque	San Luis	Sonsón	Yalí	Bricerío	Yondó	San Carlos	Bricerío
San Carlos	Yarumal	Yolombó	Turbo	Argelia	Argelia	Nariño	Vegachí	Apartado
Campamento	Argelia	San Francisco	Nariño	Yarumal	Yondó	San Carlos	Turbo	Vegachí
Yondó	Nariño	Caucasia	Puerto Nare	Puerto Nare	Campamento	Sonsón	Campamento	Sonsón
Argelia	Necocli	Argelia	Caucasia	Caucasia	Caucasia	Caucasia	San Roque	Cocorná
Nariño	Puerto Nare	Nariño	Necocli	Nariño	Yarumal	Yarumal	Argelia	Vigia del Fuerte
Necocli	San Carlos	Campamento	San Carlos	Necocli	Necocli	Argelia	Caucasia	Campamento
Puerto Nare	San Francisco	Puerto Nare	San Francisco	San Carlos	San Roque	Necocli	Necocli	Yalí
Sonsón	San Luis	San Carlos	San Luis	San Roque	Turbo	San Roque	Yarumal	Puerto Nare
Turbo	Sonsón	San Roque	San Roque	Turbo	Yalí	Turbo	Yarumal	Argelia
Yarumal	Turbo	Yarumal	Yolombó	Yolombó	Yolombó	Yolombó	Yolombó	San Rafael

Fuente: Naranjo (2010).

Los cultivos nuevos se concentraron casi en un 90% en sólo 11 municipios (9%), de los cuales los más importantes son Valdivia y Anorí, mientras Remedios, Caucaasia, Yolombó, Nechí, Amalfi, San Luis y San Francisco presentan innovaciones temporales. Sin embargo, el tamaño promedio del cultivo de coca nueva muestra una tendencia a la baja de este tipo de cultivo en el periodo, lo que implica que las áreas de cultivo estable tienen un mayor tamaño en promedio que las áreas de cultivo nuevo.

Para profundizar el análisis de las áreas nuevas de cultivo de coca se bajó al nivel veredal para identificar los municipios con alta probabilidad de haber participado en clusters de coca nueva¹¹. Los municipios que muestran los grados más altos de clusterización son Tarazá, Cáceres, Anorí, El Bagre, Valdivia, Yalí y Zaragoza, mientras Remedios, Segovia, Ituango y Amalfi han tenido índices muy variables, y Amalfi e Ituango exhiben índices bajos a lo largo del periodo. Otra forma de entender estos clusters municipales es mirando el ICM para un mismo municipio a lo largo del tiempo. El Cuadro 3 nos muestra los municipios que tienen clusters con una alta probabilidad en cada uno de los años.

11. Para ello se usó la estadística descriptiva espacial a nivel veredal, el análisis de cluster (Metodología Anselin Local Morans I) y su significancia estadística a través de lo que llamaremos el Índice de Clusterización Municipal (ICM).

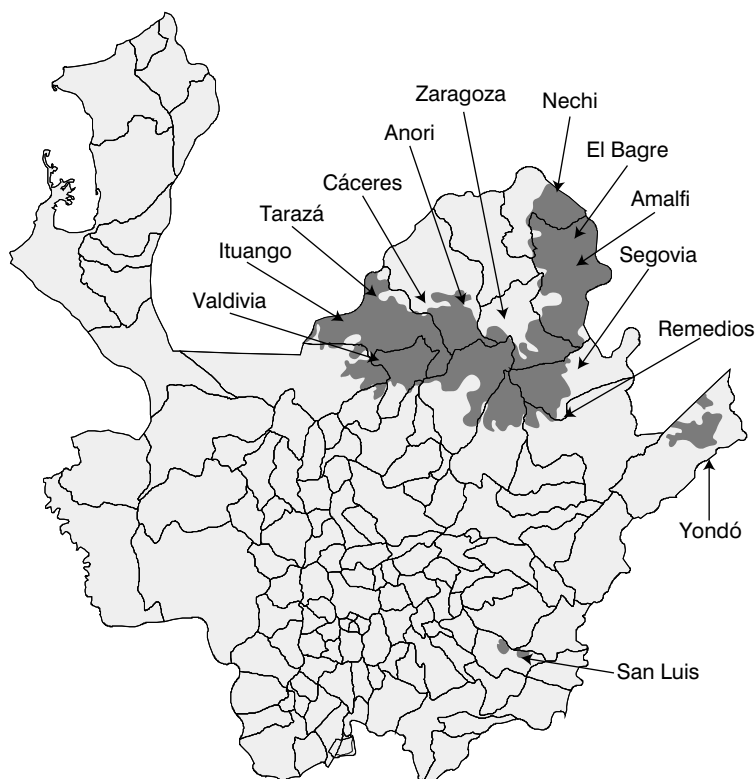
Cuadro 3. Índice de clusterización municipal 2001-2009

NO_M_PIO	ICM 2001	ICM 2002	ICM 2003	ICM2004	ICM2005	ICM2006	ICM2007	ICM2008	ICM2009
Amalfi	0,60	0,71	0,69	0,70	0,83	0,92	0,70	0,91	0,85
Anorí	0,92	0,92	0,98	0,94	0,97	0,97	0,88	0,98	0,93
Briceno	-	0,46	-	0,79	0,57	-	0,67	0,72	1
Cáceres	0,80	0,97	1,00	0,95	0,97	0,98	0,92	0,96	0,92
El Bagre	0,96	0,89	0,94	0,90	0,86	0,93	0,93	0,80	0,98
Ituango	0,77	0,81	0,54	0,83	0,66	0,45	0,60	0,84	0,81
Nechí	-	0,86	0,92	0,99	0,99	0,99	1,00	0,93	0,98
Remedios	0,98	0,96	0,66	-	0,62	0,67	0,31	0,62	0,29
San Francisco	-	-	-	-	-	0,88	-	0,83	-
San Luis	-	-	-	-	-	0,96	-	0,68	0,3
Segovia	0,99	0,99	0,56	0,64	0,91	0,93	0,72	0,94	0,8
Sonsón	-	-	0,69	-	-	0,91	-	0,66	-
Tarazá	0,97	0,95	0,98	1,00	1,00	0,89	0,98	0,99	0,99
Valdivia	0,99	0,68	0,91	0,99	0,96	-	0,96	0,95	0,99
Vegachí	0,93	0,86	0,77	0,32	-	0,37	-	-	-
Yalí	0,99	0,90	1,00	-	-	-	-	-	-
Yondó	-	0,70	0,48	0,46	0,29	-	-	0,89	0,82
Zaragoza	0,95	0,98	0,97	0,76	0,96	0,94	0,98	0,91	0,88

Fuente: Naranjo (2010).

Finalmente, el análisis de clusters municipales evidencia la dificultad que tienen ciertos municipios para dejar de ser territorios importantes para el cultivo de coca y también la facilidad con que los mismos pueden entrar y salir en un periodo de tiempo corto. Quizás esto sea el producto de aspectos institucionales a nivel municipal o de efectos directos de las políticas antidrogas implementadas. Los municipios con más prevalencia de cultivos de nuevos cultivos de coca son Zaragoza, Nechí, Cáceres, entre otros (ver Mapa 4).

Mapa 4. Cluster veredales de nuevos cultivos de coca (2009).



Fuente: Naranjo (2010).

Acercamiento a la producción de base de coca y coca

La información sobre destrucción de laboratorios para el procesamiento de la coca en los últimos dos años demuestra que Antioquia se ha convertido en un departamento que alberga todos los procesos que conforman la cadena de producción de la base de coca y la cocaína. Se destaca la enorme cifra reportada para 2009: 336 instalaciones entre cocinas, cristalizaderos y los llamados “complejos cocaleros”. El 41% en Bajo Cauca, 27% en Norte y 11% en Oriente (Tabla 4).

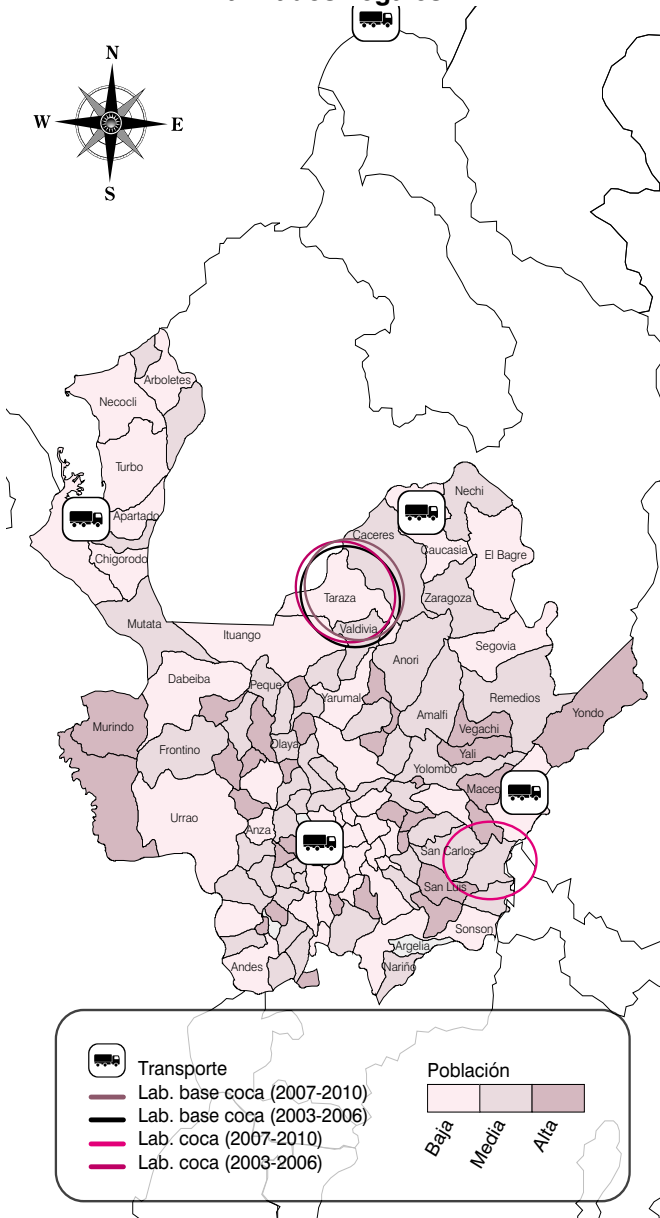
El análisis espacial de la información del periodo para los cultivos de coca y del desmantelamiento de laboratorios nos muestra que las cocinas están ubicadas directamente en las zonas de cultivo y que este fenómeno es preponderante en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres y Anorí. Los llamados complejos cocaleros se desplazan hacia el sur contiguo a las áreas principales de cultivo y cobran relevancia en Valdivia, Yarumal, Anorí, Briceño, Campamento y Amalfi. En tanto, los cristalizaderos parecen separarse más de la zona de cultivo –hacia el suroccidente, en el área de influencia de la carretera al mar– en los municipios de Ituango, Peque, Toledo y San Andrés. (Mapa 5).

Tabla 4. Antioquia: Laboratorios destruidos, total y por subregión

Subregión	2009	2010 (agosto)
Bajo Cauca	147	15
Magdalena Medio	25	5
Nordeste	27	6
Norte	82	26
Occidente	8	0
Oriente	40	4
Suroeste	1	0
Urabá	4	3
Valle de Aburrá	2	0
Total departamento	336	59

Fuente: Secretaría de Gobierno - Gobernación de Antioquia

Mapa 5. Distribución espacial de cultivos, laboratorios y enfrentamientos de la fuerza pública con grupos armados ilegales

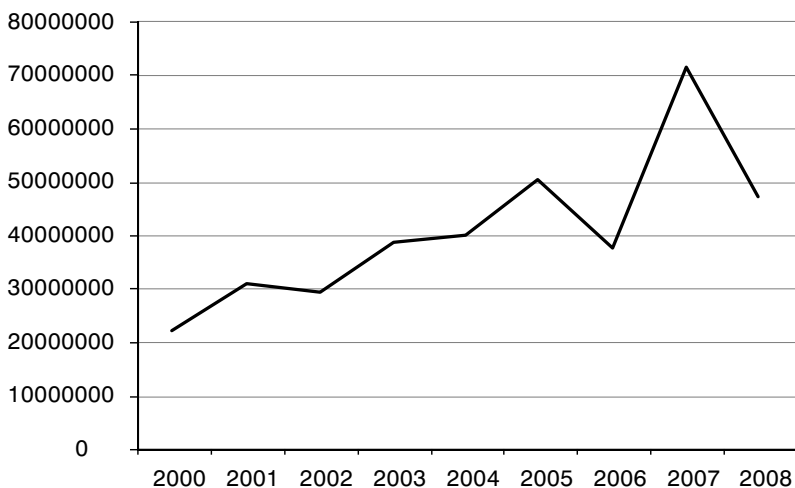


Fuente: Research in Spatial Economics (RISE) – Universidad Eafit

Sin embargo, los casos recientes más importantes de desmantelamiento de instalaciones industriales para la producción de cocaína han ocurrido en el Oriente antioqueño, en zonas contiguas al valle de Aburrá. El caso más publicitado ocurrió el 21 de enero del 2010 cuando el Ejército desmanteló un cristalizadero de cocaína en Concepción (vereda San Pedro, en límites con El Peñol), con instalaciones de “más una hectárea con capacidad para producir de 5 a 6 toneladas de cocaína mensuales” (El Colombiano, 2010a). Dos meses antes, el 20 de noviembre había sido ubicado otro laboratorio semejante en San Vicente (El Colombiano, 2010b).

Entre 2000 y 2009 se habrían producido en Antioquia 410 mil toneladas métricas de hoja de coca, para un promedio anual de 43.930 toneladas anuales. Siguiendo a Naranjo, la producción por hectárea bajó de 6,6 a 5,7 toneladas/ha./año durante el periodo, compensándose la producción total con el crecimiento del área cultivada. La producción total de pasta de coca en el periodo ascendió a 373 toneladas, para un promedio anual de 41,5 toneladas (Gráfico 2). Ahora bien, las incautaciones de coca y pasta de coca en 2009 fueron de 21,7 toneladas; es decir, o sea el 53% de la producción del año inmediatamente anterior (Tabla 5)¹².

12. Esa relación trastoca completamente el histórico de incautaciones (que oscila entre el 10 y el 15%) respecto a la producción total y puede tener dos interpretaciones diversas y no necesariamente incompatibles: eficacia de la fuerza pública o circulación en el territorio departamental de una cantidad mayor de pasta de coca proveniente de los departamentos vecinos.

Gráfico 2. Antioquia: producción anual de pasta de coca (kgrs.)

Elaboración: Cálculos de Naranjo y Centro de Análisis Político

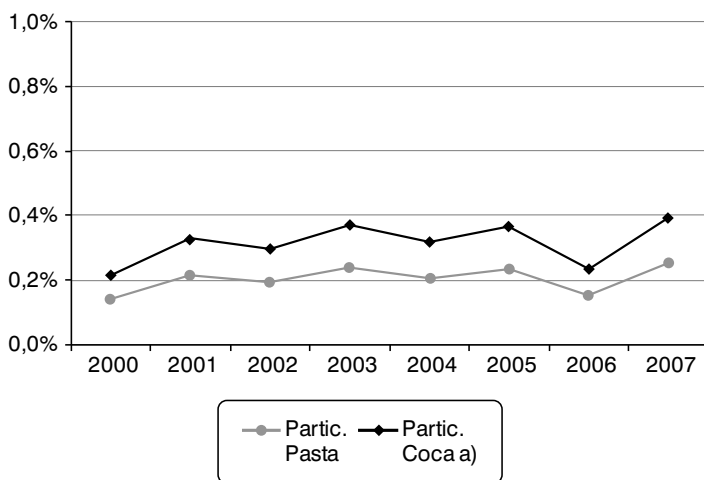
Tabla 5. Antioquia: kilos de estupefacientes incautados

	2009	2010 (agosto)
Cocaína	18.258	4272,342
Heroína	33	8
Base de coca	3.416	1055,532
Marihuana	15.890	9049,169

Fuente: Secretaría de Gobierno - Gobernación de Antioquia

El peso de esa producción en el PIB de Antioquia es significativo, pues oscila entre 0,25 y 0,40 según consideremos que el total de la producción es de pasta de coca a precios en finca o que se trata de cocaína a precios de la venta al detal en el valle de Aburrá (Gráfico 3). Así, sólo la coca representaría el 15% del PIB agropecuario que tenía el departamento en 2005 y sería superior al PIB minero del mismo año.

Gráfico 3. Participación de la producción de pasta de coca o cocaína en PIB Antioquia (Base 2008)¹³



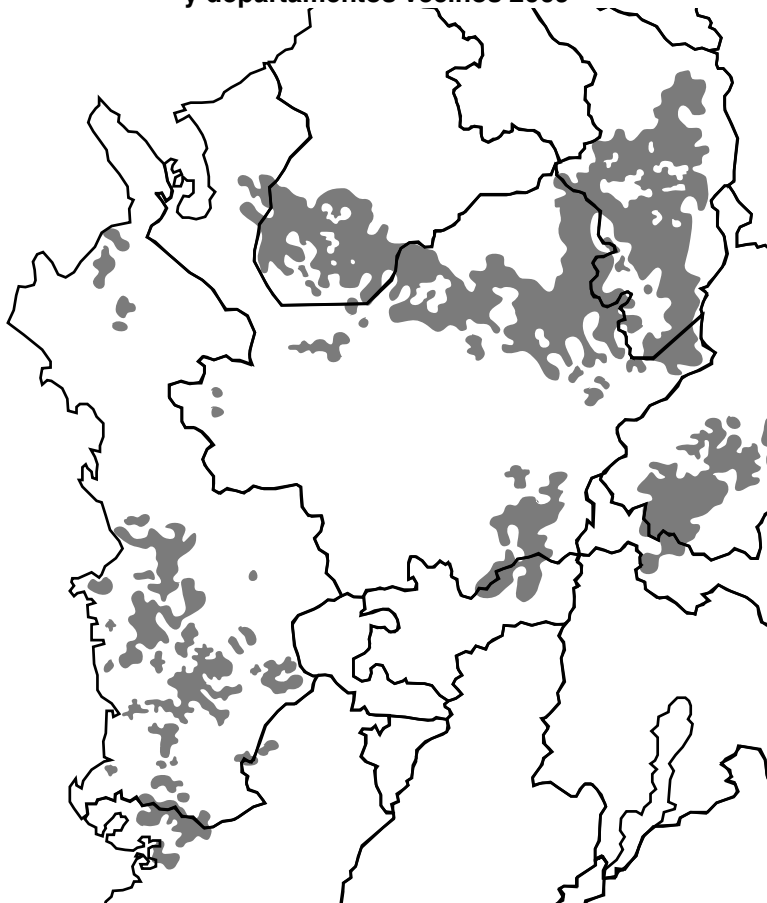
Elaboración: Cálculos de Naranjo y Centro de Análisis Político

El análisis del impacto de los cultivos ilícitos en Antioquia quedaría incompleto si no se considerara la contribución de las áreas cultivadas en el sur de Bolívar y de Córdoba que, de hecho, conforman una gran zona cocalera continua con Bajo Cauca; y del oriente de Caldas que se integra con los cultivos del oriente antioqueño (Tabla 6 y Mapa 6)¹⁴. Por supuesto, esta extrapolación duplicaría la producción cocalera y, en un efecto más verosímil, supondría un impacto mayor sobre la economía antioqueña que si pensamos el problema en términos de división administrativa, exclusivamente. En conjunto los tres departamentos produjeron el 15,71% de la cocaína en el 2009.

13. Las estimaciones para pasta de coca son según precios en finca y las de coca con precios al minorista, por kilo ambos, calculando los dos escenarios como 100% del total de la producción y realización exclusiva en el mercado interno.

14. Esta continuidad, específicamente para el caso de Bolívar, es reconocida por las agencias internacionales (Unodc y Acción Social, 2008: 62).

Mapa 6. Cultivos de coca en Antioquia y departamentos vecinos 2009



Fuente: Naranjo.

Tabla 6. Hectáreas cultivadas y participación en Colombia, Antioquia y vecinos 2008

Antioquia	Participación en total nacional	Más Córdoba, Bolívar y Caldas	Participación en total nacional
4.558	5,35%	13.391	15,71%

Fuente: Giraldo con base en Naranjo (2009). SIMCI II.

Bajo Cauca y Valle de Aburrá: otras industrias criminales e informalidad

Bajo Cauca: economía criminal y economía informal

Desde la década de los ochenta, en la zona rural de Cáceres comienza a extenderse el cultivo de coca auspiciado por los hermanos Ochoa, un poco después por la guerrilla de las Farc y posteriormente por los paramilitares. Actualmente, las Farc y las bandas emergentes tratan de mantener el control de la cadena de producción y comercialización de la coca. Varios factores coinciden para la importancia de la zona en cuanto a producción cocatera: a) su característica de zona de frontera agrícola y colonización, tradicionalmente olvidada por el centralismo antioqueño y cordobés; b) su condición de zona de control social por parte de los grupos armados ilegales, según el Ministerio de Defensa (Zuluaga, 2009: 88); c) los altos niveles de desempleo y de precariedad en los ingresos de las familias que alentaron la explotación informal del oro y la madera. Todo ello permite la configuración de las condiciones de ilegalidad suficientes que explican, en opinión de Thoumi, la distribución espacial de la cadena coca-cocaína (Thoumi, 1999: 21).

Para comprender mejor las condiciones del control social por grupos no estatales, basta recordar que en la zona han confluído continuamente durante cuatro décadas las Farc y el Eln¹⁵, y que los paramilitares hicieron lo propio desde mediados de la década de 1990. En Tarazá, por ejemplo, “Cuco Vanoy” construyó

15. Amén de los grupos de guerrilla con presencia en la zona, baste recordar que varios de los cuadros de más rango y relevancia pública de las Farc provienen de la región. Además, entre 1965 y 1990, esta fue principal retaguardia estratégica del Epl.

parques infantiles, dos clínicas con sofisticados equipos (San Martín y Nueva Luz) y comedores comunitarios, pavimentó vías, regaló mercados, efectuó donaciones a Iglesias católicas, cristianas y evangélicas y creó el programa “Tarazá sin hambre”, del que se beneficiaban 100 familias (Semana, 2007).

De esta forma, el narcotráfico ha permeado todos los sectores de la economía regional, influenciando claramente el crecimiento de la zona en torno a los rendimientos económicos de las actividades ilícitas desarrolladas en el sector. Los habitantes de la región y nuevos pobladores encuentran posibilidades de ingresos en la cadena productiva de la coca, que termina integrando entre sí diversos municipios de las regiones Bajo Cauca, Nordeste y Norte, y a estos con Medellín.

Otras actividades económicas importantes de estos municipios, son:

Minería. La minería de aluvión es la principal actividad desarrollada en la zona por pequeños mineros artesanales y medianas empresas principalmente, pero con presencia a su vez de empresas extranjeras y multinacionales. Ello, primordialmente en el Bajo Cauca, cuya estructura productiva es fundamentalmente minera, siendo allí donde se produce cerca de la mitad del oro de aluvión de Antioquia, actividad que funciona como enclave. “La minería del Bajo Cauca se destaca por sus explotaciones de aluvión tecnificadas y aquellas otras más artesanales de oro, plata y platino en Caucasia. El Bagre, Cáceres y Tarazá generan el mayor valor agregado de la minería de Antioquia (36,3%)” (IGAC, 2007: 189). El nordeste antioqueño por su parte, ocupa el segundo lugar en la producción aurífera en Antioquia con un 25,5% de la producción departamental. La mayoría de la

actividad minera se ejecuta de forma ilegal, pues se lleva a cabo sin titularidad o en tierras que ya han sido tituladas a favor de otros.

En la década de 1980 hubo un auge aurífero que atrajo a muchos emigrantes a esta zona y llevó a que los propietarios de la zona arrendaran o vendieran sus predios. La explotación incontrolada generó un sinnúmero de daños en los ecosistemas, alta migración de la población y cambios en las vocaciones económicas, principalmente en la cabecera de Cauca. La crisis minera de finales de esa década impulsó la mano de obra hacia el cultivo de la hoja de coca y explotación maderera ilegal en las reservas forestales de la zona.

Sin embargo, las empresas del crimen organizado utilizaron la minería del oro, a través de distintos mecanismos, para diversificar sus negocios, incrementar sus utilidades, lavar activos, afianzar el control social del territorio y fortalecer sus relaciones políticas. La investigación periodística de Germán Jiménez Morales muestra, al menos, cinco modalidades de operación de la economía criminal en la minería del oro. La primera es la explotación legal y directa de minas mediante la solicitud (y obtención) de contratos de concesión. La segunda, es a través de contratos de asociación con empresas privadas, como el caso de un personaje ligado a la banda “Los paisas”, contratista a su vez de la Frontino Gold Mines. La tercera modalidad es la expropiación violenta y explotación directa de las minas, como sucedió con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, según estudio del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Una cuarta modalidad, tal vez más tradicional, es el contrabando de oro de Panamá como mercancía política para que algunos alcaldes

“lo reportaran como producido en sus territorios y cobrarán las jugosas regalías. Así lo hacían en el Bajo Cauca, en Ayapel, Buenavista, Montelíbano y Planeta Rica”. Finalmente, la extorsión a la minería ilegal (Jiménez, 2010a).

Agricultura. Las subregiones a las que pertenecen los 10 principales municipios cocaleros del departamento no sobresalen como agrícolas, ya que aportan un bajo valor agregado a la producción departamental, con excepción del arroz en Bajo Cauca¹⁶. El caucho y el cacao comienzan a ser unos productos prometedores para la zona, debido a los programas de sustitución de cultivos ilícitos y a los proyectos productivos de los desmovilizados.

El bajo retorno de la actividad agrícola en las zonas rurales, junto a la preponderante cultura de la ilegalidad han llevado a que gran parte de los campesinos elijan la siembra de hoja de coca, por sus mayores rendimientos económicos y por la seguridad del comprador. Por ello, actualmente lo que más se ve es la mezcla de cultivos lícitos e ilícitos en pequeñas parcelas, donde la proporción de cultivo lícito sirve para el autoconsumo de la familia y a su vez como método de camuflaje ante la existencia del cultivo ilícito. Esto quiere decir que, aunque existen campesinos que siembran y trabajan la coca a la fuerza o por temor, la gran mayoría de ellos han optado por ese tipo de vida.

Ganadería: El auge de la actividad ganadera, lamentablemente, tiene importantes conexiones con los retornos de la economía ilegal.

Madera. La explotación maderera proviene del bosque natural existente. Bajo Cauca cuenta con extensas plantaciones forestales

16. En arroz, Bajo Cauca aporta el 75,6% de la producción departamental tecnificada y el 47,3% de la tradicional (IGAC, 2007: 190).

y con la presencia de grandes empresas extractoras de madera. La extracción maderera es realizada por campesinos propietarios de la tierra, quienes de manera continua extraen unas veinticinco rastras (0.2 metros cúbicos cada rastra) semanales y las ponen al borde de las carreteras, donde los comerciantes se las compran. Este campesino normalmente no es aserrador, más bien arrienda el bosque a una persona con motosierra y mulas.

En estos procesos tienen un doble proceso de ilegalidad. Uno, porque la extracción, por lo general, se lleva a cabo de forma ilegal. Dos, porque una parte importante del mercado se especializa en variedades prohibidas como el comino crespo (\$700 mil pesos rastra) o comino liso (\$170 mil), roble (\$150 mil) o teca (\$200 mil).

El comercio se ve claramente influenciado por los cultivos ilícitos, ya que los excedentes de este negocio suelen dirigirse por sus propietarios a la diversión y adquisición de lujos, por ello es habitual encontrarse épocas de auge del comercio de motos, así como la existencia de bares, prostíbulos, heladerías, salones de juego y demás espacios de distracción. Los actores ilegales suelen ser compradores a partir de los recursos obtenidos con la siembra de la hoja de coca, situación que también se presenta cuando un habitante de la zona vende al menudeo.

Con certeza, uno de los anudamientos principales de la economía criminal con las economías legal e informal es el problema de la tierra que se expresa en dos fenómenos: a) la alta concentración de la propiedad, pues allí “el 52% de la mediana y gran propiedad posee el 97,9% de la superficie, mientras el 2,1% del área la conserva los pequeños propietarios” (IGAC, 2007: 218); b) los bajos niveles de legalización de los títulos, pues el 53% de los predios en la región (incluyendo los municipios vecinos de Anorí, Briceño e Ituango) no tienen matrícula inmobiliaria (Tabla 7).

Tabla 7. Bajo Cauca- Predios con y sin matrícula inmobiliaria 2009

Municipios	Total predios	Predios con matrícula	Predios sin matrícula (posibles baldíos)	Posibles posesiones	% predios sin matrícula
Anorí	3559	2001	1558	703	44
Briceño	2234	1363	871	39	39
Cáceres	2232	1094	1138	432	51
Caucasia	3290	2201	1089	544	33
El Bagre	2230	249	1981	363	89
Ituango	4999	2832	2167	528	43
Nechí	1628	435	1193	680	73
Tarazá	2228	825	1403	323	63
Valdivia	2736	1251	1485	631	54
Zaragoza	2848	982	1866	1089	66
Total	27984	13233	14751	5332	53

Fuente: Gobernación de Antioquia – Departamento Administrativo de Planeación

Valle de Aburrá: panorama de la economía criminal

Un mapa de la economía criminal

Con el fin de iniciar un mapeo, parcial y provisional, de la economía criminal en el valle de Aburrá, se hizo un ejercicio con un panel de expertos. El resultado se presenta en el (Gráfico 4). En síntesis:

- Se consideran mercados y mercancías muy relevantes y muy toleradas las siguientes (en orden de importancia): ventas ambulantes, vigilancia, bienes importados sin impuestos, extorsión al comercio minorista, extorsión al transporte, pagadario, prostitución, bebidas alcohólicas de contrabando, marihuana, apuestas ilegales, software pirata, medica-

mentos sin prescripción, robo de celulares, usurpación del espacio público para parqueo y películas piratas;

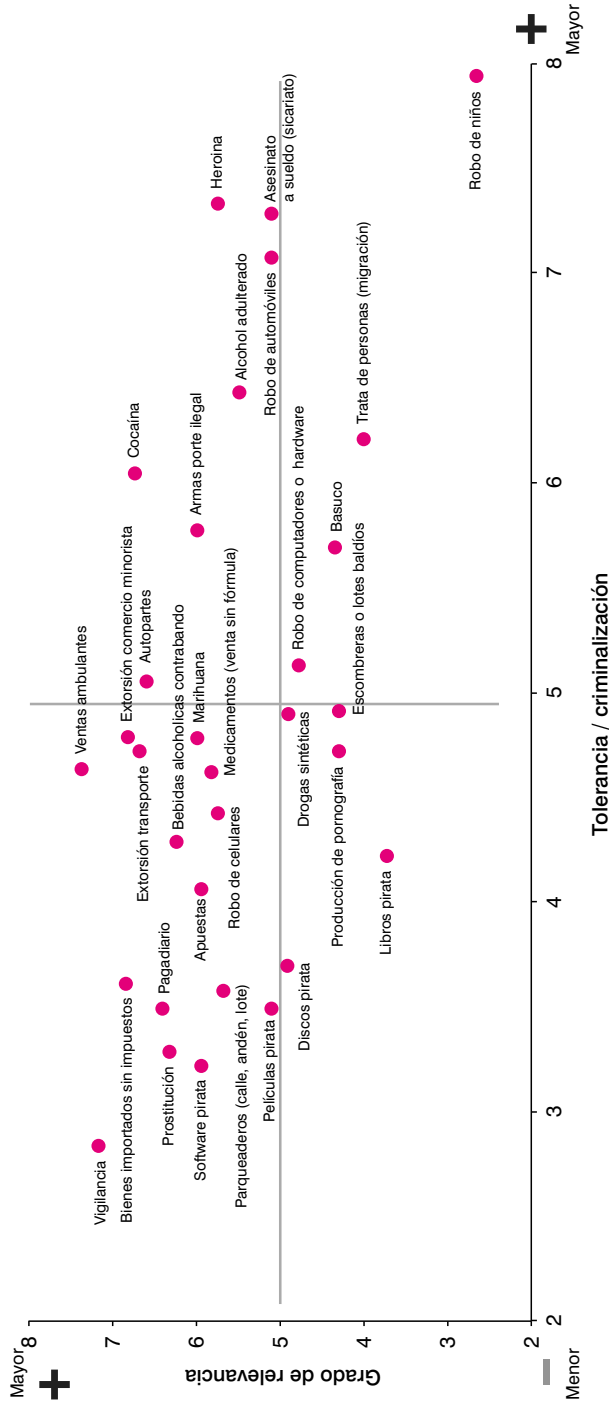
- Se consideran mercado y mercancías muy relevantes y muy criminalizadas las siguientes (en orden de importancia): cocaína, armas ilegales, heroína, alcohol adulterado, sicariato y robo de automóviles;
- Se consideran mercado y mercancías poco relevantes y muy toleradas las siguientes (en orden de importancia): discos piratas, drogas sintéticas, producción pornografía, escombreras y libros piratas;
- Se consideran mercado y mercancías poco relevantes y muy criminalizadas las siguientes (en orden de importancia): robo de hardware, basuco, trata de personas y robo de niños.

El grupo de control incluyó otras mercancías: robo de precursores para la industria de la coca, falsificación de moneda extranjera, tráfico de alimentos caducos y máquinas tragamonedas.

Por supuesto, cada una de las mercancías enumeradas y ponderadas constituye un fenómeno complejo: la vigilancia, por ejemplo se mueve entre el vigilante informal tradicional de barrio y la que podría ejercer un racketeer¹⁷. Y existen notables diferencias económicas entre unas y otras: la marihuana constituye una mercancía sobre la que existe un negocio relativamente grande, relativamente tolerado y con apreciable capacidad de corrupción.

17. En Medellín se han identificado unos 7 mil vigilantes informales, con ingresos mensuales aproximados de \$0,5 millones de pesos, con los que se ha iniciado un proceso de formalización.

Gráfico 4. Mercados ilegales en el valle de Aburrá¹⁸



18. Este ejercicio se realizó a partir de la conceptualización propuesta por Michel Misse (2009). Se elaboró un instrumento que incluía un listado preliminar de mercancías y mercados ilegales para indicar su relevancia (importancia del mercado) y su nivel de tolerancia (1 a 5) o criminalización (5 a 10). Dicho instrumento fue diligenciado por 14 expertos en temas de seguridad (funcionarios públicos, exfuncionarios, académicos, miembros de movimientos sociales y Ong). Después se discutió con un grupo de control.

Microtráfico

Las aproximaciones al tema del microtráfico son particularmente complejas. Como punto de partida se eligieron las conclusiones de los estudios más recientes sobre consumo de sustancias psicoactivas.

Este tipo de estudios tiene como uno de sus indicadores principales, la prevalencia definida como la “proporción de personas que consumieron una determinada sustancia alguna vez” durante un determinado espacio de tiempo (República de Colombia, 2009: 41). Como se muestra en la Tabla 8, la región del valle de Aburrá se destaca en consumo de psicoactivos ilícitos como marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína e inhalables, con un porcentaje que multiplica por 2,8% el promedio de consumo nacional. En el caso específico de la cocaína, la proporción es idéntica.

Las otras regiones que presentan prevalencias superiores al 1% son Antioquia, Quindío y Sucre. Antioquia supera por poco a los otros departamentos mencionados que cuentan con una prevalencia superior al 1%, pero duplica las cifras de Bogotá. En definitiva, el mercado interno del valle de Aburrá no parece despreciable y, en cualquier caso, es el mayor del país.

Aunque no existe información confiable sobre el mercado de marihuana, debe pensarse que este es mayor que el de basuco y cocaína. De hecho, el consumo de marihuana multiplica por 2,3 el de cocaína en el valle de Aburrá, según estudios nacionales. Aunque las metodologías no son comparables, un estudio de Universidad Pontificia Bolivariana encontró consumos de marihuana en el 25% del universo que abordaron, más un 9% respecto a drogas de diseño (El Colombiano, 2010b).

Tabla 8. Colombia, Medellín, Antioquia: Prevalencia de consumo de psicoactivos 2008

Sustancia psicoactiva consumida	Número de casos de consumo a nivel nacional	Datos correspondientes al último año del estudio			Prevalencia del consumo en Antioquia
		Prevalencia del consumo en el país	Prevalencia del consumo en Medellín y el área metropolitana	Prevalencia del consumo en Antioquia, sin Medellín - AM	
Tabaco/cigarrillo	3372633	21,46	No reporta		
Alcohol	6871325	61,18	No reporta		
Tranquilizantes sin prescripción	103206	0,52	No reporta		
Estimulantes sin prescripción	Estudio encuentra cifras muy bajas, por lo que no considera relevante hacer un análisis detallado	0,06	No reporta		
Ilícitas	Sustancias ilícitas (Consumo global)	2,74	6,31	1,62	4,36
	Marihuana	2,27	5,26	0,88	3,44
	Cocaína	0,72	2,05	0,53	1,42
	Basuco	0,17	No reporta		
	Éxtasis	55259	0,28	No reporta	
	Heroína	4417	0,02	No reporta	
Inhalables	No reporta	0,22	No reporta		

Fuente secundaria: Dane, censo 2005.

La mayor parte de los reportes señalan que este es un mercado controlado a través de oligopolios. Estos oligopolios se distribuyen las plazas de vicio y ollas existentes en la ciudad y sus servicios administrativos pueden ascender hasta el 40% del total de las ventas (DC2, 3). Una gran plaza de vicio en Medellín puede tener ingresos entre \$6 y 410 millones de pesos mensuales, mientras una plaza de vicio de barrio se mueve entre \$1,5 millones y \$2 millones de pesos mensuales (DC3). Las estimaciones del volumen del negocio anual son muy inconsistentes; mientras fuentes oficiales hablan de unos 18 mil millones de pesos, algunos investigadores periodísticos colocan las cifras sobre 1 billón de pesos (Jiménez, 2010b). En cualquier caso, no parece que estemos ante una renta despreciable.

Extorsión

Los orígenes de la extorsión en Medellín están íntimamente ligados a los fenómenos de urbanización subnormal y de control territorial de grupos armados ilegales. En ambos casos se configura lo que se denomina “protection racket”. En el primer caso, a través de los partidos políticos y las organizaciones comunitarias que alientan el clientelismo político como mecanismo de protección frente a la acción normalizadora del Estado. En el segundo caso, mediante la oferta de protección armada ante amenazas y exacciones de particulares contra los pobladores de barrios subnormales y como mecanismo de disciplina social. Esta última situación se ha tornado marginal ante el crecimiento de las capacidades institucionales del Estado en los niveles nacional y local.

En el valle de Aburrá, en particular, el fenómeno dominante hoy a diferencia de lo sucedido en las décadas de 1980 y 1990 es la extorsión, pues los supuestos oferentes de protección no

pueden garantizarla y, por el contrario, usualmente convergen con otros agentes depredadores.

La extorsión en el valle de Aburrá puede clasificarse en dos tipos: la que está dirigida a la economía legal contra pequeños propietarios de buses, locales comerciales y hogares; y la que se enfoca en pequeñas empresas informales y criminales como, por ejemplo, los venteros de llamadas celular o algunos minoristas de estupefacientes.

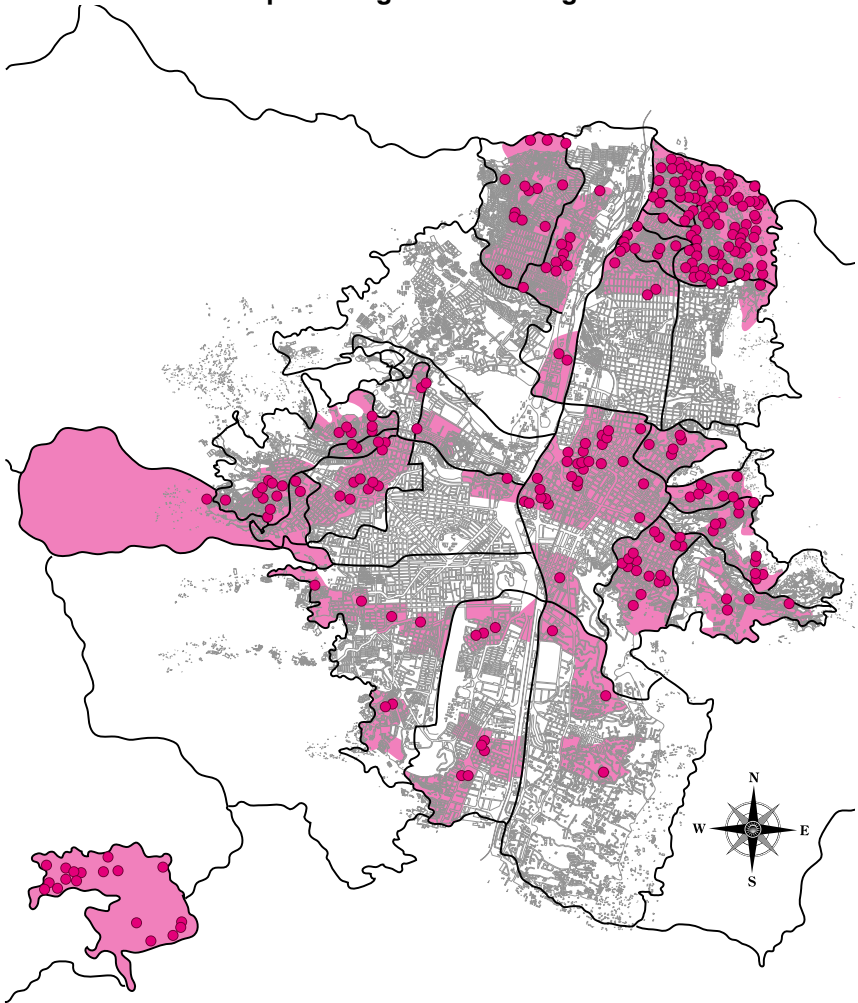
Al parecer, el negocio más extenso, consolidado y mejor mimetizado en el proceso de prestación del servicio es el de la extorsión a los vehículos de servicio público, especialmente buses. En este sector los extorsionistas controlan parcialmente el funcionamiento de las rutas, el aseo, parqueo y vigilancia de terminales. A partir de los reportes obtenidos respecto a esta actividad, la exacción total semanal por vehículo oscila entre \$230 mil y \$300 mil semanales (DC1).

La extorsión al detal puede oscilar entre \$1 mil pesos semanales para residencias, \$5 mil semanales para el comercio en los barrios y \$20 mil semanales para locales en algunas zonas del centro de la ciudad (DC1). El volumen anual de la extorsión en el valle de Aburrá ascendería a casi \$2 mil millones de pesos mensuales, esto es, \$240 mil millones de pesos al año.

Máquinas tragamonedas: otro sector identificado.

En gran medida el negocio de máquinas tragamonedas es controlado mediante oligopolios. Estos recogen inversión de particulares para comprar los equipos y, la mayor parte de las veces, usan al crimen organizado para colocarlos en locales comerciales sin ningún beneficio para el dueño del establecimiento. Un censo incompleto del negocio se muestra en el Mapa 6.

Mapa 6. Tragamonedas ilegales



Fuente: DC4, 2009.

Economía criminal: factor determinante del problema humanitario antioqueño

En los estudios referidos a Antioquia los cultivos ilícitos como causa de los desplazamientos es tenido en cuenta en Urabá desde la década de 1990, cuando se intensifica la disputa entre guerrilla y autodefensas por el control de corredores de importancia estratégica para transporte de insumos requeridos para el procesamiento de la droga y su comercialización hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. La extensión de los cultivos ilícitos en regiones aledañas a Urabá, como es el caso del Occidente, Norte y Bajo Cauca y sus impactos en el desplazamiento forzado, aun no ha sido abordado en profundidad.

Lo que ha hecho visible el desplazamiento forzado en Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, son los desplazamientos masivos que con cierta periodicidad han tenido lugar desde la década de 1990 asociados a la disputa por el control de territorios donde se concentran los cultivos ilícitos y por la siembra de minas antipersonales.

Entre 1998 y el 2009, según cifras de Acción Social se han visto forzadas a desplazarse 14.350 personas en el Norte, 46.593 en Bajo Cauca, 6.210 en Nordeste y 24.029 en los municipios de San Luis y San Francisco, en el Oriente antioqueño.

En Colombia el desplazamiento forzado presenta variaciones de acuerdo con cambios en la intensidad del conflicto armado y particularidades de cada una de las regiones. Aunque la periodización es un tema en discusión es posible diferenciar los siguientes momentos: visibilización del desplazamiento (1985-1997), intensificación y diversificación (1998-2003) y cambios en la

continuidad (2003-2010). En este último periodo, los cultivos ilícitos cobran importancia como factor generador de desplazamiento, ante las presiones ejercidas por los actores armados para que población se movilice y demande la suspensión de las fumigaciones. Otra causal significativa es el minado de territorios, recurso utilizado de forma intensiva por las guerrillas de las Farc y Eln para neutralizar la ofensiva del ejército e impedir el acceso a zonas de refugio y áreas de cultivo bajo su control.

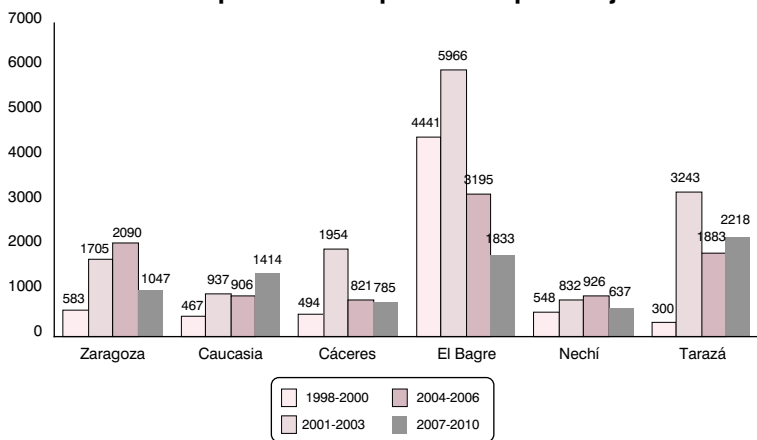
Las dinámicas del desplazamiento forzado en Bajo Cauca, Nordeste y Norte responden a las siguientes tendencias:

Ofensiva paramilitar, expansión de los cultivos ilícitos y auge de los desplazamientos forzados (1996-2005). La intensificación de la disputa por el dominio de territorios que ganan importancia estratégica por tratarse de corredores que facilitan la movilidad de los grupos armados ilegales y porque allí se concentran los cultivos de coca, tiene un impacto en los desplazamientos. Así ocurre en veredas pertenecientes los corregimientos de Santa Rita en Ituango, La Caucana en Tarazá, Aquitania en San Francisco y El Prodigio en San Luis y en la mayor parte de sus veredas. Las amenazas, los asesinatos, combates entre guerrilla y auto-defensas y los campos minados son causa del desplazamiento. Aunque los índices de desplazamiento no son los más elevados hay una tendencia a la expansión pero con algunos epicentros (Ituango, Tarazá y El Bagre) y una conexión con territorios del sur de Bolívar y el departamento de Córdoba.

Desmovilización de las Autodefensas, pervivencia del desplazamiento y reactivación de la disputa por el control de áreas de cultivos de uso ilícito (2005-2010). La desmovilización del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar (frentes Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio) marca un giro en las dinámicas del conflicto armado.

Aunque en principio ese hecho incide en una disminución de los índices de violencia, la situación sufre un deterioro con el accionar de nuevos grupos delincuenciales, como las Bacrim (Bandas criminales emergentes) de las cuales forman parte las bandas de “Los paisas” y “Los rastros” conformadas por reductos no desmovilizados de las Auc, excombatientes que se rearmen y personas directamente al servicio del narcotráfico. En Tarazá, Valdivia, Anorí, Ituango se originan desplazamientos masivos a consecuencia de la fumigación de cultivos, las amenazas de las Bacrim y de la guerrilla contra la población, de la cual hacen parte personas vinculadas al proyecto gubernamental de familias guardabosques y beneficiarios del programa Familias en Acción. Los municipios más afectados son Ituango, Peque y Tarazá.

Gráfico 5. Desplazamiento por municipios Bajo Cauca

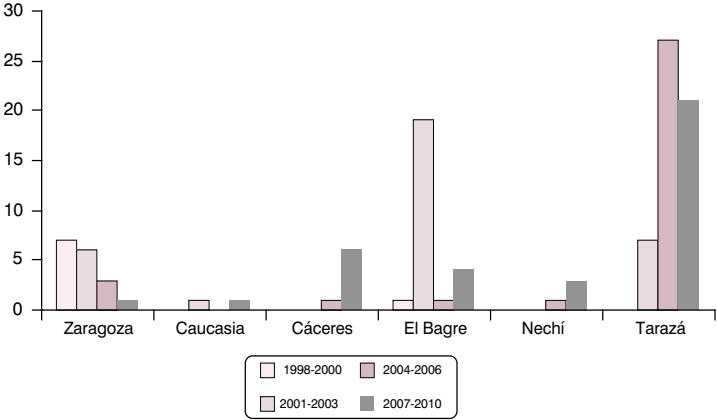


Fuente: Sistema Integrado de información humanitaria (OCHA).

Otro elemento a considerar en los desplazamientos forzados es la siembra de minas, una estrategia a la cual recurren los actores armados, principalmente la guerrilla, para contrarrestar la ofensiva del ejército y para proteger las áreas de cultivo de coca

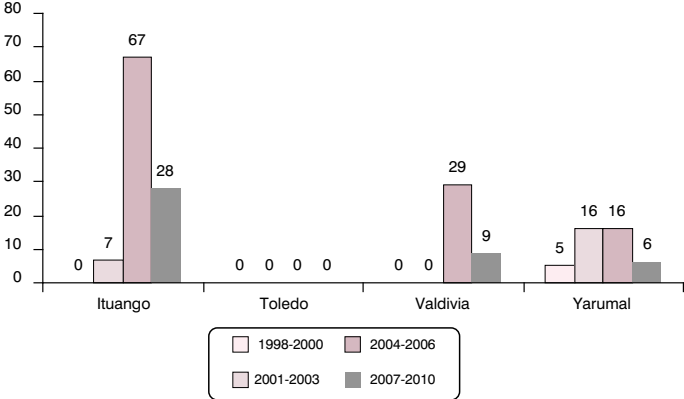
sin importar la afectación de los civiles. Entre los años 1998 y 2005 el periodo de mayor intensidad en la disputa se registraron 245 eventos por minas antipersona, con mayores frecuencia en Tarazá, El Bagre, Zaragoza y Valdivia (Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, 2006: 31).

Gráfico 6. Bajo Cauca. Accidentes minas por municipios

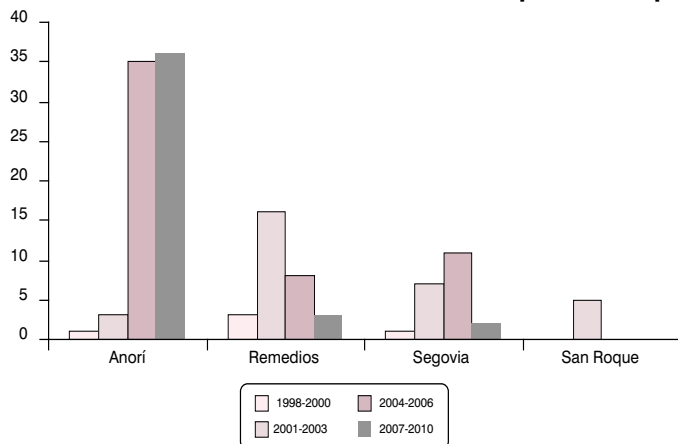


Fuente: Sistema Integrado de información humanitaria (OCHA).

Gráfico 7. Norte. Accidentes de minas por municipios



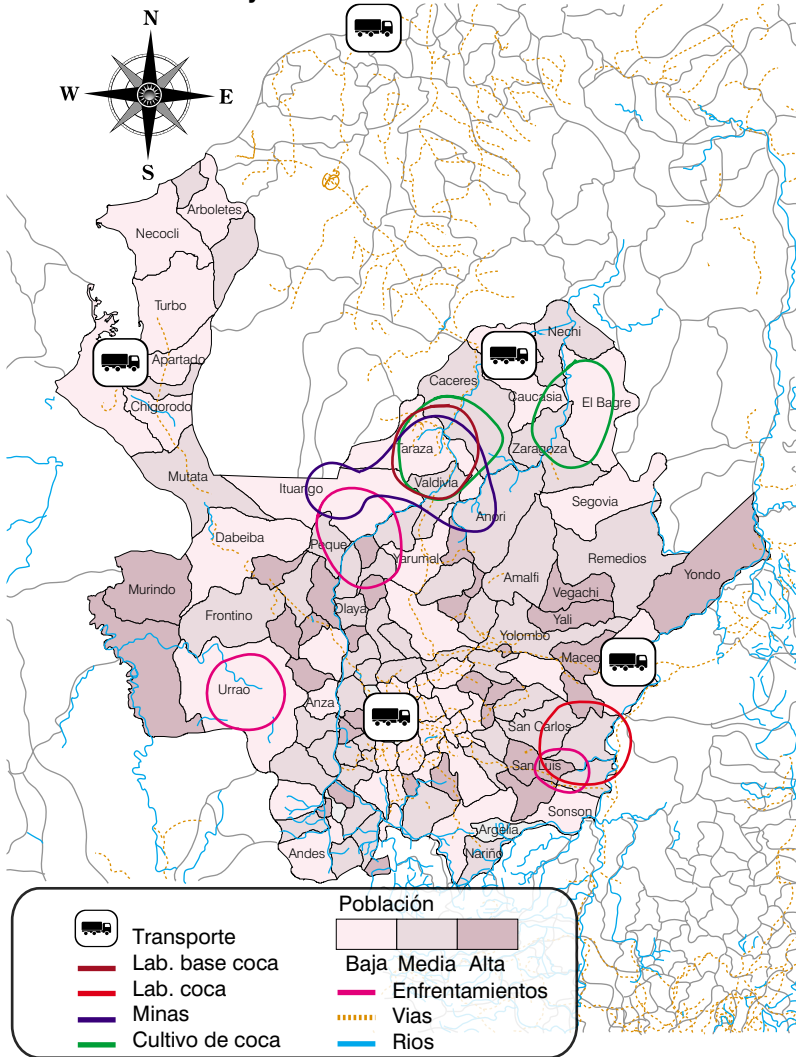
Fuente: Sistema Integrado de información humanitaria (OCHA)

Gráfico 8. Nordeste. Accidentes de minas por municipios

Fuente: Sistema Integrado de información humanitaria (OCHA)

Los resultados demuestran adicionalmente que existe una correlación espacial entre la localización de los cultivos ilícitos, la ubicación de las vías marítimas y terrestres y las minas antipersonales. Lo cual estaría indicando que en gran parte los campos minados se construyen con el fin de proteger los cultivos ilícitos (ver Mapa 7).

Mapa 7. Correlación entre desplazamiento, minas, vías, ríos y cultivos de coca 1998-2009



Fuente: Research in Spatial Economics (RISE) – Universidad Eafit

Los anudamientos entre las tres economías y la política

Durante tres décadas se ha discutido mucho sobre el papel de la economía informal y la economía legal. Después de la expansión de las políticas de liberalización es evidente que las actividades formales se han servido del mercado informal para la producción y la comercialización, y que el mercado informal proporciona bienes a precios que compensan los salarios bajos. Además, en el mundo en desarrollo posibilita la subsistencia de millones de personas que no son absorbidas por la economía legal y desactiva muchos conflictos sociales (Portes y Haller, 2004: 42).

Sin embargo, en condiciones de baja capacidad de regulación o control por parte el Estado y en entornos violentos –como en el caso colombiano– el gran tamaño de la economía informal configura un ambiente ideal para ampliar el radio de acción de la economía criminal. Las actividades económicas, las comunidades, a las que el Estado renuncia a regular, son sujetos de control y exacción por parte del crimen organizado. De esta manera, se pone en evidencia que los eventuales beneficios de la existencia de la economía informal dependen de su proporción respecto a la economía legal y de la posibilidad de que el Estado pueda subordinarla.

Por su parte –como se ha observado para el caso de Río de Janeiro– la economía criminal depende, en cierto sentido, de la economía legal y de ello “el lavado de dinero a través de empresas legales o la utilización del sistema financiero” son apenas los ejemplos más visibles (Sousa, 2004: 171). Como señala un estudioso, en el mundo contemporáneo “las mafias viven

del sistema” (Gayraud, 2007: 45). Pero, de nuevo, el problema es cuando se instalan en el centro mismo de la vida económica y política de un país, con posibilidad de competir o, al menos, de desafiar el poder del Estado.

En este punto, es donde se hace evidente el clientelismo político como fenómeno intermediario entre el Estado y la economía informal de un lado, y entre el Estado y la economía criminal del otro. La literatura se ocupa de una relación básica por la cual los criminales “demandan privilegios y benevolencia en la acción judicial y policial” y los políticos “votos y dinero —y en algunos casos la eliminación de sus competidores” (Garzón, 2008: 182), pero, como se ha visto en Colombia en los últimos años, mediante investigaciones privadas y procesos judiciales, la trama de estos vínculos es mucho más compleja (Camacho, *et al* 2009; Velásquez, 2009).

Una amplia exposición sobre la proyección social y política de la economía criminal y de sus relaciones con el clientelismo político, apoyada en las trayectorias de vida de varios empresarios criminales de Antioquia, puede encontrarse en el artículo de Gustavo Duncan “Crimen y poder: el filtro del orden social”, que hace parte de esta investigación y que se publica en este volumen.

En relación con algunos de los factores que se contemplaron en este estudio, y de los que poseemos una información mínima confiable, se elaboró una categorización de los municipios de Antioquia. El resultado (Mapa 8) muestra cuatro (4) clusters diferentes que indican que Anorí, Cáceres, El Bagre, Nechí, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza, son la zona más crítica del Departamento por la convergencia de fenómenos de cultivos ilícitos, laboratorios coccaleros, grupos armado ilegales, desplazamiento y minas antipersona.

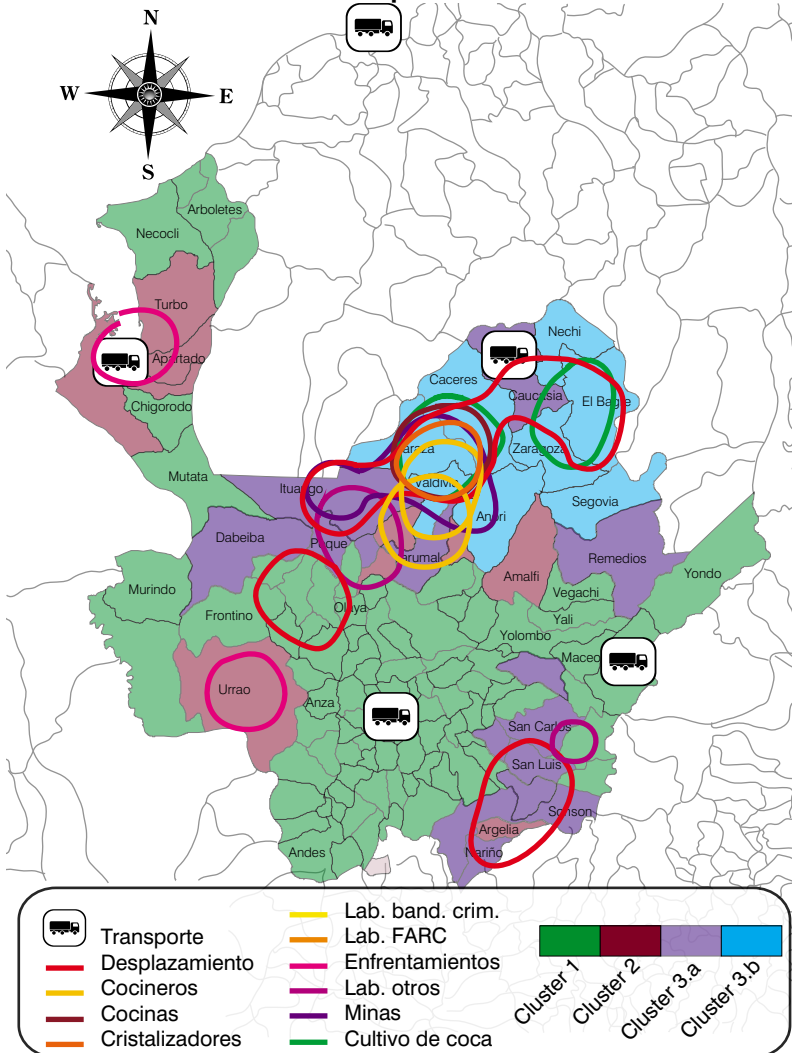
Por otra parte, el ranking de desempeño fiscal de los municipios colombianos –elaborado por Planeación Nacional– muestra la correlación que existe entre este cluster y la baja centralidad institucional del Estado en esos municipios (Tabla 9). Intuitivamente se puede señalar la relación simbiótica que existe entre el poder de los actores criminales y la existencia de municipios débiles y corruptos, cuya precariedad favorece tanto a los intereses de los primeros como a los del clientelismo político.

Tabla 9. Ranking fiscal municipal

Municipios	Ranking nacional	Ranking departamental
Anorí	42	11
El Bagre	373	37
Cáceres	715	76
Caucasia	629	64
Nechí	1058	115
Segovia	850	87
Tarazá	508	49
Valdivia	755	79
Zaragoza	1095	125

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2010.

Mapa 8.



Fuente: Research in Spatial Economics (RISE) – Universidad Eafit

Líneas futuras de trabajo

Como se dijo en la introducción, este trabajo es apenas un comienzo en los estudios de la economía criminal en Antioquia. Algunas líneas que pueden avizorarse desde ya, y para cuyo desarrollo cabría esperar la cooperación de los sectores público, privado y académico de la región son, entre otras, las siguientes:

- Relación entre cultivos ilícitos, instalaciones de procesamiento industrial de la hoja de coca y propiedad de la tierra.
- Impacto de la industria de la coca en las economías informal y legal de las regiones y municipios cocaleros del departamento.
- Características de otras economías ilegales como las de la minería del oro, la madera, los juegos de azar, el microtráfico.
- La articulación de la economía criminal y otras actividades legales que son funcionales a la primera.
- Las modalidades y peso del lavado de activos en la región.
- El problema de salud pública que se configura con el incremento en el consumo de psicoactivos en el valle de Aburrá, como ampliación del mercado interno de la industria de la coca.
- La relación entre las capacidades del Estado a nivel local y la influencia del crimen organizado en las decisiones públicas y en la regulación directa de la vida en algunos municipios y regiones del departamento.
- Indagar por los atributos de comunidad que facilitan la dinámica de las economías criminales en Antioquia.

Bibliografía

- Barón, M. (2010). “Mercados laborales en zonas de cultivos ilícitos en Antioquia”. Medellín: mimeo.
- Camacho, Á. (2009). *A la sombra de la guerra: ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia*. Bogotá: Uniandes – Ceso.
- DC1. Reporte sobre extorsión en el valle de Aburrá.
- DC2. Entrevista a “Elemento”.
- DC3. Reporte de exintegrante de banda criminal.
- DC4. Reporte sobre tragamonedas ilegales en Medellín.
- De León, I. y Salcedo, E. (2007). *El crimen como oficio. Ensayos sobre la economía del crimen en Colombia*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia.
- Dómine, M. C. (2006). “Criminalidad económica y terrorismo”. En: *Revista de Derecho*. N° VIII. Uruguay, Universidad Católica del Uruguay. Pp. 83-132.
- El Colombiano* (2010a). “Ayer se encontró un túnel y 17 kilos más de cocaína pura”. Enero 23.
- El Colombiano* (2010b). “El consumo de drogas está disparado”. Marzo 18.
- Feige, E. (1990). “Defining and Estimating Underground and Informal Economies: the New Institutional Economics Approach”. *World Development*. Julio 18. Pp. 989-1002.
- Gambetta, D. (2007). *La mafia siciliana. El negocio de la protección privada*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Garay, L-J., Salcedo, E., De León, I. (2010). *Illicit Networks Reconfiguring States: Social Network Analysis of Colombian and Mexican Cases*, Bogotá: Método.
- Garzón, J. C. (2008). *Mafia & co. La red criminal en México, Brasil y Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Gayraud, J-F. (2007). *El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado*. Trad. Amelia Ros García. Barcelona: Tendencias Editores.
- IGAC (2007). *Antioquia características geográficas*. Medellín: IGAC - Gobernación de Antioquia - IDEA.

- Jaramillo, A.M. (2010a). “Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín, 1985-2009”, Medellín: mimeo.
- Jaramillo, A.M. (2010b). “Desplazamiento forzado y cultivos ilícitos en Antioquia, 1998-2010”, Medellín: mimeo.
- Jiménez, G. (2010a). “El Dorado de las bandas criminales”. *El Colombiano*. Octubre 3.
- Jiménez, G. (2010b). “La joya de la corona de las rentas criminales es el microtráfico, con más de 1 billón de pesos en ingresos”. *El Colombiano*. Noviembre 7.
- Misse, M. (2009). “El delito como parte del mercado ilegal: violencia, mercancía política y narcotráfico en Río de Janeiro”. En: R. Stanley (2009). *Estado, violencia y ciudadanía en América Latina*. Madrid: Entimema. Pp. 109-127.
- Naranjo, A. (2010). “El cultivo de coca en Antioquia y su dinámica espacial”. Medellín: Universidad Eafit. mimeo.
- Naranjo, A. (2009). “Cultivos de coca y su dinámica”. En: S. Echavarría (2009). *Seguridad pública: tres aproximaciones*. Medellín: Universidad Eafit. Pp. 51-72.
- Observación de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica. (2006).
- Organised Crimen Research. (2010). “Organised Crime Definitions”. Disponible en: <http://www.organized-crime.de/OCDEF1.htm#pcoc>. Consultado el 27 de septiembre del 2010.
- Portafolio (2010). “Erradicación total de la coca en Antioquia, objetivo de este año”. Portafolio. Febrero 3.
- Portes, A. y Haller, W. (2004). *La economía informal*, Serie Políticas Sociales. Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, División de Desarrollo Social.
- Programa de Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) (2010).
- República de Colombia (2009). *Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia – 2008. Informe final*. Bogotá: República de Colombia.
- Semana (2007). “El ‘señor’ del Bajo Cauca”. 5 de mayo. Consulta: febrero 13 de 2010.

- Sousa, R. Silva de (2004). “Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado en Río de Janeiro”. En: *Revista mexicana de sociología*, Vol. 66. No. 1. (Jun.-Mar.). Pp. 141-192. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Thoumi, F. (1999). “La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia”. *Revista de Economía de la Universidad del Rosario*. II. Junio. Pp 11-33.
- United Nations Office on Drugs and Crime (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime (2010). *World Drug Report 2010*. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime y Acción Social (2010). *Estructura económica de unidades productoras agropecuarias en zonas de influencia de cultivos de coca*. Bogotá: Acción Social – Unodc.
- Velásquez, F. (coord.) (2009). *Las otras caras del poder: territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos*. Bogotá: Foro – GTZ.
- Zuluaga, J. (2009). “Orígenes, naturaleza y dinámica del conflicto armado”. En : F. Velásquez (coord.) (2009). Pp 45-96.

Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín (1985-2009)*

Ana María Jaramillo

* Este artículo hace parte de la producción del grupo “Ciudadanías, conflictos y políticas sociales” de la Corporación Región, y para su realización se recibió el apoyo de la agencia de cooperación internacional Diakonia-Suecia.

Resumen

Se realiza una aproximación a los estudios realizados sobre la conflictividad urbana y las violencias en Medellín, utilizando herramientas metodológicas propias de los estados del arte. Son tenidos en cuenta textos publicados entre los años 1985 y 2009 producto de investigaciones realizadas por la academia y las ONG. Se hace énfasis en las hipótesis referidas a factores explicativos, la caracterización de actores, modalidades, escenarios de violencia, impactos en la sociedad y en la institucionalidad local así como en formas de respuesta que desde estos ámbitos se han construido para hacerles frente. La continuidad en la labor investigativa desde la década de 1980 y hasta el presente, ha contribuido a la consolidación del conflicto armado y la violencia urbana como un campo de investigación. Sin embargo se requiere avanzar en una renovación de enfoques teórico metodológicos y en los temas a abordar para contribuir a la construcción de nuevo conocimiento.

Palabras clave: Conflictividad urbana, violencias, ilegalidad, actores armados, narcotráfico, conflicto armado, paramilitarismo, guerrilla, delincuencia.

Presentación

La Corporación Región en el interés de contribuir a la generación de nuevos conocimiento sobre uno de los problemas más relevantes para la ciudad, la conflictividad urbana y, en particular las violencias, llevó a cabo una labor de revisión de estudios sobre el tema, referido a la ciudad de Medellín¹. Utilizando herramientas metodológicas propias de los estados del arte y, teniendo en cuenta, antecedentes en la realización de estudios de este tipo², se procedió a la revisión de producción correspondiente a libros y artículos publicados entre los años 1985 y 2009 y en los que, ante todo, se diera cuenta de resultados investigativos desde el campo de la academia y las ONG. Es una muestra representativa, aunque es necesario advertir que no agota la diversidad de la producción existente³ que también comprende tesis de pregrado, maestría y doctorado y, material audiovisual y literario, entre otros.

En esta aproximación se ha puesto el énfasis en las hipótesis referidas a factores que desde diferentes perspectivas se consideran con alguna incidencia en la expresión de fenómenos de violencia en la ciudad, en la emergencia de actores, modalidades

1. La realización de este estudio contó con la participación de Amantina Osorio en calidad de asistente de investigación y de Paula Andrea Toro, en calidad de auxiliar.
2. Esta revisión de estudios actualiza los resultados de un estado del arte sobre la violencia urbana en Antioquia en la década de 1990 realizada por el grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia (2001: 163-185).
3. Ver al respecto la bibliografía de referencia.

y escenarios de violencia así como en sus transformaciones, en sus impactos en la sociedad y en la institucionalidad local, pero también en formas de respuesta que desde estos ámbitos se han construido para hacerles frente.

Se siguieron los siguientes pasos:

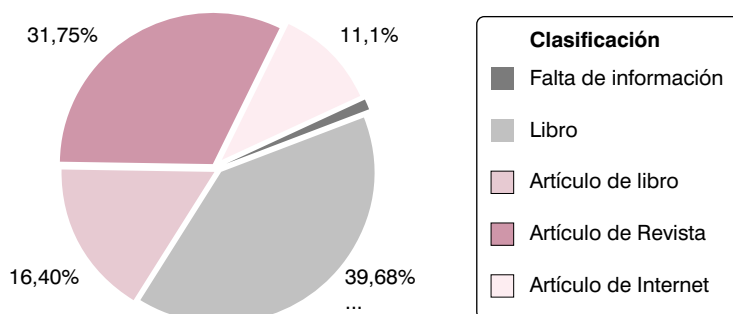
Rastreo bibliográfico. La recolección de la información se llevó a cabo en: Biblioteca Pública Piloto, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad San Buenaventura, Fundación Universitaria Luis Amigó y Universidad Autónoma Latinoamericana. En los centros de documentación del Instituto Popular de Capacitación –IPC–, Corporación Vamos Mujer y la Corporación Región.

Sistematización y análisis de la información. Selección de los textos que se consideraron más representativos teniendo en cuenta el período contemplado, tipo de autor y temas considerados, lo cual permitió identificar tendencias en relación con: Enfoques conceptuales y metodologías utilizadas, factores explicativos de la violencia y el conflicto armado en Medellín, caracterización de la conflictividad violenta, sus impactos y formas de respuesta de la sociedad y del Estado frente a la misma.

Características de la producción

Tipo de producción

Del total de la bibliografía consultada el 39.7% son libros, el 31.7% son artículos de revista y el 16.4% artículo de libro, 11.1% artículos de Internet. Esto denota un importante esfuerzo de divulgación de la producción existente desde la década de 1990 y hasta el año 2009, en Medellín.

Gráfico 1. Clasificación de la producción

Elaboración propia

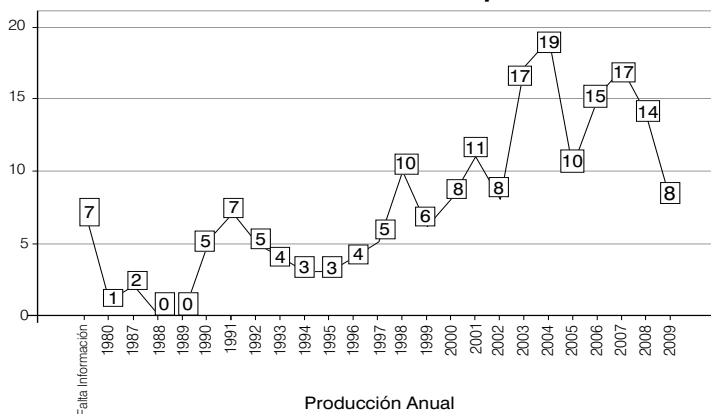
Periodicidad de la producción

La existencia de 17 publicaciones entre los años 1990-1992, demuestra el interés que en este momento suscitó el análisis de la violencia urbana asociada al narcotráfico, el sicariato y a la expansión de bandas delincuenciales.

También a finales de los años 90 se percibe una concentración importante de la producción con un total de 21 publicaciones entre los años 1997 y 1999, siendo 1998 el que más se destaca con 10. Es indicativo de una continuidad en la labor investigativa por parte de la academia y las ONG.

El mayor crecimiento se observa desde el año 2003, con 17 publicaciones y alcanza su auge en el 2004, con 19; luego decrece en el año 2005, con 10 publicaciones para reposicionarse en el 2007 y descender durante los años 2008 y 2009. Esto es indicativo del interés en la investigación de fenómenos que, aunque no son exclusivos de Medellín, se hacen más visibles como la denominada “urbanización de la guerra” y la recomposición de actores de la criminalidad.

Gráfico 2. Periodicidad de la producción



Elaboración propia

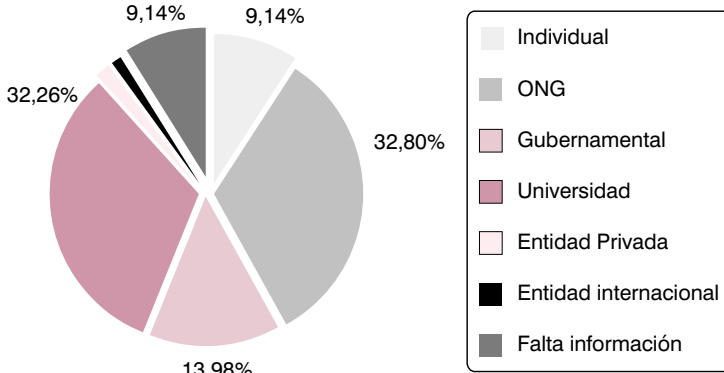
Autores

Las ONG lideran la producción sobre el tema con el 32.8%, le siguen las universidades con 32.2%, y en menor medida el sector gubernamental con 13.9%. De las ONG, se pueden identificar como las más representativas: El Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Región.

En cuanto a las publicaciones universitarias, se encuentran las más representativas: el Instituto de Estudios Políticos y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia; la Escuela de Administración y Finanzas de Eafit; y la Universidad Pontificia Bolivariana.

Del sector gubernamental, las publicaciones son mayoritariamente de la Alcaldía de Medellín y la Consejería Presidencial para Medellín.

Lo anterior es muestra del compromiso de sectores diversos por la indagación de los problemas que más impactan a la ciudad, tal como ha ocurrido con la violencia urbana y el conflicto armado.

Gráfico 3. Tipo de autor

Elaboración propia

Enfoques conceptuales

Conflicto y violencia

Según los textos abordados, en lo que se ha denominado por unos, conflicto urbano, y por otros, violencia urbana, se evidencia un campo de investigación insuficientemente delimitado, en especial, en lo que concierne a “lo urbano”. El concepto “conflicto urbano” como anota (Franco, 2004a: 3) a diferencia de violencia urbana es de alusión relativamente reciente en los estudios realizados y coincide con la emergencia de hipótesis explicativas de la violencia como producto de relaciones de conflicto.

Aunque no se dispone de estudios de carácter teórico en torno a las violencias y el conflicto urbano, se han realizado acercamientos basados en la lectura de diversos autores como Durkheim, Merton, Habermas, Arendt, Galtung, Giddens, Weber, entre otros.

Algunos ejemplos de dicha aproximación son:

El Grupo Interdisciplinario de Conflictos y Violencias, en el marco de la investigación *Dinámicas de guerra y construcción de paz en la comuna 13*, retoma la conceptualización de Vincet Fisas y Marc Howard Ross para quienes el conflicto “se basa en la diferencia y la oposición entre los actores respecto de unas metas, unos objetivos, unos valores y la defensa de éstos”. Lo que quiere decir que la violencia se constituye sólo en una de las formas de enfrentar las diferencias (Angarita *et al.*, 2008: 9).

Por su parte, (Jaramillo, Villa y Ceballos (1998: 16) al dar cuenta de los criterios teóricos que guiaron la realización de una investigación sobre conflicto y cultura política en Medellín, caracterizan el conflicto como *acción social* que moviliza una dimensión política. El conflicto se entiende como un indicador de la política, por la manera como se expresan múltiples facetas de la conflictividad social; y también porque además permite enlazar la cuestión del diseño institucional de lo político con prácticas instituyentes, incluso, cuando tales prácticas se sitúan en la franja de la conflictividad violenta.

Se constatan: un acuerdo en la necesidad de diferenciar las nociones de *conflicto y violencia*, y en su reconocimiento como fenómenos de carácter universal inherentes a la vida humana y cuya comprensión requiere el concurso de diferentes disciplinas académicas y, una crítica a la visión según la cual el conflicto se entiende como algo de por sí negativo, un factor desestabilizador del orden social (Vélez, 2001: 62).

Complementando esta visión, Franco (2004: 19) retoma la crítica hecha por Chantal Mouffe relativa a la recreación del mito de una sociedad transparente, libre de conflictos, y el

reconocimiento de la coerción como una característica de las sociedades contemporáneas que opera básicamente a través del uso o amenaza de la fuerza en articulación a un sistema normativo, o en otros casos vinculado a fuertes creencias religiosas con capacidad también de disuasión o persuasión.

Recientes elaboraciones sobre el tema del conflicto según Nieto y Robledo (2006: 22) han podido demostrar cómo éste es parte constitutiva y estructurante de la convivencia y, por tanto, posibilita construir identidades, relaciones de cooperación, alianzas y, por ende, favorece el desarrollo mismo de la sociedad hacia formas más elaboradas y cualificadas de convivencia social.

Con respecto al concepto *violencia* encontramos que muy pocos se detienen a precisarlo. Entre quienes se preocupan por ello hay consideraciones de este tipo:

Violencia, entendida como una *forma extrema de resolución de un conflicto* que, supone una relación de contraposición entre dos partes en la que ella es el instrumento de disuasión para resolver el antagonismo a favor de una de las partes, por lo tanto, no es ni abarca, todas las posibles conflictividades de un conglomerado humano. La violencia no es una sola, son múltiples violencias y entre ellas: la política, la étnica, la religiosa, o la urbana (Vélez, 2001: 41).

La violencia como *eventos o actos de presión* mediante la utilización de la fuerza, con el fin de lograr unos objetivos determinados. Esto supone la negación de derechos para otros sujetos. En este sentido, la violencia es entendida no como una serie de hechos individuales aislados, sino como un hecho social que produce efectos generales en las relaciones entre las personas (temor y poder según el lado del cual se esté en la

acción violenta). De allí entonces que se afirme que la violencia ha estado presente en diversas coyunturas, en las cuales se pone en juego la consecución de riqueza, prestigio, poder (Granda *et al.*, 1998). Aunque esta delimitación es objeto de crítica por un cierto reduccionismo que deja de lado otras formas de violencia no materiales, Nieto y Robledo (2006) consideran que ofrece la ventaja de poder objetivar los actores responsables de violencia y sus víctimas.

Conflicto urbano

En el concepto de lo *urbano*, según Gómez *et al.* (2000: 161), se concentra un conjunto de significaciones que van desde lo relativo a las ciudades y sus características, hasta concepciones más amplias de la ciudadanía y la civilidad, como categorías propias de la modernidad y como una de las formas posibles de entender la democracia y las relaciones que se pueden establecer entre los individuos de una sociedad y el Estado.

La ciudad y lo urbano, según Nieto y Robledo (2006: 35), debe ser entendida como el producto de múltiples conflictos y contradicciones sociales, articulados a los procesos socioeconómicos, políticos y culturales que lo constituyen, tanto en el terreno de la producción, la distribución, el consumo de bienes colectivos, el hábitat, el ingreso, la gestión pública como en la construcción de identidades y de ciudadanía.

En su estudio sobre el conflicto urbano en Medellín, Franco (2004b: 5) critica la tendencia predominante al abordar lo urbano desde un enfoque espacialista, según el cual se asocia la ciudad con el espacio físico medible, limitable, visible y demográficamente denso, definido en oposición a lo rural, dejando

de lado una aproximación a lo urbano no como simple conglomerado de casas, edificios, calles, espacios, públicos, etc., sino también, como el eje de procesos económicos, sociales, políticos y culturales diferentes a los de la vida campesina, y en los cuales se anudan distintas formas de conflictividad que no necesariamente son resueltas mediante la apelación a la violencia.

Desde otro ángulo Blair *et al.* (2008: 149) ponen en cuestión la utilización del concepto “conflicto urbano” por considerar que no resulta apropiado para el análisis de realidades que como la de Medellín se caracterizan por la expresión de formas y actores de violencia y tipos de conflictos. Por esto prefieren apelar a la noción “conflictividades urbanas”.

En lo que constituye un aporte a la indagación por las diferentes expresiones de la conflictividad en el contexto urbano, Franco (2004b), propone un modelo de análisis basado en la diferenciación de las siguientes tipologías:

Conflictos del espacio de gestión: Exclusión y opresión política. Este tipo de conflictos abarca polémicas sobre la intervención del Estado en la organización del espacio, la formulación de las políticas urbanas y las luchas por garantías para los derechos civiles y políticos, en un contexto de exclusión y opresión política.

Conflictos del espacio de producción: Segregación y polarización socioeconómica. Se refiere a la desaparición de la relación contractual patrón-obrero, que comienza a operar a partir de la década de los noventa a través de la desregulación: desconcentración y subcontratación y disolución de la negociación colectiva.

Conflictos por territorio: Los territorios como escenarios de representación y acción de la política, de la intervención-inversión, de la inclusión-exclusión y desde donde empieza a construirse y

de-construirse la ciudadanía. Este tipo de conflictos, se remontan a la década de los sesenta, configurando una espiral de violencia con patrones relativamente fijos y compuestos de círculos de liberación y opresión. Esta variante de la conflictividad es la que ha merecido mayor atención, por la manera como se involucra la violencia como un componente fundamental.

En Medellín, según Franco (2004b: 95): no se dispone de análisis que tomen en cuenta estas tipologías de la conflictividad urbana y aunque existen estudios específicos, el problema es que no se han puesto en relación ni se han logrado esclarecer los factores que inciden en la resolución de los mismos y la apelación o no a recursos violentos.

La violencia urbana

En lo que respecta a esta categoría también se advierte un vacío en su delimitación. Según Gómez *et al.* (2000), esto tiene que ver con la dificultad para superar una visión restrictiva de lo urbano:

La violencia urbana no remite necesariamente a la topografía donde ella se sucede; debe remitir, más bien, a las violaciones de derechos y libertades de diverso tipo que se suceden en las interacciones entre los ciudadanos o entre éstos y el Estado u otro tipo de organizaciones, que son actores de nuestra sociedad contemporánea, citadina, urbana. Se refiere, entonces, a las acciones violentas que se producen en el proceso de construcción de nuestra sociedad urbana y que afectan profundamente su entramado social. Atentan contra la seguridad ciudadana, entendida ésta como el estado de bienestar que siente o en que se encuentra un ciudadano o un colectivo dentro de un grupo social (Gómez *et al.*, 2000: 166).

Otra dificultad, según Franco (2004b: 72), estriba en la tendencia a homologar violencia urbana y homicidio, omitiendo así el examen de otras tipologías o modalidades de violencia, y la poca reflexión sobre la manera como ésta se inserta o no en cada tipo de conflicto escenificado en la ciudad; y de otra parte, en la escasa indagación acerca de formas de resolución no violentas de ciertas expresiones de la conflictividad urbana.

Atendiendo a las particularidades que presenta Colombia, cuya problemática no se circunscribe a las violencias urbanas, Blair *et al.* (2008) plantean la necesidad de avanzar en un entendimiento de las relaciones entre orden político, conflicto y guerra en Medellín, tomando en cuenta enfoques como el de Kalyvas centrado en el análisis de formas de correlación entre violencias y guerra y la diversificación de las violencias según las condiciones de la guerra anárquica.

Enfoques metodológicos

La mayor parte de las investigaciones no son explícitas en el enfoque ni en la metodología utilizada. Sin embargo, se dispone de publicaciones que pueden considerarse como referente por la manera como logran dar cuenta del proceso de construcción de modelos de análisis, la delimitación de los conceptos con los cuales se trabaja, la utilización de las fuentes, las preguntas que guiaron la reflexión y un enfoque interdisciplinario (Angarita *et al.*, 2008; Blair *et al.*, 2008; Riaño, 2006; Villa, Sánchez y Jaramillo, 2003).

El enfoque cualitativo predomina en los trabajos considerados. En algunos casos, por ejemplo, en el análisis de los homicidios hay un manejo de metodologías cuantitativas. También se

destaca el uso de fuentes orales. Ya no se trata de entender el hilo de procesos sociales en los cuales se inserta la violencia, sino en descifrar, a través de la voz de sus protagonistas, su sentido así como las formas de representación.

En algunos estudios se combina lo cualitativo con lo cuantitativo logrando dar cuenta de la magnitud de los fenómenos estudiados, sobre todo, en los trabajos relacionados con la violación sexual y el homicidio (Sánchez *et al.*, 2006; Giraldo, 2008). Por lo general, se toman como referencia los datos estadísticos que ofrecen algunos organismos del gobierno u organizaciones internacionales y ONG. También se combinan perspectivas de análisis macro: cuando se trata de explicaciones sobre factores que inciden o condicionan la conflictividad urbana y la violencia; y de carácter micro, cuando se realizan estudios de caso en algunas zonas y barrios de la ciudad.

Predominan los trabajos descriptivos en los que se da cuenta de los contextos, actores y modalidades de violencia, características de los sujetos y las poblaciones, impactos o consecuencias de la misma. Le siguen estudios de carácter descriptivo analítico en los que la descripción de los fenómenos se combina con interpretaciones que conducen a la formulación de hipótesis, y en aportes a la construcción de conocimiento sobre los temas de violencia y conflicto armado urbano.

Desde el enfoque cualitativo se ha indagado no solamente sobre los sujetos comprometidos en la problemática, sino también por la responsabilidad social del investigador, las implicaciones de las intervenciones investigativas sobre los sujetos mismos, y la manera como repercuten en el mismo investigador. En algunos estudios se hace referencia a los retos que conlleva el trabajo con poblaciones que han vivido el conflicto urbano armado. No se

trata sólo de recoger la información, sino de proponer el establecimiento de relaciones de solidaridad, de acompañamiento y de amistad con los sujetos de investigación como una manera de penetrar significativamente los contextos en los cuales las personas conviven (Blair *et al.*, 2008; Riaño, 2006).

Todos los trabajos utilizan información documental conseguida en centros de documentación, bibliotecas y archivos gubernamentales y de ONG. En los más recientes se utiliza información que circula en Internet.

En los estudios donde se realizó trabajo de campo, se utilizaron diferentes técnicas de recolección de información—principalmente entrevistas—y recurrieron a métodos de investigación grupal e interactiva como los grupos focales y talleres. Se puede apreciar una rigurosa aplicación de estos recursos metodológicos, en el estudio realizado por Riaño (2006).

Factores explicativos de la violencia urbana

En Colombia los inicios de la década de 1980, marcan un punto de inflexión en el escalamiento del conflicto armado con la expansión de la guerrilla y la consolidación de una economía ilegal de la droga, que se considera determinante en un aumento de la violencia sin precedentes, manifiesto en un notable incremento de los homicidios que tiene como escenarios no sólo las áreas rurales, sino también a las ciudades que emergen como espacio de expresión de diversos actores y modalidades de violencia.

Este nuevo panorama condiciona de manera significativa los rumbos de la producción investigativa, dada la creciente

preocupación de la academia, ONG y el mismo Estado por la formulación e implementación de alternativas. En 1987, por ejemplo, el gobierno de Virgilio Barco orienta la conformación de la *Comisión de Estudios sobre la violencia* y le encarga la producción de un diagnóstico que diera cuenta de las características de estos fenómenos y las medidas a tomar para frenar su inquietante avance (Comisión de Estudios sobre la violencia en Colombia, 1988).

En este informe se pone de relieve la insuficiencia del concepto de *violencia política* para responder a la complejidad de las violencias, y la necesidad de construir explicaciones que permitieran abarcar las dimensiones socioeconómica, sociocultural y territorial de la violencia. Esta nueva perspectiva va a tener importantes repercusiones en una diversificación de los estudios y en la atención al fenómeno de la violencia urbana.

En Medellín este enfoque encuentra un ambiente propicio para su desarrollo dada la creciente movilización de diferentes sectores de la sociedad, que tratan de responder a la crisis generada por el auge del narcotráfico, y buscan alternativas para enfrentarlo. Esto ayuda a explicar el énfasis en la búsqueda de explicaciones sobre esta nueva realidad.

Factores estructurales

Una constante en los estudios referidos a Medellín es la indagación por elementos inscritos en procesos de larga duración ya que se aprecia que han tenido particular incidencia en el auge de diversas expresiones de violencia.

Ciudad excluyente

La violencia urbana sería la resultante de una acumulación histórica de problemas no resueltos de exclusión e inequidad,

que dieron lugar a la existencia de una ciudad dividida y heterogénea en todos sus aspectos, en la cual no ha cuajado un proyecto incluyente y colectivo ciudadano. Expresión de ello sería la separación del centro y la periferia: De un lado, una Medellín estética y bella a nivel arquitectónico, de grandes inversiones y prósperos negocios (legales e ilegales), contrapuesta a una ciudad con graves problemas de desempleo, hambre, drogadicción, prostitución, violencia delincuencial o política; donde la ausencia del Estado es evidente en vastos sectores poblacionales (Quijano, 2004; De los Ríos y Ruiz, 1990).

En este panorama de barrios pobres periféricos y barrios ricos cerrados, es donde según Ruiz y Vélez (2004), se configura una situación de exclusión que no sólo es física sino también social, de ciudadanos desconfiados y sin vínculos colectivos y cada vez más reducidos a vivir en sus meros espacios vitales. Las unidades residenciales cerradas se convierten en los símbolos de esa exclusión y diferenciación-fragmentación del territorio ciudadano.

El espacio se considera como un escenario de inclusión-exclusión que va a facilitar o a dificultar cierto tipo de construcción comunitaria y la conflictividad urbana. Esto se evidencia, por ejemplo, en las diferencias que se presentan por la distribución del espacio entre zonas del norte y del sur. Situación que trae serias implicaciones, no sólo desde la perspectiva físico-espacial, sino de las relaciones familiares, comunitarias y de la convivencia misma. Una distribución tan inequitativa del espacio, como parte de la distribución del ingreso, rompe los niveles de privacidad y agudiza tensiones en las relaciones intervecinales e intercomunitarias (Líderes de convivencia ciudadana, Alcaldía de Medellín, 2004).

Particularidades del proceso de modernización

Para otros analistas como Granda *et al.* (1998: 76) y Restrepo y Vélez (1998: 43) lo que habría que considerar son las tensiones que generan procesos de urbanización y de modernización acelerada, y que estarían en la raíz de “muchas y muy variadas formas de conflicto entre sus pobladores que poco a poco han venido apropiándose de la ciudad en las últimas décadas”.

Además más de la celeridad con la que esto ha tenido lugar, lo particular, según Restrepo y Vélez (1998: 31) es que se ha producido de forma simultánea con un proceso de disociación de las esferas pública y privada. De este modo, el individuo en emergencia se encontró sin un firme asidero de referentes propios de la sociedad moderna. Esta situación, aunada a la emergencia del narcotráfico, contribuyó a crear un ambiente propicio para la generalización de fenómenos de violencia y su legitimación.

La responsabilidad del Estado

Un aspecto relevante en los estudios sobre la violencia urbana en Medellín, estriba en la búsqueda de explicaciones referidas al papel del Estado, lo que evidencia la influencia de una tradición investigativa sobre la violencia en Colombia, en donde planteamientos tales como la precariedad o colapso parcial del Estado han tenido un peso importante en las interpretaciones “macro”.

El auge de la violencia en Medellín es atribuido a la precariedad del Estado puesto de manifiesto en su incapacidad para ejercer un control de territorios, tener el monopolio de las armas y hacer respetar las normas de convivencia social y, su relativo fracaso para desactivar los conflictos sociales, aceptar formas

alternativas de resolución de conflictos e incluir y reconocer a la población calificada como marginada; en síntesis, para mantener o crear un orden social político. De este modo, el Estado termina convirtiéndose en un actor más que, prácticamente, entra a disputar un territorio y un control ya perdidos y en una autoridad gravemente cuestionada ante la ciudadanía y los actores armados que lo confrontan, dificultando la capacidad de gobernabilidad del Estado y del gobierno local (Vélez, 2001: 88-89).

Otros autores como Giraldo (2008) han planteado la necesidad de examinar el desempeño del Estado en lo local, y en relación con la implementación de políticas en el campo de la seguridad y la convivencia. Su hipótesis es que ciertas políticas que, por ejemplo, promovieron pactos de convivencia, tuvieron un efecto contrario al esperado al contribuir a un “apaciguamiento o retiro del Estado” que terminó por favorecer a los grupos delincuenciales.

El problema no sólo radica en el Estado. En algunos estudios se ha hecho alusión a las relaciones entre Estado y sociedad: El auge de las violencias ha ahondado las desconfianzas y resistencias de la sociedad frente al Estado, acarreado para éste una pérdida de legitimidad y credibilidad con relación a su capacidad para garantizar seguridad, orden, justicia, administración, monopolio de la fuerza e imparcialidad en el arbitramento de conflictos de interés; por esta vía un ambiente propicio para una legitimación del “derecho a matar” por fuera del Estado (Blair, 2005; Roldán y Franco *et al.*, 2004; De los Ríos y Ruiz, 1990).

Ante la fragilidad del Estado, se opta en muchos casos por la adhesión a cualquier poder, con tal de que éste sea un referente de autoridad, no importando los mecanismos de los que se valga.

Se teme a los espacios intersticiales, espacios vacíos de poder, precisamente por la pugna que ellos suponen. La demanda de seguridad adquiere en este contexto mayor relevancia. Seguridad ya no sólo entendida como vigilancia de los bienes, sino como orden moral y social (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003).

La cultura y la violencia

Las investigaciones realizadas por Alonso Salazar sobre el fenómeno del sicariato (1990) y el narcotráfico en Medellín (Salazar y Jaramillo, 1992) en buena medida contribuyen a poner en primer plano la discusión sobre la incidencia de elementos propios de la cultura en la violencia.

El planteamiento es que en la década de 1980 se asiste a la configuración de una *subcultura de la violencia* propia del narcotráfico y del sicariato producto de una mezcla de elementos de la cultura *paisa*, de la sociedad de consumo y de la cultura maleva. Esto facilitó su inserción en la sociedad y un papel determinante en la generación de cambios culturales en el ámbito de los valores, prácticas sociales y estilos de vida (Salazar y Jaramillo, 1992: 105-127).

En el mismo sentido Ortiz (1991: 71) señala que valores culturales como el de la guerra, que, con sus afines multívocos de maldad justiciera, de “verraquera” u “hombría”, “machera”, al combinarse en la zona de influencia *paisa*, con el valor de la “viveza”, terminaron por convertirse en una mezcla explosiva para una generación a la que pertenecen los jóvenes sicarios.

Pero esta mirada es controvertida por autores como De los Ríos y Ruiz, (1990: 34) quienes critican una sobrevaloración de lo cultural como factor explicativo de la violencia. “La sub-

cultura Antioqueña no puede considerarse como la causa de la violencia en Medellín (...). Es solamente articulada a condiciones concretas, en donde se presentan otros factores que es posible comprender el papel que cumple en la violencia”.

Por su parte Piedrahita, (2004) y Franco (2004b) ponen en cuestión ciertas interpretaciones que atribuyen la persistencia de la violencia, a *valores inadecuados*, lo cual redundaría en la existencia de una ciudadanía deficitaria y defectuosa, interpretada como carencia de un ciudadano virtuoso y, por lo tanto, insolidario, intolerante, autoritario, irrespetuoso de las libertades de los otros, guiado por el interés propio.

Sin embargo, en la década de 2000 se aprecia un giro metodológico en el tratamiento de esta compleja relación entre cultura y violencia, al poner el énfasis ya no en la influencia de ciertos rasgos propios del ethos cultural paisa, sino más bien en la exploración de imaginarios y representaciones socialmente construidas frente a la violencia, la muerte, y a su vez, la incidencia de la violencia en la generación de prácticas culturales, adopción de estilos de vida y formas de habitar la ciudad (Riaño, 2006; Blair *et al.*, 2008; Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003).

Factores coadyuvantes de la violencia urbana

No obstante la importancia que se le atribuye a los factores estructurales en la explicación de la violencia urbana, en algunos estudios se reconocen las limitaciones de este enfoque y se plantea la necesidad de examinar otros factores en relación con cambios recientes en la ciudad y en la sociedad urbana.

En algunos estudios se hace referencia a factores tales como:

- Problemas de descomposición social producto del modelo económico neoliberal imperante, los altos índices de desem-

pleo, la corrupción en la administración del gasto público que agrava la situación de pobreza de las gentes que viven en las zonas periféricas de la ciudad de Medellín. Esto ha propiciado que diferentes grupos armados por fuera de la ley, luchan por el control territorial y vean en la guerra una fuente de empleo (Nieto y Robledo, 2006).

- La emergencia y pervivencia del narcotráfico en Medellín desde la década de 1980, determinante en el fenómeno del sicariato y en la transformación de la estructura delincinencial, al auspiciar la conformación de bandas, un debilitamiento de los lazos sociales comunitarios y la violencia como mecanismo preferido de resolución de conflictos (Salazar y Jaramillo, 1992; Alonso, Giraldo y Sierra, 2006; Nieto y Robledo, 2006; Roldán y Franco *et al.*, 2004).
- La importancia que revisten ciertas zonas de la ciudad, en la medida que se convierten en áreas de concentración industrial y de servicios, centros de decisión política o complejos de transporte y acceso a suministros; y el logro de ventajas tácticas o estratégicas por su proximidad a rutas principales de circulación, o porque son líneas de comunicación importantes para el sostenimiento de otras operaciones militares (Franco, 2004b: 100-101).

La conflictividad violenta. Modalidades, actores y ciclos de la violencia urbana

En el informe presentado por la Comisión de Estudios de la Violencia en 1987, se manifestó la necesidad de acometer el estudio de las violencias urbanas con énfasis en las ciudades más afectadas por este fenómeno, como Medellín, que ya para 1987

se consolida como la ciudad más violenta de Colombia. Este hecho llamó la atención de esta Comisión al considerar que a diferencia de Cali y Bogotá, no había sido epicentro de grupos insurrectos. Este planteamiento aunado a la preocupación de sectores de la sociedad y el Estado local por este estado de cosas, contribuyó a darle un impulso a investigaciones sobre el homicidio y los actores de la violencia en Medellín.

Las modalidades de la violencia

El homicidio es la modalidad que concentra la atención en los estudios sobre violencia urbana en Colombia y, ante todo en Medellín, debido a su incremento y a la importancia que su aumento o disminución adquiere como un indicador de gobernabilidad y eficacia en la gestión de las autoridades locales.

En los estudios realizados se coincide con el diagnóstico de la Comisión de Estudios de la Violencia en cuanto a la identificación del narcotráfico como factor determinante en el auge del homicidio, especialmente, en la década de 1980; aunque también se le asigna una responsabilidad al Estado dada la forma como los agentes, integrantes de organismos de seguridad, autoridades de policía y la justicia actúan como encubridores o colaboradores (Ortiz, 1991; Salazar y Jaramillo, 1992; Vélez, 2001).

Si bien Restrepo y Vélez (1998) al hacer un balance sobre este tipo de estudios, reconocen avances en el seguimiento al comportamiento de los homicidios en la ciudad con base en la elaboración de estadísticas en las que son tenidas en cuenta variables como sexo, edad y nivel de ocurrencia en las zonas de la ciudad, también critican el tipo de lectura que de estas cifras ha hecho Decypol; y señalan la necesidad de mejorar los

diagnósticos sobre el homicidio con la exploración de aspectos tales como los cambios en la legislación, dificultades para la obtención de información precisa y el olvido de la víctima indirecta.

También el homicidio ha sido abordado desde diferentes perspectivas, de carácter cualitativo. Algunos ejemplos:

De los Ríos y Ruiz (1990: 34) desde un enfoque sociológico analizan el *homicidio como una mercancía* que implica el despliegue de una acción racional, preparada y planificada que produce un doble efecto en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos: 1) Una mayor impunidad del delito y una tendencia de la población a resolver sus contradicciones acudiendo a las empresas dedicadas al homicidio. 2) El homicidio como un componente de las relaciones cotidianas al imponerse las bandas organizadas que reemplazan el poder estatal, permitiendo el dominio de normas informales, en las cuales lo principal es la solución de los problemas con base en la fuerza.

Para Ortiz (1991: 74) la generalización de los homicidios tendería que ver con un resquebrajamiento de los esquemas racionalizadores (“no nos podemos matar unos a otros”), al diluirse la bipolaridad buenos y malos y al producirse la intervención de poderosas organizaciones criminales, lo que genera condiciones favorables para que se produzca un cambio en la representación social del matar al otro.

Por su parte Blair (2005: xxiv) en el texto *Muertes violentas: la teatralización del exceso* propone otra lectura del homicidio, al indagar no sólo por los escenarios donde se produce la muerte violenta, sino por aquellos donde se representa esta escenificación que consta de tres momentos: la interpretación, la divulgación y

la ritualización. Ambos, el acto y la ritualización constituyen los elementos en los que se teje la trama y se construye significado.

Al adentrarse en el análisis de las tramas de significación de la violencia, Blair (2005) se encuentra con que el exceso es el componente simbólico que caracteriza las muertes violentas en Colombia y en Medellín en particular, exceso que remite a la carga simbólica inscrita en las maneras para ejecutarlas y de las formas simbólicas (el lenguaje, el arte y la imagen) para nombrarla, narrarla y tramitarla (ritos funerarios) y, que paradójicamente, termina por agotar la eficacia simbólica que los asiste al volverse prácticas cotidianas.

En el 2009, Giraldo (2008) al hacer un balance sobre el homicidio en Medellín entre los años 1980 y el 2006, plantea una nueva hipótesis sobre factores que explicarían las variaciones en el comportamiento de los homicidios en Medellín:

En contravía de analistas que sostienen que el comportamiento del homicidio en las grandes ciudades tiene explicaciones exclusivamente locales y no vinculadas con las políticas de seguridad y acciones del Gobierno central se sostiene que en Medellín el comportamiento de las tasas de homicidio tiene relación directa con la intensidad del conflicto y las políticas nacionales que han incidido en el desempeño de la seguridad en la ciudad (Giraldo, 2008: 3).

Es preciso evidenciar como, aparte del homicidio no han sido materia de análisis otras modalidades de violencia ni otros escenarios que arrojan un saldo importante de lesionados como la accidentalidad vial o las riñas y de muertes violentas.

Los actores armados

Desde la década de 1980 la emergencia de actores armados diferentes a la guerrilla, o los denominados Escuadrones de la Muerte le plantean; nuevos retos a la investigación sobre la violencia en Colombia. En Medellín se observa un importante desarrollo en la investigación sobre actores de violencia en la ciudad.

Sicarios, bandas y delincuencia juvenil (década de 1980)

Se reflexiona sobre los cambios que el narcotráfico introduce en el panorama de la criminalidad con la conformación de una red de bandas delincuenciales y la proliferación de las llamadas bandas de *chichipatos* conformadas por jóvenes que se dedican a delinquir en sus barrios de origen (Jaramillo, 1996).

La banalización de la muerte como un rasgo que caracteriza al sicario, así como la hibridación entre elementos propios de la cultura paisa y la sociedad de consumo y su incidencia en la estigmatización de los jóvenes de extracción popular que habitan ciertas zonas de la ciudad (Salazar, 1991).

La delincuencia juvenil como expresión de los conflictos que afronta una generación de jóvenes de zonas de exclusión y que se expresa en la conformación de *combos* y un accionar delincencial, pero sin que ello se pueda asimilar al sicariato ni a la forma de operar de bandas especializadas (Bedoya y Jaramillo, 1991).

Recomposición de las bandas delincuenciales y protagonismo de las milicias (década de 1990)

En esta década se privilegia el examen de los cambios en la composición de las bandas a partir de 1993, a raíz de la muerte de Pablo Escobar y el auge de las milicias.

En los estudios sobre las milicias se da cuenta de las condiciones que favorecen su emergencia (demanda a la seguridad), su composición, el acelerado proceso de expansión y de fragmentación, el modelo de control que establecen en las zonas bajo su dominio y los factores que inciden en la crisis que les conduce a comprometerse en un proceso de negociación que dará lugar a la desmovilización de buena parte de sus integrantes (Jaramillo, 1993; Medina, 2006).

Sin embargo, nuevos estudios demuestran la vigencia de este fenómeno. Por ejemplo, en el texto *dinámicas de guerra y construcción de paz* (Angarita *et al.*, 2008), se analiza el auge de las milicias en la comuna 13 desde fines de los 90 y comienzos de la década de 2000, asociada a su desempeño como vigilantes, justicieros y como mediadores o jueces en la solución de conflictos, hasta el momento en que los abusos en los que incurrían y el arribo de otros actores en disputa por el control de territorios, acarrea una crisis de este proyecto, tal como ocurrió en la zona nororiental de la ciudad.

Se observa un acuerdo en la caracterización de las milicias como un modelo híbrido entre lo delincuenciales y lo político, puesto de manifiesto en su búsqueda de legitimación como organización que intenta suplir la ausencia del Estado en el campo de la seguridad, pero que al mismo tiempo incurre en prácticas delictivas que en principio combatieron, factor que les permitió ganar aceptación entre los habitantes de barrios afectados por atracos, robos y violaciones.

El fenómeno de las bandas se aborda en relación con procesos de recomposición –desaparición de algunas y emergencia de otras– todo esto sin producir una alteración en el funcionamiento de una compleja estructura en la que, según Alonso, En

Giraldo y Sierra (2006), se combina el accionar de poderosas bandas articuladas al narcotráfico, con otras bandas con capacidad operativa y márgenes de autonomía que realizan acciones con algún grado de especialización, y que pueden ser contratadas por el narcotráfico y también *combos* de barrio que incurren en acciones delictivas en los barrios donde ejercen influencia.

Además de estos actores, en el estudio realizado por Jaramillo, Villa y Ceballos (1998), se da cuenta de la existencia, entre los años 1995 y 1997 de grupos que se denominan autodefensas comunitarias, conformados por jóvenes que tienen su asiento en la zona noroccidental y que aunque realizan labores de “limpieza” de delincuentes no desean ser reconocidos o asimilados a las milicias.

El auge del paramilitarismo (décadas de 1990 y 2000)

El protagonismo militar y político de diversos grupos de autodefensa, desde mediados de los años 90 y sus implicaciones en el reacomodo de las estructuras delincuenciales en la ciudad, se constituye en objeto de análisis en algunos estudios recientes.

La atención se centra en la exploración de factores que motivan a las autodefensas, en cabeza de Carlos Castaño, a la conformación de grupos de autodefensa urbana (bloque metro, bloque cacique nutibara), el tipo de alianzas que establecen con la institucionalidad (ejército, policía), con las bandas y los antagonismos entre estos grupos que da lugar a la desaparición del Bloque Metro y la consolidación del Bloque Cacique Nutibara (Giraldo, 2008).

Con respecto a las autodefensas, Alonso, Giraldo y Sierra (2006: 440) tomando como referencia el concepto de red pro-

puesto por Hart y Negri en su obra *La guerra y la democracia en la era del imperio* y una revisión crítica de teorías explicativas sobre el fenómeno paramilitar en el país, proponen su caracterización como “una red en la que convergen de manera controlada y en permanente tensión los múltiples y variados protagonistas de todas las guerras y de todas las negociaciones adelantadas en Medellín en la década de 1990”.

Es en el Bloque Cacique Nutibara, donde más claramente se aprecia el funcionamiento y la forma de operar en red:

Como una estructura reticular que articula actores tradicionales del conflicto armado como unidades guerrilleras rurales provenientes de los paramilitares y las guerrillas, actores primarios del conflicto armado- bandas, milicias, combos y núcleos refinados del crimen organizado –grandes bandas y oficinas- la inscripción estratégica y política de carácter contrainsurgente fue aportada por las AUC mientras que la identidad estructural la aporta la mafia (Alonso, Giraldo y Sierra 2006: 459).

¿Qué puede haber de común en las características y prácticas de estos actores armados en la ciudad? Al respecto hemos logrado identificar las siguientes hipótesis.

- *La hibridación*

Un rasgo que se considera característico de estos actores, aunque con matices diferentes es una hibridación entre lo delincuencia y lo político (Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998; Medina, 2006). Esta combinación ha sido posible, según Uribe (1997), por un contexto marcado por la degradación del conflicto armado y el auge del narcotráfico. Mientras que la guerrilla transita hacia la delincuencia al involucrarse en experiencias

delincuenciales cada vez más alejadas de los propósitos políticos enunciados desde sus cúpulas; las bandas juveniles transitan hacia organizaciones milicianas o guerrilleras, y de la guerrilla a los paramilitares o a las fuerzas de seguridad del Estado. A ello se suman procesos incompletos y precarios de reinserción de milicianos y guerrilleros que ante la falta de recursos, solos y librados a su propia suerte, terminan convirtiéndose en un recurso disponible para otras organizaciones armadas.

- *Control de territorios y control social de la población*

El dominio del territorio ha sido objeto de análisis dada la importancia que reviste para ciertas actividades delincuenciales como el cobro de vacunas, transporte y comercialización de drogas, la obtención de ventaja militar y la implementación de un modelo de control social basado en la imposición de normas tendientes a regular las formas de relación social entre la población, hábitos, comportamientos, incluso forma vestir, horarios de ingreso y salida del barrio, dando lugar a la constitución de órdenes volátiles y transitorias en determinados territorios de la ciudad, sustentada en el uso y concentración creciente del recurso a la fuerza (Vélez, 2001; Nieto y Robledo, 2006; Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998).

El que estos actores logren ejercer controles territoriales es considerado como un factor que ha tenido importante incidencia en la existencia de una sociedad más fragmentada, y a su vez en obstáculo para la gobernabilidad, en la medida en que ha dado lugar a la existencia de microterritorios que no consultan ni reflejan la intencionalidad de una política pública local y a un mayor debilitamiento de un Estado incapaz de ejercer autoridad (Piedrahita, 2004: 32).

Dinámicas de la violencia urbana

La exploración de este campo se ha hecho desde la identificación de períodos o ciclos de violencia.

1985-1991. Auge de las violencias asociadas al fenómeno del narcotráfico, y al sicariato (Salazar y Jaramillo, 1992),

1991-1994. Protagonismo de milicias y bandas hasta la negociación que conduce a su desmovilización (Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998; Medina, 2006).

1995-2005. Fortalecimiento de la presencia guerrillera y paramilitar en la ciudad, recomposición de la delincuencia (Alonso, Giraldo y Sierra, 2006: 447).

2005-2008. Fracaso de la estrategia de urbanización de la guerra (Operación Orión en la comuna 13 de Medellín) desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en 2003 y 2005. Incremento de los homicidios y recomposición de las estructuras delincuenciales.

La década comprendida entre los años 1995 y el 2005 es considerada como la que reviste la mayor complejidad para el análisis, por los altos niveles de intensidad de la violencia, la confluencia de los actores armados con presencia en la ciudad desde los años 80 y el escalamiento de un conflicto armado que según analistas como Franco (2004b: 100) deriva en una situación de “guerra civil” como resultante de “una decisión racional por parte de los actores enfrentados, guerrilla de un lado y mercenarismo corporativo, de otro, a la disputa por el control de espacios urbanos”.

En discusión con la tendencia a interpretar la denominada urbanización de la guerra en Medellín como expresión de la

dinámica nacional, Blair *et al.* (2008), Alonso, Giraldo y Sierra (2006) y Angarita (2004) plantean la necesidad de superar esquemas simplistas en el análisis y avanzar en el desciframiento de formas de articulación entre dinámicas locales y nacionales en relación con el conflicto armado y las violencias urbanas.

Entre los factores que podrían explicar esta sucesión de ciclos de violencia es del caso mencionar dos hipótesis.

- *La competencia armada*

Para Alonso, Giraldo y Sierra (2006: 435) lo que facilitaría una comprensión de las dinámicas cambiantes de la conflictividad violenta en la ciudad sería un modelo de competencia armada, queriendo decir con ello:

Un proceso en el que múltiples grupos con intereses, motivaciones y estrategias diversas desafiaron las pretensiones de universalidad e inclusividad del Estado en la región, al romper fácticamente el monopolio de la violencia y lograr sostener esa ruptura, continuamente, durante dos décadas (Alonso, Giraldo y Sierra (2006: 435).

- *Espiral de violencias*

Según Franco (2004b: 96), los conflictos por el territorio en la ciudad han dado lugar a la configuración de una espiral de violencias que le ha permitido consolidarse como una continuidad y nutrirse del carácter ilegal del proceso de urbanización, la irrupción e imbricación social del narcotráfico, la segregación socioeconómica y espacial, y la lucha contrainsurgente.

Esta espiral se caracteriza por una sucesión de ciclos de liberación y de opresión:

En primera instancia se produjo una situación de opresión por parte de las bandas que estuvo seguida por la formación de autodefensas de las sociedades vecinales y milicias que pretendieron cumplir con una función de liberación de dicha opresión; algunas bandas también se incorporaron a esta intención liberadora respecto a otras bandas o a las milicias articulada a la búsqueda de dominio territorial; en la fase siguiente el mercenarismo corporativo también tiende en algunas partes a la liberación de la población de la opresión ejercida por milicias y bandas que no se disponen a ceder el control territorial hasta dar lugar a un nuevo grupo armado que libere de la opresión mercenaria o la institucionalización de estos y al retorno del Estado a través de sus aparatos coercitivos, en medio de una sociedad policíaca orientada a la represión de los conflictos sociales (Franco, 2004b: 966-97).

Impactos del conflicto armado y las violencias en la sociedad

En las investigaciones realizadas sobre la violencia urbana en la década de 1980, primó el interés en indagar por los actores armados y los factores explicativos de la violencia. Sin embargo, la intensificación del conflicto armado en la década de 1990 y la afectación de habitantes de regiones y ciudades le dio un impulso a la investigación sobre los impactos de la violencia en la sociedad y, en particular, la experiencia vivida por sectores de población que se convierten en el blanco de las estrategias de miedo y terror de los actores armados. Es en este campo donde se torna relevante el aporte de investigaciones realizadas desde la academia y ONG.

El sentido de la reflexión apunta a establecer los múltiples impactos de la violencia y el conflicto armado en la población. De acuerdo a la revisión que realizamos se identificaron las siguientes variantes:

La población como blanco de los actores armados

En varios estudios se da cuenta de las consecuencias o impactos que el conflicto armado en Medellín ha causado en diferentes componentes de la vida social, cultural y familiar. Se describen las diversas estrategias a las que recurren los grupos armados legales para involucrar a la población: por ejemplo, reclamando apoyo logístico y buscando respaldo a sus acciones, o atacando aquellos sectores de la población considerados opositores o aliados del bando contrario (Angarita, Jiménez *et al.*, 2008; Blair *et al.*, 2008; Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998).

La población en este caso es un centro de gravedad de la confrontación y, por tanto, es la que presenta mayor vulnerabilidad ante la agresión y la violencia en el desarrollo de las hostilidades. Lo que vuelve más crítica la situación es que la distinción entre combatientes y civiles se afirma como borrosa, porque lo que prevalece es el no uso de distintivos y porque la complicidad y simpatía de la población es objeto de disputa (Roldán y Franco, 2004).

La lucha por la población civil se convierte, junto al territorio, en el objetivo principal y central de la guerra. Ésta se desarrolla, por consiguiente, como un escenario desde el cual los diferentes actores pretenden imponer órdenes alternos en la ciudad o la prevalencia del orden legal vigente (Angarita, 2004). Esto se explica, según (Uribe, 1997: 13) por un “giro en la confrontación armada” en donde la guerra por las localidades,

por los municipios, por las inspecciones de policía, los barrios y las veredas campesinas, es decir por los espacios por donde discurre y se desarrolla la vida normal de los ciudadanos, adquiere particular importancia al constituirse en objeto de la disputa y de allí, que la mayor parte de las víctimas sean civiles y en muy pocas ocasiones se enfrenten entre sí los actores armados.

Aunque se reconocen cambios en los protagonistas de la violencia, en algo más de dos décadas, se coincide en establecer que sus prácticas se mantienen, dejando profundas marcas en la cultura y en las relaciones de convivencia entre los pobladores. Por ejemplo, en el texto *Dinámicas de guerra y construcción de paz en la comuna 13* (Angarita *et al.*, 2008), se demuestra cómo la población, al tener que vivir en medio de un régimen armado de facto tiene que adaptarse a él, se encuentran a sí mismos en una situación en la que nunca ganan. Si se adaptan con bastante éxito, pueden ser acusados de colaboración y apoyo. Si no se adaptan, se arriesgan a ser expulsados o muertos. Muchos residentes de la comuna 13 se encontraron a sí mismos en este dilema. Era imposible ser neutrales.

Destrucción del tejido social

Los autores que lo abordan desde una perspectiva socio-cultural y psicosocial, plantean que lo que está en juego es la destrucción paulatina del tejido social, de las relaciones intersubjetivas, una transformación del sentido de lo cotidiano y una desaparición de los referentes de confianza (Riaño, 2006), (Hincapié, 2008).

Blair *et al.* (2008) validan lo planteado por Oslender en el impacto de la aplicación sistemática del terror en la destrucción

del tejido social de las comunidades víctimas, en la producción de un miedo generalizado entre los pobladores locales y como arma en la lucha por el control territorial de los grupos armados. Como consecuencia de ello en los lugares así afectados se producen “geografías del terror”: transformación de lugares y regiones en paisajes de miedo con unas articulaciones espaciales específicas que rompen de manera dramática, y frecuentemente imprevisible, las relaciones sociales locales y regionales.

Las sociabilidades barriales que caracterizan a estos barrios también se han visto afectadas por el accionar de los grupos armados. Los proyectos y emprendimientos colectivos que los identifican en sus inicios, atados a las historias compartidas de construcción y poblamiento, se resquebrajan en medio del conflicto. Según pudieron establecer Blair *et al.* (2008) esta es una de las mayores pérdidas identificadas por sus habitantes.

Por su parte Riaño (2006) al analizar las experiencias de jóvenes de diversos sectores de la ciudad con la violencia, recalca la incidencia que la exposición a varios períodos de violencia tiene en la generación de ansiedades colectivas, al dejar un sedimento emocional que se puede tornar en odio y acciones vengativas. Por tanto, el tejido social se debilita gradualmente, los mecanismos sociales y rituales para negociar el dolor se bloquean y el agotador impacto de las violencias en las esferas psicológica, social y cultural se intensifica.

La guerra ha tenido un impacto en la construcción de representaciones sobre el otro, pues hizo que las poblaciones marcaran como enemigo al “otro”. Así, para cada barrio durante determinadas épocas, los “malos” siempre eran los “otros”, “los de arriba”, “los de abajo” o “los del frente”. Entonces los barrios epicentro de

la violencia se convierten en poblaciones mutuamente excluyentes y estigmatizantes, además de esa especie de “identidad negativa” que tenían en la ciudad, según la cual se les representaba como “la gente de las comunas”, “los violentos”, etc. (Blair *et al.*, 2008).

En estas circunstancias, según Hincapié (2008: 121) la vida comunitaria cotidiana se vuelve una tragedia ante las muertes selectivas, torturas, jóvenes enlistados en uno y otro bando, declarados guerrilleros y luego paramilitares, madres que perdieron a sus hijos, familias que huyeron para que no les mataran o enlistaran a sus jóvenes, desplazamiento intraurbano de los líderes comunitarios, uso de las escuelas para entrenamiento militar e intimidación generalizada a la población.

Debilitamiento de las organizaciones sociales

La conversión de la población civil en objetivo principal de la guerra según Uribe (1997) ha tenido un impacto en la intensificación de la disputa por el control de las organizaciones sociales, grupos cívicos, acciones comunales, concejos, alcaldes, personeros y demás instituciones de la vida local. Esta lucha sin cuartel por la sociedad civil, ha implicado la homogeneización de los territorios conquistados y el control de los espacios por donde discurre y se desarrolla la vida normal de los ciudadanos. Blair *et al.* (2008), ilustran esta situación con la descripción de los controles establecidos por los actores armados en algunos barrios de Medellín, sobre las actividades a desarrollar por las organizaciones y sobre los espacios destinados a la acción comunitaria.

Impactos en la familia

Según los resultados de la investigación realizada por Sánchez *et al.* (2006) la violencia se refleja en la composición y dinámica

familiar: aislamiento de sus integrantes, resquebrajamiento de los lazos afectivos y de cooperación, empobrecimiento. Para Medellín el conflicto urbano ha hecho que la mujer cargue con más responsabilidades en lo público, sin que se pueda desprender de las asignadas en lo privado por la tradicional cultura patriarcal.

Las mujeres han sido víctimas y observadoras de las violencias que se viven en Medellín, han temido por sus hermanos y padres, han perdido o enterrado a sus hijos, han sido desplazadas y han tenido que ver cómo se le quita la vida simbólica y física a la juventud. El espacio para la vida se restringió, el liderazgo se frenó y aumentó el temor (Sánchez *et al.*, 2006: 93).

Rescatar la importancia de la cotidianidad cobró particular significado en la investigación realizada sobre las mujeres-madres (Arias *et al.*, 2008: 26) porque es este el espacio en donde por excelencia se construyen y expresan las relaciones de género, y por la constatación de la manera como la cotidianidad se convierte en uno de los espacios más afectados por los conflictos armados, y que “son justamente las mujeres quienes juegan un papel vital en el sostenimiento y preservación de esa vida cotidiana afectada por la guerra”.

Agudización de la violencia contra la mujer

En la década de 1980 la problemática de la violencia contra la mujer adquiere un lugar importante en la producción investigativa. Ella se convierte en un referente que cobra diferentes matices de acuerdo a la ubicación que se le otorgue en el escenario familiar y el papel protagónico frente al ejercicio de la violencia.

A partir de estos estudios se perfilan argumentos en torno a la mujer como víctima de la violencia, protectora emocional y afectiva; victimización que se asocia a las condiciones estructurales de la sociedad y de la cultura, al rol de satisfacer sexualmente a su pareja, y a la violencia conyugal.

La violencia sexual, apelación sistemática como arma política por los grupos armados, es señalada por la sociedad y en particular por el movimiento social de mujeres, que desde diversos enfoques agencia y promueve la indagación por una de las realidades más ignoradas en la investigación sobre las violencias en Colombia.

Los trabajos analizados abordan temáticas relacionadas con las diferentes violencias que viven las mujeres, niñas y adolescentes tanto en el ámbito público, perpetradas por los actores armados, paramilitares, desmovilizados, guerrillas, fuerza pública; como en el ámbito privado, la familia. Se tratan asuntos tales como la violación de derechos sexuales y reproductivos, violencia intrafamiliar, cambio de roles, dicotomía público-privado, composición y dinámica familiar, transformación de identidades, el hacer y el ser de las mujeres-madres, cotidianidad, resistencias. Reflexiones también en lo que concierne la violación de derechos humanos, el patriarcalismo, la violencia socio-política, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el desplazamiento forzado.

Sánchez *et al.* (2006) pone de presente la manera como el conflicto armado incide en la construcción de nuevos referentes de feminidad y masculinidad, que conviven conflictivamente con los antiguos modelos. Emergen las mujeres y sus organizaciones como protagonistas con interés por participar de la vida política y social, lo que cuestiona las visiones tradicionales sobre ellas

y, al mismo tiempo, crean nuevas prácticas y nuevos mensajes sobre la capacidad de las mujeres para enfrentar creativamente la adversidad y el dolor.

En el estudio sobre dinámicas de guerra y construcción de paz en la comuna 13 (Angarita *et al.*, 2008) se constata como “el hogar en lugar de refugio se convierte a sí mismo en un sitio de guerra, con gente obligada a quedarse adentro, pero sabiendo que los actores armados pueden tocar a la puerta en cualquier momento”. De igual modo se pudo establecer la huella indeleble que el conflicto armado ha dejado en no pocas mujeres y en general en las familias, con la proliferación de relaciones afectivas y sexuales de los jóvenes con miembros de los grupos armados.

En el ejercicio de los nuevos roles y funciones a los cuales aboca a las mujeres la guerra, las mujeres-madres, según Arias *et al.* (2008) reproducen frecuentemente concepciones patriarcales sobre su ser y su quehacer que favorecen y alimentan las lógicas de la guerra. Entre dichas concepciones están: 1) Considerar que en la guerra sufren más los hombres que las mujeres, porque son quienes con mayor frecuencia pierden la vida, desconociendo las muertes simbólicas que dejan detrás de cada mujer los flagelos a los que son sometidas en contexto de guerra. 2) Repetir en su rol de disciplinadoras, modelos de poder y autoridad heredados de formas familiares patriarcales, recurriendo a mecanismos de control de sus hijos e hijas que reproducen el mismo ejercicio autoritario que las ha subordinado. 3) Priorizar permanentemente el cuidado de los otros afectados por la guerra, hijos, esposos y familiares sobre sus propias necesidades de atención, hasta tal punto que éstas no son tenidas en cuenta, con grandes costos para su salud y su bienestar.

En particular la violación de mujeres constituye una de las formas de violencia más silenciadas, pese a ser una práctica

recurrente en contextos de guerra; adicionalmente, y en muchos casos, la acción violenta se desdibuja culpabilizando a las mismas niñas y mujeres por lo que les sucedió. Esta es realidad que se vive en Medellín según (Blair, *et al.*, 2008). Los actores armados que dicen “defender” el barrio de otros grupos externos, se convierten ellos mismos en una amenaza para sus habitantes. Los casos de violación tienen efectos de muy larga duración en las vidas de las víctimas; muchas de esas mujeres crecen con un fuerte sentimiento de rabia y venganza y, en casos aún más extremos, deben asumir embarazos no deseados y criar a quienes muchos han llamado “los hijos de la guerra”.

En la investigación realizada por Sánchez *et al.* (2006) también se hace énfasis en cómo las violencias contra las mujeres y las niñas se practican con la finalidad de imponer disciplina, sancionar, ejercer coerción y restringir la libertad, con efectos devastadores en ellas. El cuerpo de las mujeres se convierte en territorio que se disputan los actores armados y la violación y el asalto sexual contra las mujeres y las niñas parece un agregado “normal” de la guerra como una forma de aterrorizar y de humillar a la población civil.

Los testimonios y relatos de las mujeres de las zonas en conflicto armado en Medellín, analizados por Arias *et al.* (2008) dan cuenta del asesinato, muerte, desaparición y violación de mujeres. El Estado fue reconocido también como un agente en el conflicto, por su ausencia y por una actitud indiferente frente a la violencia en la familia y a los delitos sexuales en mujeres, niñas y niños.

El escenario familiar se revela como el lugar donde se presenta el mayor número de casos. Los violadores y abusadores sexuales son los abuelos, padres, primos o vecinos y suelen tener relaciones “afectivas” con las niñas víctimas, lo cual implica

que tienen una relación de poder y jerarquía que les posibilita intimidarlas, manipularlas y hasta “extorsionarlas”, para lograr de ellas el silencio y continuar el abuso sin ningún control y sanción (Sánchez *et al.*, 2008).

Para Roldán y Franco *et al.* (2004) la violencia contra la mujer es fundamentalmente producto de un poder, en el marco del cual se generan acciones contrarias a los derechos de las mujeres, poniéndolas en situaciones de discriminación, subordinación o subyugación. Los altos grados de confinamiento a la vida doméstica de las mujeres, reducen sus expectativas y posibilidades de acceso a espacios macro de socialización. Aunque hay un incremento de la participación en la vida asociativa barrial y en algunos casos, de posiciones de liderazgo, la gran mayoría de mujeres no logran romper la lógica doméstica. Esto visibiliza una transferencia de la lógica de lo doméstico a espacios asociativos barriales.

La mujer, además de la situación de exclusión económica y política que comparte con el hombre, se desenvuelve en una condición de no reconocimiento, lo que la hace un grupo social bivalente. Ella sufre una doble injusticia: Una distributiva y otra de reconocimiento, esta última tiene arraigo en una estructura cultural valorativa inequitativa. En este sentido se afirma que las mujeres como grupo social poblacional participan de un conflicto incipiente ligado a condiciones de injusticia distributiva y de reconocimiento basadas en el género (Roldán y Franco *et al.*, 2004).

Impactos de la violencia en los jóvenes

En los estudios revisados se puede apreciar el interés por indagar sobre los factores que explican el protagonismo de los

jóvenes en la violencia, manifiesto en su participación en diversas agrupaciones armadas.

Un tipo de aproximación es la que realiza Alonso Salazar sobre el fenómeno del sicariato (1990) y que le otorga el mayor peso explicativo a un contexto marcado por la marginalidad, la exclusión y el desarraigo familiar, la ausencia del padre y por el narcotráfico que se convierte en un referente para nuevas generaciones de jóvenes urbanos.

Desde otra perspectiva, Blair *et al.* (2008) al explorar las motivaciones de los jóvenes establecen como, no es precisamente, la ideología política lo que determina su adhesión a determinado grupo, sino sentimientos como la rabia, la venganza, o su valoración como una estrategia de sobrevivencia. Además, según la percepción de personas entrevistadas en barrios epicentro del conflicto, para los jóvenes la situación era muy difícil, pues sus opciones siempre eran “se va, o se mete, o se muere”; en el peor de los casos, irse podía implicar también represalias contra su familia; en ese sentido, para evitar un desplazamiento o la propia muerte, los jóvenes se involucraban a los grupos armados.

El posicionamiento de los jóvenes en los escenarios de la violencia urbana también se acompaña de las representaciones culturales que la sociedad ha construido sobre este grupo social. Una representación desde lo público y, especialmente, desde los barrios populares es la que los concibe como sujetos peligrosos portadores de mal. Esta es la realidad sobre la cual se reflexiona en la publicación *Rostrros del miedo* al establecer la existencia de un imaginario que explica de manera simplificada la violencia, sobre la base de la estigmatización de grupos sociales, como en el caso de jóvenes de barrio descritos como sicarios, degradados sociales y perdidos en el vicio (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003: 136).

En la década de 2000 las investigadoras Pilar Riaño (2006) y Elsa Blair (2005) aportan nuevos elementos de carácter teórico y metodológico, que contribuyen a una renovación en la manera de abordar esta compleja relación entre jóvenes y violencia.

El trabajo de Riaño (2006) *Jóvenes memoria y violencia en Medellín: una antropología del recuerdo y el olvido*, ilustra y cuestiona algunas teorías tales como la rutinización del terror, la banalización de la violencia o la generación del no futuro, comúnmente usadas para describir las experiencias de los jóvenes de Medellín. Su apreciación es que estas elaboraciones teóricas enfatizan la fragilidad y la impotencia del accionar humano cuando la violencia se convierte en una forma de vida. Estos enfoques, rehúsan admitir la variedad de las respuestas humanas ante la violencia y los intentos de los individuos por crear significados de esperanza a partir de experiencias deshumanizantes por fuera de lo común.

Lo que Riaño (2006) logra establecer, basada en la implementación de una propuesta metodológica que tiene como eje las prácticas de memoria, es la existencia de diversas estrategias mediante las cuales los jóvenes que residen en zonas de la ciudad más golpeadas por las violencia, elaboran la experiencia vivida, de las pérdidas de sus seres queridos, la resignificación de la vida y los esfuerzos por avanzar en la construcción de una noción de futuro y de pertenencia a la ciudad misma.

Riaño (2006) además, sostiene que en Medellín la memoria se convierte en una práctica puente que les permite a los jóvenes darle sentido al entorno vital como un medio social y relacional. Las prácticas de memoria en este contexto restauran un sentido de lugar en las experiencias del desplazamiento, discontinuidad y fragmentación que la violencia inflige en la vida de las personas.

Prácticas que tienen que ver con las canciones, recordatorios o relatos que proveen ejemplos de respuestas humanas a la muerte y la destrucción. La muerte, no es según esta mirada, un asunto trivial para estos jóvenes que se enfrentan a la pérdida del ser amado.

Al recitar o enumerar a los muertos, se puede apreciar la importancia que cobra la construcción de una narrativa histórica que documenta la intensidad de la experiencia de terror y violencia vivida. La memoria en este sentido también es una memoria social que transmite una construcción pública de la experiencia individual y colectiva (Riaño, 2006).

En esta dirección Blair (2005) analiza los mecanismos de carácter simbólico, mediante los cuales los jóvenes significan la muerte violenta y entre los cuales se cuentan formas narrativas, de ritualización y tramitación de la muerte violenta como el duelo y la memoria.

El entramado de las significaciones simbólicas que los jóvenes producen en esa relación muerte-ciudad, se despliega en tres dimensiones: La ciudad como el territorio donde se origina la muerte joven, es decir, la ciudad en el espacio físico de producción de muerte violenta. La segunda, relativa a la demarcación o codificación del territorio a partir de referentes absolutamente tanáticos que marcan la ciudad. La tercera, la dimensión de la ciudad como el lugar donde la muerte se significa y se inscribe en un marco de representación que le da sentido, con el cual los jóvenes vivencian sus sentimientos y expresan sus maneras de habitar la ciudad.

En acuerdo con Riaño, subraya la importancia de la tarea de construcción de una cultura de la memoria que mantenga vivo

el recuerdo de tantos muertos víctimas de la violencia como acontecimiento histórico, tal vez, según su apreciación, como el más importante y significativo de nuestra historia como nación.

Impactos en la vida de las personas

También ha sido objeto de análisis la forma como la violencia ha marcado la vida de las personas con la ruptura o el trastocamiento de sus proyectos de vida. En particular, los niños que nacieron en los barrios epicentro del conflicto que hoy son jóvenes y se salvaron de participar directamente en la guerra, viven sus efectos bajo distintas formas producidas por las dinámicas del conflicto que afectaron sus proyectos de vida, incrementando las limitaciones para estudiar, trabajar y, en general, poder desarrollar libremente sus vidas, deseos, gustos, etc., Blair *et al.* (2008).

Otro tanto ha ocurrido con personas adultas: hombres que debieron abandonar los trabajos y quedarse encerrados en sus casas, ya que eran presionados por los grupos armados para vincularse a ellos; sino, eran asesinados. Debido a esto, en muchos casos, las mujeres debieron asumir la responsabilidad económica del hogar y salir a trabajar para poder solventar las necesidades de sus familias (Blair *et al.*, 2008). De forma similar, la investigación realizada por Arias *et al.* (2008) constata como la mayoría de las mujeres que se desenvuelven en contextos de conflicto armado, han tenido que asumir nuevas responsabilidades económicas y sociales, y cumplir un papel fundamental en la recuperación de sus familias y comunidades. Dicho papel ha demostrado ser central en la etapa de conflicto –donde las acciones de las mujeres han sido definitivas para garantizar la supervivencia de sus familias y comunidades–; no sólo juegan

un papel crucial para la subsistencia de sus familias en medio de la guerra, sino que, en su accionar, se transforman a sí mismas como mujeres y actoras sociales.

Transformación de las prácticas espaciales y temporales

Las estrategias de dominio territorial por parte de los actores armados, según analizan Blair *et al.* (2008), Jaramillo, Villa y Ceballos (1998), Angarita *et al.* (2008) han tenido un impacto en las prácticas espaciales de los pobladores de los barrios, modificando su movilidad y desplazamiento y el cambio de referentes de lo público y lo privado. Esta es la razón por la cual los pobladores se han visto impelidos a buscar opciones para poderse movilizar y no quedar a merced de los dictámenes de los armados.

La guerra, según Blair ha sido determinante en la configuración de paisajes de miedo en los barrios, asociados a ciertos lugares convertidos en escenarios de la muerte, esquinas, calles, tiendas, y hasta el interior de sus hogares. Esto se ha podido observar en barrios de la ciudad llenos de calvarios simbólicos, presentes sólo en la memoria individual y colectiva de sus habitantes. Al analizar estos paisajes del miedo (Blair *et al.*, 2008) retoman el enfoque de Oeslender de la desterritorialización referida no sólo al desplazamiento forzado, sino a aquellas experiencias espaciales vividas por los pobladores bajo regímenes de terror o contextos de terror en sus lugares de origen. (Oslender, 2006: 163 citado por Blair *et al.*, 2008: 86)

También los referentes temporales se trastocan cuando porque no es posible medir el tiempo en función de las actividades cotidianas, sino de los enfrentamientos armados. Esto aumenta

los niveles de incertidumbre y acrecienta el temor a morir en medio de los combates (Blair *et al.*, 2008).

En el mismo sentido, Riaño (2006) señala como la violencia determina de manera fundamental las actividades al caminar y viajar en Medellín. Ella está presente de múltiples formas en la calle, en la casa, operando como una fuerza que desplaza y segrega. No obstante, afecta a los individuos de diversas formas, de acuerdo con sus experiencias pasadas y con el grado de distancia social que establezcan con el conflicto violento. Pero también activan prácticas alternativas de cruzamiento de estos límites impuestos, lo que desafía la utilización del territorio como instrumento de guerra y medio para manipular los temores. Estas prácticas alternativas articulan una memoria de territorialidad como eventos significativos de construcción de lugar.

Construcción de una atmósfera de miedos e incertidumbres

En el texto *Rostros del miedo*, Villa, Jaramillo y Sánchez (2003) examinan la construcción en Medellín de una atmósfera de miedos e incertidumbres, asociada a la violencia, la pobreza y a fenómenos globales (la tecnología). El miedo habita la ciudad, recorre sus calles, sus gentes, las prácticas sociales y los imaginarios. Desde allí incide en las formas de agregación y desagregación social, en los procesos de inclusión y exclusión, en las nociones de orden y caos. Pero al mismo tiempo, el miedo vincula, propicia, otras formas de estar juntos alrededor de un sentimiento compartido de vulnerabilidad; reactualiza y potencia los acumulados sociales y culturales con los que cuentan los grupos sociales para garantizar la permanencia en contextos que amenazan permanentemente con la alteración o la disolución.

Hacer de los miedos y la incertidumbre un asunto de reflexión colectiva, significa ampliar las posibilidades de considerarlos como parte de la construcción de una ciudad incluyente y de un orden democrático.

El trabajo de Riaño *Jóvenes memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido* (2006), señala también como los relatos orales y las prácticas del recuerdo revelan las complejas maneras como se construyen el miedo y el terror en sociedades afectadas por la violencia. En Medellín, por ejemplo, la ambigüedad y las contradicciones morales persiguen constantemente a los actores sociales cuando éstos encaran las realidades de la vida y la muerte, la amistad y la enemistad, la violación y la tortura, las lealtades territoriales y la guerra. Las tensiones observadas en las maneras como los jóvenes adoptan una posición de mártires, Amazonas, activistas, líderes, pueden dar cuenta de una ética ambigua, que se ve afectada por prácticas de violencia en las cuales algunos habitantes de la ciudad se constituyen a sí mismos como agentes del homicidio, la violación y la coerción.

Respuestas de la sociedad y del Estado frente a la violencia

Formas de respuesta desde la sociedad

El proceso de expansión de las violencias ha tenido como contrapartida la generación de formas de respuesta desde lo social. Esta es la temática de la cual se han ocupado diversos investigadores.

Según Medina (1994) existen mecanismos que representan modelos de resistencia, como el deporte, el fútbol, a pesar de

las limitaciones en la subutilización de escenarios deportivos; la falta de capacitación de líderes comunales en disciplinas deportivas; la ausencia de dotación, mantenimiento y vigilancia de los escenarios deportivos, principalmente de las comunas más pobres de Medellín; la monopolización de las áreas deportivas por particulares que impiden a la comunidad utilizarlas y la falta de apoyo serio y continuo a grupos juveniles que promueven el deporte.

El autor descubre que el juego –la práctica del fútbol– además de despertar alegrías, disfrute, goce, se convierte en una manera de luchar contra el entorno hostil, así demuestra que la voluntad popular permanece y se evidencia en la lúdica a pesar del pesimismo. El fútbol es capaz de crear y de reproducir identidades colectivas a través de un proceso de cohesión social, que empieza en el barrio, pasa por lo regional y termina en lo nacional.

La labor del fútbol como cohesionador social, también da cuenta de la perspectiva ética, pues el fútbol se convierte en una especie de escuela, donde por medio de una pedagogía los niños y jóvenes pueden aprender valores de amistad, solidaridad, respeto hacia el otro, conciencia de las derrotas y de los triunfos. No obstante, cuando el fútbol es llevado al espectáculo, se tejen otros intereses, se desatan luchas, venganzas, se cometen crímenes, delitos, etc.

Otra aproximación, en un contexto de “urbanización de la guerra” se encuentra en el texto *Dinámicas de guerra y construcción de paz* (Angarita *et al.*, 2008). En él se hace una detallada descripción de muchas acciones cotidianas en medio del conflicto para resistir a los violentos e intentar mantener ciertos espacios disponibles para jugar, proteger a la gente joven en momentos

de confrontaciones armadas, ofrecerles a los jóvenes alternativas al reclutamiento dentro de grupos armados.

Con respecto a las mujeres, Sánchez (2008) desde un enfoque feminista analiza las estrategias a las cuales han apelado para visibilizar las atrocidades cometidas por los grupos armados, en la experiencia de las Madres de la Candelaria, considerada como:

Una expresión de una apuesta política por la no violencia y por un proceso de reconciliación basado en la verdad, la justicia, la reparación y la reconstrucción de la memoria colectiva, en contraposición de quienes piensan la reconciliación desde el perdón y el olvido (Sánchez, 2008).

Desde una perspectiva sociológica, Nieto (2009) ilustra lo que él considera son *formas de resistencia civil no armada* a la luz de experiencias desarrolladas en varios lugares de la ciudad.

El autor parte del enfoque de la acción colectiva para precisar que el concepto de resistencia corresponde a cualquier expresión colectiva de oposición, inconformidad o confrontación, frente a estrategias de dominación o situaciones de injusticia percibidas como tales por grupos o actores colectivos. La resistencia es la contrapartida del poder. Teóricamente hablando, comprende múltiples formas de acción colectiva, desde estallidos y sublevaciones espontáneas contra el poder, insurrecciones, guerras civiles, huelgas, plantones, tomas de fábricas, desobediencia civil, asambleas, reuniones, movimientos sociales, hasta formas más sutiles, calladas, ocultas, propias de la resistencia bajo regímenes autoritarios y totalitarios.

De allí deriva el concepto o la categoría de *resistencia civil no armada* que designa unas estrategias de acción y un modo de actuar basado en los medios propios que caracterizan dichas

acciones, por ejemplo, las manifestaciones públicas, tomas civiles, la huelga, el boicot, entre otras, que permite diferenciarlas de las formas de resistencia civil armadas. Al igual que del movimiento o doctrina filosófica política de la no-violencia, aún si muchos de sus protagonistas se inspiran en esta última.

Nieto (2009) ofrece una descripción de experiencias de resistencia en varias zonas de la ciudad como la comuna 13 y la zona centroriental. Destaca, por ejemplo, algunas organizaciones en la comuna 13 que representan un tipo de resistencia no contestataria frente a los actores armados y que buscan evitar que los niños, niñas y jóvenes se dejen seducir por la guerra, abriendo espacios alternativos de socialización y vida, generando procesos de resistencia a través de la cultura, el arte y la lúdica, espacios que cautivan especialmente a niños y jóvenes, y generan conciencia social comunitaria. Otras acciones de resistencia de carácter más directo frente al conflicto armado son: La socialización con jóvenes de distintos proyectos de vida alrededor de la cultura, la objeción de conciencia y las actividades artísticas, al igual que los encuentros deportivos descentralizados, a través de los cuales, se pretende romper el sentido de competitividad e integrar valores solidarios y de convivencia, siendo las reglas de juego, el respeto, la solidaridad y la convivencia.

Al lado de estrategias de resistencia civil no armadas, simuladas, soterradas y substractoras, aunque menos frecuentes, Nieto (2009) también sostiene que han existido experiencias y estrategias más abiertas, directas, confrontacionales o mediadoras contra los actores armados por parte de las comunidades barriales. Este sería el caso de la Junta de Acción Comunal del barrio Villatina de la comuna 8.

Este tipo de experiencias de resistencia civil no armadas en las comunas populares de Medellín, según Nieto (2009: 57) demuestra cómo la ciudadanía no ha sido víctima pasiva ni ha estado impotente frente a los poderes autoritarios que los actores armados ejercen en sus territorios. Por el contrario, muchas de ellas han sido posibles gracias al acumulado social logrado por las comunidades como producto de trayectorias, luchas y resistencias anteriores por el derecho a la ciudad.

La implementación de estrategias de guerra mediante el miedo y el horror, según Angarita *et al.* (2008) también ha facilitado ciertas respuestas subjetivas bajo la forma de traumas síquicos, duelos no resueltos y sentimientos retroactivos de responsabilidad íntima expresados en preguntas por lo que se pudo hacer y no se hizo, o por la falta de cálculo en algunas de las acciones efectuadas. Estas secuelas que se traducen en las dificultades para la recuperación de la confianza en el semejante, en la presencia de un temor expectante ante una posible repetición de lo vivido, complican la elaboración del pasado, de tal modo que pueda integrarse en la historia individual, familiar, barrial y comunitaria

Políticas de seguridad y convivencia

Las violencias urbanas y su impacto en los problemas de inseguridad se convierten en un fenómeno que preocupa a la ciudadanía y a las autoridades, razón por la cual se instala como aspecto prioritario en la agenda pública tanto en el ámbito nacional como en el local desde la década de 1990. Esto contribuye al reconocimiento del desarrollo de un campo de investigación que cuenta con los aportes desde la academia, ONG y entidades del Estado.

La revisión de los estudios que hemos realizado nos ha permitido constatar la existencia de trabajos en los cuales se describen el tipo de estrategias que han implementado varias alcaldías desde la década de 1990 (Juan Gómez, Martínez, Luis Alfredo Ramos Botero, Luis Pérez) planteando diversos tipos de hipótesis con respecto a los enfoques y al impacto logrado con su implementación.

Autores como Nieto y Robledo (2006) identifican un punto de quiebre importante en cuanto al tratamiento de los actores del conflicto violento en Medellín por medio de políticas públicas, o por lo menos, de iniciativas gubernamentales a comienzos de la década de los noventa cuando se crea la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana. Entre sus logros se destacan las propuestas de participación, eventos de reflexión, Seminarios de Alternativas de Futuro para Medellín, la destinación de algunos recursos para inversión social y la negociación política con la Corriente de Renovación Socialista –CRS– y con las milicias urbanas de la ciudad.

Sin embargo, para Velásquez (2003) y Quijano (2004) la Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana, no respondió a las necesidades reales, ya que básicamente se creó como un programa de choque o de contención, más que una política de corto, mediano y largo plazo que le diera sostenibilidad a la intervención y garantizara de manera significativa una reducción en los índices de violencia. Prueba de ello es que muy pocas de las acciones o programas emprendidos por ésta, logran ser incorporados de manera sostenida a la dinámica institucional.

En lo que respecta a las políticas de seguridad y convivencia, los analistas han hecho énfasis en ciertos enfoques y estrategias que consideran problemáticas. Algunos ejemplos:

Al analizar los resultados en la implementación de estas políticas en el plan de desarrollo de Medellín (1995-1997) correspondiente a la administración de Sergio Naranjo, Jaramillo, Villa, y Ceballos (1998: 126) observan cómo si bien los programas propuestos se hicieron desde presupuestos de gestión social democrática, las limitaciones presupuestales y la propia operacionalización de las estrategias privilegiaron un tratamiento represivo y burocrático, en tanto que la mediación democrática propiamente dicha, que se fundaría en una política social efectiva y en una intervención mediadora tendiente a la pacificación y a la negociación con los armados, se quedó sólo en declaraciones y más aún se instrumentalizaron como discurso y como mecanismo simbólico. Así el Estado local se condujo como un estado dispersor del conflicto.

Visto de conjunto lo acontecido en la década de 1990, Alonso, Giraldo y Sierra (2008) conceptúan cómo las políticas de seguridad que se pusieron en práctica propiciaron, agenciaron y justificaron el desplazamiento o retiro paulatino, casual o intencional del Estado de la prestación de seguridad y la gestión del conflicto armado. Esta posición produjo un modelo de negociación permanente del desorden marcado por el papel preponderante de los intermediarios armados, se consolidó en un formato de acción pública que permitió la igualación política de todos los actores armados, generando una serie de *trampas de equilibrio de alto nivel* que permitieron la inserción exitosa del paramilitarismo en la ciudad.

Este revés para el Estado se explicaría, según Vélez (2001: 77) por la adopción de este tipo de iniciativas de pactación en un contexto sociopolítico en el cual el Estado no ha logrado monopolizar el uso de la fuerza, lo que hace que se mantenga

como un competidor más entre otros que le disputan con éxito su monopolio básico: el de la fuerza. Esta condición lo sitúa en una posición siempre desventajosa porque supone reconocer y negociar con todas aquellas autoridades territoriales que, de facto, le hacen perder su lugar estratégico en relación con la preservación de otros monopolios básicos como el de la ley y el financiero.

El otro problema es que estos pactos fueron instrumentalizados por cada uno de los diversos sectores involucrados directa o indirectamente en ellos –gobierno local, actores del conflicto armado y los mismos combos, bandas y milicias– para lograr propósitos concretos, diferenciados y, en ocasiones, complementarios o contradictorios entre sí (Vélez, 2001: 81).

Lo que según Quijano (2004), proporciona una clave para entender el fracaso de este tipo de iniciativas, es un vacío en la adopción de una auténtica política pública de tratamiento del conflicto social armado urbano que, ante todo, debería contemplar el pago de la deuda social por parte del Estado y la adopción de una fórmula que permita la negociación y el sometimiento de los actores armados urbanos, ya sean de carácter político o delincuenciales.

Paradójicamente el punto crítico al cual se llega con la implementación de políticas de pactación es que facilita, según Giraldo (2008) una articulación de los problemas de inseguridad ciudadana con los de seguridad del Estado. En el período 2002-2005 la acción articulada e integral del Estado central y local, hace posible un desescalamiento del conflicto armado urbano y un cambio positivo en los indicadores de seguridad y violencia homicida.

También en los estudios se contemplan recomendaciones orientadas a una mejora en la formulación e implementación de estas políticas. Algunos ejemplos:

Considerar el aspecto de la cultura, más precisamente la necesidad de combatir una mentalidad mafiosa, heredada de épocas anteriores de la confrontación, y que continúa, teniendo un gran peso, al operar como un nutriente de prácticas guerreras que legitiman una cultura de la ilegalidad (Pastoral Social, 2006).

Diseño de estrategias de intervención diferenciadas, en torno a los conflictos, es decir, atendiendo las particularidades de la situación en cada una de las comunas o zonas de la ciudad. Esto implicaría, según Roldan y Franco *et al.* (2004):

- Enfrentar desde el ámbito de lo público, tanto los conflictos que involucran comportamientos conflictivos violentos como los que no, y en una perspectiva de largo plazo para desactivar factores de riesgo.
- La conveniencia de identificar los factores de conflicto cuya intervención genera efectos positivos en cadena, sostenibles en el largo plazo.
- Estrategias de manejo del conflicto que pueden involucrar una escala territorial o varias, según su naturaleza.

La modificación de la estructura del conflicto y no de sus manifestaciones, es la que permite el logro de arreglos y cambios auto-sostenidos en el tiempo. Es necesario distinguir entre ámbitos de tratamiento de los conflictos según su naturaleza. Esto implica que los conflictos como aquellos del territorio de la intimidad y barriales intervecinales pueden ameritar espacios del orden colectivo, pero conflictos públicos referidos a

la segregación socioeconómica, exclusión política o acceso al suelo urbano, requieren la creación de mecanismos y espacios del orden local y nacional.

Para Quijano (2004) la prioridad es avanzar en la construcción de un Estado social de derecho orientado a: la defensa de los derechos humanos y libertades ciudadanas, el impulso a políticas públicas como resultado de un proceso colectivo de construcción de ciudad incluyente, la adopción más civilista de la concepción preventiva antes que represiva, y un replanteamiento de la legislación de orden público que consulte la situación urbana.

No obstante, los buenos propósitos de las administraciones por el mejoramiento en el diseño de políticas de seguridad y convivencia, la hipótesis de Alonso, Giraldo y Sierra, (2006) es que de no lograrse un efectivo desmonte de las estructuras criminales, lo que requiere de procesos de bloqueo financiero y económico, una ruptura de los mecanismos de contratación de los actores primarios del conflicto y la institucionalización y consolidación del Estado, acompañada de intervención cultural y social que pueda transformar el entorno que ha alimentado a estas redes criminales, no será posible generar una mejora sustancial y sostenida de la situación.

Desde el lugar del Estado, la Alcaldía de Medellín, a finales de los años 90 y en el propósito de precisar las metas a alcanzar en materia de seguridad y convivencia realizó diversos diagnósticos contenidos en los planes de desarrollo e intentó dotarse de mejores herramientas para orientar la labor a desarrollar en este campo. En el año 2001, por ejemplo, el programa de Convivencia Ciudadana, ante la necesidad de avanzar en un sistema de seguimiento que permitiera analizar de forma más precisa los

factores de riesgo y mejorar los niveles de efectividad en materia de prevención y atención a la población afectada, contrató con el Instituto SER de Investigación la construcción de una línea de base sobre violencia.

En el año el 2009 y a propósito de la realización de la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, se dieron a conocer los resultados de un estudio adelantado sobre la gestión municipal en el campo de la seguridad (Alcaldía de Medellín, 2009). Aunque coincide con los diagnósticos sobre la crisis de seguridad que afrontó la ciudad en las décadas de 1980 y 1990, y con la manera como las políticas en materia de seguridad fueron sobrepasadas, éste comporta una visión más optimista que la de los analistas anteriores, sobre los logros alcanzados en la superación de esta crisis, dado los impactos positivos en las políticas de seguridad democrática al hacer posible la desmovilización a partir del año 2003 de integrantes del Bloque Cacique Nutibara, la exitosa realización de la Operación Orión para la recuperación del control de la comuna 13 y una continuidad en la gestión del alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) y lo que va corrido de la administración de Alonso Salazar (2008-2011).

Esta continuidad, según el balance realizado por la Alcaldía de Medellín (2009: 16-17) ha tenido una importante incidencia en la adopción de un nuevo enfoque, según el cual la calidad de la convivencia está directamente relacionada con la confianza que las personas tienen en las instituciones, particularmente en la Policía y en la justicia, la generación de una cultura ciudadana que promueva una transformación perdurable en la vida comunitaria y un entendimiento de la gestión de la seguridad y la convivencia de manera integral que implica “generar condiciones que permitan superar los grandes desequilibrios existentes

desde hace décadas en la ciudad –la llamada deuda social– y garantizar justicia social”.

Por su parte la Personería de Medellín desde el año 2004, ha hecho un seguimiento sistemático al comportamiento de los homicidios, las violaciones a los derechos humanos y sobre ciertos fenómenos relevantes como las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, los actores de violencia en la ciudad, y el reciente proceso de desmovilización de integrantes de las Autodefensas. Esto ha sido posible gracias a la conformación de un grupo de investigación interdisciplinario responsable de la publicación de informes y estudios sobre temas específicos⁴.

Esta diversidad de iniciativas y de planteamientos es demostrativo de la importancia que desde la década de 2000 se le asigna al análisis de la política pública en el campo de la seguridad y la convivencia, así como de diferencias en la evaluación de su eficacia, lo que reclama una continuidad en la realización de estudios sobre el tema y una mayor interlocución entre investigadores y funcionarios públicos con responsabilidad en la ejecución de dichas políticas.

Conclusiones y recomendaciones

Esta revisión de estudios sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín permite evidenciar la existencia de una variada producción, resultado de los esfuerzos investigativos que se han llevado a cabo no sólo desde la academia, como ha sido tradición de los estudios de la violencia en Colombia, sino

4. Los estudios realizados por la Personería de Medellín se encuentran publicados en la página de web : <http://www.personeriamedellin.gov.co/modules/publicaciones/http://www.personeriamedellin.gov.co/modules/publicaciones/>

también desde las ONG y desde el Estado local, contribuyendo así al desarrollo de un campo de investigación que según el diagnóstico de la Comisión de Estudios de Violencia en 1987, requería un desarrollo en el país.

Es un tipo de producción que en cuanto a los temas abordados se corresponde con las tendencias predominantes de la investigación a nivel nacional sobre la violencia, aunque hay ciertos énfasis que denotan la importancia que en el contexto local se le ha conferido a ciertos asuntos, por ejemplo, la relación cultura-violencia y narcotráfico-violencia.

En lo que tiene que ver con los enfoques teóricos es de resaltar la importancia que en la última década se le otorga a la reflexión sobre los referentes teórico metodológicos, en los que se fundamentan las investigaciones realizadas y, en particular, los intentos de aproximación a conceptos que como el conflicto, la violencia y la violencia urbana ofrecen dificultad para su delimitación. Ciertamente, en este campo se hace imperativo, como anota la investigadora Blair, avanzar en la construcción de un marco teórico explicativo de mediano y largo plazo, que permita esclarecer los nexos y las diferencias entre conflictividad, violencia urbana y la guerra misma, noción que no obstante su utilización en los estudios, tampoco ha sido objeto de mayor reflexión.

Otro aspecto a destacar es la variedad de enfoques metodológicos presentes en los estudios realizados. Desde quienes privilegian miradas macro—factores explicativos de la violencia—hasta aquellos que optan por mirada más “micro”, intentando desentrañar las tramas del conflicto y la violencia en algunos barrios o zonas de la ciudad; desde una aproximación a actores y modalidades de violencia, hasta la indagación de los múltiples

impactos que el accionar de diverso tipo de actores armados ha generado en las comunidades, grupos de población, personas y en la ciudad misma.

Sin embargo, se evidencia una debilidad en la adopción de un enfoque de ciudad no circunscrito a unos determinados lugares, y la ausencia de investigaciones comparativas con otras ciudades del país y Latinoamérica, lo que facilitaría establecer en mejor forma las especificidades y similitudes en expresiones de la conflictividad y la violencia en el ámbito urbano y someter a prueba la consistencia de explicaciones que han hecho carrera con respecto a causas o factores explicativos de la violencia y el conflicto urbanos.

En este campo metodológico queda planteado un reto en la construcción de modelos de análisis y el afinamiento de estrategias metodológicas, que permitan establecer conexiones entre la estructura, la acción colectiva y el sujeto, entre la descripción, la interpretación y la búsqueda del sentido.

En lo atinente a la periodicidad de la producción es de resaltar una continuidad en la labor investigativa desde la década de 1980 y hasta el presente, lo que ha contribuido a la consolidación del conflicto armado y la violencia urbana como un campo de investigación. Además, demuestra el interés por hacer un seguimiento a una realidad cambiante, sobre todo, en ciertas coyunturas críticas –auge del narcotráfico, urbanización de la guerra–, pero el privilegio del corto plazo, conlleva el riesgo de una mirada inmediatista que aumenta la probabilidad de incurrir en interpretaciones sesgadas, al ignorar los continuidades y cambios que han tenido lugar en un fenómeno, que como la violencia, ha sido considerado como un eje de pervivencia histórica en nuestro proceso de constitución como Estado-nación.

El grueso de los trabajos tiene como referente espacial a Medellín y a ciertas zonas de la ciudad –centroriental, nororiental, noroccidental, comuna 13—. Aunque es claro que esta delimitación es coherente con los objetivos investigativos y diseños metodológicos, es indicativo de una visión localista que pasa por alto la importancia que para el entendimiento de los fenómenos de violencia reviste establecer las conexiones entre la ciudad, Área Metropolitana y Valle de Aburrá, y el esclarecimiento de los nexos entre ciudad-región-país y en un contexto global, más aún cuando se trata de fenómenos que se han convertido en el centro de preocupación de Estados nacionales e instancias internacionales.

Como se pudo establecer, en este estudio se han logrado avances en varios campos temáticos:

- En cuanto a los factores explicativos de la violencia urbana se ha puesto acento en elementos de carácter *estructural* por considerar que son los que en mejor medida aportan a un esclarecimiento sobre la conflictividad y violencia urbana recientes. Sin embargo, no se logra superar un nivel enunciativo. Esto es notorio en aspectos tales como la exclusión o la pobreza. Más allá de la consideración de que la violencia ha encontrado un terreno propicio para su desarrollo en una ciudad excluyente, como sería el caso de Medellín, no se dispone de estudios que aporten un nuevo conocimiento sobre la incidencia de la exclusión o la pobreza en el comportamiento de la violencia en Medellín ni la exploración de las motivaciones de los sujetos para el ejercicio de la violencia, y en lo cual elementos tales como la venganza y el resentimiento pueden tener una importante incidencia.

En este punto es pertinente retomar la crítica formulada por María Teresa Uribe (2001: 249) sobre los inconvenientes que

puede acarrear el afán por identificar las causas o vectores que inducen a la violencia o sus efectos, por la forma como podría estar indicando “una suerte de sobrevaloración de la violencia que ha impedido ver otras realidades menos visibles, dramáticas y sangrientas pero quizás con mayor capacidad para interpretar las violencias” y su llamado a hacer una nueva revisión sobre los contextos y los vectores planteados antes que insistir sobre ciertas explicaciones causales.

El análisis de la conflictividad violenta es otro campo que ha tenido importantes desarrollos, como lo demuestra la existencia de estudios que se han ocupado de los actores con un protagonismo en las violencias en algo más de dos décadas, así como ciertas modalidades de violencias y de manera más reciente sus impactos en la sociedad y en la cultura. Con todo y esto, es necesario tener en cuenta importantes vacíos en la realización de estudios que aborden en profundidad aspectos tales como:

- La evolución histórica de la criminalidad urbana, del narcotráfico, la trayectoria de instituciones del Estado destinadas a combatir la delincuencia y a garantizar la seguridad como la Policía, el DOC, en las décadas de 1970 y 1980 o las Convivir en los años 90. Aunque en buena parte de los estudios se alude al narcotráfico, se ha tenido en cuenta la época de auge del Cartel de Medellín. No hay un seguimiento a los cambios ocurridos desde mediados de la década de 1990 ni tampoco una explicación más rigurosa de los procesos e interconexiones que han hecho posible la constitución del narcotráfico como un factor de poder en la ciudad, así como las articulaciones con otras formas delincuenciales que han hecho parte de la criminalidad organizada.

- El papel de las élites políticas económicas y locales y la Iglesia Católica en el afrontamiento de problemas de violencia y criminalidad en la ciudad, teniendo en cuenta las posturas asumidas e iniciativas promovidas, pero también los vínculos de sectores o personas con el narcotráfico, o el paramilitarismo, cuestiones que han sido objeto de estudios del fenómeno de la denominada *parapolítica*, y que han contribuido a alimentar el debate acerca de las formas de relación entre clase política-Estado-narcotráfico-violencias.
- Otro aspecto interesante a resaltar, son los avances en la investigación sobre violencias desde la perspectiva de género, resultado de la iniciativa de organizaciones de mujeres, lo que ha posibilitado visibilizar las violencias ejercidas contra las mujeres, los impactos que ha tenido en sus vidas y en la familia. Sin embargo, este enfoque es marginal en los estudios sobre la violencia urbana. Se requiere la apropiación de este enfoque por parte de los investigadores y un esfuerzo en el diseño de estrategias metodológicas que, por ejemplo, permitan establecer relaciones entre público-privado o la manera como ciertos discursos y prácticas de violencia circulan socialmente.
- Un campo de análisis particularmente dinámico es el relacionado con los impactos de la violencia, dada la variedad de asuntos que han sido objeto de reflexión y que permiten profundizar en el conocimiento de la complejidad y las paradojas que entraña la existencia de una sociedad permeada por la violencia, pero al mismo tiempo resistente a la misma. Como se pudo establecer en varios estudios, ha sido en los barrios y entre los sectores de población más afectados por el accionar de diversos actores de violencia, donde se han

venido construyendo formas de respuesta. A la luz de las exigencias que plantea la recuperación de memoria histórica sobre el conflicto armado, el desarrollo de esta línea de investigación adquiere una particular relevancia.

- En lo que respecta a las políticas de seguridad y convivencia, aunque en la realización de este estado del arte no fue posible un examen detenido de la diversidad de la producción centrada en el tema de la inseguridad, consideramos oportuno insistir en la construcción de un enfoque relacional, como lo han señalado algunos analistas, entre lo local y lo nacional, pues como lo indica la coyuntura crítica que se ha venido configurando con un aumento de los homicidios, el accionar de diversos grupos delincuenciales, de la coordinación entre autoridades nacionales y locales en la aplicación de políticas con visión de corto y mediano plazo, dependen los logros a alcanzar en el campo de la seguridad y la convivencia.

Como se anotó en un comienzo la revisión de apenas una parte de la producción existente sobre conflicto armado y violencia urbana en Medellín entre los años 1985 y 2009, hace necesario una continuidad en la realización de un estado del arte que haga el debido reconocimiento de otros aportes, que por las limitaciones propias de este estudio, no fue posible considerar y que permitirá la necesaria consideración de otras variantes en los enfoques y en las temáticas abordadas.

Referencias

- Alcaldía de Medellín (2009). *Gestión municipal de la seguridad ciudadana en Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alonso, M; Giraldo, J.; y Sierra, D. (2006). “Medellín el complejo camino de la competencia armada”. En: C. De Gamboa (editora académica). *Justicia transicional: teoría y praxis*. Bogotá: Universidad del Rosario. Pp. 435-465.
- Angarita, P.E. (2004). “Conflictos de violencia urbana en Medellín: Hipótesis interpretativas”. En: J.R. Nieto, (compilador). *Colombia en la coyuntura de 2003*. Medellín: Universidad de Antioquia. Pp. 137-157.
- Angarita, P.E.; Jiménez, B.I. et al. (2008). *Dinámicas de guerra y construcción de paz: Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Arias, L.M. (Coord.); Agudelo, C.; Montoya, B. y Ramírez, Y. (2008). *Permanencias y rupturas en el hacer y el ser de las mujeres-madres que viven en zonas de conflicto armado en Medellín y el oriente antioqueño*. Medellín: Impresiones Multimpresos Ltda.
- Bedoya, D.A. y Jaramillo, J. (1991). *De la barra a la banda: Estudio analítico de la violencia juvenil en Medellín*. Medellín: Ed. Lealon.
- Blair, E. (2005) *Muertes violentas: La teatralización del exceso*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Blair, E. et al. (2008). *De memorias y de guerras*. Iner, Programa de víctimas, Secretaría de Gobierno Alcaldía de Medellín. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Comisión de Estudios sobre la Violencia en Colombia (1998). *Colombia: violencia y democracia*. Bogotá: Informe presentado al ministerio del interior.
- De los Ríos, H; Ruiz, J. (1990). “La violencia urbana en el Medellín de los años ochenta”. Medellín: *Revista Universidad de Antioquia* N° 221. Vol. 59. Pp. 24-42.
- Franco, V.L. (2004a). “La ciudad y la guerra”. En: W.J. Balbín (compilador). *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas*. Medellín: IPC.
- Franco, V.L. (2004b). *Educación para la paz: Conflicto urbano: Marco teórico-conceptual y herramientas metodológicas para su descripción analítica*. Medellín: IPC.

- Giraldo, J. (2008). "Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín". Centro de Análisis Político, Universidad Eafit. Disponible en: <http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/medellin/2007/Confl-urb-hom.pdf>. Consultado el 14 de diciembre de 2009.
- Gómez, J.A. *et al.* (2000). "Estado del conocimiento sobre la violencia urbana en Antioquia en la década de los noventa". P.E. Angarita (editor académico). *Balance de estudios sobre la violencia en Antioquia*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia. Pp. 163-184
- Granda, A.; Londoño, C.E. y Mejía, H. (1998). "Procesos urbanos y de construcción de ciudad. El caso de Medellín". *Revista pensamiento humanista*. N° 4. Medellín: UPB.
- Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia (2001). *Balance de Estudios sobre violencia en Antioquia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Hincapié, A. (Comp.) (2008). *Conflicto armado Medellín-Colombia. Compresiones y acciones*. Medellín: Ed. Universidad Pontificia Bolivariana.
- Jaramillo, A.M. (1996). "Criminalidad y violencias en Medellín". J.O. Melo (Comp.) *Historia de Medellín*. Medellín: Suramericana de Seguros. Vol. II. Pp. 551-561.
- Jaramillo, A.M. (1993). "Las milicias populares en Medellín: Entre lo privado y lo público". En: *Revista Foro*. N° 22. Noviembre. Bogotá: Foro Nacional por Colombia. Pp. 25-38.
- Jaramillo, A.M.; Villa, M.I. y Ceballos, R. (1998). *En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*. Medellín: Corporación Región.
- Líderes de Convivencia Ciudadana, Alcaldía de Medellín. (2004) *Convivencia en Medellín una prioridad colectiva*. Medellín: Alcaldía de Medellín y Consorcio Líderes.
- Medina, G. (2006). *Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la década del 90*. Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación.
- Medina, G. (1994). *Una Gambeta a la muerte: o como espíritu de resistir en Medellín también corre tras un balón*. Medellín: Cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia.
- Nieto, J.R. (2009). "Resistencia civil no armada en Medellín la voz y la fuga de las comunidades urbanas". En: *Análisis político*. N° 67. Septiembre-Diciembre, Bogotá: Tercer Mundo Editores. Pp. 38-59.

- Nieto, J.R. y Robledo, L.J. (2006). *Conflicto violencia y actores sociales en Medellín. Zona centrooriental comunas 8 y 9*. Medellín: Ed. Universidad Autónoma Latinoamericana, EPM.
- Ortiz, C.M. (1991). "El sicariato en Medellín. Entre la violencia política y el crimen organizado". En: *Análisis político*. N° 14. Septiembre. Bogotá: Tercer Mundo Editores Pp. 66-73.
- Pastoral Social. (2006). "Un itinerario de la guerra a la paz". En: *Proyecto, dinamización de movimientos sociales 2003-2005*. Medellín: Caritas Arquidiocesana Medellín.
- Piedrahita, C.M. (Comp.) (2004). "Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: El caso de la ciudad de Medellín en la década de los noventa". En: *Seminario Internacional Conflictos Urbanos y Alternativas de Transformación*. 6-8 de septiembre de 2004. Medellín. Instituto Popular de Capacitación (IPC). Medellín: Ed: Red Andina de Reflexión y Acción sobre el Conflicto Urbano.
- Quijano, L.F. (2004). "Conflictos urbanos en Medellín y experiencias de negociación política urbana". En: *Seminario Internacional Conflictos Urbanos y Alternativas de Transformación*. 6-8 septiembre de 2004. Medellín. Instituto Popular de Capacitación (IPC). Medellín: Ed. Red Andina de Reflexión y Acción sobre el Conflicto Urbano. Pp. 5-14
- Restrepo, W. y Vélez, J.C. (1998). *Estudio sobre las características del homicidio en Medellín. Informe de investigación*. Instituto de Estudios Políticos. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Riaño, P. (2006). *Jóvenes memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Roldán, H. y Franco V. et al. (2004) *Conflictos urbanos de las comunas 1,3 y 13 de la ciudad de Medellín*. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.
- Ruiz, J. y Vélez, B. (2004). *Medellín fronteras invisibles de exclusión y violencia*. Medellín: CEO, Universidad de Antioquia.
- Salazar, A. (2009). "Impactos culturales del narcotráfico: el caso Medellín" Disponible en: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kQYtqQrXHTMJ:catodras.ucol.mx/transformac/PDF>. Consultado 17 de diciembre de 2009.
- Salazar, A. (1990). *No nacimos pa semilla*. Bogotá: Cinep.
- Salazar, A. y Jaramillo, A.M. (1992) *Las subculturas del narcotráfico*. Bogotá: Cinep.

- Sánchez, O.A. (2008). *Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra*. Bogotá: Gráfico Editores S.A.
- Sánchez, O.A.; Corrales, S. y López, S. et al. (2006). *Palabras representaciones y resistencias de mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. Historias de vida de mujeres de: Chocó, Cauca, Medellín y Putumayo*. Bogotá: Gráfico Editores. Pp. 157.
- Uribe, M.T. (2001). “Comentarios al balance síntesis de los estudios sobre la violencia en Antioquia”. En: Grupo interdisciplinario de investigación sobre violencia (2001). *Balance de Estudios sobre violencia en Antioquia*. Medellín: Universidad de Antioquia. Pp. 423-430.
- Uribe, M.T. (1997). “Antioquia entre la guerra y la paz”. En: *Revista de Estudios Políticos*. N° 10. Medellín: Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
- Vélez, J.C. (2001). “Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín”. En: *Revista Estudios Políticos* N° 18. Enero-Junio. Medellín: Universidad de Antioquia. Pp. 61-89.
- Vélez, R.A. (2001). *Gobernabilidad local en Medellín: Configuración de territorialidades, conflictos y ciudad*. Medellín: Escuela Superior de Administración Pública –Esap–.
- Villa, M.I.; Jaramillo, A.M. y Sánchez, L.A. (2003). *Rostros del miedo: una investigación sobre los miedos sociales urbanos*. Medellín: Corporación Región.

Anexo

Bibliografía de referencia

- Agudelo, M.E. (1994). “Violencia familiar en medellín vista a través de las comisarías de familia” En: *Revista de Facultad de Trabajo Social*. Vol. 11.N° 11. Enero-Diciembre. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Alborada, A.L. (2002). “Crónicas de la guerra urbana en Medellín”. Disponible en <http://74.125.113.132/search?q=cache:eiZIFYuXzDcj:www.elistas.net/cgi-bin/eGruposDMime>. Consultado: el 17 de diciembre de 2009.
- Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno (1997). *Muertes violentas y homicidio*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alcaldía de Medellín Secretaría de Bienestar Social. (2000.) *Diagnostico social de Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alcaldía de Medellín (2002). *Conferencia Mundial de la No-violencia: La necesidad de educación y capacitación en no-violencia en la comunidad global*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alcaldía de Medellín (2007). “Análisis del desempeño de la seguridad en Medellín 2000-2006”. *Centro de Análisis Político Departamento de Humanidades Universidad Eafit*. Medellín: Universidad Eafit.
- Alcaldía de Medellín (2009). *Gestión Municipal de la seguridad ciudadana en Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alonso, M. y Vélez, J.C. (1998). “Guerra, soberanía y órdenes alternos”. En: *Revista Estudios Políticos*. N° 13. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Alonso, M.; Giraldo, J. y Sierra, D. (2006). “Medellín el complejo camino de la competencia armada”. En: C. de Gamboa (editora académica) *Justicia Transicional: Teoría y Praxis*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Alonso, M.A. (2000). “El Conflicto Urbano en la ciudad de Medellín”. En: *Lectiva*. N° 4. Medellín: Universidad de Antioquia. Pp. 115-119.
- Angarita, P.E. (2007). “Convivencia, participación ciudadana y democracia en Medellín metropolitano, rural y urbano”. En: *4° Congreso de ciudad sobre Convivencia, participación ciudadana y democracia. Medellín, Octubre 1 y 2 de 2007*. P. 27. Disponible en: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/obj/pdf/4congrsodeciudad/VersionfinalMesaConvivenDemocParticip251X07.pdf. Consultado: 15 de diciembre de 2009.

- Angarita, P.E. (Comp.) (1996). *Derechos Humanos y solución de Conflictos: Perspectivas*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación IPC.
- Angarita, P.E. (2003). “Conflictos, guerra y violencia urbana: Interpretaciones problemáticas”. En: *Nómadas*. N° 19. Octubre. Bogotá: Ed. Universidad Central.
- Angarita, P.E. (2004). “Conflictos urbanos en un país en guerras: Miedo, satanización y realismo trágico”. En: W.J. Balbín (compilador), *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas*. Medellín: IPC.
- Angarita, P.E. (2004). “Conflictos de violencia urbana en Medellín: Hipótesis interpretativas”. En: J.R. Nieto, (compilador). *Colombia en la coyuntura de 2003*. Medellín: Universidad de Antioquia. Pp. 137-157.
- Angarita, P.E.; Jiménez, B.I. et al. (2008). *Dinámicas de guerra y construcción de paz: Estudio interdisciplinario del conflicto armado en la comuna 13 de Medellín*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Ángel, A.M. et al. (1995). *Combos y cambios. Reflexiones psicoanalíticas en un proceso de paz entre bandas juveniles*. Medellín: Alcaldía de Medellín y Universidad de Antioquia.
- Antia, G. (2002). “Epidemiología de los homicidios y de la criminalidad en el Valle de Aburrá”. En: *Revista Tecnológico de Antioquia*. N° 10. Medellín: Tecnológico de Antioquia.
- Arango, M. (1998). *Impacto del Narcotráfico en Antioquia*. Medellín: J.M. Arango.
- Arboleda, C. (2003). *Iglesia, conflicto y paz*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Arias, L.M. (Coord.); Agudelo, C.; Montoya, B. y Ramírez, Y. (2008). *Permanencias y rupturas en el hacer y el ser de las mujeres-madres que viven en zonas de conflicto armado en Medellín y el oriente antioqueño*. Medellín: Impresiones Multimpresos Ltda.
- Aricapa, R. (2006). *Comuna 13: Crónica de una guerra urbana*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (2001). *Las Huellas de la Guerra. Medellín*. Medellín: Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
- Asesoría de Paz y Convivencia, Alcaldía de Medellín (1999). *En Medellín primero la paz: segundo marco estratégico de la construcción de la paz. Visión sobre*

- el conflicto urbano y estrategias locales actuales en Medellín, Colombia*. Medellín: Asesoría de Paz y Convivencia, Alcaldía de Medellín.
- Asociación de Trabajo Interdisciplinario-ATI et al. (2003). *Estado del arte conflicto urbano y jóvenes. Medellín, Bogotá, Cali, Barrancabermeja, 1990-2002*. Bogotá: ATI.
- Ayala, L. (2003). “Una mirada al conflicto urbano en Medellín. La exigencia de los derechos ciudadanos no se debe criminalizar”. Disponible en: <http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-6490.html>. Consultado: 14 de diciembre 2009.
- Bahamón, A. (1991). *Mi guerra en Medellín*. Bogotá: Ed. Intermedio.
- Balbín, J. (2004). “Conflicto y violencia urbana en Medellín desde la década del 90: Algunas valoraciones”. En: *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas. Medellín. 191-232*. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/ipc/balbin_avarez.pdf. Consultado: 14 de diciembre de 2009.
- Bedoya, D.A. y Jaramillo, J. (1991). *De la barra a la banda: Estudio analítico de la violencia juvenil en Medellín*. Medellín: Ed. Lealon.
- Blair, E. (2000). “Perspectivas de análisis: Hacia una mirada cultural de la violencia”. En: *Desde la Región*. N° 30. Enero. Medellín: Corporación Región.
- Blair, E. (2005). *Muertes violentas; La teatralización del exceso*.
- Blair, E. et al. (2008). “De memorias y de guerras”. En: *Iner, Programa de víctimas, Secretaría de Gobierno Alcaldía de Medellín*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Bonilla, W. (1996) “Conflicto urbano y procesos de paz Medellín 1990-1995, balance y perspectivas”. En: *Derechos humanos y solución de conflictos: perspectivas*. Serie Relecturas. Medellín: IPC.
- Bustamante, L.A. (1998). “La cultura atrabiliaria: Elucubraciones sobre violencia y deshumanización en Antioquia”. *Revista de la Universidad Autónoma latinoamericana*. N° 18. Septiembre. Medellín: Unaula.
- Camacho, A. y Guzmán, A. (1990). *Colombia ciudad y violencia*. Bogotá: Foro Nacional por Colombia.
- Cardona, M; García, H.I.; y Giraldo, C.A. (2007). “Escenarios de homicidios en Medellín (Colombia) entre 1990-2002”. En: <http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v31n3/spu05305.pdf>. Consultado: 15 de diciembre de 2009).

- Casas, M.I; González A.M; y Ramírez, M.E. (Comité Editorial) (2005). *Mujer y conflicto armado*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- Castaño, J.A. (2007). ¿Cuánto cuesta matar a un hombre? Relatos reales de las comunas de Medellín. Bogotá: Ed. Norma.
- Castro, O. (2004). Violencia en Medellín como tema literario contemporáneo. En: *Estudios de Literatura Colombia*. N° 15. Julio, Medellín: Universidad de Antioquia.
- Cifuentes, M.T. y Serna, A. (2007). Encuentro sobre conflicto urbano. En: *Seminario Internacional Ciudadanía y Conflicto*. 2006. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Comisión de Estudios sobre la Violencia (1988). “Colombia: violencia y democracia”. *Informe presentado al ministerio del interior*. Bogotá: Comisión de Estudios sobre la Violencia.
- Comisión de Trabajo sobre Paz y Derechos Humanos, Red Viva Antioquia (2002). “Algunos elementos sobre las dinámicas de la violencia urbana y nuestra situación”. Disponible en: <http://74.125.47.132/search?q=cache:dAuScbPsVt0J:www.quadernsdigitals.net/index.php/%3FaccionMenu%3Dsecciones>. Consultado: 16 de diciembre de 2009.
- Comité Interinstitucional (1998a) “Delirios y sueños barrio Antioquia en tres actos”. En: *Seminario Conflicto Urbano: Análisis de experiencias documentadas, instrumentos, metodologías e indicadores de intervención y seguimiento*. Medellín: Alcaldía de Medellín, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Comité Interinstitucional (1998b). “Proyecto barrio Antioquia de paz”. En: *Seminario Conflicto Urbano: Análisis de experiencias documentadas, instrumentos, metodologías e indicadores de intervención y seguimiento*. Medellín: Alcaldía de Medellín, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana (1991). *Promoción de la convivencia pacífica en Medellín y su Área Metropolitana*. Medellín: Presidencia de la República.
- Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana (1992). *Medellín: Alternativas de Futuro*. Medellín: Presidencia de la República.
- Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana (1995). *IV Seminario Alternativas y estrategias de futuro para Medellín y su Área Metropolitana*. Medellín: Presidencia de la República.

- Corcho, D.C. (2006). Medellín: “Los ires y venires entre la vida y la muerte”. En: *Desde la Región*. N° 46. Septiembre. Medellín: Corporación Región.
- Corporación Nuevo Arco Iris (2009) “Medellín, un modelo de seguridad cuestionable”. *Observatorio del conflicto armado*. Disponible en: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1R5_uo2QVLgJ:www.viva.org.co/cajavirtual/svc0186/articulo0003c.pdf. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres de la ciudad de Medellín (2003). “Informe sobre violación de derechos humanos de las mujeres en Medellín y el Área Metropolitana 2003”. Disponible en: <http://www.isis.cl/temas/vi/doc/archivo%20informeDHDelasmujeresrevisado2004.doc>. Consultado: 16 de diciembre de 2009).
- Corporación para la Vida Mujeres que Crean (2006). “Entre resistencias y re-insistencias contra el silencio y el olvido”. *Observatorio de los derechos del trabajo*. N° 3. Abril. Medellín: Escuela Nacional Sindical. Pp. 17-23. Disponible en: http://www.ens.org.co/aa/img_upload/45bdec76fa6b8848acf029430d10bb5a/Observatorio_N__7.pdf. Consultado: 5 de enero de 2010.
- Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Vamos Mujer, Ruta Pacífica de las mujeres (2007). “Entre resistencias y re-insistencias”. En: *VII Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia*. Mesa de trabajo mujer y conflicto armado. Pp. 99-112. Disponible en: http://pdf2.biblioteca.hegoa.efaber.net/ebook/16770/Mujer_y_Conflicto_Armado.pdf. Consultado: 8 de enero de 2010.
- Corporación Región (1990). “Violencia juvenil: diagnóstico y alternativas”. En: *Seminario Sobre la Comuna Nororiental de Medellín*. San Pedro, Antioquia: Corporación Región.
- Corporación Región (2007). *Una experiencia de inclusión social de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado por la violencia*. Medellín: Corporación Región.
- Corporación Vamos Mujer (2001). *Tejiendo experiencias de paz, resistencia y esperanza en medio de la guerra. Experiencia: Programa integral para infantes y mujeres desplazados 1997-2000*. Medellín: Corporación Vamos Mujer.
- Correa, G. (2006). “¿Disminución de la violencia o estrategia para ocultarla?”. En: *Cultura y trabajo*. N° 68. Abril. Medellín. Disponible en: [http://www.ens.org.co/articulos.htm?x=17786446&cmd\[111\]=c-1-68](http://www.ens.org.co/articulos.htm?x=17786446&cmd[111]=c-1-68) Consultado: 16 de noviembre de 2009.

- Chávez, C.E. (Ed.) (2004). “Las mujeres en el conflicto armado urbano”. En: *Mujeres alquimistas que transforman el dolor en esperanza*. Noviembre. Medellín: Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las mujeres.
- Daza, A. (Comp.) (2001). *Experiencias de intervención de conflicto Urbano*. Tomo II. Medellín: Programa Convivencia Ciudadana, Alcaldía de Medellín.
- Daza, A. (Comp.) (1998). *Experiencias de intervención de conflicto Urbano*. Tomo I. Medellín: Programa Convivencia Ciudadana, Alcaldía de Medellín.
- De los Ríos, H; Ruiz, J. (1990). “La violencia urbana en el Medellín de los años ochenta”. *Revista Universidad de Antioquia* N° 221 Vol. 59. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Duque, L.F; y Montoya N.E. (2008). “La violencia doméstica en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá, 2003-2004”. En: *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*. Vol. 26 N° 1 (enero-junio). Medellín, P. 27-39. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v26n1/v26n1a04.pdf>. Consultado: 16 de diciembre de 2009.
- Duque, L.F; y Montoya N.E. y Restrepo, M.V. (2006). *Magnitud y distribución de diferentes formas de violencia en Medellín, 2003-2004*. Medellín: Universidad de Antioquia. Disponible en: <http://previva.udea.edu.co/Archivos/Publicaciones%20PREVIVA/Articulos%20revistas/2006%20Magn%20Viol%20Medellin%20RFNSP.pdf>. Consultado: el 16 de diciembre de 2009).
- Duque, L.F; Orduz, J.F; Sandoval, J. *et al.* (2007). “Lecciones del programa de prevención temprana de la violencia, Medellín, Colombia”. Disponible en: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v21n1/a03v21n1.pdf>. Consultado: 16 de diciembre de 2009.
- Estrada, F. (2009). “Evolución estratégica del conflicto armado en Colombia”. En: *Análisis político* N° 67. Septiembre-Diciembre. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Estrada, W. (1991). “El plan de Acción social para Medellín y la violencia”. En: *Re-lecturas* V. 5. N°11. Medellín: IPC.
- Fernández, P. (2009). *Violencia en Medellín: una montaña rusa que no para*. Corporación viva la ciudadanía. Disponible en: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:8M8TPM8f9MgJ:www.viva.org.co/cajavirtual/>

svc0174/articulo0008.pdf+violencia+medellin&hl=es&gl=co&sig=AHIEtbT2dDBHba1KcI3eZL-MefAc4VDhA. Consultado: 16 de diciembre de 2009).

- Fernández, S. y Hernández, G.E. (2005). *Violencia de género en la Universidad de Antioquia*. Medellín: Ed. Lealon.
- Franco, V.L. (2004). “Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: el caso de la ciudad de Medellín en la década del noventa”. En: W.J. Balbín (compilador). *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas*. Medellín: IPC.
- Franco, V.L. (2004a). “La ciudad y la guerra”. En: W.J. Balbín (compilador). *Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas*. Medellín: IPC.
- Franco, V.L. (2004b). *Educación para la paz: Conflicto urbano: Marco teórico-conceptual y herramientas metodológicas para su descripción analítica*. Medellín: IPC.
- Franco, S. (1999). *El quinto: No matar. Contextos explicativos de la violencia en Colombia*. Bogotá: IEPRI Universidad Nacional de Colombia.
- Fundación Casa América Cataluña (2008). *Violencia urbana. Lecciones aprendidas en la comuna 13 de Medellín. Convivencia y seguridad en Iberoamérica*. Barcelona: Nuevas visiones.
- García, F. (1992). “Violencia juvenil y escuela”. En: *Revista educación y pedagogía*. Vol. 3. N° 7. Enero-Marzo. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Gil, M. (2008). Foro conflicto urbano armado urbano. ¿Reactivación de la violencia? A propósito de la presentación del libro: Dinámicas de guerra y construcción de paz. El caso de la comuna 13. En: *Observatorio de derechos humanos* N° 7. Octubre. Medellín: Observatorio de Derechos Humanos.
- Giraldo, C.A; González, J.A. y Uribe, M.T. *et al.* (1993). *Rasgando Velos: Ensayos sobre la violencia en Medellín*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Giraldo, J. (2008). “Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín”. Disponible en: Centro de Análisis Político, Universidad Eafit. En: <http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/medellin/2007/Confl-urb-hom.pdf>. Consultado: 14 de diciembre de 2009.
- Gobernación de Antioquia (1994). *Memorias violencia Intrafamiliar, cotidianidad oculta*. Medellín: Gobernación de Antioquia.

- Gómez, J.A. *et al.* (2000). “Estado del conocimiento sobre la violencia urbana en Antioquia en la década de los noventa”. En: P.E. Angarita (editor académico). *Balance de estudios sobre la violencia en Antioquia*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Gómez, J. (2005). *Medios de Comunicación y conflicto urbano: Análisis de contenido al cubrimiento de los medios de comunicación regionales en el conflicto armado en la comuna 13*. Medellín: Ed. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).
- González, O. (2003). *La violencia del carbón*. En: *Revista Ciudad don Bosco* N° 12. Medellín: Ciudad don Bosco.
- González, L. (1998). “Capacitación para el empleo, ¿una solución para el conflicto?” En: *Seminario Conflicto Urbano: Análisis de experiencias documentadas, instrumentos, metodologías e indicadores de intervención y seguimiento*. Medellín: Alcaldía de Medellín, Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
- González, F. (1992). “Visión política de las violencias urbanas”. En: C. Hurtado (Ed.) *Medellín alternativas de futuro*. Medellín: Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana.
- Granda, A.; Londoño, C.E. y Mejía, H. (1998). “Procesos urbanos y de construcción de ciudad. El caso de Medellín”. *Revista pensamiento humanista*. N° 4. Medellín: UPB.
- Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Violencia (2001). *Balance de Estudios sobre violencia en Antioquia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Gutiérrez, F. y Jaramillo, A.M. (2004). “Crime (counter) insurgency and the privatization of security- the case of Medellín, Colombia” En: *Environmental & Urbanization London*. Vol. 16. N° 2. October.
- Hincapié, A. (Comp.) (2008). *Conflicto armado Medellín-Colombia. Compresiones y acciones*. Medellín: Ed. Universidad Pontificia Bolivariana.
- Hincapié, S.M. (2006). *La guerra y las ciudades: una mirada desde Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali. 1998-2005*. Medellín: Ed. Alto Vuelo Comunicaciones, IPC.
- Hincapié, S.M. (2005). “Cómo se ven... cómo los ven... cómo los leemos, los jóvenes de la comuna 13 de Medellín”. En: *Jóvenes, conflictos urbanos y alternativas de inclusión*. Bogotá: Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes,
- Hoyos, M. (2001). *La piel de la memoria barrio Antioquia, pasado, presente y futuro*. Medellín: Corporación Región.

- Hylton, F. (2008). “Medellín la paz de los pacificadores”. En: *Revista Foro* N° 65. Octubre. Medellín: Ed. Foro Nacional por Colombia.
- Instituto Popular de Capacitación (2004). “En deuda con los derechos humanos y el DIH”. En: *Relecturas*. N° 27. Marzo. Medellín: IPC.
- Instituto Popular de Capacitación (2005) “Un poco de luz en la oscuridad. Derechos Humanos Integrales-Medellín 2004”. En: *Relecturas*. N° 28. Abril. Medellín: IPC.
- Instituto Popular de Capacitación (2006). “Que los árboles dejen ver el bosque. Derechos humanos en Antioquia 2005”. En: *Relecturas*. N° 29. Junio. Medellín: IPC.
- Instituto Popular de Capacitación (2007). *Entre la adversidad y la persistencia: Derechos humanos en Medellín 2006*. Medellín: IPC.
- Instituto Ser de Investigación, Municipio de Medellín (2006). *La seguridad en Medellín: Cambios recientes. Elementos para su seguimiento y evaluación* (julio). Medellín: Instituto Ser de Investigación, Municipio de Medellín.
- Jaramillo, A.M. (1998). “El espejo empañado. Crimen y control social en el Medellín del siglo XX”. En: Serie Palabras Más. Medellín: Corporación Región.
- Jaramillo, A.M. (1997). “Conflicto armado en Medellín: Consideraciones sobre el conflicto armado en el Medellín de los noventa”. En: *Estudios Políticos. Medellín*. N° 10. Junio. Medellín: Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
- Jaramillo, A.M. (1996). “Criminalidad y violencias en Medellín”. En: J.O. Melo (Comp.) *Historia de Medellín*. Vol. II. Medellín: Suramericana de Seguros.
- Jaramillo, A.M. (1993). “Las Milicias Populares en Medellín: Entre lo privado y lo público”. En: *Revista Foro* N° 22. Noviembre. Bogotá: Foro Nacional por Colombia.
- Jaramillo, A.M.; Villa, M.I. y Ceballos, R. (2001). “Actores recientes del conflicto armado en Medellín”. En: B. Santos y M. García, M. (Comp.) *El calidoscopio de las justicias en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Siglo del Hombre Editores.
- Jaramillo, A.M.; Villa, M.I. y Ceballos, R. (1998). *En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa*. Medellín: Corporación Región.

- Jaramillo, C.E. (1996) “Las milicias de Medellín. Reflexiones iniciales sobre el proceso de negociación”. Disponible en: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:523Qqb03qIAJ:colombiainternacional.uniandes.edu.co/datos/pdf>. Consultado: 17 de diciembre de 2009.
- Jiménez, B.I. (2003). *Conflicto y poder en familias con adolescentes: Medellín y Cartagena*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Klevens, J. (2003). “Un abordaje de la violencia desde la salud pública: El proyecto de prevención temprana en Medellín”. En: *Revista de Salud Pública*. Vol. 5. N° 1. Enero-Abril. Bogotá.
- Líderes de Convivencia Ciudadana, Alcaldía de Medellín (2004). *Convivencia en Medellín una prioridad colectiva*. Medellín: Alcaldía de Medellín y Consorcio Líderes.
- Llorente, M.V. (2009). “Los reinsertados de Medellín y la ‘donbernalidad’”. Fundación ideas para la paz. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_opinion/los_reinsertados_en_medellin_dongobernabilidad.pdf. Consultado: 16 de diciembre de 2009).
- Martínez, M. (2005). “Así filmamos la sierra”. En: *Revista mal pensante*. N° 66. Noviembre-Diciembre. Bogotá: Elmalpensante.
- Medina, G. (1994) *Una Gambeta a la muerte: o como espíritu de resistir en Medellín también corre tras un balón*. Medellín: Cooperativa de profesores de la Universidad de Antioquia.
- Medina, G. (2006). *Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la década del 90*. Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación.
- Melo, J.O. (1999). “Violencia y sociedad: Elementos para su análisis”. En: *Revista Universidad Cooperativa de Colombia*. N° 70. Enero. Medellín.
- Melo, J.O. (1997). “Propuestas para la reducir la violencia en Medellín”. Disponible en: <http://www.jorgeorlandomelo.com/propuestasmed.htm>. Consultado: 16 de diciembre de 2009).
- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado (2001). *Informe sobre violencia Sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia*. Bogotá: Ed. Antropos.
- Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado; Rojas, M. (Producción); Pérez, M. (Inv.) (2008). *VIII Informe Sobre Violencia Sociopolítica contra mujeres jóvenes y niñas en Colombia, 2007-2008*. Bogotá: Ed. Antropos.

- Morales, A.; Gómez, G.A. y Rojas, J.A. (2004). *Las flores del mal en la eterna primavera. Reflexiones sobre los ciclos de génesis y afianzamiento del conflicto en Medellín*. Medellín: Personería de Medellín.
- Navarro, C. (2005). “Guerra, política y territorio: las víctimas del conflicto político armado en el contexto local de la ciudad de Medellín” En: *Kabái*. N° 15. Noviembre. Medellín: Universidad Nacional de Colombia,
- Nieto, J.R. y Robledo, L.J. (2006). *Conflicto violencia y actores sociales en Medellín. Zona centroriental comunas 8 y 9*. Medellín: Ed. Universidad Autónoma Latinoamericana, EPM.
- Nieto, J.R. (2009). “Resistencia civil no armada en Medellín la voz y la fuga de las comunidades urbanas”. En: *Análisis político*. N° 67. Septiembre. Diciembre. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Nieto, P. y Betancur, J.M. (2006). *Jamás olvidaré tu nombre*. Medellín: Secretaría de Gobierno, Programa de Paz y Reconciliación, Alcaldía de Medellín.
- Nieto, P. (Comp.) (2007). *El cielo no me abandona*. Medellín: Secretaría de Gobierno, Proyecto de Víctimas del Conflicto Armado, Alcaldía de Medellín.
- Noreña, H.E. (2007). “Los paramilitares en Medellín. La desmovilización del bloque cacique Nutibara”. Trabajo de grado Presentado como requisito parcial para optar al título de Magíster en Ciencia política, Medellín, Universidad de Antioquia. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/norena.pdf>. Consultado: 14 de diciembre de 2009.
- Ortiz, W. (1999). “Colombia entre la guerra y la utopía por la paz: la ciudad Conflictiva”. En: *Revista Círculo de Humanidades*. N° 17. Mayo. Medellín: Unaula.
- Ortiz, C.M. (1991). “El sicariato en Medellín. Entre la violencia política y el crimen organizado. En: *Análisis político*. N° 14. Septiembre. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Palau, J.M.; Llorente, M.V. (2009). “Reintegración y seguridad ciudadana en Medellín: Un balance del Programa de Paz y Reconciliación (2004-2008)”. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_publicaciones/reintegracion_seguridad_final_version_web.pdf. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Pantoja, J. (2000). “Medellín, Auschwitz de la guerra colombiana”. En: *Observatorio del conflicto urbano*. N° 2. Junio. Medellín.

- Pastoral Social (2006). *Un itinerario de la guerra a la paz. En: Proyecto, dinamización de movimientos sociales 2003-2005*. Medellín: Caritas Arquidiocesana Medellín.
- Pérez, W.F.; Vélez, J.C. (1997). “Seguridad ciudadana y homicidio en Medellín”. En: *Estudios Políticos*. N° 11. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Pérez, J.F. (1990). “En torno a la noción de violencia: Del psicoanálisis y la violencia”. En: *Revista Universidad de Antioquia*. Vol. 59. N° 222. Octubre-Diciembre. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Personería de Medellín (2000). *Informe sobre seguridad y convivencia Ciudadana*. Medellín: Personería de Medellín.
- Piedrahita, C.M. (Comp.) (2004). “Violencias, conflictos urbanos y guerra civil: El caso de la ciudad de Medellín en la década de los noventa”. En: *Seminario internacional conflictos urbanos y alternativas de transformación*. 6-8 de septiembre de 2004. Medellín. Instituto Popular de Capacitación IPC. Medellín: Ed: Red Andina de Reflexión y Acción sobre el Conflicto Urbano.
- Pineda, M.I. (2009). “Situación de las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto del conflicto urbano de la ciudad de Medellín”. Universidad de Antioquia. Disponible en: <http://74.125.47.132/search?q=cache:hjyla9gnafkj:www.isis.cl/temas/vi/mujeryconflicto2.doc>. Consultado: 14 de diciembre de 2009.
- Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (2008). *Más allá del embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*. Septiembre, Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
- Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes (2003). *Estado del Arte conflicto Urbano y jóvenes*. Medellín: Plataforma Conflicto Urbano y Jóvenes.
- Quijano, L.F. (2002). “Conflicto urbano: ¿Violencia o guerra urbana?”. En: *Observatorio del conflicto urbano* N° 4 y 5. Julio-Octubre. Medellín: Corpades.
- Quijano, L.F. (2004). “Conflictos urbanos en Medellín y experiencias de negociación política urbana”. En: *Seminario Internacional Conflictos Urbanos y Alternativas de Transformación*. 6-8 septiembre de 2004. Medellín. Medellín: Instituto popular de capacitación IPC. Ed. Red Andina de Reflexión y Acción sobre el Conflicto Urbano.

- Echeverría, M.C. y Rincón, A. (2000). *Ciudad de territorialidades. Polémicas de Medellín*. Medellín: Cepa, Universidad Nacional de Colombia.
- Ramírez, I.D. (2002). “Jóvenes y violencias en Medellín”. En: *La Universidad piensa la paz, obstáculos y posibilidades*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Ramírez, I.D. (s.f). “Medellín: los niños invisibles del conflicto social y armado”. Disponible en: <http://www.coav.org.br/publicue/media/colombiaesp.pdf>. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Recio, J.L. (1980). “Causas y condicionamientos sociales en la inadaptación y delincuencia juvenil”. En: *Alborada*. Vol. 29, N° 212. Septiembre-Octubre. Medellín.
- Restrepo, J.D. (2009). “Estructuras paramilitares desmovilizadas en Medellín: de la unificación de la criminalidad a la fragmentación violenta”. En: <http://74.125.47.132/search?q=cache:dC192K2UbvUJ:www.viva.org.co/cajavirtual/svc0186/articulo0003b.pdf>. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Restrepo, O.C. (2007). “¿El silencio de las inocentes?: violencia sexual a mujeres en el contexto del conflicto armado”. En: *Revista Universidad de Medellín*. N° 101. Mayo. Medellín. Disponible en: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:LDeGF0HYmY0J:www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/25-violencia-contra-mujeres%3Fdownload%3D268%253Aviolencia-sexual-a-mujeres>. Consultado: 17 de diciembre de 2009.
- Restrepo, M. (1991). “Alternativas frente a la violencia en Medellín”. En: V. Guerra (Comp.) *Propuestas para Medellín, el carácter de su crisis*. Memorias de Simposio.
- Riaño, P. (2006). *Jóvenes memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido*. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia.
- Riaño, P. (2000). “La memoria viva de las muertes. Lugares e identidades juveniles en Medellín”. En: *Análisis político*. N° 41. Septiembre-Diciembre. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- Riaño, P.; Lacy, S. y Agudelo, O.C. (2003). *Arte, memoria y violencia: reflexiones sobre la ciudad*. Medellín: Corporación Región.
- Rincón, R. (Ed) (1996). “Violencia y derechos humanos en Medellín balance de 1995 y perspectivas”. En: *Derechos humanos y solución de conflictos: perspectivas –serie Relecturas*. Medellín: IPC

- Rodríguez, E. (1999). “Políticas públicas de juventud en Medellín: propuestas básicas para el período 2000-2003”. Disponible en: <http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro165/libro165.pdf>. Consultado 15 de diciembre de 2009.
- Roldán, H. y Franco V. *et al.* (2004). *Conflictos urbanos de las comunas 1,3 y 13 de la ciudad de Medellín*. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.
- Rozema, R. (2007). “Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia”. En: *Foro Internacional*. Julio-Septiembre. N° 189. Disponible en: http://revistas.colmex.mx/revistas/7/art_7_1219_9290.pdf. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Ruiz, J. y Vélez, B. (2004). *Medellín fronteras invisibles de exclusión y violencia*. Medellín: CEO, Universidad de Antioquia.
- Ruta Pacífica de Mujeres Colombiana (2001). “Medellín ciudad sitiada por los actores del conflicto armado colombiano”. Informe presentado a la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_Guerra_000053.html. Consultado: 15 de diciembre de 2009.
- Salazar, A. (1990). *No nacimos pa semilla*. Bogotá: Cinep.
- Salazar, A. (1991). “Las bandas juveniles en el valle de aburra”. Disponible en: *En qué momento de jodió Medellín*. Bogotá: Ed. Oveja Negra.
- Salazar, A. y Jaramillo, A.M. (1992). *Las subculturas del narcotráfico*. Bogotá: Cinep.
- Salazar, A. (1993). *Mujeres de fuego*. Medellín: Corporación Región.
- Salazar, A. *et al* (1996). *La génesis de los invisibles: Historias de la segunda fundación de Medellín*. Bogotá: Programa por la paz.
- Salazar, A. (2001). *La parábola de Pablo. Auge y caída del gran capo del narcotráfico*. Bogotá: Planeta.
- Salazar, A. (s.f). Impactos culturales del narcotráfico: el caso Medellín En: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kQYtqQrXHTMJ:catdras.ucol.mx/transformac/PDF>. Consultado: 17 de diciembre de 2009.
- Sánchez, O.A.; Corrales, S. y López, S. *et al.* (2006). *Palabras representaciones y resistencias de mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano. Historias de vida de mujeres de: Chocó, Cauca, Medellín y Putumayo*. Bogotá: Gráfico Editores S.A.

- Sánchez, O.A. (2008). *Las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra*. Bogotá: Gráfico Editores S.A.
- Suárez, C. (2005). “Medellín entre la muerte y la vida. Escenarios de homicidios, 1990-2002”. En: *Estudios políticos*. N° 26. Enero. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Tellez, A.M. (1995). *Las Milicias Populares: Otra Expresión de violencia social en Colombia*. Bogotá: Rodríguez Quito editores.
- Tabón, J.D. (2007). “Evaluación de impacto del proyecto Medellín Convive en familia 2005-2006. Resultados con la población de familia”. En: *CES Medicina*. Vol. 21. N° 1. Enero, Medellín: CES.
- Torres, E. (2003). “El Conflicto armado siempre ha estado en las ciudades”. En: *Observatorio del Conflicto Urbano*. N° 7. Marzo. Medellín: Corpades.
- Universidad de Antioquia (2007). *Política pública para la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia en el Valle de Aburrá 2007-2015*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Uribe, M.T. (2001). “Comentarios al balance síntesis de los estudios sobre la violencia en Antioquia”. En: *Grupo interdisciplinario de investigación sobre violencia. (2001) Balance de Estudios sobre violencia en Antioquia*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Uribe, M.T. (1997). “Antioquia entre la guerra y la paz”. En: *Revista de Estudios Políticos*. N° 10. Medellín: Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
- Uribe, M.T. (1989). “La territorialidad de los conflictos y la violencia en Antioquia”. En: *Realidad social*. Tomo I. Pp. 106-151 Gobernación de Antioquia. Medellín: Gobernación de Antioquia.
- Velásquez, M.A. (2003). “Medellín, caos conflicto y orden”. En: *Revista Ciudad Don Bosco*. N° 12. Medellín: Ciudad Don Bosco.
- Velásquez, M.A. (2003). “Entre proyectos y proyectiles”. En: *Revista Ciudad Don Bosco*. N° 12. Medellín: Ciudad Don Bosco.
- Vélez, J.C. (2001). “Conflicto y guerra: la lucha por el orden en Medellín”. En: *Estudios Políticos*. N° 18. Enero-Junio. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Vélez, R.A. (2001). *Gobernabilidad local en Medellín: Configuración de territorialidades, conflictos y ciudad*. Medellín: Escuela Superior de Administración Pública –Esap–.

- Villa, J.A. (2004). “Violencia político-económica y desplazamiento forzado en Medellín”. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. P. 19. Disponible en: <http://agora.unalmed.edu.co/desplazados/canal3/proyectos/2003-02/individual/Violencia%20politico%20economica%20y%20desplazamiento%20en%20Medellin-Jesus%20Alejandro%20Villa.pdf>. Consultado: el 15 de diciembre.
- Villa, V. (1999). *Polifonía de la violencia en Antioquia: Visión sociolingüística abductiva*. Bogotá: Icfes.
- Villa, M.I. (2003). “Urbanización de la guerra: Lo que va del miedo al terror. En: *Desde la Región*. N° 40. Septiembre. Medellín: Corporación Región.
- Villa, M.I.; Jaramillo, A.M. y Sánchez, L.A. (2003). *Los rostros del miedo: una investigación sobre los miedos sociales urbanos*. Medellín: Corporación Región.
- Zapata, C. A. (2003). “Los adolescentes de las zonas marginales de Medellín”. En: *Revista Ciudad Don Bosco*. N° 12. Medellín: Ciudad Don Bosco.

Crimen y poder: El filtro del orden social*

Gustavo Duncan

* Este artículo hace parte de los resultados del proyecto “Economía ilegal en Antioquia”, financiado por la Fundación Proantioquia.

Salvo cuando ya es parte del estado¹ todo criminal es un rebelde por definición: *se ha rebelado contra las leyes del estado que regulan el orden de la sociedad*. Al despojar a unos ciudadanos de su propiedad, al transgredir las leyes o al apropiarse de rentas ilícitas, los criminales están cuestionando el sistema normativo y las estructuras económicas protegidas por el Estado. Pero el crimen visto desde la perspectiva de la rebelión contra el orden establecido no representa mayor problema para el orden político si involucra solo unos cuantos individuos que de manera clandestina y directa se benefician de algún delito. El problema está cuando los beneficios del crimen se distribuyen más allá de los actores involucrados directamente en su ejecución. En ciertos casos la reivindicación económica y simbólica que se desprende de una forma específica de delito alcanza suficiente

-
1. Esta restricción, la de ser parte del Estado, excluye inmediatamente del atributo de rebelde desde los delincuentes de cuello blanco hasta las dictaduras cleptocráticas. En otras palabras la categoría de criminales a cargo de los medios de administración del estado o en capacidad de influenciar los controles institucionales de la economía están por fuera de la afirmación anterior.

aceptación social para cuestionar los fundamentos de la autoridad y el orden. Como consecuencia en ciertas comunidades marginales como guetos, favelas y comunas, los conocimientos sobre ciertas prácticas delincuenciales y la aprobación moral para trasgredir las leyes estén disponibles para la mayoría de sus miembros. Más aún, suele ocurrir que los códigos, los comportamientos, la reputación y el estatus de sus miembros estén condicionados por su capacidad de ejecutar aquellas prácticas criminales valoradas por un sector importante de la comunidad (Anderson, 2000). La exuberancia de los delincuentes en esas circunstancias sociales, —expresada en la vestimenta, la música, los dialectos y demás atributos propios de una subcultura criminal—, tiene su explicación en la definición simbólica del estatus de los individuos.² (Ferrel, 1998: 2)

En circunstancias aún más críticas, una actividad criminal puede llegar a representar una parte fundamental de las relaciones económicas y de poder de amplios sectores de la sociedad, aun sin que la mayoría de la población tenga que ver con el delito como tal. Si las posibilidades de consumo en el mercado local están sujetas a los excedentes que produce un delito o a algún tipo de regulación criminal, si la definición del estatus de los individuos depende de nuevas categorías de valores implícitas en el surgimiento de la actividad criminal y si la organización del poder político gira alrededor de la protección de ese delito, el orden social se convierte en un filtro de las relaciones de poder entre el estado y los agentes criminales. El crimen como una manifestación de rebeldía frente al estado se convierte entonces en un problema político, —no en el

2. Al referirse a las subculturas criminales sostiene que no es solo una asociación de personas “but also a network of symbols, meaning, and knowledge. Members of a criminal subculture learn and negotiate “motives, drives, rationalizations, and attitudes”; develop elaborate conventions of language, appearance, and presentation of self; and in so doing participate, to greater or less degrees, in a subculture, a collective way of life.”

sentido de las necesidades de política pública que la criminalidad plantea al gobierno de turno sino de sus efectos en la definición de las estructuras de poder en la sociedad—. Ante este desafío las autoridades deben elegir entre estrategias represivas que afectan el orden social de grandes capas de la población o la permisividad frente a las estructuras de poder que se forman alrededor de una actividad delictiva. La primera opción es posible cuando el estado cuenta con los suficientes recursos, instituciones coercitivas y respaldo de un sector significativo de la población por fuera de la influencia de los criminales. Cuando el estado no cuenta con recursos suficientes es proclive a pactar con sectores delincuenciales la regulación sobre el crimen. Los espacios de dominio, el alcance de la empresa criminal, los acuerdos y compromisos entre las partes, entre otros asuntos, son definidos de modo explícito y tácito. El resultado puede ir más allá de la simple tolerancia con ciertos actos delictivos y la impunidad que disfrutaban los miembros de una organización criminal. Sus efectos sobre la definición del orden social pueden llevar a que los criminales no limiten su dominio a lo puramente delincencial y extiendan su control hasta el dominio de las comunidades mismas. Un ejemplo de estas circunstancias lo ofrecen ciertas organizaciones mafiosas. Cuando las mafias se encargan no sólo de proteger las propiedades y la integridad física de ciertos empresarios —legales e ilegales— sino también de imponer las normas y la justicia sobre la gente del común, la permisividad puede llegar hasta la delegación de las funciones del estado en organizaciones criminales (Blok, 2001).³

-
3. Los textos clásicos de Moore (2005) y Tilly (1985) insisten en la importancia de los servicios de piratas y bandidos como administradores de la coerción en favor de los estados. También señalan como con el paso del tiempo piratas y bandidos son exculpados y asimilados entre la estructura de las élites. En el caso del narcotráfico en Colombia no es tan claro que los narcotraficantes que han ofrecido estos servicios al estado hayan sido exculpados. Por el contrario, tienden a ser sacrificados cuando adquieren demasiada notoriedad. Más bien quienes logran asimilarse y exculparse son los políticos y empresarios legales que sacan provecho de la situación.

La ganancia para ambas partes es significativa. La criminalidad usa la rebelión social contra el estado como un mecanismo de protección de una actividad ilícita. El estado resuelve un problema de dominación y regulación de grupos críticos de la población que sería muy costoso de abordar con los medios disponibles. Sin embargo, la delegación del control social en organizaciones criminales también presenta situaciones de riesgo que en el largo plazo explican el proceso de expansión del crimen sobre el poder político. En primer lugar, el control social por una clase criminal genera un amplio conocimiento y difusión de sus actividades criminales. Puede llegar a suceder que el volumen de población vinculada al dominio social de organizaciones delincuenciales crezca y se difunda hacia comunidades diferentes al foco inicial de expansión. De modo que para el estado será cada vez más difícil desmontar y reprimir una forma particular de actividad criminal. Por su mismo volumen y difusión social existen numerosos individuos, con los conocimientos y la predisposición moral necesaria, dispuestos a relevar a quienes sean eliminados o capturados. Así, a la captura o asesinato de una figura emblemática del crimen le seguirá el ascenso de un nuevo jefe mafioso o su desplazamiento por los líderes de otras organizaciones. La disponibilidad de delincuentes especializados y trabajadores rasos tampoco se ve afectada por una eventual arremetida de las autoridades. Existen demasiados individuos capaces de asumir las operaciones delictivas cuando una forma de crimen es parte fundamental del orden social.

En segundo lugar, el poder político que se proyecta desde espacios periféricos dominados por la criminalidad amenaza también con transformar la naturaleza misma del estado, sus miembros y sus instituciones. El problema para las autoridades del centro político no está dado solamente por sus inconve-

nientes a la hora de intervenir sobre la periferia. A partir de su dominio social las organizaciones criminales tienen amplios y valiosos recursos para alterar las leyes y agencias del estado, así como para intervenir en los nombramientos de los cargos de poder. El capital acumulado por unos pocos individuos puede fácilmente alterar los resultados de unas votaciones, cambiar una decisión de gobierno o reformar la normatividad jurídica de un país. La amenaza contra las autoridades y los políticos puede diluir la cohesión y fortaleza del centro. Y la capacidad de movilización social de los criminales puede utilizarse para cooptar los partidos políticos tradicionales o para construir colectividades políticas propias. En este punto el orden social de la periferia que se ha redefinido en torno a una actividad criminal ha generado las condiciones para alterar el poder político nacional.

Nada de lo anterior suena extraño para el caso del narcotráfico en Colombia. La producción y tráfico de cocaína ha traspasado el umbral que separa lo criminal de la práctica social en espacios periféricos y desde allí ha saltado a otro umbral: *de la imposición de un orden social en la periferia a la interacción con el poder político en el nivel nacional*. Es así que mucho se ha escrito y denunciado sobre las relaciones entre mafia y poder político en Colombia. Sin embargo, —y a excepción de los trabajos de Camacho (1988), Thoumi (1994), Krauthausen (1998) y Betancourt (1994)—, poco se ha escrito sobre los soportes sociales de todo este proceso, es decir de cómo el narcotráfico se convirtió en parte fundamental del orden de numerosas sociedades del país. Este artículo plantea una explicación del origen social del tráfico de cocaína en Colombia y su posterior expansión hasta un umbral de difusión autónoma en el orden social, en el

que: 1) Los conocimientos y la disposición de los individuos a determinada actividad criminal se reproducen a una velocidad superior a la capacidad de represión de las autoridades, y 2) El poder político debe considerar tanto los intereses de los empresarios criminales como los espacios de la sociedad cuyo orden se estructura desde los excedentes de las drogas.

La explicación del origen social de las primeras mafias de la cocaína en Colombia está fundada en dos factores complementarios. El primero está relacionado con los motivos de los criminales. Si bien en un principio gentes de todos los orígenes sociales se involucraron con una actividad u otra relacionada con el narcotráfico, quienes adquirieron el control del negocio presentaban unos comportamientos, unos orígenes sociales y unos motivos muy concretos. Se trataba de delincuentes que buscaban un reconocimiento social, al punto que la sociedad en su conjunto estaba al tanto del éxito de las nuevas empresas criminales. Las fiestas, la opulencia y sus apariciones en público no dejaban lugar a dudas. A estos delincuentes los movía una causa adicional a la creación de una riqueza inusitada. Con su éxito económico buscaban resolver otro tipo de malestar, aquel ligado al descontento emocional de pertenecer a un colectivo sin mayor estima social. La raíz de su rebelión como criminales estaba en ese malestar. Fueron precisamente criminales originarios de sectores populares quienes buscaron en el dominio mafioso del negocio un mecanismo de reivindicación ante la sociedad. No solo era importante que los demás participantes del negocio reconocieran su poder sino que la comunidad en su conjunto reconociera y celebrara su ascenso social. Aunque tanta visibilidad era contraproducente desde el punto de vista de la persecución de las autoridades, la celebración social de estos criminales permitió en el largo plazo la difusión de los

conocimientos operativos del narcotráfico. De otra parte, la búsqueda de reconocimiento en ningún momento supuso una ruptura con la estructura de clases existentes. Todo lo contrario, la ascendencia entre las comunidades replicaba los mecanismos más tradicionales de dominación social. El patronaje y las redes clientelistas se convirtieron en el eje de la nueva estructura social impuesta por estos narcotraficantes. El segundo factor tiene que ver con las condiciones del contexto de ciertas sociedades del país, las cuales permitieron que la oportunidad ofrecida por un mercado ilícito se materializara en la formación de complejas empresas criminales capaces de producir y comercializar cocaína a escala mundial. En otras palabras, no bastaba la oportunidad ofrecida por el creciente consumo de cocaína ni la aparición de delincuentes con ansias de reivindicación social. También fueron necesarios ciertos rasgos de la sociedad que permitieron a unos criminales de un país subdesarrollado resolver los desafíos empresariales que implicaba el negocio, desde el abastecimiento de materia prima hasta la creación de las redes de tráfico en el primer mundo. Estas limitaciones no supusieron asuntos insignificantes. Colombia no era un país productor de hoja de coca y criminales de Bolivia y Perú hubieran podido controlar en un principio el abastecimiento del mercado. Tampoco estaban libres de competencia los mercados mayoristas de drogas en Estados Unidos y Europa. Las mafias mexicanas, cubanas e italianas venían de mucho tiempo atrás atendiendo la demanda de drogas de los países desarrollados. Tuvieron entonces estos primeros narcotraficantes colombianos que organizar complejas empresas no solo delincuenciales sino comerciales y financieras para sortear las restricciones que planteaba el tráfico de cocaína. El desarrollo de las relaciones capitalistas en las clases bajas de Antioquia, donde paradóji-

camente existían también fuertes relaciones clientelistas, y el proceso de colonización del suroriente colombiano fueron en ese sentido elementos del contexto social necesarios para que la oportunidad ofrecida por la demanda creciente de cocaína no fuera desperdiciada por criminales incapaces de organizar una empresa delincencial a gran escala. Sin un mínimo de valores y hábitos capitalistas entre sectores populares el desarrollo del narcotráfico como empresa comercial de gran escala no habría estado dentro de las posibilidades de unos delincuentes de clase baja. Pero si el proceso de modernización capitalista hubiera sido completo no habría persistido ni la fuerte jerarquización social ni las relaciones clientelistas. Y sin ellos no se habrían dado los motivos para el profundo resentimiento de los criminales de origen humilde, ni la estructura de relaciones sociales habría influido en la organización de la empresa narcotraficante alrededor de la figura de un patrón y su clientela.

El artículo procede de manera un tanto inusual. Primero se construye la evidencia sobre la imposición del narcotráfico en el orden social a partir de una comparación de la biografía de una serie de narcotraficantes de diversos orígenes sociales y geográficos. Luego se deduce una explicación teórica sobre los mecanismos que explican el proceso de difusión del crimen en la sociedad y sus demandas por poder político.

El paso de un umbral social (en busca del poder y la gloria)

Cuando surgió la demanda por cocaína en Estados Unidos había criminales en muchos países de Latinoamérica y varios de ellos ya habían incursionado en su producción y tráfico con relativo éxito.⁴ Pero una década más tarde serían los criminales colombianos quienes controlarían el mercado mayorista en el primer mundo. No eran criminales de toda Colombia, sino de ciertas zonas específicas del país: aquella que comprende el área de influencia antioqueña desde Medellín hasta Cali⁵ y en menor medida las zonas con influencia de las mafias boyacenses de las esmeraldas.⁶ Quienes alcanzaron la máxima jerarquía criminal tenían además un origen social y unas formas muy particulares de ejercer su dominio sobre la producción y tráfico de cocaína.

-
4. Thoumi (1994) por ejemplo identifica a narcotraficantes cubanos y chilenos como antecesores en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.
 5. En lo sucesivo al hacer referencia a las mafias antioqueñas se aludirá a los criminales que surgieron en las zonas de influencia cultural de Antioquia, que comprende desde el Valle de Aburrá hasta el norte del Valle del Cauca. Incluye incluso zonas de control del Cartel de Cali. En el Cartel de Medellín se incluyen como casos positivos de celebración social la biografía de Pablo Escobar, Alfredo Gómez, Griselda Blanco, Fidel Castaño, los hermanos Ochoa, Rafael Cardona, Jaime Builes y Pablo Correa. En el Cartel de Cali de los Rodríguez Orejuela, Chepe Santacruz y Pacho Herrera (si bien los Rodríguez Orejuela fueron discretos en cuanto a asuntos de celebración social su entorno no lo fue tanto. Los subalternos del Cartel de Cali fueron tan visibles a la sociedad que construyeron una réplica del club social de los ricos de la ciudad). En el norte del Valle de Iván Urdinola, Orlando Henao y otros narcotraficantes aun en activo. Y en Quindío, Carlos Lehder.
 6. El segundo espacio estaba ubicado en el occidente de Boyacá históricamente dominado por mafias de las esmeraldas, comprendía no sólo las zonas mineras sino también zonas de influencia de los esmeralderos en Bogotá, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Narcotraficantes representativos de esas mafias fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Molina, Ángel Gaitán Mahecha y otros demasiado peligrosos de nombrar por estar todavía vivos y activos.

Se trataba de: 1) individuos de origen humilde,⁷ 2) que hacían parte de un movimiento migratorio hacia grandes ciudades capitales,⁸ y 3) que más allá de la acumulación de riqueza su carrera criminal tenía como propósito el respeto y el reconocimiento de su comunidad.

Las biografías de estos narcotraficantes sugieren tanto el profundo sentimiento de exclusión como las frustraciones que pretendieron aliviar a través de la oportunidad económica ofrecida por una actividad criminal. En su temprana juventud, mucho antes de ser criminales medianamente exitosos, la ciudad se presentaba como un espacio hostil para su realización social. Los bajos niveles educativos, las pobres redes sociales y la indisponibilidad de algún capital inicial eran un lastre de hierro para tener alguna oportunidad de éxito y reconocimiento dentro de los canales legales de ascenso. Al mismo tiempo la proliferación en las ciudades de centros comerciales, de estilos de vida sofisticados, de lujos, de medios de comunicación y de opciones de entretenimiento, hacían más crítico el sentimiento de exclusión. A las precarias condiciones iniciales de estos narcotraficantes, en que en muchos casos apenas contaban con los medios y recursos para subsistir, se sumaba entonces la exposición de un mundo que tenía mucho que ofrecer.

La transición hacia un mundo urbano en condiciones de subdesarrollo no fue solo un asunto que afectó a quienes posteriormente se convirtieron en criminales. Los contextos sociales de la primera

7. Salvo los hermanos Ochoa y Carlos Lehder que provenían de clases medias.

8. No necesariamente tenían que vivir en grandes ciudades capitales sino que sus posibilidades de éxito en el narcotráfico dependieron de los contactos y acciones criminales realizadas en lo urbano. Rodríguez Gacha es un buen ejemplo de narco rural, pero sin sus redes de tráfico, lavado y testaferrato en Bogotá y Medellín hubiera sido a lo sumo un capo menor. Otro caso es el de Jaime Builes quien se convirtió en el mesías y patrón de Fredonia pero que tenía sus operaciones de tráfico en Medellín.

generación de capos narcotraficantes estuvieron sujetos también a transformaciones proclives a la legitimación del crimen. Los procesos de rápida modernización, en que las comunidades quedan desamparadas frente al nuevo orden, sin elementos tradicionales como el sentido de pertenencia, las economías de autoabastecimiento, las sanciones colectivas para la moderación de comportamientos indeseables y los lazos de solidaridad, constituyen oportunidades para la aparición de mafias.⁹ Las alteraciones del orden tradicional ante la exposición de un mundo que demanda nuevos valores, destrezas y conocimientos, permite a ciertos individuos organizar la inserción de la comunidad al nuevo orden desde el control de ciertas actividades criminales. La criminalidad en estos casos provee a la comunidad de algún tipo de estabilidad, de protección y de rentas en un proceso pleno de traumatismos. El dilema moral de las comunidades es resuelto fácilmente: *si el mundo moderno al que nos hemos visto arrojado no ofrece alivio a nuestras necesidades, nosotros nos las arreglaremos a nuestro modo, bajo nuestras propias leyes*. Son reveladoras las palabras del personaje del acrónimo texto *Confesiones de un narcotraficante* acerca del sentimiento de aquellos colombianos de los años setenta que habían roto las pautas de conformismo y sometimiento del orden rural y aspiraban a disfrutar de algo de la riqueza ofrecida por las ciudades en crecimiento:

A comienzos de los años setenta la ciudad de Cali —y creo que puede decirse toda Colombia— estaba predispuesta a convertirse en el paraíso de la cocaína, el mejor negocio del mundo. A primera vista no resulta fácil entender por qué, pero lo es [sic]. La clase baja urbana, a la que yo pertenezco, no solamente tenía educación escolar sino que era mucho

9. Hobsbawn (1969) y Dickie (2004) mencionan esta causa en el surgimiento de los bandos sociales y las mafias respectivamente. También muchas escuelas de la teoría criminológica advierten en la respuesta a cambios abruptos del mundo moderno una explicación a tendencias criminales en determinados grupos sociales. Ver Lilly et. Al (2006).

más pujante que en cualquier otra parte de América Latina. Los colombianos pobres luchamos hasta la muerte para dejar de serlo; no esperamos las oportunidades de la vida sino que las buscamos, inclusive nos las inventamos, a las buenas o a las malas. No creo haber visto, en ningún lugar del mundo, gente más trabajadora e imaginativa para ganarse la vida. En Colombia no hay oportunidades de progreso para los necesitados, que somos mayoría (S.A. 2003: 159).

Pero la riqueza y las nuevas posibilidades de consumo que el mundo moderno abría a los sectores capaces de acceder al mercado no eran el propósito último de mucho de los criminales que surgieron alrededor del tráfico de cocaína. Para ellos el sentido de la producción de enormes flujos de ingreso estaba en la búsqueda del poder y la gloria como valores en sí mismos. Un fuerte sentido de reivindicación ante un sentimiento de exclusión fue lo que delineó las actuaciones criminales de aquellos narcotraficantes que desde mediados de los setenta comenzaron a controlar la producción y el contrabando de cocaína en Colombia. Individuos de clases altas también hicieron parte del negocio en sus inicios, sin embargo poco interés manifestaron en formar una estructura criminal que además de obtener enormes ingresos se interesara en someter a otros narcotraficantes y ellos en convertirse en la principal figura social de una comunidad. La biografía de los narcotraficantes provenientes de las clases altas de Medellín como Londoño White, Ospina, Úsuga, Zapata, etc.,¹⁰ los describen como delincuentes interesados ex-

10. En los libros *Impacto del narcotráfico en Antioquia* (1988), *Los jinetes de la cocaína* de Fabio Castillo (1987) y *Nuestro Hombre en la DEA* de Gerardo Reyes (2008) aparece información sobre estos narcotraficantes de clase alta. Como anécdota es de resaltar la arrogancia con que algunos de ellos trataban a mafiosos de origen social inferior y luego como reconsiderar su comportamiento por no ser capaces de competir contra su voluntad por apelar a soluciones violentas.

clusivamente en disfrutar los enormes ingresos que dejaban las drogas. Sus celebraciones eran un asunto privado, restringido a los miembros de la familia y a los amigos cercanos. Los excesos dirigidos a ganarse la lealtad y el reconocimiento simbólico de amplios grupos sociales estaban por fuera de sus objetivos como narcotraficantes. Sus limitadas aspiraciones de reconocimiento social fueron proporcionales a su escasa capacidad de ejercer algún tipo de autoridad sobre el resto de organizaciones de la empresa narcotraficante. Se dedicaban al negocio ilegal en sí mismo y evitaban la formación de estructuras mafiosas, es decir de aparatos armados capaces de controlar y exigir rentas a quienes se dedicaban a actividades relacionadas con el narcotráfico.

El contraste es agudo con aquellos capos de la droga que por su origen sentían un profundo resentimiento social. El consumo privado en lujos excesivos también era parte de su comportamiento, pero adicionalmente el gasto de su fortuna estaba dirigido a la celebración pública de su éxito económico y a la construcción de redes sociales que los reivindicaran como las máximas figuras en una comunidad. La exhibición de un consumo inédito en entornos miserables, y por supuesto la repartición filantrópica de dinero entre la población, permitió a estos narcos convertirse en el eje de una celebración pública. Actuaron de ese modo porque detrás de los intereses económicos estaba un ansia de reivindicación. Querían convertirse en las figuras máximas del crimen y de la jerarquía social de su comunidad. La generosidad de los jefes mafiosos implicaba la participación masiva de la sociedad en la celebración de su ascenso, pero se trataba de una relación más compleja: *las formas tradicionales de intercambio clientelista ahora se proyectaban a satisfacer las aspiraciones de reconocimiento social de los narcotraficantes*. La tradición clientelista se reprodujo en la forma de dominación social que

requerían unos individuos ansiosos de reivindicar su primacía sobre la comunidad.

Un rasgo de esta tradición puede apreciarse recurrentemente en los primeros jefes narcotraficantes de Colombia: su obsesión por encarnar la figura del ‘patrón local’.¹¹ El relato periodístico de *La bruja* describe como Jaime Builes, un narcotraficante oriundo de Fredonia (Antioquia), luego de convertirse en un exitoso exportador de cocaína regresó a su pueblo convertido en nuevo rico. En su juventud Builes era “un montañero que trabajó de peón donde los Arango hace unos años y [que] luego se perdió del pueblo.”(Castro Caycedo, 1996: 28) Pero cuando regresó convertido en un magnate compró a precios absurdos las casas de las familias más distinguidas del pueblo incluyendo por supuesto la de sus antiguos patrones, los Arango. Pese a la reticencia inicial de las personas distinguidas del pueblo, que veían al antiguo montañero con burla y envidia, Builes convirtió a Fredonia en el sitio de celebración de su ascenso. Adquirió los clubes sociales,¹² heladerías, fincas y demás espacios de socia-

11. La literatura de ciencias sociales en Colombia ha mostrado con profundidad los efectos de las relaciones de hacienda en la formación de la estructura social colombiana. Ver por ejemplo Guillén (1996) Jaramillo Vélez (1998).

12. Los clubes sociales en Fredonia tenían un valor imprescindible para la vida social, si quería ser aceptado Builes tenía que controlar esos espacios: “el club era parte de la vida de uno. Era una cosa muy, pero muy importante en este pueblo. [...] Nos quedamos sin club. Es que el club era parte de nuestra existencia. Allá nos relacionábamos, allá nos enamorábamos, allá contábamos lo que nos sucedía y allá nos consolábamos unos con otros. Todos los días. Todas las noches. Pero desde esa tarde estuvo cerrado una semana y al cabo de esa semana se supo que lo iban a reinaugarar”. Más aun podría decirse que la conquista de la clase alta se hizo apoderándose de sus clubes sociales: “Al lunes siguiente compró el otro club social que se llamaba “Los Violines”, y ese mismo día lo hizo cerrar y un poco más tarde lo inauguró con mariachis y orquestas, y como a los tres meses empezó a tumbarlo. Allí mismo construyó una serie de apartamentos sofisticados, con paneles llenos de botones y cama-

lización. Cada tanto traía al pueblo mariachis, rejoneadores y personajes públicos que resaltaban su figura:

Un día salió temprano para Medellín y volvió por la tardecita en su automóvil. Detrás del auto venía un camión con un caballo bellísimo que le había comprado al famoso rejoneador Oki Botero y detrás del camión, un bus con mariachis. Bajaron el caballo, lo ensillaron, le adornaron las crines y luego le hicieron una trenza corta en la cola con unas cintas con los colores de la bandera de Fredonia, y una vez estuvo listo, Jaime se trepó en él (se llamaba El Dorado) y el mariachi empezó a tocar un pasodoble y el caballo a bailar y el jinete a reírse y a reírse con su diente de oro al aire y con un sombrero cordobés que le había regalado Oki en la mano derecha, batiéndolo como hacen los rejoneadores en las plazas de toros. (Castro Caycedo, 1996:36)

No tomó mucho tiempo para que ricos y pobres aceptaran la inclusión de Builes y su ascenso a la máxima posición social en Fredonia:

entonces [...] surgió un fenómeno distinto, la gente principal empezó a sentarse en el atrio con Jaime y empezó a hacer negocios con él. Ya no era Jaime sino Don Jaime. Y ya el atrio no era exclusivo de los de arriba sino para los amigos de Don Jaime, porque, además, él era el dueño de casi todas las heladerías y si uno iba, a lo mejor no lo atendían. Es que él no tenía esos negocios con el fin de lucrarse y sólo lo vendía a quien le daba la gana.”(Castro Caycedo, 1996: 40).

ritas de televisión que lo mostraban a uno si iba a llamar a la puerta.” (Castro Caycedo, 1996:35). El tema de los clubes sociales ofrece evidencia dicente de lo importante que fue para ciertos narcotraficantes la inclusión dentro de las clases altas. Es famosa la anécdota de Chepe Santacruz quien mandó a construir un Club Social exacto a aquel que le había negado la entrada en Cali.

Su matrimonio con la hija de un miembro de la ‘aristocracia local’ terminó de sellar su inclusión en la élite y sería el motivo ideal para celebrar su conversión en el patrón del pueblo. Si alguien quería aspirar a un cargo público, montar una empresa, tenía que contar con su aprobación y su respaldo económico.

La historia de los motivos de Builes es similar a la de un narcotraficante más conocido e importante por su papel en la historia reciente de Colombia: Fidel Castaño. En contra de las versiones que han querido retratarlos como pertenecientes a sectores de clase media:

La familia Castaño es una familia típica de las antiguas familias antioqueñas, muy numerosa; ellos eran gente muy humilde y eso hizo que cada uno de ellos desarrollara o agudizara sus instintos de supervivencia. [...] El padre de ellos los hacía trabajar duro en una finca que tenían cerca de Amalfi y los sometía a un duro régimen. Y eso generó que casi todos ellos se fueran de la casa apenas llegaron a la adolescencia, apenas saliendo de la infancia. Fidel se fue de la casa cuando casi era un niño todavía; por la época de su infancia ellos desarrollaron algún tipo de resentimiento por los aristócratas de su pueblo, lo que salió a flote en varias ocasiones a lo largo de sus vidas (Cívico, 2009:187).

Ese resentimiento llevó a los Castaño a buscar suerte en diversas actividades criminales. Finalmente a través del narcotráfico lograron amasar la fortuna suficiente para dar rienda suelta a sus ansias de reivindicación social: “En el momento en que consideraron que ya podían regresar al pueblo puesto que ya habían superado a los aristócratas locales en riqueza, lo hicieron y se dedicaron a hacer alarde de su nueva fortuna. Por esa época fue que compraron fincas y caballos de paso fino y manejaban

los vehículos más modernos y costosos que existían en el mercado en el momento.” (Cívico, 2009:140). Fidel Castaño al igual que Builes se casó con una “hija de una de las familias de la aristocracia de Amalfi, paradójicamente de esas familias contra que los Castaño sentían una especie de revanchismo social”. (Cívico, 2009: 140).

El Mexicano Rodríguez Gacha es otro caso diciente del uso de recursos del narcotráfico para reivindicarse socialmente al asumir el papel de un ‘súper-patrón’ en su pueblo natal:

Su amor –repetía hasta la saciedad– era su pueblo. [...] En Pacho reconstruyó la iglesia parroquial, pavimentó las calles e instaló una oficina, a la cual acudían requerían alimentos o medicinas. Si surgía una disputa entre paisanos, Rodríguez Gacha servía de juez. Si faltaba una ambulancia para trasladar un herido, prestaba su vehículo personal y se encargaba de los gastos. [...] En efecto, sus gentes le profesaban una lealtad a toda prueba que persiste aun después de su muerte (Cortés, 1993: 20)

Lo curioso es que el sentido de reconocimiento social llegó a rebasar el simple establecimiento de redes clientelas tradicionales, en que el patrón centra sus relaciones en la población que se convierte en dependiente de su provisión de bienes, servicios y reconocimiento simbólico. En los días siguientes al terremoto de Popayán el Mexicano tomó un avión y repartió dólares a los damnificados en plena calle. Era un afán de reconocimiento mucho más complejo que aquel que puede establecerse en los vínculos clientelistas donde el patrón cuenta con una población claramente definida para reclamar el respaldo en votos, soldados y reconocimiento para convertirse en la máxima figura social de una comunidad o grupo social. Rodríguez Gacha no tenía

manera de convertir a esa población en su clientela. Estaban demasiado distantes de sus áreas de operación. Era una especie de gasto filantrópico al margen de cualquier tipo de mediación personal, dirigido a obtener un reconocimiento social por individuos anónimos, una forma de decir: ‘yo vengo de abajo y conocí la desgracia como ustedes, ahora que he tenido tanto éxito y fortuna no me voy a olvidar de ustedes. Yo soy diferente a la oligarquía de este país que siempre los ha tenido olvidados.’

Pablo Escobar llegó aún más lejos en su afán de reconocimiento social. Abrió al público su zoológico privado en la famosa Hacienda Nápoles. No obstante, la mayor parte de su celebración social estuvo dirigida a comunidades y grupos muy concretos en las barriadas populares del Valle de Aburrá. Escobar llegó incluso a financiar un programa de vivienda popular: ‘Medellín sin Tugurios’. Detrás de todo este gasto filantrópico estaba el interés de ganarse a la población como una clientela leal contra cualquier amenaza de sus competidores y el Estado. En los barrios marginales de Medellín Escobar se convirtió de ese modo en el máximo ‘patrón’ de la comunidad. Los pobladores de la zona, sin necesidad de conocer a Escobar, establecieron una lealtad con su patrón que se convirtió en el medio ambiente perfecto para su carrera criminal. Podría disponer en el lugar desde asesinos a sueldo y sitios de refugio para la guerra hasta los votos necesarios para elegir a políticos que intercedieran por sus intereses y su protección frente al Estado. No es casual que todavía en los barrios populares de Medellín se guarde devoción a la figura de Escobar casi como un icono religioso que provee a los desamparados. Un reportaje sobre un asesino a sueldo de Medellín realizado por el diario Telegraph de Inglaterra menciona como su imagen continúa siendo una leyenda entre los delincuentes de la ciudad:

When the Medellín cocaine baron Pablo Escobar had become the planet's biggest drug trafficker, mentioned as a billionaire on Forbes' rich list, Gustavo was just seven years old. By then, Escobar was such a legend in the slums that even children talked about him. 'Up in the comunas Pablo was like a king. He was bigger than the Colombian president,' Gustavo says (Grillo, 2010).

En los casos de Builes, Castaño, el Mexicano y Escobar, a pesar de las enormes diferencias de sus lugares de origen, se encuentran enormes similitudes acerca del espacio social sobre el cual pretendían imponerse como 'patrones'. Este espacio era al mismo tiempo: 1) una comunidad concreta –Fredonia, Amalfi, Pacho y Envigado– donde establecían relaciones directas con la población, desde clases bajas hasta sectores altos y medios que celebraban su éxito y dependían de él para ascender y/o mantenerse en la estructura social, 2) sectores populares que guardaban aprecio por ser beneficiarios de sus reivindicaciones económicas y simbólicas pese a no conocerlo personalmente, –los campesinos, los paisanos del pueblo y las barriadas de las ciudades–, y 3) élites económicas, políticas y sociales de las regiones que necesitaban del apoyo del capo para enriquecerse y ganar elecciones, –congresistas, concejales, empresarios, terratenientes y notables locales–. Las relaciones clientelistas configuradas por los narcotraficantes abarcaron así desde el entorno inmediato donde se resguardaban hasta los espacios de intercambio de favores con élites regionales y nacionales.

En consecuencia, el ascenso de este tipo de narcotraficantes no supuso un ataque contra la estructura de dominación social, sino su adecuación a las necesidades de control de una clase criminal emergente. Los primeros capos de la cocaína tan car-

gados de un profundo resentimiento y deseos de reivindicación en vez de cuestionar los cimientos de su exclusión utilizaron los mismos mecanismos de exclusión para imponerse como máximas figuras de su entorno y de la propia actividad criminal. El patronazgo, el clientelismo, las relaciones de dependencia, la definición de los derechos de los individuos de acuerdo a su posición social y económica, la ascendencia de un sistema normativo propio sobre las leyes del estado, etc., fueron los mecanismos que los narcotraficantes se apropiaron de las élites tradicionales para ejercer su dominio. Señalarían a su vez el rasgo conservador de su proceso de inserción social. No hubo lugar a reivindicaciones de clase, en el sentido que un conjunto amplio de individuos vinculados entre sí por condiciones económicas y sociales equivalentes llevara a cabo algún tipo de protesta ante al estado y la sociedad. Los procesos de movilidad social que efectivamente sucedieron estuvieron sujetos al ascenso individual dentro de los mismos canales de movilidad clientelista.¹³ La ruptura con el clientelismo anterior estaría dada más por cambios de contenido que de forma como resultado del aumento astronómico de recursos en el intercambio entre patrones y clientes.

La estructuración del narcotráfico sobre relaciones clientelistas no era un asunto motivado solo por los deseos de convertir el

13. Si bien algunos narcotraficantes como Escobar y Lehder trataron de incursionar en la política a partir de discursos populistas contra la pobreza, el imperialismo y los abusos de la oligarquía, sus motivos últimos estaban dirigidos a impedir un eventual tratado de extradición y a exigir una participación directa en el poder político que representara su ascendencia social y económica. Los discursos populistas y antiimperialistas se agotaban rápidamente frente a intereses y realidades muy concretas y la lucha contra la pobreza no era nada importante en comparación a la necesidad de votos y soldados para influir en las decisiones públicas.

éxito económico en celebración social. Las redes de intercambio y dependencia que formaron los narcotraficantes con la población también constituyeron una forma natural de organizar la estructura productiva del negocio. Los cultivadores de hoja de coca, los transportistas, los trabajadores de los laboratorios, los intermediarios, los traficantes en los mercados internacionales, etc., todos ellos en mayor o menor grado terminaban haciendo parte de una relación clientelista. Para ser reclutado en alguna de las instancias operativas del negocio lo principal no era demostrar conocimiento o experiencia. La lealtad, la confianza y la seguridad que no se iban a convertir en delatores eran prerrequisitos mucho más importantes que las habilidades de los potenciales trabajadores. Se necesitaban individuos confiables tanto en el cumplimiento de la labor que se les encomendaba como en la lealtad y discrecionalidad que guardarán a su patrón:

Para uno entrar [en la mafia] se necesita que lo enganchen a través de alguien de mucha confianza, ojalá mediante un “traqueto” que apenas esté empezando, para que uno logre ganarse la amistad, para que le suelten trabajitos, misiones, en fin, siempre empezar desde abajo. Algunos de los trabajos pueden ser directamente sobre asuntos de narco u oficios bien, como pintar una casa, cuidar una finca, hacer de mandadero... (Betancourt Echeverry, 1998: 159)

Más aun, la secuencia de resentimiento, criminalidad, celebración y clientelismo no se limitó a la organización operativa del negocio. Los criminales, guardaespaldas y demás asesinos a sueldo que constituyeron las primeras organizaciones armadas de los narcotraficantes tendrían su origen desde la misma lógica de reivindicación social. El caso de los sicarios de Medellín que se convirtieron en el ejército anónimo de Escobar en su guerra contra el Estado guardó todas las trazas de una rebelión

desenfrenada de excluidos, sin ningún objetivo político claro pero con una decisión y unos efectos sociales implacables. Estos adolescentes de vecindarios miserables, profundamente resentidos por la exclusión material y simbólica a la que se había visto sometido su comunidad, no dudaban en ofrecerse para crímenes imposibles. No importaba que fueran material de sacrificio en la guerra y a priori supieran que sus probabilidades de sobrevivir eran ínfimas.¹⁴ Estaban dispuestos a cambiar una vida de restricciones y humillaciones por unos pocos años, meses e incluso días de gloria y opulencia. La sensación de superioridad, de admiración femenina —madres y amantes—, de lujos inimaginables y de respeto y temor por parte de los demás habitantes de la ciudad, fueron suficientes para pedir un cupo en la lista de asesinos de un patrón, encargarse de magnicidios históricos, explotar carros bombas entre ciudadanos inocentes, enfrentarse a la fuerza pública y dominar a sus anchas los vecindarios marginales de Medellín.¹⁵ El reportaje del diario *Telegraph* revela como hasta para asesinos de bajo rango el resentimiento por la exclusión del consumo de lujo es parte fundamental de su decisión de optar por el crimen:

As Gustavo became a teenager, his father tried hard to steer him and his brothers away from the mafia, but it was difficult to convince them that the honest life paid off. ‘You

-
14. Las condiciones como la mayoría de sicarios rasos entraban a la guerra eran prácticamente suicidas. Había incluso un término para describir a aquellos asesinos a sueldo que eran utilizados a misiones suicidas sin saberlo, los ‘suizos’. La bomba del avión de Avianca y el asesinato de Carlos Pizarro fueron llevados a cabo con ese tipo de asesinos.
 15. Numerosos textos periodísticos y científicos recopilan información sobre el rasgo de rebeldía e inconformismo que asumen los asesinos de las comunas pobres de Medellín. Incluso las películas de Víctor Gaviria y un documental, ‘La Sierra’, recogen imágenes de esas sensaciones.

see your father sweating hard all day and just making a few pesos. And sometimes he was out of work for months. And then guys in the barrio working for the Office are driving brand new cars and motor bikes and have five girlfriends' (Grillo, 2010).

Los condicionamientos del contexto social

El señalamiento de Antioquia y de la zona esmeraldera como el foco de expansión del tráfico de cocaína no pretende reducir la explicación a la mayor propensión a la criminalidad de estas regiones. Criminales y organizaciones criminales había alrededor de toda Colombia. La diferencia estaba en que ciertos elementos del contexto social de Antioquia y de la zona esmeraldera permitieron que los delincuentes pudieran resolver las restricciones operativas de la producción y tráfico de cocaína en gran escala. Sin estos elementos no se habrían reproducido indefinidamente los conocimientos operativos del negocio.¹⁶ Tampoco habría

16. Al analizar la capacidad de aprendizaje de las empresas narcotraficantes Kenney sostiene que “una organización aprende cuando sus miembros aprenden para ella: adquiriendo, interpretando, guardando y actuando con base en la información. Sin embargo, el aprendizaje no llega a ser empresarial hasta cuando el conocimiento no se integre a las rutinas y se conserve en las ‘memorias’ empresariales. Las rutinas incluyen las reglas, los procedimientos, las convenciones y las estrategias que configuran el comportamiento empresarial. Las memorias empresariales incluyen los archivos, los manuales, las bases de datos y las cuentas financieras que registran la información y la experiencia y también, los ‘entendimientos compartidos’ entre los miembros en cuanto a las prácticas y los procedimientos dentro de la organización. Las memorias empresariales se transmiten con el tiempo, a través de la socialización”(2000: 46). Como complemento de la tesis de Kenney (2000) aquí se enfatiza que el aprendizaje no se transmite solamente desde la institucionalización de una memoria al interior de las organizaciones narcotraficantes, sino de la exposición que tienen muchos miembros de la sociedad a los conocimientos y habilidades básicas del negocio. Básicamente lo que hizo la celebración fue socializar rutinas que en principio debían ser clandestinas por tratarse de una empresa ilegal.

estado disponible una clase delincencial capaz de mantener en funcionamiento empresas ilegales tan complejas. El narcotráfico no involucraba procesos tecnológicos muy sofisticados, pero demandaba una complejidad administrativa que sobrepasaba las habilidades estrictamente delincuenciales. Fue así que para convertirse en el principal proveedor de cocaína mundial los traficantes colombianos tuvieron que establecer redes comerciales con los centros de abastecimiento de coca en Perú y Bolivia y de insumos químicos del primer mundo, construir una amplia infraestructura de laboratorios para transformar la base de coca en cocaína, organizar el transporte del producto final hasta los mercados internacionales, establecer redes de contactos delincuenciales en los grandes centros mayoristas y montar complejas operaciones de lavado. Toda esta serie de operaciones son el producto de la conversión de delincuentes en grandes empresarios. Y en ese orden de ideas, el contexto social fue importante porque determinó unas condiciones iniciales sin las cuales no se hubiera traspasado el umbral de ‘notables delincuentes’ a ‘empresarios internacionales’.

En el caso particular de Antioquia las ciencias sociales han celebrado ciertos rasgos de su sociedad que la diferencian del resto del país. El crecimiento económico, la industrialización y la conformación de una base rural de pequeños propietarios campesinos se han asociado a aquellos atributos que dieron origen a las sociedades capitalistas del primer mundo. Se han equiparado incluso sus valores culturales como equivalentes a la ética protestante que Weber identificó como fundamental para el avance del espíritu capitalista en occidente (Mayor Mora, 1984; Fajardo, 1968). Guillén (1963) llegó al extremo de afirmar que:

“Hojeando alguna vez el ‘Diario’ en que Benjamín Franklin cuenta las peripecias de su educación juvenil en las activas sociedades artesanales de la Nueva Inglaterra del Siglo XVIII, yo recordé como mi padre, nacido en Antioquia, relataba su sorpresa cuando, recién llegado a Bogotá, [...] observó que las gentes no pertenecientes a las más bajas clases sociales eludían toda labor manual, mientras él recordaba que los herreros antioqueños dejaban la fragua y el martillo para mezclarse en la tarde con las gentes más notables de cada población, en una activa vida social, desconocida en el resto del país” (Guillen, 1963: 62).

Mucho de cierto puede haber en estas explicaciones pero se han presentado con tantas exageraciones que al final queda la pregunta de si todo fuera así de cierto por qué Antioquia no se convirtió entonces en una sociedad occidental desarrollada. Este asunto es relevante porque a pesar de no dar cuenta de un proceso definitivo de modernización tiene las claves para comprender por qué fue en Antioquia donde se dieron las condiciones necesarias para que el narcotráfico adquiriera tanta difusión social.

Lo que el narcotráfico demandó de la sociedad antioqueña fueron dos rasgos en apariencia contradictorios: *unos niveles mínimos de desarrollo de las relaciones capitalistas entre sectores populares y, contra toda la literatura que celebra a Antioquia como un ideal de modernización occidental, de la existencia de fuertes relaciones clientelistas y jerarquías sociales*. El mayor desarrollo relativo del capitalismo en las clases bajas estuvo dado por: 1) la aparición de un sentido comercial entre sectores populares que contaban con ingresos de productos de exportación como el oro y el café para participar en los mercados regionales, 2) un proceso migratorio marcado

por la búsqueda de oportunidades económicas entre colonos pobres,¹⁷ y 3) la posibilidad de movilidad social tanto por las oportunidades económicas presentes como por la aceptación de la sociedad del ascenso a partir del éxito en los negocios. El sentido comercial tiene sus raíces en la extracción del oro por mineros independientes (Parsons, 1961; Safford, 1967; López Toro, 1970). López Toro (1970) resume este aspecto en:

Un fenómeno peculiar de la economía colonial antioqueña, consistente en la presencia y evolución de una clase social que, a pesar de carecer de recursos de capital y de tierra, encontró y aprovechó oportunidades de subsistencia económica en actividades independientes relacionadas con la búsqueda de oro, que llegaron a representar una proporción muy elevada de la producción minera de la provincia de Antioquia y ofrecieron una alternativa de ocupación diferente de la de peón o agregado en la hacienda o en la minería de cuadrillas, para una fracción significativa de la población económicamente activa. (López Toro, 1970: 2)

Brew agrega como explicación: 1) la superpoblación en las tierras altas que “determinaron que la movilidad y el trabajo sostenido fueran esenciales para la supervivencia”, y 2) la progresiva pérdida de influencia social de dos instituciones coloniales, la esclavitud y la hacienda, que destruyó “los obstáculos más importantes al desenvolvimiento de la libertad económica de los individuos” (Brew, 1977: 28). El proceso de colonización del occidente colombiano

17. La colonización antioqueña no fue solo producto de colonos pobres. También participaron comerciantes y terratenientes pertenecientes a las élites urbanas. En muchos casos se dieron conflictos entre estos actores por los títulos de propiedad de los nuevos predios. Y en el poblamiento de ciertas regiones como las zonas bajas hacia el Magdalena Medio y Urabá no sucedió una democratización de las relaciones capitalistas. Ver Brew (1977) y Christie (1986).

por los antioqueños dispondría así de una clase campesina con un sentido comercial desde los nuevos lugares de asentamiento. Muchos de los colonos no solo buscaban un lugar donde asentarse, sino también extraer y producir bienes que pudieran ser intercambiados con los centros originarios de migración. Para las élites comerciantes de Medellín y Manizales la colonización representaba nuevos mercados regionales y mercancías para ofrecer internacionalmente, por eso financiaron y promovieron los procesos migratorios (Brew, 1977; Christie, 1986). Algunos de los colonizadores pobres tuvieron éxito económico y no tuvieron restricciones para ascender en la escala de prestigio de su comunidad. El éxito económico era suficiente para el reconocimiento social y se apoyaba la migración como una alternativa para quienes no encontraban oportunidades económicas en su lugar de origen (Gutiérrez de Pineda, 1968). Durante el siglo XIX y XX el sentido comercial entre diversos sectores de la estructura social se reflejaría en las relaciones productivas que adquirió el café en la región. Mientras que en el oriente del país predominaron los cultivos en grandes haciendas, en Antioquia la producción cafetera tuvo lugar en gran medida en pequeñas propiedades. Un campesinado que abastecía la demanda de un producto en los mercados internacionales pudo contar de ese modo con capacidad monetaria suficiente para constituir un mercado interno. De hecho, se atribuye a la capacidad de consumo de los minifundistas cafeteros el mayor grado de industrialización alcanzado por Antioquia en la primera mitad del siglo XX (Brew, 1977; Botero, 2003).

Sin embargo, pese a sus notables avances en comparación con el resto de Colombia durante ese período, Antioquia distaba mucho de experimentar una situación de plena modernización de las relaciones sociales y económicas. Varios autores

(Safford, 1967; Christie, 1986; Gutiérrez de Pineda, 1968; Uribe de Hincapié, 2001 y Franco, 2006) han matizado desde diferentes aproximaciones la idealización que la historiografía ha hecho de los antioqueños. Safford (1970), por ejemplo, encontró que pese a las diferencias que surgieron desde una forma peculiar de explotación minera, tampoco existía una estructura social exenta de jerarquizaciones y distinciones:

Puede ser que los antioqueños tengan una actitud un poco distinta que los otros colombianos respecto al trabajo manual. Pero es muy difícil relacionarla con la clase de trabajadores que se utilizaba en la minería. Siempre las personas que laboraban en las minas eran de una categoría social inferior dentro de la sociedad antioqueña, en el principio mineros indígenas, después esclavos negros, al fin de la Colonia una mezcla de esclavos y gente de color libre, y en la República los descendientes de éstos. Estos trabajadores mineros rara vez entraron en las altas esferas de la sociedad antioqueña. Muchos antioqueños empezaron pobres y, en parte con el trabajo manual llegaron a las cumbres de la sociedad. Pero muy pocos de estos trabajaron como peones en las minas. O eran empresarios pequeños en la minería, empleando otros en el trabajo físico; o eran agricultores, arrieros o comerciantes pequeños. Trabajaron con las manos en muchos casos, pero rara vez como trabajadores en las minas (Safford, 1967: 51).

En épocas más recientes cuando el oro había dado paso al café como principal producto de la región y tuvo lugar la colonización antioqueña del occidente colombiano, Christie (1986) encontró que existía una clase de colonos que por su origen social y económico “se colocaban en una categoría aparte de las ‘humildes bestias de carga’: esclavos, peones, indios y

los sirvientes personales” (Christie, 1986: 42). Al igual que en resto del país la desigualdad propia del poder económico y la jerarquía del patrón clientelista hizo parte de la formación social de Antioquia con la diferencia que existían fuertes desarrollos comerciales entre todas las clases sociales y mayores posibilidades de ascenso social. Más aun, la permisividad a la movilidad social de negros, indios y mestizos escondía el hecho que la sociedad se hallaba profundamente dividida por motivos más sociales que raciales. El negro podía ‘blanquearse’ no porque cambiara el color de su piel, sino dejaba de ser negro en virtud de su éxito económico, sin embargo quienes no tuvieran éxito continuaban perteneciendo a una clase social segregada:

El blanqueado, mecanismo por excelencia en la región para realizar el tránsito de las etnias a la formación del pueblo, se realizó bajo la dinámica de la inclusión-exclusión; incluyó los blancos y los blanqueados articulados por redes mercantiles abiertas a las que podía ligarse todo aquel que se presentase como comprador y vendedor, pero además quien aceptase el modo de vida, los valores de la cultura pueblerina y campesina y el sentido común de la antioqueñidad. A los “otros” los excluyó, los invisibilizó y sólo los nombró como problema, como potencial, o realmente conflictivos, como eventuales enemigos a los cuales se debería presionar para que aceptasen ese esquema de valores o mantenerlos alejados por el riesgo que significaba su mera existencia (Uribe de Hincapié, 2001: 103).

Surgió así una situación paradójica, ideal para el éxito económico de criminales provenientes de clases bajas y para la difusión social del narcotráfico como actividad criminal. Sin la presencia entre sectores populares de una cultura del comercio y de la migración no se hubiera desarrollado un conocimiento

colectivo de las diferentes fases operativas del negocio de las drogas ni el desplazamiento de operadores criminales a lo largo de espacios geográficos tan distantes –desde Perú y Bolivia hasta Estados Unidos y Europa–. No estarían disponibles transportadores de insumos y mercancía procesada, productores de cocaína en laboratorios clandestinos, proveedores de materias primas y servicios, distribuidores en las ciudades del primer mundo, etc., para aquellos individuos que aspiraban a organizar operaciones de tráfico de droga en gran escala. De igual modo, sin una amplia base de relaciones clientelistas los primeros jefes mafiosos no hubieran contado con los participantes de la celebración de su ascenso. Y sin la fuerte segmentación social los narcotraficantes de origen humilde no hubieran tenido los motivos para reclamar el reconocimiento del negocio como parte de su reivindicación ante la sociedad. En consecuencia, no hubieran contado con una masa de población que difundiera el conocimiento operativo del negocio de las drogas. Mucho menos hubieran contado con la protección de una población dependiente y leal. El conocimiento de la producción y tráfico de cocaína hubiera quedado relegado a unos cuantos criminales de carrera. Pero un clientelismo demasiado atrasado sin mayores posibilidades de movilidad social, –por ejemplo, aquel asociado a un pobre nivel de monetarización de las relaciones entre patrones y clientes–, hubiera constituido un obstáculo insalvable. Aunque hubiera propiciado un entorno de protección social para el negocio, quienes estaban llamados a convertirse en prósperos narcotraficantes de origen humilde no habrían dispuesto de un mínimo de sentido comercial y empresarial para establecer las redes de tráfico en el mercado internacional.

Otra característica del contexto social de Antioquia propicia para la difusión del narcotráfico era la permisividad social frente

a transgresiones a la ley. La deshonestidad era un valor social si tenía como propósito el bienestar de la familia y de la comunidad y si una parte de las ganancias era destinada a obtener el perdón de las autoridades religiosas (Gutiérrez de Pineda, 1968).¹⁸ Las historias populares de tío conejo, la literatura costumbrista de Carrasquilla y el cuento de Jesús del Corral, *Que pase el aserrador*,¹⁹ ilustran el valor de la astucia y el engaño en la cultura antioqueña. Es famosa la frase del padre que recomienda al hijo que vaya a buscar fortuna en otras tierras, que sea honesto y que regrese con dinero, pero que si no puede que simplemente regrese con dinero. Salazar y Jaramillo (1992) y Arango (1988), entre otros autores, han señalado este rasgo como una explicación del auge del narcotráfico en la región. Ciertamente una valoración positiva de la deshonestidad es un factor favorable al desarrollo de una actividad criminal en una sociedad como sucedió en Antioquia. Sin embargo, contextos culturales propensos a comportamientos deshonestos proliferaban a lo largo de Colombia y los criminales locales no desarrollaron las habilidades y las destrezas necesarias para organizar el tráfico de cocaína. Parece más plausible la explicación de Thoumi (2009) cuando señala a

18. La lógica antioqueña de pecado y perdón tiene ante todo sus fundamentos en la ética católica y no en la ética protestante como han querido idealizar diversos autores. Y aunque es cuestionable reducir la explicación de la difusión del narcotráfico en Antioquia a la cultura de la ilegalidad, demuestra al menos que la honestidad y la confianza, dos de los postulados básicos del mundo moderno, distaban de ser parte del repertorio de valores de los antioqueños.

19. El cuento de Jesús del Corral trata sobre dos soldados desertores, uno blanco de Antioquia y otro indio de Boyacá, quienes luego de vagar por la selva llegan hambrientos a una hacienda. En la hacienda ofrecen trabajo como aserrador. Ninguno de los dos tenían experiencia para el trabajo pero el antioqueño miente y con voluntad y engaño alcanza a convertirse en el capataz de la hacienda. El cuento termina con la frase: “¡Y aquel pobre indio de Boyacá se murió de hambre... sin llegar a ser aserrador!...” Disponible en: <http://www.ciudadviva.gov.co/diciembre05/magazine/1/>

las numerosas causas del narcotráfico como condiciones necesarias pero no suficientes por separado. La valoración cultural de conductas deshonestas hace parte de las condiciones necesarias, pero si no está acompañada de la elaboración de redes comerciales la conjunción de causas no es suficiente para producir los grandes carteles de las drogas. La diferencia de los antioqueños con el resto de Colombia no estuvo entonces en la cultura de violación de las normas sino en que este rasgo cultural estuvo acompañado de un mínimo de sentido comercial y de relaciones monetarizadas en las clases bajas.

Las biografías disponibles de los narcotraficantes antioqueños coinciden en señalar la presencia de este rasgo comercial. La biografía de Griselda Blanco, 'La Madrina de la Coca', da una idea de cómo criminales del origen social más miserable de la sociedad antioqueña fueron capaces de construir redes comerciales en el propio mercado estadounidense de cocaína. Griselda y su esposo:

Establecieron un negocio de cocaína en Queens, Nueva York, que rápidamente se tomó la Gran Manzana y dio comienzo al largo amorío que, por décadas, ha tenido la ciudad con la droga. En una ciudad donde los narcóticos eran controlados por cinco familias de la mafia, se estableció la pareja de colombianos con conexión directa a la fuente. Al comienzo Blanco contrató mulas femeninas que escondían pequeñas cantidades de cocaína en sus maletas de viaje, pero para mitad de 1970 sus pilotos volaban con cantidades considerables de droga directamente desde Colombia, proporcionándole millones de dólares mensuales. Con una larga nómina de clientes que incluía estrellas de cine y grandes atletas, era inevitable que la emergente organización de Blanco fuera objeto de escrutinio: una in-

investigación en conjunto de la NYPD/DEA, denominada la Operación Banshee, llevó a cabo el señalamiento de Blanco y de más de treinta de sus subordinados en una conspiración federal y les abrió cargos por drogas, en abril de 1975. En su momento fue el caso más grande de cocaína de la historia (Don Juan, 2008).

Pablo Escobar fue mundialmente reconocido por su crueldad, pero se ha pasado por alto su impresionante sentido empresarial. En una de sus biografías Popeye, su más famoso asesino a sueldo, narra cómo desde los inicios en el tráfico de drogas fue capaz de construir una red comercial entre fronteras internacionales a pesar de las restricciones propias de unos bandidos que empezaron desde abajo en la carrera criminal:

Después de esto nos iniciamos en el tráfico de drogas, muy modestamente, vendiendo pequeñas dosis de cocaína. Yo mismo, en un Renault 4, atravesé todo el país y me fui hasta Ecuador, a comprar cinco kilos de pasta de coca que venían del Perú para procesarla en Medellín. Por supuesto, había un montón de controles policiales y militares; para evadirlos se me ocurrió contratar una grúa, argumentando así, en los retenes, que el carro se había varado. Entonces metíamos la merca entre cables y cajas de herramientas (Legarda, 2005: 29).

Builes y los Castaño demostrarían que incluso individuos de origen campesino contaban con la predisponibilidad y las habilidades iniciales para establecer redes comerciales y organizar empresas capitalistas –así fueran ilícitas– en el escenario internacional. Jaime Builes fue asesinado por la policía mexicana cuando pretendía constituir una ruta de tráfico sin pagar la respectiva vacuna a las autoridades locales. La entrevista de Civico (2009) al asesinado jefe paramilitar alias Rodrigo ‘Doble Cero’

develó el origen narcotraficante de los Castaño. Lo interesante de sus revelaciones sería la magnitud y el alcance de las redes comerciales establecidas por los Castaño, desde Perú y Bolivia en avionetas hasta Los Ángeles y Hamburgo en barcos propios:

Fidel se convirtió en un aventurero que tenía la finalidad de rebuscar fortuna a como diera lugar. [...] Era la época en que los aventureros colombianos estaban descubriendo que los gringos se morían por el polvo blanco que salía de la mata de coca que se cultivaba en el Perú y en Bolivia. Cuando eso poco se sabía qué era eso (mucho antes de que Pablo Escobar comenzara su carrera delincencial). Fidel contaba que un amigo de él había sido el pionero, el que había descubierto el narcotráfico, el que había empezado todo. [...] Con este personaje es que Fidel en su afán de hacer fortuna, incursiona fugazmente en el narcotráfico, y como le digo, él no era pendejo y aprendió a conocer bien a ese tipo de personas con las que se relacionaba y sabía que no se podía fiar de ellas, por eso fue que invitó a sus hermanos a que le ayudaran en sus negocios. Sus dos hermanos “Condorito” y Eufracio, desaparecen en la selva amazónica mientras regresaban en un avión de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia con un viaje de pasta de coca. [...] Vicente se fue para Los Ángeles para recibir lo que desde Colombia le enviaba Fidel y de esta forma fue que ellos hicieron su fortuna. [...] En el año 89, por la época que yo ingrese a trabajar con Fidel, el barco de Yarumo [alias de Vicente] fue descubierto en Alemania con un gran cargamento de cocaína (Legarda, 2005: 187-192).

Fueron abundantes los casos de narcotraficantes de origen humilde en Antioquia capaces de establecer redes comerciales desde los centros de abastecimiento de materia prima hasta los

destinos finales de la mercancía. De hecho, fueron antioqueños pobres y violentos quienes dieron lugar a las famosas balacearas en las calles, centros comerciales y espacios públicos de la Florida.²⁰ Es diciente que Iván Urdinola en una autobiografía clandestina pretenda dar consejos sobre las estrategias para ser un comerciante exitoso y proclamara que: “en el Valle del Cauca no ha habido ni habrá, una persona natural que en vida (sic) haya hecho más negocios que yo” (Urdinola, s.f: 134). María Teresa Uribe (2001) ha puntualizado al respecto que: “[e]l tráfico de drogas aparecía pues como un horizonte de posibilidad para sectores sociales tradicionalmente excluidos pero formados en la mentalidad empresarial propiciada por el ethos sociocultural decimonónico” (Uribe Hincapié, 2001: 123)

Solo fue posible generar el conocimiento colectivo de una empresa criminal como el tráfico de cocaína, que demandaba la organización de numerosas transacciones comerciales y procesos de transformación productiva, en situaciones donde el intercambio entre patrones y clientelas involucraba relaciones monetarizadas. Tal aprendizaje requería relaciones sociales más dinámicas que las presentes en regiones donde primaba el clientelismo de hacienda, allí la población dependiente tenía claramente asignadas sus funciones y su lugar en la vida social, o donde el clientelismo de la clase política profesional no suponía que la población se vinculara con algún tipo de empresa distinta a la de aglomerar votos. La comparación hipotética con otras regiones de Colombia, donde también surgieron relaciones clientelistas alrededor de la celebración de una figura criminal,

20. El caso del centro comercial Dadeland en Miami hizo historia porque se trató de una masacre a plena luz del día en un espacio público. El motivo fue un enfrentamiento entre Griselda Blanco y Rafael Cardona por el pago de una droga.

muestra como la pobreza de las relaciones capitalistas implicó restricciones insalvables para: 1) la comercialización masiva de cocaína en los mercados internacionales y 2) la difusión de los conocimientos operativos del negocio entre una parte importante de la sociedad.

Pese a que la primera bonanza en Colombia relacionada con una droga ilegal fue en la Costa Atlántica durante el boom de la marihuana y a que delincuentes de todas las clases se vincularon a la bonanza, cuando llegó la oportunidad de traficar con cocaína los costeños no desarrollaron las habilidades necesarias para generar un desarrollo autónomo el negocio. La marihuana era una actividad comercial relativamente sencilla en comparación con la cocaína. Bastaba cultivarla y empacarla. Los compradores venían a buscarla desde Estados Unidos o esperaban la mercancía en puntos de contrabando del Caribe (Cervantes, 1980). La forma de vinculación al negocio iba a estar dada por las relaciones clientelistas. Sin embargo, el clientelismo en la costa tenía una fuerte ascendencia de las relaciones de hacienda (Reyes, 1978). Poco sentido tenía para los campesinos desarrollar redes comerciales o conocimientos sobre procesamiento de cocaína cuando aún vivían en áreas periféricas, aisladas de los circuitos comerciales del país. Salvo en los corredores de contrabando la actividad económica local se reducía a mercados de autoabastecimiento y de subsistencia, con escasa entrada de productos del entorno exterior. En consecuencia, los campesinos y clases bajas de la Costa Atlántica no se integraron en fases operativas de las empresas narcotraficantes más allá de aquellas actividades locales organizadas por criminales de otras regiones cuando el lugar constituía un corredor o punto estratégico para el negocio. Era improbable difundir un conocimiento criminal que involucraba dirigirse al sur de los Andes donde estaban los

cultivos, importar la base de coca, refinarla en cocaína y colocarla en los mercados internacionales, cuando la mayoría de la población apenas salían de sus pueblos y veredas.²¹

Las revelaciones del jefe paramilitar Doble Cero, originario de Antioquia, son contundentes al señalar, sin proponérselo, las características sociales de los campesinos de la Costa Atlántica y sus escasas posibilidades de inclusión en una dinámica comercial:

Nosotros habíamos recorrido el norte del país haciendo unos diagnósticos de problemas muy a lo criollo; mirábamos cómo en toda la costa norte existía una clase alta muy reducida, una clase media muy reducida y una clase baja muy grande. [...] Uno se iba para las fincas y en las grandes haciendas se encontraba unos campesinos viviendo en una casita, de arrimados pues, de agregados, y uno les preguntaba:

-¿Usted cuánto lleva viviendo aquí?

-No, yo nací, aquí

-¿Cómo así, usted nació acá?

-Si es que mi papá era el mayordomo de la finca.

-¿Entonces los hijo suyos también van a ser los mayordomos de la finca?

-Puede que sí (Cívico, 2009: 73).

21. No es casual en ese orden de ideas que la cultura de la migración haya estado asociada al desarrollo del narcotráfico en Antioquia, toda vez que: “El enganche de personal por los carteles de la droga, tanto en Colombia como entre los colombianos residentes en el exterior, para sus operaciones comerciales y necesidades logísticas (transporte de droga y dinero, distribución, etcétera), se convirtió en un medio más para emigrar” (Guarnizo, 2006: 87). *Migración y Desarrollo primer semestre 2006*. Pg. 87. Según los datos del censo 2005 la mayor proporción de migrantes colombianos proviene de las zonas definidas en este artículo como antioqueñas y de Bogotá.

El caso de una famosa empresaria del chance en los departamentos de la costa proveniente de sectores humildes demuestra estas restricciones. Ella construyó sus bases clientelistas a partir de la distribución de dinero, mercados, electrodomésticos y servicios públicos entre la población más miserable de Cartagena y los municipios de los alrededores. Celebró su ascenso económico con la construcción de ostentosas mansiones, la realización de obras filantrópicas en las áreas tuguriales y la conversión de su pequeña sobrina en una figura milagrosa que ganaba todos los reinados de belleza que ella misma organizaba. Las fuentes de ganancias de su negocio estaban en el monopolio sobre ciertas loterías departamentales, el lavado que realizaba con estas loterías y la captura de rentas a través de la contratación pública. En lo que respecta al narcotráfico necesitaba de otros criminales que demandaran servicios de lavado para sacar provecho del negocio. Estas operaciones las realizaba con unos pocos empleados y asesores de confianza. No estaban dadas las circunstancias para que las clientelas estuvieran expuestas a la actividad narcotraficante y desarrollaran un conocimiento colectivo del negocio. Por el contrario, las clientelas estaban expuestas al aprendizaje de la política clientelista como oficio.

Paradójicamente este mismo clientelismo, anticuado y con pocas posibilidades de movilidad social, fue funcional para el auge del paramilitarismo. Era común que sectores pudientes de la sociedad antioqueña invirtieran en la adquisición de tierras y ganado en Córdoba (Ocampo, 2007). Los empresarios del narcotráfico tenían además un aliciente para continuar con esta tradición. Córdoba era un lugar estratégico para la instalación de pistas y muelles clandestinos desde donde exportar la cocaína a Estados Unidos. Fue así que los Ochoa, Rafael Cardona,

Pablo Escobar y los hermanos Castaño, entre otros narcotraficantes, compraron tierras en la región. Las élites locales no tuvieron reparos en vender a buenos precios sus propiedades a los narcotraficantes antioqueños. Algunos como Cesar Cura terminaron trabajando con ellos en el tráfico de drogas. Los narcotraficantes, por su dinero y por la necesidad de protección de su negocio, no demoraron en convertirse en un objetivo ideal para la guerrilla. Aunque en un principio las negociaciones entre las partes permitieron el establecimiento de relaciones pacíficas, cambios abruptos en el precio de la extorsión y expropiaciones arbitrarias rompieron cualquier posibilidad de acuerdo.²² Como resultado los narcotraficantes se insertaron en el proceso de formación de grupos paramilitares.

A principios de 1994, luego de la muerte de Pablo Escobar, los hermanos Vicente y Carlos Castaño llevaron a cabo un proceso de sometimiento de los pequeños grupos paramilitares que existían en la región. Salvatore Mancuso, quien tenía un pequeño grupo paramilitar en el sur del departamento que había mostrado bastante éxito en la contención de la guerrilla y la protección de los hacendados locales, fue contactado por los Castaño para unirse como comandante a su nueva súper-organización paramilitar. No solamente era un combatiente efectivo contra las guerrillas, Man-

22. La razón concreta de los enfrentamientos entre narcotraficantes y guerrilleros parece haber sido la pérdida de unos sacos cargados de dólares que un avión que estaba a punto de aterrizar tuvo que lanzar a tierra por problemas de combustible. Como los sacos nunca aparecieron culparon a los guerrilleros que habitaban en un poblado vecino. Vendría la masacre de ese poblado, Mejor Esquina, y luego una guerra muerte entre paramilitares y guerrillas. Más allá de este suceso particular, las causas del enfrentamiento entre narcotraficantes y guerrillas en Córdoba, al igual que el resto del país, obedecieron a la presión que ejercían los grupos subversivos en su proceso de expansión nacional durante el principio de la década de los ochenta. Ver Sánchez Jr. (2003).

caso le ofrecía a los Castaño una puerta de entrada a las clases altas de la sociedad cordobesa. Mancuso sería directo en una entrevista personal cuando afirmó que “años después Carlos Castaño me comentó que se acercó a mí para establecer confianza con la gente importante de Montería. Antes ellos estaban concentrados en el lado izquierdo del río Sinú y era poco lo que interactuaban con la ciudad”.²³ Lo irónico es que Mancuso dirigiría no solamente la resistencia a la expansión del EPL y las FARC, sino también sería el líder de la resistencia contra la ascendencia de narcotraficantes y paramilitares de otras regiones en el departamento. Un familiar de la principal ‘casa política’ que se enfrentó a Mancuso por el control de las elecciones y los cargos públicos en Córdoba diría en una entrevista:

es cierto que Mancuso nos hizo mucho daño y nuestro pariente [se refiere a un reconocido político de la región] está preso injustamente por culpa de la influencia paramilitar. Pero si no hubiera sido por Mancuso los paísa hubieran arrasado con Montería.²⁴

El paramilitarismo en Córdoba que en el largo plazo dirigiría Mancuso sería dependiente de los narcotraficantes de otras regiones que se encargaban de abrir las rutas y mercados en el exterior y de los aspectos operativos al interior del país (transporte, laboratorios, bodegaje, etc.). Las élites cordobesas se especializaron en el lavado y el testaferrato que implicaba poseer algún tipo de reputación comercial y conocimientos contables. El desarrollo del comercio y de los servicios se hizo notorio en Montería y

23. Entrevista a Mancuso en cárcel de Itagüí.

24. Entrevista en Montería. Se mantiene en la reserva el nombre del entrevistado. Se cambia el término exacto de parentesco y el partido político para evitar su identificación.

municipios intermedios como Tierralta a raíz de los nuevos negocios que surgían como forma de blanqueo de capitales y por la redistribución de excedentes de la droga que generaba la misma guerra a través de los salarios de los soldados y los cultivos ilícitos.

La difusión social del narcotráfico en este caso fue un proceso desde arriba. Las clases altas de Córdoba amoldaron sus patrones de dominación a participar desde sus posibilidades operativas en las rentas de las drogas. Desde el control del poder político y de la propiedad de la tierra lograron acceder una nueva fuente de riqueza que les permitió aumentar su capacidad adquisitiva y reclamar una mayor ascendencia en el poder político nacional. La dominación de la población desde el proyecto paramilitar de Mancuso permitió concentrar mayores recursos y votaciones para aspirar a cargos de representación nacional y, en consecuencia, la influencia de la clase política en las instituciones del estado central se incrementaría. La inyección de dinero líquido en la región fue de igual modo un mecanismo de inclusión de la población más pobre en el mercado y un freno a la rebelión que se labraba por la reclamación de tierras por los campesinos. El tema de la tierra²⁵ se resolvió mediante una reubicación de la población en barrios tuguriales de Montería y otras ciudades de la costa Atlántica, donde el asunto no era la redistribución de la propiedad rural sino cómo atender las necesidades sociales de pobres urbanos.²⁶

25. Las luchas agrarias en el departamento de Córdoba y en otras regiones de la costa Atlántica están reseñadas detalladamente en textos como *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia* de León Zamocs (1985) y *Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba* de Víctor Negrete (2007). La versión de la historia desde la perspectiva del grupo guerrillero EPL se encuentra en *Para Reconstruir los Sueños* de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas (1994).

26. La diferencia de los problemas y demandas sociales de los habitantes de las zonas tuguriales de Montería en comparación con los pobres rurales son tratados por Ocampo (2003).

Los mismos mecanismos de difusión social utilizados por los narcotraficantes para celebrar su éxito fueron utilizados para constituir los ejércitos paramilitares y ejercer el control de población y territorios. El clientelismo y su lógica de patrón proveedor se replicaron en las zonas donde los narcotraficantes invirtieron en la adquisición de tierras. Pero de las diferencias en el contexto social derivaron a su vez enormes diferencias en la forma en que el narcotráfico se difundió en el orden social. Por estar la lógica del clientelismo en Córdoba sujeta a la tradición de las grandes haciendas ganaderas, la lealtad de los peones y el aislamiento de las comunidades campesinas,²⁷ serían las clases altas quienes negociarían con los narcotraficantes su ingreso y aceptación en la sociedad regional. Por eso no es casual que mientras los principales jefes paramilitares de Antioquia como los Castaño, Macaco y Don Berna provenían de sectores humildes, los de la Costa Atlántica como Mancuso y Jorge 40 fueran miembros de las tradicionales élites terratenientes. Las pobres relaciones capitalistas²⁸ impidieron que campesinos de clases bajas pudieran aprovechar las oportunidades que ofrecían la guerra y el narcotráfico como mecanismo de movilidad social.

27. Una buena descripción de la relación patrón - cliente de la hacienda cordobesa la ofrecen Cepeda y Rojas: "Eran campesinos ricos que cedían a sus trabajadores pequeñas parcelas para producir alimentos para sus familias, aceptando una parte para vender en el mercado como forma de ingreso. Además, bautizaban a los hijos de sus trabajadores, lo que generaba una relación de compadrazgo, y en cada cosecha convocaban fiestas llamadas corralejas en las que regalaban licor a los campesinos en una plaza cercada en la que ingresaban toros y becerros justo en el momento en que ellos arrojaban billetes a la multitud. Había algunos muertos y heridos lo cual no impedía que la fiesta continuara, amenizada por la música de bandas de viento, que en Córdoba se llaman "pelayeras" en homenaje al municipio de San Pelayo, sede del Festival Nacional del Porro" (Cepeda y Rojas, 2008:25).

28. Dos textos reflejan ampliamente la pobreza del desarrollo capitalista de la hacienda costeña y la naturaleza de la subordinación de los sectores campesinos: *Mompox y Loba: Historia Doble de la Costa* de Orlando Fals Borda (1979) y *Latifundio y poder político* de Alejandro Reyes (1978).

El caso de las mafias de esmeralderos de Boyacá también es un ejemplo de las limitaciones que el escaso desarrollo de las relaciones capitalistas planteaba a la expansión del narcotráfico. A pesar de disponer de un producto mineral que se comercializaba en el exterior, el contexto social donde ocurría la explotación de las esmeraldas se mantenía en condiciones de absoluto atraso. Las relaciones clientelistas, el patronazgo, la vida campesina tradicional y una economía escasamente monetarizada, permanecían como el eje del orden social. Ubicados a casi mil kilómetros de las costas era prácticamente imposible que una mafia campesina pudiera establecer contactos con los mercados de droga del mundo desarrollado. El Mexicano Rodríguez Gacha, Gilberto Molina, Gaitán Mahecha y demás narcotraficantes de Boyacá necesitaron de operadores antioqueños para abrir las rutas hacia el mercado de cocaína estadounidense. Una entrevista a alias 'Nicolás', desmovilizado del Bloque Vencedores de Arauca podría resumir la situación de antioqueños comerciantes y boyacenses productores. Nicolás, originario de las zonas de influencia de los mafiosos boyacenses, había estudiado veterinaria en una universidad de Villavicencio y era importante para el manejo administrativo del grupo paramilitar. Conocía de contabilidad, logística y política, pero sus conocimientos sobre redes comerciales eran nulos. En contraste, los mellizos Mejía Múnera eran rústicos campesinos del Norte del Valle sin mayor formación escolar y aun así Nicolás dependía de sus conocimientos de las redes de tráfico para acceder a las ganancias de la droga:

Yo trabajé con los mellizos como autodefensas, como narcotraficante nunca. Yo le decía: Don Pablo enséñeme porque usted no tiene un Phd, usted tiene un título aún más grande de comercio internacional. Le preguntaba

cómo hace uno para hacer negocios con gente que no conoce, y que le cumplan y le manden la plata. Eso no lo hace un muchacho de los Andes que estudie comercio internacional.²⁹

La cuestión no era un asunto de predisposición a la criminalidad, el mismo Nicolás admitió que se volvió “bandido por gusto”, ni de habilidades, era un criminal graduado de una universidad. Lo definitivo era el conocimiento colectivo sobre las redes comerciales de tráfico de cocaína. En el Norte del Valle unos campesinos sin mayores habilidades o formación pero con enormes ambiciones criminales podían disponer de ese conocimiento para realizarse como narcotraficantes.

Sin las redes comerciales de los antioqueños el papel de los narcotraficantes provenientes de las mafias de las esmeraldas hubiera sido irrelevante.³⁰ No obstante, las circunstancias históricas y sociales del suroriente del país hicieron de la participación de estos mafiosos una condición imprescindible para la consolidación del narcotráfico en Colombia. Se trataba de la presencia de una población colona disponible para la siembra de hoja de coca al punto de hacer innecesaria la importación de base de coca desde Perú y Bolivia. Desde finales de la violencia clásica continuos flujos de colonos habían huido a las sabanas y selvas del suroriente

29. Entrevista a Nicolás Mería Moreno (2009). “Me volví bandido por gusto”. Sitio web: Verdad Abierta. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/1059-entrevista-exclusiva-me-volvi-bandido-por-gusto-anicolas-texto-completo>. Consultado: marzo de 2009.

30. La causalidad contraria no es tan clara. Sin las mafias boyacenses es muy probable que de todas maneras los antioqueños hubieran desarrollado una difusión de los conocimientos operativos del narcotráfico. De hecho, cronológicamente ya lo habían hecho. Antes que los mafiosos de las esmeraldas se convirtieran en importantes narcotraficantes y que los laboratorios y los cultivos inundaran el suroriente del país, el Cartel de Medellín y de Cali eran una realidad.

en busca de un lugar de asentamiento definitivo (Jaramillo, *et al.*, 1989; Molano, 1987; Londoño, 1989). Era un territorio extenso, casi una cuarta parte de la superficie de Colombia, que superaba las demandas de poblamiento. Al problema de una colonización caótica se le uniría la expansión de una pequeña guerrilla que décadas más tarde se convertiría en un ejército formidable, las FARC. Sin necesidad de establecer un credo comunista entre los colonos las FARC se encargarían de poner algún tipo de orden entre la población que progresivamente se asentaba en zonas de frontera. Era la aplicación clientelista de un gobierno guerrillero como única oferta disponible de orden y de ley.

Los miembros de las mafias de la esmeralda tenían tierras y ganados en las áreas que circundaban los territorios de colonización. Estas áreas constituían el corredor natural entre las zonas de producción de base de coca³¹ y los puntos de salida hacia el mercado internacional. También eran territorios ideales para montar grandes laboratorios clandestinos de producción de cocaína como el famoso Tranquilandia. Por consiguiente, los narcotraficantes que venían de las mafias esmeraldas eran socios valiosos para los mafiosos antioqueños. En el momento que los narcotraficantes llevaron los cultivos ilícitos las FARC se mostraron reacias a permitir la siembra de coca.³² Pero finalmente la visión conservadora

31. En una primera instancia la producción de hoja de coca estaba basada en los Andes peruanos y bolivianos y de allí pasaba a pistas clandestinas en el suroriente de Colombia. Progresivamente los cultivos estarían ubicados en las mismas selvas y sabanas colombianas.

32. Gonzalo Rodríguez Gacha fue uno de los grandes promotores de la siembra de coca en las selvas y sabanas del suroriente del país. Creó solidas bases clientelistas entre los campesinos e innovó con variedades de semillas más eficientes para los suelos locales (Cortes, 1993). Otra versión sobre el desarrollo de los cultivos ilícitos la tiene Doble Cero, quien atribuye al Cartel de Cali una alianza con las Farc como resultado del control por el Cartel de Medellín de los centros de abastecimiento de coca en Perú y Bolivia (Cívico, 2009).

de la guerrilla de que ‘las drogas corrompían a la revolución’ tuvo que ceder ante los apremios de la población. La razón que tuvieron los narcotraficantes colombianos para traer los cultivos de coca al país era romper la dependencia de los centros provisión de base de coca en Perú y Bolivia. Los riesgos del contrabando de base de coca a Colombia y las campañas de erradicación de cultivos en el sur de los Andes además de incrementar los costos de producción provocaban periódicamente desabastecimiento de materia prima en los laboratorios. Para la población local las siembras se convirtieron en una bonanza inimaginada. En adelante sería imposible detener la avalancha de cambios sociales que trajeron los cultivos. La figura del patrón narcotraficante se convertiría en la fuente de autoridad local en aquellos territorios que delimitaban con las zonas controladas por las guerrillas. El clientelismo se adecuaría alrededor de un negocio ilegal para perfilar la estructura de poder y de prestigio entre los habitantes locales. La celebración del éxito de los capos de la droga,³³ así como del negocio mismo, haría parte de las fiestas populares y de la estética visible de los pueblos y veredas. Por ser una zona de colonización reciente los procesos

33. Las diferencias entre boyacenses y antioqueños también se perciben en la naturaleza de la celebración social del éxito como mafioso. Al igual que en Antioquia los mafiosos esmeralderos celebraban ante sus clientelas su éxito económico con particular vistosidad. Los corridos, los automóviles, las mujeres, la moda misma se ajustaba a resaltar a aquellos que tenían poder y riqueza en el mundo de las esmeraldas. Pero la celebración seguía los patrones de sociedad cerrada que caracterizaba a estas regiones. Era ante su comunidad. No desafiaban, ni pretendían incluir dentro de los festejos, a otros sectores o grupos sociales. Su propia llegada a Bogotá se realizó en espacios sociales muy definidos: el Barrio Santa Isabel, los Sanandresitos y la avenida Jiménez. Sus relaciones con las élites bogotanas se limitaban a transacciones acerca del poder político sobre las minas y la protección frente a las autoridades nacionales. No sucedieron casos equivalentes a los de los mafiosos antioqueños que se mudaban al Poblado, el barrio de los ricos tradicionales de Medellín, se enviaban con las hijas de las élites y se convertían entre los adolescentes de clases altas en un modelo de imitación.

de acumulación y la ostentación eran aun más vistosos que en las áreas urbanas del país. Las tabernas, hoteles, prostíbulos, almacenes y vitrinas ofreciendo mercancías del mundo moderno inundaron los pueblos con los nuevos ingresos de los colonos cultivadores de coca.

Igual de significativo para la imposición de un orden social filtrado por el narcotráfico fue la imposición de ejércitos privados como estados locales. La tregua entre narcotraficantes y guerrillas rápidamente estalló en pedazos por los mismos motivos que en la costa: extorsiones, secuestros, quemas de fincas, robos de ganado, etc. Los avances de la guerrilla se convirtieron en una amenaza para los mafiosos que controlaban aquellas zonas donde se había llevado algún tipo de acumulación y asentamiento de población conectada a los mercados internos del país. Para poder protegerse de la expansión de la guerrilla los narcotraficantes tuvieron que organizar enormes ejércitos. No bastaba con las pequeñas milicias campesinas, ni con los guardaespaldas de los esmeralderos. En el largo plazo el resultado sería la aparición de aparatos militares con varios miles de soldados bajo el mando de señores de la guerra. El poder político sería de ese modo absorbido en su totalidad por la lógica de la economía de las drogas y la organización en gran escala de la violencia. Lo que junto a la disponibilidad ilimitada de base de coca para la fabricación de cocaína y, más importante, de una población de alrededor de un millón de habitantes que vivían de la coca, haría inviable la represión estatal de las primeras fases de la cadena productiva. Un orden social fundado en las relaciones económicas de la hoja de coca blindaría la respuesta del estado ante una actividad delincencial. Y si bien los narcotraficantes de la zona se convirtieron en los principales proveedores de base de coca para las diferentes organizaciones

criminales, el desarrollo de los cultivos entre comunidades de colonos se extendería a muchas áreas al punto que Colombia se convertiría en el principal productor mundial de hoja de coca.

Los efectos en la difusión social del narcotráfico se harían sentir también en la aparición de mafiosos y señores de la guerra originarios de los Llanos Orientales. El aprendizaje de la empresa narcotraficante y de la organización privada de la violencia rebasaría el foco inicial de los mafiosos de las esmeraldas y se incrustaría en el orden local. Una década más tarde criminales como alias 'Martín Llanos' y alias 'Cuchillo', originarios de Casanare y Meta respectivamente, se convertirían con sus ejércitos privados en los grandes jefes regionales del tráfico de drogas. Martín Llanos se enfrentaría con Miguel Arroyave, un narcotraficante antioqueño amigo de Vicente Castaño, por el control de la región. Arroyave sería finalmente asesinado por Cuchillo cuando era subalterno de su ejército privado. Recientemente Cuchillo se atrevería a atentar en dos ocasiones contra Víctor Carranza, el jefe histórico de las esmeraldas en Colombia.

Las consecuencias de la desmesura

No todo el proceso de imposición social del narcotráfico sería conservador en el sentido que prevalecerían el clientelismo y las anteriores estructuras de dominación. La ruptura de la primacía en lo local de las antiguas élites no fue solo el resultado de la mayor capacidad económica de unos criminales para insertarse en los espacios de poder tradicionales. También fue el producto de los cambios en el orden social que un consumo inédito de bienes del mundo moderno trajo a municipios y vecindarios que hasta entonces habían vivido en asilamiento del entorno exterior. Gran parte del proceso de definición de

poder en un contexto social proviene de la creación de valores simbólicos sobre ciertos objetos de consumo y del dominio sobre la distribución de estos objetos (Douglas e Isherwood, 1981). Cuando la sociedad aprecia las cruces o las efigies por su valor como símbolos religiosos, quienes manejan la atribución de valor a los objetos sagrados, por ejemplo sacerdotes o brujos, adquieren un poder sobre el resto de individuos que creen en sus virtudes místicas o sobrenaturales. En el mismo orden de ideas, cuando la sociedad valora objetos de consumo masivo quienes poseen los medios para adquirirlos y para asignar su distribución en esa sociedad se convierten en poderosos. De acuerdo a Appadurai (1991): “cuando los cambios rápidos en la esfera del consumo no son inspirados y regulados por los detentadores del poder, parecen amenazar a estos.”(Appadurai, 1991:45). Una anécdota de unos sucesos ocurridos a mediados de siglo XX en el municipio boyacense de Tenza revela como el control sobre los bienes de consumo tiene efectos simbólicos cruciales para quienes aspiran a mantener el poder. En ese municipio el uso de zapatos era un derecho reservado a los individuos poderosos, el resto de la población usaba alpargatas.³⁴ Cuando el dueño de un restaurante de origen humilde, que había tenido cierto éxito económico, viajó a Bogotá y decidió comprar unos zapatos fue detenido apenas regresó al pueblo y la gente notó su nueva indumentaria. El gamonal de Tenza, quien era también el alcalde, alegó que estaba detenido por desafiar a la autoridad.³⁵ (Appadurai, 2010: 33).

34. Las alpargatas son unas sandalias de cuero o fibras naturales hechas artesanalmente por los campesinos.

35. El texto del caso de Tenza es tomado literalmente de un documento aun sin publicar del mismo autor: *La mediación política en Colombia después de las armas y las drogas*. 2010. Pg. 33.

Fue así que la enorme capacidad adquisitiva adquirida por una clase criminal, apabullante en comparación con los recursos de las élites tradicionales, revolucionó las estructuras de dominación social al introducir una nueva serie de bienes y servicios a las expectativas de consumo de la población y al controlar los recursos que determinaban las posibilidades de consumo de los miembros de la comunidad. En el proceso transformaron gran parte del sistema de valores de las anteriores élites regionales al permitir la difusión de objetos que por su propio uso y contenido simbólico cuestionaban los cimientos del control social. La carga de hedonismo del consumo de masas de la sociedad occidental de los setenta traía elementos radicalmente transgresores (Alonso, 2005). El ideal del bienestar basado en la propiedad de una vivienda, un auto y demás objetos industriales de consumo masivo, daba lugar a individuos hedonistas que gozaban de un mercado dirigido a satisfacer la sensualidad, el esplendor y la opulencia de la sociedad post-industrial. Las discotecas, los desfiles de moda, los viajes exóticos, los centros comerciales, los restaurantes, sitios de entretenimiento temáticos y en general la vida vista como una pasarela o como un comercial de TV, cambiaron radicalmente el valor simbólico del consumo de masas. El conservadurismo del bienestar de la vida en familia no tenía cabida en una sociedad cuyos individuos querían divertirse de manera anónima, en medio de las aglomeraciones urbanas y del esplendor económico de la época. El narcotráfico sacó ventaja de estos cambios en la sociedad de consumo y permitió su llegada a contextos sociales donde apenas se estaban resolviendo las condiciones mínimas de salubridad pública. Las mercancías propias del consumo de masas se convirtieron en un elemento valioso para las comunidades así no contaran con servicios básicos como agua potable o alcantarillado. Tener electrodo-

mésticos, potentes estéreos, televisión por cable, celulares e Internet, no solo se trataba de un asunto de comodidades en la vida diaria, se trataba también de las posibilidades que tenían los individuos de socializar, acceder a un estatus, entretenerse y asumir un papel en las estructura de relaciones de la comunidad. La organización del trabajo en la sociedad ahora estaría sujeta a su capacidad de adquisición de estos objetos. Las nuevas pautas del consumo de masas traídas por el narcotráfico influirían así en la definición de los objetos materiales que configuraban el orden de la sociedad. Una crónica periodística sobre las comunidades de desplazados de Riosucio, un municipio perdido en las selvas del Urabá chocoano, desprevenidamente describe esta nueva circunstancia:

En Riosucio, aunque es común tener televisor o nevera, no todos tienen baño o agua potable. Rafael es un moreno de ojos grandes que pese a los golpes que le ha dado la vida, pues es doblemente desplazado, no ha perdido la alegría ni el sentido del humor. Su voluntad lo ha llevado a sobreponerse a todo, en una población donde un televisor, un computador, una nevera son algo normal, pero no así un baño -esencial en cualquier vivienda de una ciudad- ni el agua potable. [...] Su casa tiene cinco habitaciones, buena cocina y sala de descanso, donde sobresalen un computador y un equipo de sonido, que se encuentra dañado, y su inseparable televisor. “Aún me faltan algunas puertas (solo tiene la de la calle), unas cuantas ventanas en los cuartos, el cielo raso, pero lo que más quiero es construir un baño”, dice con un poco de pena. Y no es para menos. En esta población eso es un lujo que no se da el 90 por ciento de los habitantes. Allí, el baño queda en el río Atrato, algunos están a la intemperie y otros apenas aislados por tejas de zinc. Y a pocos metros se encuentran los lavaderos de

ropa, el sitio de darse una ‘ducha’ a totumadas y el lugar donde los niños juegan y se sumergen en las profundidades del Atrato. Del río también toman el agua para usar en las casas y que es transportada en galones y ollas, porque Riosucio no cuenta con acueducto (El Tiempo, 2010a).

Los narcotraficantes, por supuesto, no asimilaron con toda la fidelidad los valores del mundo moderno implícitos en el consumo de masas. No incorporaron por ejemplo los elementos de impersonalidad y democratización en el esplendor y lujo que ostentaron. Seguían reproduciendo patrones conservadores en las formas de distribuir los medios de consumo. Quienes en la comunidad les eran leales y servían a construir su red de intercambio clientelista podían acceder al nuevo mercado de masas. Quienes no contribuían a su consolidación social quedaban por fuera de la celebración.³⁶ Al final se mezclaba la opulencia de la celebración del consumo de masas con la celebración de los valores populares más tradicionales y arraigados. Para Salazar y Jaramillo (1992) la asimilación de los objetos del mundo moderno y sus valores simbólicos se trataba además de una forma “híbrida, conformada con valores y costumbres de la tradición de antioqueñidad y otras formas propias de una sociedad de consumo llevada al extremo”(Salazar, 1992: 33). Elementos similares podían hallarse a lo largo de la geografía del narcotráfico en Colombia. Desde las zonas cocaleras hasta los corredores finales de tránsito se encontraban sofisticados mercados de mercancías del mundo moderno junto a tabernas que reverberan con el ritmo de corridos populares que celebran

36. La negación al consumo llegó al extremo en el caso de Escobar de obligar a la juez que ordenó su primera detención a tener que usar transporte público mientras él estuviera vivo. Cada vez que la Juez compraba un carro ordenaba a sus sicarios que lo incendiaran.

las hazañas y tragedias de los narcotraficantes. A los guerreros de los grupos paramilitares se les premiaba con los más extravagantes objetos de ostentación en plena selva:

Miguel [Arroyave] ejercía mucho poder sobre sus subalternos, por sus detalles con ellos, les regalaba desde camionetas último modelo, según fuera su desempeño y cuando era fecha de pago, para los patrulleros, les mandaba a traer mujeres. Estas se sometían a acostarse con ellos donde fuera, hasta en los potreros con colchonetas a la vista de todos, [...] Con sólo esto Miguel se había ganado muchos patrulleros a su favor, también a mandos medios que veían con buenos ojos estas acciones, pues según ellos, si los patrulleros estaban satisfechos les serían más fieles (Serrano, 2009: 42).

Si bien en las extravagancias y en el despilfarro de estos súper patrones era difícil encontrar un proyecto coherente de rebelión, la llegada del consumo de masas a espacios sociales excluidas del mercado moderno significó una transformación profunda en las jerarquías de poder. La naturaleza transgresora del consumo traído por los narcotraficantes fue efectiva para romper las pautas de dominación de los anteriores grupos de poder en el nivel regional. La ostentación de vestuarios, automóviles y de demás objetos de lujo, desconocidos en su entorno, potenciaba el efecto de la celebración social de los narcotraficantes y su imposición como nuevos 'patrones' al replantear el valor simbólico de los objetos que distinguían anteriormente a la población. Fue así que en pequeños municipios aislados de los mercados modernos, los bienes y las formas austeras de consumo que distinguían a los notables, caciques y terratenientes de los siervos, campesinos y clases bajas volarían en pedazos con la arremetida del nuevo consumo traído por los narcotraficantes. Los espacios

de consumo que enmarcaban el respeto de la gente distinguida de Fredonia, por ejemplo, resultaban poco menos que anticuados en cuanto a las nuevas formas de socialización del mundo desarrollado. El valor material de los bienes que sustentaban la distinción entre los grupos sociales era ridículo en comparación con las enormes separaciones simbólicas que establecían. La magnitud de la segregación era desproporcionada en relación a los valores de igualdad social del mundo moderno si se tiene en consideración que al componente económico que distinguía a unos de otros se agregaba un componente racial:

En Fredonia había blancos y había negros y no se podía parar nadie en la mitad. [...] Ahí o se era principal o se era negro o montañero. [...] El atrio era territorio exclusivo de los blancos. [...] Las heladerías eran exclusivamente para el blanco, lo mismo que el club social. [...] Era tan grande la distancia de las clases sociales que de niños nos enseñaron que no se saludaba a los negros ni se hablaba con los de abajo. Los de abajo podían ser los que venían del campo: les decíamos “montañeros”. O, también podían ser los que subían de la Calle Abajo o de Corea, como le decían al barrio de aquellas. Cuando esos llegaban a la plaza solo podían pisar el atrio cuando iban a misa. Y en misa tenían que hacerse en la parte trasera de la iglesia. [...] La procesión de los novios y los matrimonios y la del Prendimiento se instituyeron para la gente elegante y clásica que marchaba detrás de El Santísimo. Los demás tenían que conformarse con ver el paso de las imágenes y de la gente de arriba que se vestía con la mejor ropa de manera que esa procesión era también algo así como un desfile de modas en el que no se sabía cuál inflaba más el pecho para sentirse elegante (Castro Caycedo, 1997: 17-20).

Cuando Jaime Builes llegó convertido en nuevo rico a Fredonia era demasiado fácil acabar con esas distinciones. Las ganancias del narcotráfico eran avasalladoras con respecto a la capacidad económica de las antiguas elites para mantener los valores simbólicos de los bienes que diferenciaban los grupos sociales del pueblo. Los relatos de Betancourt sobre los mafiosos del Valle muestran que Fredonia no fue el único pueblo donde el dinero de la droga transformó radicalmente la vida social por efecto de la disponibilidad de nuevas formas de consumo. Las transformaciones de Roldanillo pueden encontrarse en todos los municipios donde residen los narcotraficantes del Cartel del norte del Valle:

Roldanillo ha progresado con las mafias; aquí no había casas de más de dos pisos y mire ahorra: centros comerciales, edificios, hoteles, piscinas, supermercados y las tremendas fincas y haciendas de los alrededores. Durante la violencia el mercado se hacía en la plaza, con toldas y mesas de madera; más tarde se construyó la Galería Municipal. Ahora los de la Galería están en crisis, pues los que mandan son los de los supermercados y las famas de carne, regadas por todo el pueblo; hay más de ocho supermercados. No sé si venderán tanto, pero los capitales que tienen no se consiguen así tan facilito, trabajando legalmente (Betancourt Echeverry, 1998: 162).

En Armenia con el delirante arribo de Lehder a la ciudad las modas se trastocaron de la noche a la mañana. La economía de la bucólica aldea cafetera dio paso a un derroche sin precedentes de ostentación y consumo conspicuo. Una biografía escrita por uno de los paisanos de Lehder se centra de manera desprevenida en narrar los efectos que tuvo su llegada en la vida social:

Armenia vio aumentar considerablemente el número de establecimientos –tiendas especializadas en la venta de ropa

sport— de esa descomplicada que usan los jóvenes en el mundo moderno. Por el sector tradicional para el comercio y/o en los barrios residenciales más altos [sic] pero también en los habitados por la clase obrera se vieron velozmente multiplicados este tipo de pequeños comercios. Había que entrar en la moda. Las empresas comerciales, los carros, los aviones y desde luego los millones de pesos invertidos por Carlos Lehder en tierras cultivadas del Quindío llevaban —por reflejo— a los nuevos mozos de la comarca al concepto renovador de las modas. Había que usar camisas y pantalones arrugados, botas y zapatillas de las más estrambóticas que estuvieran en el mercado. Hasta los más remilgados entraban en esa órbita. Los productos para el cabello o simplemente anunciados por televisión para la sociedad de consumo alcanzaron entre la juventud quindiana el más elevado mercado en toda la historia de la región (Orozco, 1987: 97-98).

En Medellín los narcotraficantes irían más lejos por la disponibilidad de un mercado de lujo en una ciudad de más de un millón de habitantes. La ciudad, pese a que su otrora poderosa industria atravesaba la peor crisis de su historia, se inundó de centros comerciales, discotecas, almacenes de moda y espacios de consumo moderno. El hedonismo del consumo liberó incluso las costumbres sexuales de la población. Las hijas de las clases altas terminaron de novias de nuevos ricos que no escatimaban el menor dólar para mantener contentas y conformes a sus compañeras sentimentales. Llevar a la cama a las hijas de quienes antes consideraban sus patronos fue por supuesto uno de los apogeos de su revancha social. Pero la celebración de los narcotraficantes no paró allí. Su resentimiento y sus ansias de reivindicación los llevaron a incluir en su celebración a todos los que reconocieran su ascenso social. Bastaba estar dispuesto

a ser parte del cortejo para ser invitado a un derroche de licor, cantantes famosos, caballos de paso fino, automóviles de lujo, modelos y reinas de belleza. Casi toda la sociedad, de una manera u otra, hizo parte de una fiesta hasta entonces desconocida.

El significado social de esta fiesta no puede reducirse a sus componentes más frívolos e inmediatos. Fue la expresión de un proceso histórico de mayor duración, en que nuevos sectores que reclamaban parte del espacio que en Medellín habían acaparado las élites tradicionales finalmente asentaron su influencia social. Muchos años antes, en la década de los cincuenta, cuando el Estado colombiano construyó el aparato burocrático necesario para la modernización del país, el poder de los políticos profesionales se incrementó en la medida en que las elecciones se convirtieron en el mecanismo de nombramiento de los cargos públicos. La élite empresarial de Antioquia se rehusó a participar de las campañas electorales, las movilizaciones populares y el uso masivo del clientelismo político como mecanismos para acceder a los cargos públicos. Era esa élite empresarial la que la historiografía antioqueña asocia a los valores culturales propios del capitalismo moderno, -ahorro, honestidad, trabajo duro, etc., y que accedía a los cargos públicos como un reconocimiento a su éxito en el sector privado. En consecuencia, se retiraron a sus empresas, se centraron en el poder económico y dejaron en manos de los profesionales de la política, compuestos por sectores emergentes, el manejo de lo público (Ocampo y Dover, 2006). El poder social continuó girando alrededor de estilos de vida austeros en que no había lugar para la exhibición de las fortunas. El consumo era esencialmente un acto privado, en que las estrictas jerarquías de la vida social limitaban el acceso a los espacios de celebración de las élites.

La migración a la ciudad de nuevas masas de habitantes del campo y de municipios pequeños trajo consigo un aumento en la presión por inclusión en la sociedad moderna (Uribe de Hincapié, 2001).

Invasores de tierras, proletarios, rebuscadores, sectores medios, profesionales y élites pueblerinas venidas a menos, fueron configurando una trama urbana de relaciones cruzadas por conflictos y desajustes que carecía de referentes nuevos de identidad y que buscaba otros canales para expresar sus demandas en el espacio de lo público (Uribe de Hincapié, 2001: 109).

Parte de esta presión era resuelta por el desarrollo económico de la industria antioqueña, otra parte era atendida por el clientelismo político y su capacidad de proveer servicios públicos y ofrecer trabajo en la administración pública. Paulatinamente otros actores sociales se hacían a un espacio importante en la sociedad urbana. Pequeños comerciantes, contrabandistas y artesanos surtían de bienes y servicios a una población que crecía en tamaño e ingresos. Se trataba de un comercio informal de artículos de bajo precio que proveían aquel segmento del mercado que no era cubierto por la industria nacional. Era una época en que la producción nacional estaba protegida y pese a ciertos logros en el crecimiento industrial el sistema económico no pudo evitar dos circunstancias que influirían en el desarrollo del narcotráfico.

En primer lugar el crecimiento de la industria y de la economía en general no fue suficiente para incluir dentro del sector formal a los flujos de población rural que llegaban a Medellín. En gran parte expulsados por la violencia de mediados de siglos, estos habitantes se enfrentaban a un proceso intempestivo de cambios en sus relaciones económicas. Tenían que garantizar su subsistencia en las

condiciones más precarias de asimilación a la economía moderna de una ciudad. Los problemas de vivienda, alimentación y acceso a agua potable se resolvían a través de empleos informales, ventas ambulantes y la adscripción a alguna red clientelista. El ideal de una sociedad capitalista moderna donde los empresarios podían garantizar el surgimiento de una clase media y el bienestar de sus obreros, y en consecuencia donde se vivía una perfecta armonía social, se iba diluyendo ante la realidad de una ciudad que no estaba en condiciones de incluir a nuevos sectores populares que emergían desde su interior y desde los pueblos vecinos (Franco, 2006).

Y en segundo lugar, al malestar de las clases más bajas que quedaban por fuera de toda perspectiva de inclusión se sumaba el malestar en muchos sectores, no necesariamente pertenecientes a las clases más bajas, que no encontraban mayores posibilidades de ascenso o al menos una forma de ocupación que fuera valorada socialmente. El mundo de las élites empresariales no dejaba mayor margen para los recién llegados. Era demasiado complicado acceder al capital inicial, las relaciones políticas y contactos sociales necesarios para ser aceptado dentro del entorno de las grandes empresas antioqueñas y acceder al poder económico.³⁷ No era tampoco un sector industrial que en los

37. En palabras de María Teresa Uribe: “El modelo industrial sustitutivo fue más cerrado, más monopolístico y más inaccesible al ciudadano corriente; el horizonte de la acumulación dejaba de estar abierto para los más hábiles, los más capaces y los más arriesgados. Estos requisitos tenían que estar asociados ahora con el dinero para poder entrar al mundo de la acumulación. Sin embargo, el imaginario del ethos sociocultural seguía funcionando y se reproducían “mentalidades empresariales” que no tenían espacio para concretarse en el mundo económico. El acelerado desarrollo del narcotráfico en Antioquia quizá se haya lucrado de este exceso de “mentalidad empresarial instalada” y de una trama de relaciones que, como la mercantil especulativa decimonónica, está abierta para quienes asuman riesgos y situaciones potencialmente peligrosas” (Uribe de Hincapié, 2001: 113).

sesenta y setenta se caracterizara por su capacidad de innovación y apertura de nuevos mercados, lo que hubiera ampliado las posibilidades a sectores emergentes que pudieran explotar sus habilidades empresariales sin las restricciones de crédito, influencia política y desenvolvimiento social. La competencia era principalmente por el abastecimiento del mercado nacional que representaba una demanda cautiva para los sectores empresariales ya establecidos desde el periodo de la industria protegida a la competencia extranjera (Franco, 2006). Quedaba como opción la carrera política alrededor de la competencia electoral y el manejo de las clientelas y los cargos públicos. Pero no había espacio suficiente para todos los sectores con aspiraciones de ascenso y no todos poseían las habilidades necesarias para el manejo de la política clientelista. Otra alternativa era el desarrollo del comercio informal, el mercado de contrabando, la delincuencia y la guerrilla. Algunos delincuentes antioqueños participaron incluso en la bonanza marimbera y propiciaron el desarrollo de cultivos en el Urabá (Ortiz, 1999). Las viejas rutas de contrabando sirvieron a los primeros traficantes de marihuana y posteriormente de cocaína. Muchos jóvenes, algunos incluso pertenecientes a clases altas y medias, viajaron a Estados Unidos a buscar oportunidades y se encargarían de establecer los primeros contactos en los mercados mayoristas de drogas.

En la década de los setenta, cuando surgió el boom de las mafias de la cocaína en Antioquia, estos sectores encontraron en el narcotráfico la oportunidad de reclamar los espacios sociales restringidos por la anterior estructura económica. Los excedentes de las drogas potenciaron los recursos disponibles para los profesionales de la política y los mercados informales. Los cuadros políticos de las comunidades tenían ahora como competir con los barones electorales que monopolizaban los

presupuestos del estado y las plazas de contrabando, como el Sanandresito y el 'hueco', rebozaban con la mercancía que se importaba para lavar el dinero de la droga. Tanta abundancia tenía además un sentido simbólico dentro de los cambios que experimentaba la sociedad antioqueña. La fiesta del consumo fue la forma que usaron los narcotraficantes para anunciar y reclamar su ascenso social. A diferencia de las austeras y reservadas élites empresariales, los jefes de la mafia se presentarían a la sociedad llevando a los diferentes escenarios sociales las mercancías y las formas de entretenimiento de moda. Un observador de la época, Mario Arango, describió la actitud desafiante en el consumo de estos narcotraficantes como un esfuerzo por proyectar simbólicamente su recién adquirido prestigio sobre las élites tradicionales:

Uno de los elementos más relevantes que ha provocado la subcultura del narcotráfico es el de la ostentación que le imprime el mundo que rodea a sus integrantes, desde sus caracterizadas actitudes personales hasta la vistosidad y colorido en sus bienes y objetos [...] El *emergente* como individuo proveniente de estratos bajos o de grupos en proceso de pauperización, trata con su comportamiento de hacerse sentir, de imprimir notoriedad a su presencia, como una expresión de autoafirmación revanchista sobre quienes en una u otra forma lo discriminaron y oprimieron. De ahí, su porte arrogante, ostentoso y prepotente, el vistoso vehículo, la moda informalmente agresiva y la peculiar arquitectura de sus viviendas. Su presencia se hace notar donde se encuentre, bien sea por el número elevado de personas que lo acompañan, la exagerada propina o el característico ruido de su vehículo al arrancar (Arango Jaramillo, 1988: 27).

En otro aparte Arango (1988) es todavía más explícito en cuanto a las implicaciones que tenía la ostentación de nuevos

objetos de consumo en el quiebre de las anteriores distinciones sociales en Antioquia:

En la tarde de un domingo de 1987 salí de Medellín con un grupo de amigos a un paseo por municipios cercanos, a la denominada la vuelta a oriente. Al detenernos, como es de rigor en estos casos, en un restaurante de carretera a tomar una copa, concentré mi atención en la clientela, los modelos de automóviles parqueados y los que llegaban. La mayoría de las personas correspondía, aparentemente, a quienes hace veinte años llamaban negros, pero ahora su condición social era otra. No se trataba ya de personas apocadas por la inseguridad que provoca la pobreza y la dependencia patronal. Por el contrario, eran hombres que no sólo hacían ostentación con los mayores y más costosos consumos, vestuario informal y llamativo y pechos cubiertos por relumbrantes objetos de oro, sino que se encontraban acompañados de las mujeres mejor trajeadas, al menos por el costo de sus prendas importadas, pertenecientes igualmente, a la misma franja social. Los ostentosos vehículos aparcados eran propiedad de tan exótico grupo. Hace veinte años, cualquiera de esos arrogantes individuos, si no fuera por el equipamiento que los acompañaba, habría podido asociarse con el modesto albañil, el chofer de camión o la mesera de café (Arango Jaramillo, 1988: 13)

Podía ser que la escasa sofisticación y desenvolvimiento cultural los llevara a cometer excesos de mal gusto, pero con esa forma de celebración los narcotraficantes habían logrado un impacto definitivo en la difusión social de su negocio. Habían propiciado la transformación de los valores y los hábitos de la población desde cambios en el consumo. Para muchas comunidades anteriormente aisladas del mercado la llegada de bienes y

servicios de consumo masivo constituyó una forma de conexión al resto del mundo. Un relato casual sobre el efecto económico del narcotráfico en el Norte del Valle refleja el impacto en las posibilidades de inserción económica desde un aspecto tan trivial como el mercado de las mascotas: “Un hecho bien significativo en este sentido, es que aquí no se conocían sino los perros llamados “gozques”; mire las razas finas que hay ahora, y hasta almacenes de lujos y comidas para mascotas.”(Betancourt, 1998: 177). Los valores simbólicos que traían implícitos estos objetos sobre pautas de comportamiento, formas de socialización y distinciones entre individuos, los cuales fueron adecuados a las circunstancias locales, comenzaron a ser parte importante de la vida de las comunidades. Y por ser valorado socialmente los narcotraficantes habían adquirido un enorme poder al convertirse ellos en la fuente principal de satisfacción de esas necesidades de consumo. Su dominio se extendería aún más en sectores de bajos ingresos cuyo acceso al consumo dependía de su adscripción a alguna red clientelista y del comercio informal que se movía en gran parte gracias a los excedentes y al lavado vinculado a las drogas.

Una teoría sobre la difusión social del narcotráfico en Colombia

El narcotráfico como actividad económica es ante todo un asunto de reducción de riesgos. La rentabilidad está garantizada porque los precios de venta son varias veces superiores a los costos de producción y la demanda siempre supera a la oferta. Los riesgos en cambio son múltiples e involucran no solo pérdidas económicas sino la desaparición material de los participantes, su encarcelamiento indefinido y la seguridad de sus familiares.

Sin embargo, los primeros narcotraficantes con aspiraciones de control sobre la actividad criminal actuaron contrario a la lógica que dictaba que lo mejor para el éxito del negocio era la clandestinidad. Al hacerse visibles hicieron todo lo opuesto a lo que predica la teoría de ‘decisión racional’: elevaron los riesgos y los costos de persecución estatal. Pero la visibilidad promovida por los mismos delincuentes no hizo parte de un comportamiento irracional dado que el reconocimiento social era el objetivo final.

Como era de esperarse la visibilidad de los primeros capos creó las condiciones para su propio final. Tanta atención elevaba los riesgos de persecución y los costos de corrupción de las autoridades, al tiempo que debilitaba la organización criminal frente a sus competidores. Sucesivamente los mandos medios y pequeños capos en ascenso ganaban el pulso a los anteriores jefes, bien fuera por medio de vendettas o de eliminación por las autoridades. Así sucedió con Escobar, Rodríguez Gacha, los capos del Cartel de Cali y demás figuras legendarias de las drogas en Colombia. Pero la difusión del negocio como una actividad productiva que dispone del conocimiento operativo para su ejecución y que estructura el poder político y económico en muchas comunidades del país quedó garantizada. En la memoria colectiva de la sociedad cuajaron los conocimientos de servicios esenciales para la industria de las drogas como cultivadores, transportistas, proveedores de insumos, ‘cocineros’ de laboratorios, sicarios, etc.

Puede deducirse en ese sentido que la celebración social de los narcotraficantes activó un primer mecanismo de difusión social del crimen a través de la transmisión sistemática entre ciertas comunidades de los conocimientos operativos de una actividad criminal. La celebración implicaba una exposición directa y sistemática de los conocimientos operativos del ne-

gocio. También implicaba la legitimación en la comunidad de una actividad ilegal y su aceptación suficiente para que muchos de sus miembros opten por la criminalidad. Sin importar que quienes optaran por asumir una plaza en la competitiva carrera del tráfico de drogas conocieran que antemano lo breve y riesgoso de su decisión, para muchos miembros de la comunidad era un imperativo su vinculación al negocio como mecanismo de reivindicación social. La ilusión de ser valorado ante ‘los suyos’ y que ‘los otros’ reconocieran el poder de ‘los suyos’ era más importante que el hecho casi inexorable de convertirse en material de sacrificio para que el narcotráfico continuara funcionando. Lo que Pablo Escobar y demás miembros de su generación criminal lograron en la sociedad antioqueña fue que para una parte de la población se convirtiera en un valor social importante asumir el riesgo de un sacrificio temprano a cambio de aceptar una forma de reconocimiento social. En consecuencia, sin la vistosidad de la celebración de los narcotraficantes que actuaron como bandidos sociales no hubiera sido posible la difusión operativa del negocio de las drogas. El conocimiento de la producción y tráfico de cocaína hubiera quedado relegado a unos cuantos criminales de carrera. Hubiera bastado la eliminación de unas pocas organizaciones criminales por las autoridades para suspender el flujo de conocimiento operativo del negocio.

La diferencia en el grado de expansión que el narcotráfico experimentó en Colombia en caso de no haberse dado la difusión social del negocio puede apreciarse con un caso ocurrido en la cuna del Cartel de Medellín. Un narcotraficante poco conocido de Envigado fue Gilberto Saldarriaga, quien hizo su fortuna con la marihuana antes del auge Escobar. Este desconocido traficante mantuvo siempre un bajo perfil y su derroche fue ante

todo un acto privado que no involucraba a su entorno social. La protección política la obtenía del Partido Liberal a cambio por supuesto de generosos patrocinios a sus candidatos y cuadros en Envigado. La consecuencia de su actitud clandestina fue que la difusión de los conocimientos sobre la producción y comercialización de la droga en las comunidades donde interactuaba era prácticamente nula. Con su desaparición y la de algunos cuantos asociados y subalternos hubiera bastado para acabar con una forma criminal, o al menos nunca hubiera llegado a ser parte importante de la sociedad colombiana. Una circunstancia similar se encuentra en las selvas y sabanas del suroriente colombiano. Si narcotraficantes como el Mexicano Rodríguez Gacha no hubieran propiciado una cultura de la coca a través de su celebración entre las comunidades aisladas y miserables de colonos, la población campesina en los bordes de la frontera habitable de Colombia no se hubiera convertido en cientos de miles de coccaleros.

El aprendizaje colectivo de una actividad criminal dependió por supuesto de la presencia de ciertos factores del contexto social que permitieron materializar las oportunidades criminales. Sin la estructura clientelista y las relaciones capitalistas en sectores populares, dos condiciones en apariencia contradictorias, los delincuentes antioqueños de origen humilde no hubieran podido resolver las exigencias comerciales y empresariales del narcotráfico. Su resentimiento no hubiera sido suficiente para organizar el tráfico internacional de cocaína. De igual modo, si en el suroriente de Colombia no se hubiera dado el proceso de colonización y surgimiento de las FARC el papel de los mafiosos de las esmeraldas en el tráfico de cocaína hubiera sido menor. Sin cultivos de coca y territorios protegidos para instalar labora-

torios los esmeralderos no hubieran tenido mucho que ofrecer a los criminales antioqueños. El aprendizaje social de un crimen es una consecuencia entonces tanto factores estructurales como de actuaciones de los agentes delincuenciales.

Un segundo mecanismo de difusión del narcotráfico en el orden social proviene de su impacto en la ampliación del consumo de masas. La importancia de este mecanismo está en el traspaso del umbral de población: de los pocos que directamente se relacionan con una actividad criminal a un sector significativo de la sociedad cuyo orden es transformado por los efectos económicos del crimen. Cuando una proporción significativa de la población transforma sus valoraciones sobre los objetos de consumo que se adquieren en una economía y cuando los ingresos de una actividad criminal se convierten en un factor definitivo para su provisión, el crimen ha adquirido una legitimación estructural de facto. En otras palabras, la sociedad sin vincularse directamente a un delito reconoce en sus efectos económicos la estructura que organiza las relaciones sociales. Estos efectos no están reducidos a la producción de divisas para financiar la compra de objetos de consumo. También son importantes los mecanismos de distribución y la valoración de los objetos que se consumen con los nuevos ingresos. Sin la presencia de alguna forma de transacción económica que posibilite a una proporción significativa de la sociedad el consumo de los nuevos bienes que el narcotráfico ha convertido en objetos valiosos, el impacto social del crimen es nulo. La desmesura de los capos y la nueva disponibilidad de dólares en el mercado fueron, de ese modo, importantes para asegurar la difusión del narcotráfico en la sociedad más allá de la acción directa de los empresarios criminales. Pero si bien la celebración

social enseñó una actividad criminal a ciertas comunidades y contribuyó a cambiar los hábitos de consumo de la sociedad, sus efectos redistributivos estaban restringidos a sus allegados y comunidades cercanas. Fue la articulación del narcotráfico con la economía informal lo que catapultó los efectos indirectos del narcotráfico en la distribución de dinero en efectivo y posibilidades de consumo. Grandes volúmenes de mercancías de regular calidad inundaron los mercados locales. Las ventas de contrabando en los Sanandresitos y en plazas populares como el 'Hueco' en Medellín experimentarían una intensidad desconocida por las necesidades de lavado de los narcotraficantes y por el incremento de la capacidad de consumo de clases medias y bajas.

En una etapa posterior de las dinámicas adquisitivas propiciadas por los excedentes de las drogas muchos empresarios del sector formal se beneficiarían por la ampliación del mercado interno de sus productos. De hecho, el narcotráfico propició que muchos habitantes de zonas aisladas y de sectores marginales pudieran acceder a aquellos servicios y bienes que por sus características productivas constituían un mercado cautivo para las élites económicas del país debido a las políticas proteccionistas del desarrollo por sustitución de importaciones. Bienes industriales, alimentos procesados, servicios como telefonía celular, banca o aerolíneas, entre otros muchos productos, son negocios cautivos para las grandes empresas nacionales por las economías de escala que hacen imposible su abastecimiento por empresarios locales. Las opiniones del renegado paramilitar alias Rodrigo 'Doble Cero' pueden guardar las exageraciones propias del rencor de un guerrero derrotado pero tocan un punto recurrente en las entrevistas con paramilitares y narcotraficantes en cuanto cómo se relaciona el narcotráfico con los intereses de las elites económicas:

La oligarquía colombiana es una oligarquía vendedora y prestadora de bienes de consumo masivo, recicladora de la plata del narcotráfico. [...] La oligarquía colombiana es la principal interesada en que el narcotráfico no desaparezca porque le interesa que haya un capital fluctuante y flotante de dineros ilegales en manos de la clase media y del pueblo colombiano para ellos venderles bienes y servicios de consumo masivo, baratijas, una cantidad de cosas³⁸ (Cívico, 2009: 84).

No obstante, es preciso reconocer que el narcotráfico también ha planteado enormes costos a las élites económicas por razones de inseguridad y por el crecimiento de los impuestos necesarios para financiar una mayor cantidad de soldados, policías y jueces.³⁹

Dos procesos económicos de redistribución de ingresos ilícitos fueron necesarios para la difusión del crimen en el orden social. Estos dos procesos lograron además que el narcotráfico superara lo estrictamente económico y adquiriera un significado social y político. En primer lugar, estaba el comercio y todo el sector servicios que se organizaba alrededor de las operaciones de lavado que generaban una demanda significativa de trabajo poco calificado. Luego de tener éxito en un envió los grandes capos de la droga invertían en empresas que se encargaban de justificar los ingresos ilícitos. Estas empresas podían ser de fachada, es decir no operaban en la práctica. Sin embargo, exis-

38. En una entrevista con un jefe paramilitar antes de ser extraditado obtuve respuestas similares acerca del proceso de infiltración del dinero ilegal en la economía legal. La diferencia estaba básicamente en los términos menos duros con los que se refería a la oligarquía colombiana y a que involucraba dentro de los interesados a las élites políticas.

39. De acuerdo a Villamizar y Espejo (2006) Colombia paso de gastar un 2.2% del PIB en 1990 en seguridad y defensa a gastar un 5.3% del PIB en 2005.

tían muchas empresas y empresarios que se especializaban en convertir los dólares del negocio en dinero limpio a través de la venta al público de mercancía o servicios. En los Sanandresitos, por ejemplo, los narcotraficantes financiaban las importaciones a un contrabandista al por mayor. Cuando el mayorista vendía la mercancía a los distribuidores minoristas reponía el monto de la importación menos la comisión cobrada por la operación de lavado. Muchas personas se beneficiaban de las empresas que cubrían estas operaciones. Alrededor de los puestos de venta de mercancía de contrabando se movían numerosos empleos informales y ocupaciones varias. Además los precios de las mercancías estaban subsidiados por no pagar impuestos y por servir como mecanismo de lavado. En las zonas cocaleras el efecto era aun más directo. Por ser la siembra de hoja de coca una actividad minifundista muchos habitantes contaban con recursos propios para consumir bienes y servicios en las cabeceras municipales, pero la capacidad de consumo dependía exclusivamente de la suerte de los cultivos ilícitos. Si la coca era erradica desaparecía el consumo de masas en su totalidad.

La relación entre la economía informal y los excedentes de la droga explica también por qué si la repatriación de capitales ilícitos equivalía anualmente a un máximo de un 4% del PIB los efectos del narcotráfico fueron tan contundentes en la sociedad colombiana. Un estudio sobre la magnitud de la economía subterránea en Colombia de Arango *et al.* (2006) halló que

“En promedio, entre 1976 y 1980, el trabajo informal puede alcanzar un rango entre 31,7 y 64,1% del empleo total. [...] El grado de informalidad del empleo urbano colombiano ha sido tradicionalmente muy elevado (situado entre el 54 y el 57%); mayor en las ciudades intermedias;

menor en las grandes ciudades. Entre 1984 y 1988 la informalidad del empleo urbano se elevó considerablemente en las cuatro principales ciudades, pasando del 54.1% al 55.5% y, sólo ligeramente en las seis ciudades intermedias donde, en promedio, pasó del 62.9% al 63.5%. [...]Por actividad económica, los informales se concentran en la distribución de bienes o en la prestación de servicios poco tecnificados” (Arango, *et al*, 2006: 11).

El mismo estudio encontró que el incremento de las actividades subterráneas alcanza “niveles máximos del 58% en los ochenta”(Arango, *et al*, 2006:43) luego de crecer desde finales de los setenta, y plantean al narcotráfico como posible explicación a la persistencia del contrabando abierto y la subfacturación de importaciones luego de la apertura económica de los 90. En suma estas mediciones muestran: 1) una fuerte asociación temporal entre narcotráfico y economía informal, 2) un peso importante de la economía informal en el agregado de la economía nacional, y 3) una alta participación del empleo y el consumo informal en el mercado laboral.⁴⁰

Los reportes de prensa corroboran el papel que juega la informalidad y la ilegalidad en la economía colombiana. Son comunes noticias como la siguiente de una empresa que importaba computadores para blanquear recursos del narcotráfico:

40. Los resultados de este estudio advierten también que la economía subterránea no es solo un fenómeno colombiano. Otros países de Latinoamérica muestran tasas incluso superiores de participación de economía subterránea. La diferencia está en que en Colombia los sectores subterráneos se articulan con el narcotráfico. En ese sentido puede sostenerse que la economía subterránea no es en sí misma ni causa ni consecuencia del narcotráfico. Lo que aquí se plantea es una relación diferente entre las transformaciones en el orden social y el orden político por el apoderamiento de una parte importante de la economía desde una actividad ilícita como el tráfico de cocaína.

Alias ‘Chaparro’ y ‘Juan Mauricio’ eran los jefes de la red. Rutinariamente recibían depósitos en efectivo en México al día por valor de 120 mil dólares. ‘Chaparro’ era el corredor principal de dinero de la organización, responsable de dirigir los recursos producto de la venta de narcóticos, recogidos en Nueva York, así como de las transferencias bancarias. ‘Juan Mauricio’ estaba encargado de dirigir estas transferencias desde una cuenta en México. El producto de esas transferencias electrónicas era enviado a Estados Unidos para las empresas basadas en la compra de piezas de computadoras y otros bienes⁴¹ (El Tiempo, 2010b).

Los computadores eran vendidos en Unilago, un enorme centro comercial en Bogotá donde se pueden conseguir a muy bajos costos toda la gama de mercancías relacionadas con sistemas, desde hardware hasta software. La razón de los bajos costos está en que su comercialización es utilizada para lavado en gran escala, evasión de impuestos y piratería de derechos de autor. Hasta es posible encontrar noticias de un lavador de dinero de la guerrilla, asociado con narcotraficantes que

En la actualidad figura como dueño de los seis almacenes Mercacentro de Ibagué y de uno en El Espinal, que son considerados los más grandes de todo el departamento. Esos supermercados generan cerca de 1.500 puestos directos y 2 mil indirectos. ‘Espero que los empleos de los almacenes Mercacentro no se vean afectados, porque en los últimos dos años Ibagué dejó de ser la primera ciudad del país en desocupación’, expresó Jesús María Botero, su alcalde (El Tiempo, 2010c).

41. Ver también: <http://www.radiosantafe.com/2010/04/23/desmantelan-organizacion-de-lavado-dedinerode-los-%E2%80%9Ccomba%E2%80%9D/>.

Una noticia reciente revelaría la magnitud que pueden alcanzar estos negocios que relacionan a empresarios informales con el contrabando y el narcotráfico:

El 2010 pinta para un récord en la lucha contra el contrabando, pues desde abril las mafias han perdido casi 500 mil millones por las incautaciones. En cuatro años, las mercancías decomisadas equivalen a 1,7 billones de pesos; es decir, 550 mil millones por año. La millonaria cifra, sin embargo, no alcanza a ser sino el 5 por ciento de lo que ‘coronan’ los contrabandistas. Al año, según las cuentas de la Dian, al país entran mercancías ilegales por unos 10 billones de pesos (5 mil millones de dólares). Uno solo de esos cargamentos, el que se incautó hace dos semanas en Buenaventura, estaba avaluado en 460 mil millones de pesos, según el director de la Policía Fiscal y Aduanera, coronel Mario Hernando Torres (El Tiempo, 2010d).

En segundo lugar, los narcotraficantes necesitaban de protección del poder político. La mayoría de las campañas electorales eran sobornadas para evitar que las autoridades persiguieran a los participantes del negocio y sus propiedades. Lo que se reflejaba no solamente en la estructura de poder político del país sino en todo el proceso de redistribución económica que implicaba el oficio mismo de la política. La consecuencia inmediata de la financiación ilícita de la clase política fue un incremento desbordado de los costos de las campañas electorales. Los nuevos recursos disponibles al tiempo que desvirtuaban el proceso democrático disparaban los precios de todo el andamiaje del sistema clientelista. Las clientelas ahora no se conformaban con los almuerzos, las botellas de licor departamental y la propina del día de elecciones. Era necesario ofrecer nuevos bienes, acceso a servicios básicos y oportunidades de ingresos durante

periodos de tiempo más extensos para contar con su respaldo electoral. El mercado de los votos no solo se había encarecido, sino que había vuelto más competitivo. Ambos, mediadores políticos y clientelas locales, cambiaban sus preferencias en las elecciones según aparecieran nuevos candidatos y movimientos políticos mejorando las ofertas previas. El oficio de la política se había valorizado porque además de ofrecer los tradicionales mecanismos clientelistas de participación y de redistribución de ingresos, se había convertido en una empresa que protegía a los participantes de una actividad ilícita importante en la economía nacional. En otras palabras, gran parte de las ganancias que recibían los políticos profesionales, los líderes populares que manejaban las votaciones de un vecindario o vereda, y las clientelas que se beneficiaban del proceso, tenían su origen en la necesidad de los narcotraficantes de recibir protección de las autoridades e instituciones colombianas. Sería así que las redes clientelistas del poder político adecuarían su funcionamiento para ofrecer el elemento esencial del éxito del narcotráfico: *la minimización de los riesgos*.

Surgió entonces una clase política, mezcla de viejos caciques, cuadros de los partidos tradicionales y figuras emergentes, especializada en convertir el respaldo electoral de las clientelas políticas en inmunidad al narcotráfico. Esta clase política tendría una función relevante en la difusión del narcotráfico en el orden social: *estaría encargada de proteger la supervivencia de un orden social basado en las relaciones clientelistas tanto como mecanismo de producción de rentas como de su posterior distribución*. Las rentas provenían de los recursos del estado y del narcotráfico, pero solo con el respaldo de las votaciones clientelistas era posible apropiarse del gasto público y ofrecer protección a los narcotraficantes. En

consecuencia: 1) el clientelismo se convertía en sí mismo en una forma de generación de rentas para diversos grupos sociales, y 2) la clase política articulaba el consumo de masas provisto por los excedentes de la droga con el consumo de servicios básicos provisto por las rentas públicas. Las posibilidades de acceso a estas rentas dependían a su vez de la relación de los individuos y grupos sociales con la estructura clientelista. Los profesionales de la política, por estar al frente de la representación de esta forma de orden social ante el estado y ante el resto de la estructura del poder político, eran el eje de la distribución de las rentas del clientelismo. Mientras los empresarios de los Sanandresitos y demás empresas ilícitas se encargaban de convertir los recursos de las drogas en dinero limpio, los empresarios de la política convertían en poder legal los recursos de las drogas a través de la compra de lealtades clientelistas entre amplias capas de la población. Las redes clientelistas de los narcotraficantes en celebración no eran comparables en tamaño e influencia al andamiaje de relaciones clientelistas de la clase política del país. Se trataba del salto de otro umbral en la difusión del narcotráfico en el orden social, en que la clase política de la periferia agregaba a su representación de intereses en la estructura de poder nacional la protección de una forma de organización de la sociedad que incluía el clientelismo con los recursos de la droga. Los nuevos políticos profesionales además de redistribuir los servicios del estado entre la población dependiente contribuían a la distribución de los artículos del consumo de masa por el narcotráfico.

Es difícil, por su naturaleza clandestina e ilegal, estimar una magnitud de la influencia del clientelismo y de cómo el narcotráfico influye sobre las relaciones clientelistas de diverso tipo que se

sucedan a lo largo del país. Sin embargo, al igual que sucede con la economía informal, las investigaciones académicas y los reportes de prensa sugieren que son fenómenos masivos. Las mediciones realizadas sobre el peso del voto mediado por alguna forma de intercambio clientelista demuestran su importancia en la definición del poder político en Colombia. Una investigación de Botero, Hoskin y Pachón (2009) basada en la encuesta Lapop⁴², halló que en ciertas regiones del país más de un veinte por ciento de la población vende su voto en las elecciones. Y según una encuesta realizada por Invamer Gallup, 7% de los colombianos han vendido alguna vez su voto a cambio de dinero en efectivo, un mercado, trabajo o material de construcción, lo que podría representar hasta 12% del censo electoral. A 22% de los encuestados no se le ha comprado directamente el voto, pero se le ha prometido, a cambio de su apoyo, trabajo, vivienda o becas.⁴³

De igual modo, son comunes los informes de prensa que asocian a un narcotraficante con uno o varios senadores. Una búsqueda desprevenida en la prensa muestra que los ejemplos abundan: alias ‘Rasguño’ declaró haber financiado la campaña de la expresidenta del Senado Dilian Francisca Toro,⁴⁴(El Espectador, 2010a) el Senador Juan Carlos Martínez quien se encuentra

42. Sitio web: Latin America Public Opinion Project. Disponible en: <http://www.lapopsurveys.org>.

43. Artículo de Agence France-Presse. ¿Ríos de dinero en la actual campaña? Marzo 06 de 2010. En el mismo artículo mencionan: “A una semana de que se celebren las elecciones legislativas en Colombia, candidatos y observadores electorales denuncian colosales gastos de campaña y la posible compra de votos, en un proceso político que aún estaría afectado por el narcotráfico y el clientelismo. La Misión de observación electoral (MOE) en Colombia conoció el caso de un candidato al Senado con gastos que podrían alcanzar los 7.000 millones de pesos (alrededor de 3,5 millones de dólares), aunque la ley establece un tope de 675 millones”. http://www.colombiaparatodos.net/noticia-colombia-%C2%BF_rios_de_dinero_en_la_actual_campana_id-10337.htm.

44. Ver también: <http://www.elespectador.com/node/193904>.

detenido es señalado por sus vínculos con los narcotraficantes alias ‘W’ y el ‘Señor del Puerto’⁴⁵(Cambio, 2008), el cacique del Partido Conservador Ciro Ramírez es señalado por sus vínculos con alias ‘Mi Sangre’,⁴⁶(El Espectador, 2010b) y otro expresidente del Senado Luis Humberto Gómez Gallo está acusado de vínculos con alias ‘El Socio’.⁴⁷ Existe además otra fuente de evidencia más contundente: más de un centenar de sentencias judiciales entre el Proceso 8000 y la parapolítica demuestran que los vínculos de los congresistas con los narcotraficantes no son asuntos marginales.⁴⁸

Quizá la descripción más emotiva de la articulación del clientelismo tradicional con el clientelismo construido alrededor de los recursos de la droga la daría en una entrevista radial la cacique del Partido Liberal Leonor Serrano de Camargo, quien acababa de perder la elecciones al Congreso en 2010:

Esta fue una campaña de mafiosos [...] el problema que tenemos en el país es que estamos viviendo en una cultura del narcotráfico. Cuando digo que estamos viviendo en una cultura del narcotráfico es el ciento por ciento de los colombianos así no conozcamos la coca, así no estemos

45. Ver también: http://www.cambio.com.co/paiscambio/785/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4380024.html

46. Sitio web: Verdad Abierta (2009). “Fiscalía llama a juicio a ex senador Ciro Ramírez por narcotráfico”. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/parapolitica/1122-fiscalia-llama-a-juicio-a-ex-senador-ciro-ramirez-por-narcotrafico>. Consultado: 15 de Abril de 2009.

47. El Espectador. Judicial. Ex senador reiteró su inocencia. Gómez Gallo, de nuevo a la cárcel. 22 Ene 2010. Ver también: <http://editor.elespectador.com/impreso/articuloimpreso183586-gomez-gallo-de-nuevo-carcel>.

48. “Hasta el pasado 30 de junio y como parte del proceso de Justicia y Paz, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía había compulsado copias a los organismos pertinentes para que investiguen a 140 miembros de las fuerzas armadas, 209 políticos (120 alcaldes, 28 concejales, 28 senadores, 16 representantes a la Cámara y 17 gobernadores) y 40 servidores públicos, entre los casi 4.000 casos que han sido enviados a investigación.”

metidos en el negocio. [...] Nadie se explica cómo una persona para llegar al congreso de la republica reparta a chorros el dinero que se repartió. Es que ustedes no se pueden siquiera imaginar las platas que nosotros vimos repartir en los municipios. [...] La mafia nos ha manejado con dinero y ya la gente no entiende sino con dinero. El país no puede seguir siendo manejado por dinero en las cantidades que se movió. Y ese dinero no sale lógicamente de los cultivadores del agro. ¿De dónde sale tanto dinero? Pues tiene que salir de los mafiosos. Y si usted se va departamento por departamento y municipio por municipio le van a decir lo mismo.

Cuando le preguntaron cómo afectaba el dinero a las campañas y cómo se diferenciaba del clientelismo tradicional de ‘tamal, lechona y cerveza’ respondió: “En regalos, en ofertas, en publicidad, en rifas. Acá tengo un papelito de un candidato que llega a rifar televisores en cierre de campaña: ‘tendremos rifas de electrodomésticos, televisores, licuadoras, planchas.’”⁴⁹ La entrevista es un autorretrato de la impotencia de Serrano de Camargo ante las transformaciones en la estructura clientelista propiciada por el narcotráfico. Al no ser capaz de ofrecer los nuevos bienes y servicios que financiaban las rentas de la droga, su esquema de intercambio clientelista basado solo en la distribución de servicios estatales quedaba relegado como un asunto del pasado.

Los dos mecanismos anteriores supusieron el traspaso de un primer umbral de difusión social del narcotráfico. Este umbral estaba definido por la participación de sectores significativos de

49. Audio de la W Radio. Marzo 17 de 2010. Disponible en: <http://www.wradio.com.co/oir.aspx?id=971184>.

la sociedad en la ejecución y en la protección de una actividad criminal, al punto que los esfuerzos del estado por reprimirla eran insuficientes para afectar su reproducción. Apenas los principales carteles de la droga eran eliminados surgían nuevas organizaciones que mantenían la participación y la relación de la sociedad con el crimen. Sin embargo, el traspaso de este primer umbral no fue solo una consecuencia de la capacidad de los criminales de difundir los conocimientos operativos de su actividad y de sus efectos indirectos en el orden social. Los recursos y las instituciones del estado, así como el rechazo de la población a aceptar el orden de unos criminales, también fueron relevantes para explicar hasta qué punto una actividad criminal podía difundirse en la sociedad. Más significativo aun, la respuesta del estado y de la sociedad marcaron los límites de un segundo umbral, aquel en que el alcance de la difusión social del crimen implicaba la delegación a organizaciones criminales del control de un área periférica de la sociedad. Mafias y señores de la guerra surgieron como estados de facto en numerosas regiones del país porque la expansión geográfica del narcotráfico coincidió con la predisponibilidad del orden local a aceptar la regulación de una organización criminal y porque el estado central encontraba conveniente que otros agentes se encargaran de proveer la seguridad en la periferia.

En la medida que nuevas regiones ofrecieron oportunidades a los empresarios de la cocaína de Antioquia se dio un proceso de expansión de las fases operativas del negocio a lo largo del país. El alcance de la expansión de las empresas narcotraficantes en las regiones estaría determinado por los rasgos de su orden social. No fue un asunto moral o de predisposición cultural al crimen lo que diferenció el desarrollo inicial del negocio y su

posterior evolución entre las diferentes regiones de Colombia, sino la coincidencia entre las condiciones del contexto con las oportunidades ofrecidas por una actividad criminal en expansión. Si el orden de la sociedad era susceptible a la difusión social del narcotráfico las drogas se convertían en el eje de la organización social y se traspasaba el umbral de reproducción automática del crimen. Si, por el contrario, la difusión social era restringida el narcotráfico se convertía en un asunto marginal dentro del orden de la sociedad. Del mismo modo, las posibilidades de traspasar el umbral de delegación de la regulación social por el estado dependían de los atributos de cada sociedad. Fue así que en zonas donde no era posible imponer un dominio basado en la figura del patrón, como en los espacios desarrollados de las grandes ciudades, los narcotraficantes apelaban a la clandestinidad para lavar sus activos. Mientras que en los vecindarios marginales de las grandes ciudades y municipios intermedios los mafiosos locales se convirtieron en el verdadero poder a la sombra, y donde podían alcanzar el dominio total, —las sabanas de la Costa, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales—, terminaron por organizar enormes ejércitos de miles de soldados regulares.

La gran paradoja estaría en que los narcotraficantes antioqueños solo pudieron organizar los ejércitos privados de señores de la guerra en zonas relativamente atrasadas por fuera de sus lugares de origen (Duncan, 2006). El clientelismo monetarizado, la mayor movilidad social y las relaciones sociales más dinámicas, que fueron las mismas condiciones del contexto que permitieron a los criminales humildes de Antioquia convertirse en súper-narcotraficantes, serían condiciones contrarias a la imposición de una hegemonía local por ejércitos de señores de la guerra. Los hermanos Castaño, alias Don Berna, alias Macaco,

Miguel Arroyave, alias Don Mario, entre otros tantos paramilitares de Antioquia, terminaron por convertirse en estados de facto con sus propios ejércitos en regiones diferentes a aquellas asociadas con el ideal de la colonización Antioqueña del siglo XIX. Estas mismas regiones, por su mayor grado de atraso y aislamiento, constituían contextos propicios para la irrupción de guerrillas de izquierda. De hecho, los narcotraficantes se vieron obligados a organizar enormes ejércitos privados para protegerse de las guerrillas. Y el estado central fue tolerante con estos narcotraficantes porque servían como contención militar a la insurgencia en zonas periféricas donde los costos de provisión de seguridad eran inviables.

Los anteriores mecanismos y distinciones señalan los fundamentos de una teoría sobre el proceso de difusión social del narcotráfico en Colombia. En los inicios del proceso estaba la oportunidad ofrecida por el incremento de la demanda por cocaína en Estados Unidos y la disponibilidad de criminales colombianos para competir por ese nuevo mercado. Fueron necesarios además ciertos atributos de la sociedad antioqueña —básicamente un sentido comercial entre sectores populares— para permitir que una base amplia de criminales aprovechara la oportunidad. Algunos de estos criminales —por su origen humilde y las condiciones de exclusión social— concibieron el éxito económico obtenido con el tráfico de drogas como una manera de reclamar su reivindicación frente a la sociedad. El narcotráfico adquirió entonces una faceta de rebelión, de bandidos sociales que utilizaban elementos tradicionales como el patronazgo y el clientelismo para desafiar las jerarquías sociales vigentes. La euforia de estos bandidos sociales activó un primer mecanismo de difusión social del narcotráfico: *el aprendizaje*

colectivo de la actividad criminal. Para que tuviera lugar un proceso de aprendizaje social no necesariamente toda la sociedad debía dedicarse o conocer a fondo un delito. Bastaba que dentro de un sector, grupo o comunidad se generara suficiente: 1) aceptación social de una transgresión a la ley, 2) disponibilidad de conocimientos sobre las operaciones, rutinas y destrezas necesarias para llevar a cabo una forma de crimen, y 3) disposición entre jóvenes y adultos subempleados a convertirse en criminales si la oportunidad se presentaba. Fue así que la celebración de los primeros grandes capos permitió que en muchas barriadas, municipios y veredas sucedieran estas tres condiciones. Las diferentes etapas del narcotráfico, desde la siembra de hoja de coca, el almacenaje, transporte y producción de cocaína, hasta la ejecución de violencia y la distribución a los mercados internacionales, harían parte del ‘capital social’⁵⁰ de diversos sectores de población. En Antioquia, y en menor medida en las zonas de influencia de la mafia esmeraldera, el aprendizaje sería aun más importante porque entre ciertos sectores populares se difundió el conocimiento sobre la organización del negocio en su totalidad. Tendría lugar un aprendizaje colectivo sobre la administración de las diferentes etapas del narcotráfico para montar complejas empresas criminales. Después de la caída de Pablo Escobar y del Cartel de Cali se sucedería el dominio de otras figuras antioqueñas de origen popular desde la siembra hasta el tráfico a los mercados internacionales. Los hermanos Castaño, Don Berna, Macaco, Varela, Comba, Loco Barrera y demás capos, fueron capaces de heredar y mantener empresas criminales encargadas de someter y administrar las diferentes etapas del negocio.

50. Un buen desarrollo del concepto de capital social en el narcotráfico lo ofrecen Beltrán y Salcedo (2008).

La difusión de los conocimientos operativos entre una serie de comunidades fue sin duda un factor importante para la expansión del narcotráfico en Colombia. Pero la difusión social hubiera sido insuficiente si no se hubiera activado un segundo mecanismo, *aquel relacionado con la introducción de nuevos recursos en la sociedad y su redistribución más allá de los actores sociales directamente involucrados en la actividad criminal*. Estos recursos tuvieron efectos tanto económicos como simbólicos en la definición del orden social a lo largo del país como consecuencia de: 1) la proliferación en los mercados locales de nuevos objetos de consumo masivo, 2) la financiación del acceso a esos objetos por el crimen a través del establecimiento de vínculos con otras actividades económicas y políticas, y 3) la suficiente distribución de recursos para que una capa significativa de población pudiera asimilar a su manera los cambios en los valores sociales implícitos en el consumo de masas. La celebración social de los narcotraficantes tuvo efectos importantes en ese sentido. Propició la valorización de nuevas posibilidades de consumo al mostrar a la sociedad la opulencia del mercado de la sociedad postindustrial y tuvo enormes implicaciones en el cuestionamiento de las jerarquías sociales a lo largo de numerosas regiones del país. Sin embargo, fue la disponibilidad de ciertos sectores económicos y políticos con una gran capacidad de redistribución de los ingresos del narcotráfico, lo que hizo posible su proyección dentro del orden social más allá de los vínculos directos entre criminales y sociedad. El proceso de lavado en los mercados locales y el clientelismo político al tiempo que inyectaron recursos invaluable a la economía permitieron a la población convertir estos recursos en capacidad de acceso real a las nuevas mercancías que redefinían las relaciones sociales. La redefinición y la redistribución del valor en la sociedad implicaban que los recursos de las

drogas se habían convertido en el fundamento de las relaciones económicas y sociales para amplios sectores de la población. Sin estos recursos las nuevas jerarquías sociales, posibilidades de consumo y formas de organización política quedaban sin su sustento económico. En términos estrictos de difusión social del narcotráfico este mecanismo propició: 1) la aparición de numerosas empresas especializadas en la conversión de dinero ilícito en dinero corriente dentro del sistema económico, 2) la aceptación del grueso de la clase política del país de recursos ilícitos a cambio de protección desde las instituciones del estado, y 3) una legitimidad de facto por el respaldo de las actuaciones cotidianas de un amplio sector de la población que dependía y aceptaba las nuevas formas de consumo y de organización social propiciadas por el narcotráfico, sobre todo a raíz del proceso de expansión geográfica que experimentó el negocio de las drogas en Colombia.

Sin proponérselo la rebeldía inicial de unos cuantos narcotraficantes de oficio había derivado en profundas transformaciones sociales. Una primera categorización de estas transformaciones estaría dada por el umbral de reproducción autónoma del crimen. La capacidad de reproducción de una forma criminal por encima de la capacidad de represión del estado fue la expresión de ciertas comunidades y grupos sociales que adecuaron su organización y sus formas de producción de riqueza a las demandas operativas de una actividad criminal. Pero también fue la expresión de la incapacidad del estado y de sectores de la sociedad opuestos a la difusión del crimen de impedir su difusión. En una etapa posterior el proceso de difusión social alcanzaría un umbral superior. El rasgo de autoridad patronal con que los narcotraficantes dominaron las empresas criminales se extendió

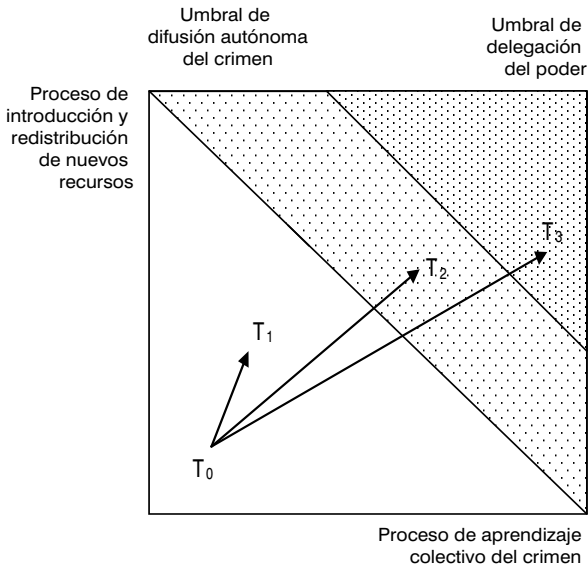
hasta el dominio social de espacios periféricos de la sociedad. Los barrios marginales de grandes ciudades, los municipios intermedios de los valles interandinos y las sabanas de la costa atlántica terminaron bajo el control de los ejércitos privados de los narcotraficantes. Bien fuera por indiferencia, incapacidad o por conveniencia de ciertos sectores de la sociedad, una gran parte del poder alcanzado por los narcotraficantes se debió a la delegación que hizo el estado central del control social de estas áreas geográficas. El resultado final del proceso de difusión social fue la asimilación de los empresarios de las drogas en la estructura de poder político del país desde el ejercicio directo de las funciones de estado.⁵¹

El Gráfico 1 resume la teoría de difusión social del narcotráfico y compara la trayectoria experimentada en Colombia con otros casos de difusión social del crimen. El eje horizontal indica la medida de aprendizaje colectivo de las operaciones delincuenciales que genera una actividad criminal. Hacia la derecha la intensidad de este aprendizaje es mayor. El eje vertical indica el mecanismo de introducción y redistribución de nuevos recursos en la sociedad. Hacia arriba quiere decir que una mayor proporción de individuos y grupos de la sociedad reciben recursos –económicos y simbólicos– del crimen. Los corte diagonales indican los dos umbrales de difusión social del narcotráfico. El primero contiene aquellas sociedades donde una actividad criminal se reproduce de manera autónoma a pesar de

51. La situación de pleno dominio del estado local, es decir de la obtención del monopolio de la violencia, de la tributación y de la justicia, se daría de manera masiva desde finales de los noventa hasta la desmovilización de los principales bloques paramilitares. Ver Duncan (2006). A su vez la parapoltica demostraría que ese poder tenía su base en alianzas con sectores políticos a cargo de las instituciones nacionales y locales.

los esfuerzos represivos del estado. El segundo umbral, hacia el extremo derecho de arriba, contiene sociedades donde el estado ha delegado la regulación social de espacios significativos de su territorio y población a organizaciones criminales.

Gráfico 1. Difusión social del narcotráfico



Los mecanismos de los ejes horizontal y vertical son necesarios en diferentes combinaciones para que se traspasen los umbrales de difusión del crimen en el orden social. Si existe suficiente aprendizaje criminal pero ningún efecto en los valores y hábitos de la sociedad como consecuencia de la pobre distribución de recursos desde un crimen, las autoridades pueden reprimir a las organizaciones criminales sin que se derive ningún tipo de malestar o retaliación política por la población. No habría, por ejemplo, presiones para reemplazar a los dirigentes políticos o cuerpos policivos que persiguen a los criminales. Por su parte, si no existe suficiente conocimiento colectivo sobre las activi-

dades operativas de un delito el resultado en el largo plazo es la destrucción de la única organización a cargo de las operaciones criminales. Del caso colombiano se deduce entonces que el grado de difusión social del narcotráfico fue una consecuencia de estos dos mecanismos, los cuales fueron a su vez el resultado de otros factores y procesos históricos, muchos de ellos imprevisibles. Desde el resentimiento social de unos criminales hasta el sentido comercial de las clases bajas de Antioquia fueron condiciones necesarias para la difusión social del narcotráfico, pero lo fueron porque generaron los mecanismos anteriores. De no haberlos generado la historia del narcotráfico en Colombia —y la historia misma de Colombia— hubiera sido muy distinta.

¿Qué tan generalizable es esta aproximación teórica a otros casos de difusión social de una actividad criminal? Algunas comparaciones iniciales se muestran promisorias, aunque los casos comparados exigen ahondar en potenciales causas distintas a los dos mecanismos de difusión social. Es decir, por factores y procesos históricos que sin causar aprendizaje colectivo del crimen e introducción y distribución de nuevos recursos explican situaciones donde los umbrales de difusión son traspasados. Las tres trayectorias (T1, T2 y T3) del Gráfico 1 están asociadas a los casos de los paraísos fiscales en el Caribe, los guetos negros de Estados Unidos y la mafia siciliana respectivamente. Cada trayectoria indica el comportamiento experimentado por una actividad criminal desde el momento inicial (T0), cuando surge como una oportunidad para ciertos individuos, hasta el momento en que el crimen alcanza su máxima incidencia en la sociedad. La trayectoria (T1) refleja lo sucedido en algunos paraísos fiscales de las islas del Caribe con la introducción de jugosos recursos por empresas criminales en la sociedad local. Unos cuantos empresa-

rios, la mayoría extranjeros, se especializaron en operaciones de lavado en gran escala sin que el grueso de la población tenga algo que ver con las inversiones y movimientos de dinero. Los hoteles y las sedes bancarias que operaban en las calles de pequeñas islas habían redefinido las relaciones sociales de la población nativa sin que la mayoría de ellos tuviera alguna participación en las actividades criminales que se ejecutaban tras la fachada de estas empresas. Existían pocos individuos en la sociedad con las destrezas, los contactos, el capital inicial y la experiencia para organizar complejas firmas bancarias o cadenas hoteleras capaces de ofrecer servicios de lavado a narcotraficantes, mandatarios corruptos y demás delincuentes. En cambio el uso del poder político como un medio para obtener sobornos de las empresas de lavado se convirtió en sí mismo en un crimen con alta difusión social. Las destrezas, conocimientos y dotaciones iniciales estaban disponibles para convertirse en un político profesional. Sin embargo su rentabilidad dependía de los empresarios extranjeros que pagaban los sobornos por recibir el permiso de operar en los paraísos de lavado. Este tipo de trayectoria sucedió de manera similar en la Costa Atlántica con la bonanza marimbera. Allí no tuvo lugar un aprendizaje colectivo del manejo del tráfico de drogas en los mercados internacionales. Dependían de empresarios de otros sitios para sacar la droga. Los narcotraficantes costeños fueron incapaces de realizar un tránsito autónomo al negocio de la cocaína. O más bien, nunca apareció una clase criminal capaz de hacer la transición en una escala significativa. Su papel estaba circunscrito principalmente a la venta de protección política y armada en los corredores de tráfico hacia el mar Caribe.

La trayectoria (T2) de los guetos de afroamericanos en las ciudades de Estados Unidos es el reflejo de aquellos casos en que se

traspasa el primer umbral pero el estado y la sociedad son reacios a delegar el control de la comunidad a los criminales. Allí el conocimiento operativo de las actividades criminales estaba altamente difundido entre las comunidades marginales. Los adolescentes y adultos estaban en permanente contacto con el aprendizaje, los contactos y las destrezas necesarias para involucrarse en la venta callejera de drogas. Más aun, el resentimiento de sectores excluidos de la sociedad era un factor determinante en la decisión de convertirse en criminal. Los miembros de la comunidad expuesta al aprendizaje del crimen encontraban en la transgresión a las leyes del estado una forma de reivindicación de su estatus frente a la sociedad. A partir de un análisis demográfico sobre la prevalencia de delitos asociados con venta de drogas Walters (2002) encontró que:

Drug trafficking may therefore act as a social equalizer for those who find themselves in position of low social-political status. Groups and people who believe that their opportunities for mainstream success are limited may be drawn to activities like drug dealing that promise huge profits over a relatively short period of time. Those benefits are measured not only in dollars but in status, power, and respect as well” (Walters, 2002: 171).

Por diversas circunstancias económicas los recursos generados por el crimen fueron también importantes en la redefinición de las relaciones sociales de las comunidades afroamericanas. De acuerdo a Anderson (2000):

The United States has for some time moving from manufacturing to a service and a high-tech economy in which the well-being of workers, particularly those with low skills and little education, is subordinated to the bottom line. In cities like Philadelphia certain neighborhoods have

been devastated by the effects of deindustrialization. [...] With widespread joblessness, many inner-city people become stressed and their communities become distressed. Poor people adapt to these circumstances in the ways they know, meeting the exigencies of their situation as best they can. [...] The drug trade is certainly illegal, but it is the most lucrative and most accessible element of the underground economy and has become a way of life in numerous inner-city communities (Anderson, 2000: 111).

En muchos casos los vendedores de drogas de los guetos han llevado a cabo acciones dirigidas a ganarse el respaldo de la comunidad. Las donaciones a organizaciones y miembros de la comunidad y a parientes y vecinos en situaciones de apremio los han convertido en modernos Robin Hood. De igual modo se han encargado de mantener cierto orden en el vecindario al monopolizar la ejecución de crímenes y reprimir a cualquier otro delincuente que intente actuar por fuera de los códigos y conductas permitidos. Sin embargo, pese a toda la difusión experimentada por el crimen en las comunidades deprimidas de afroamericanos y a los intentos incipientes de las organizaciones criminales por legitimar su dominio, el estado estadounidense ha sido reacio a delegar en las organizaciones criminales la regulación de estos espacios sociales. En contra de los guetos existen estructuras demasiado fuertes en la sociedad, desde el sistema económico hasta los valores esenciales de la clase media blanca, opuestos a que algún gobierno trance con organizaciones criminales una forma de dominio político tan explícita.⁵² La represión ha sido

52. Eso no quiere decir que no sucedan casos de corrupción de las autoridades. La evidencia de sobornos y relaciones clandestinas entre criminales y funcionarios del estado en Estados Unidos es abundante. Sin embargo, estos criminales pagaban por obtener protección de las autoridades de manera clandestina en

severa contra las minorías: un 78.2% de los encarcelados por asuntos de droga son afroamericanos o hispanos (Walters, 2002). Aunque excesiva en costos y encarcelamientos toda esta represión ha sido infructuosa para reducir la reproducción del crimen en las comunidades marginales de afroamericanos:

Since the code of the street is sanctioned primarily by violence and the threat of violence retribution, the more inner city youths choose this route in life, the more normative the code of the street becomes in the neighborhood. Neighbors are encouraged to choose between an abstract code of justice that is disparaged by the most dangerous people on the streets and a practical code that is geared toward survival in the public spaces of their community (Anderson, 2000: 134).

El caso de la mafia siciliana advierte las diferencias que se desprenden del proceso de difusión social cuando el estado y la sociedad son condescendientes con las organizaciones criminales por los servicios que prestan a otros sectores de poder. Desde hace más de un siglo a partir del auge de la exportación de limones se difundió entre la población de la isla el conocimiento de una forma de control criminal (Dickie, 2004). Gambetta (2007) ha definido esta forma de control criminal como el negocio de la protección privada: *los mafiosos cobran a empresarios legales e ilegales a cambio de protegerlos de otros criminales y de ellos mismos*. Durante el proceso de modernización de Sicilia la mafia se convirtió en un mecanismo fundamental de la distribución de recursos en la sociedad. Los excedentes de dinero provenientes del comercio

el ejercicio de acciones delincuenciales. Dentro de los acuerdos no estaba permitido el control de las relaciones sociales en una comunidad como sería, por ejemplo, la administración de la justicia ordinaria entre la población.

con el exterior de la isla y de las transferencias del recién creado estado italiano eran canalizados hacia los diferentes actores sociales a través de ella. El fracaso del fascismo por reprimir la mafia siciliana demostraría que al menos se había traspasado un primer umbral de difusión criminal. En realidad sus efectos eran mucho más profundos. La mafia había alcanzado una gran legitimidad no solo entre los sectores populares y rurales de Sicilia. Las élites locales encontraron en ella una organización que mantenía el orden en la producción agraria, la política y los mercados de las áreas urbanas (Blok, 1974), al tiempo que garantizaba el flujo de rentas de la economía local a sus bolsillos. El estado central y las élites del norte, —la región desarrollada y rica de Italia—, encontraron también en la mafia un aliado contra las aspiraciones de poder de la izquierda en el contexto de la guerra fría (Marino, 2002). La tercera trayectoria (T3) refleja así lo sucedido tanto en Sicilia como en Colombia: *amplio aprendizaje colectivo del crimen e inserción económica, lo que se tradujo en la difusión del crimen en el orden social y su conversión en un elemento de poder político que debe ser considerado por el estado nacional.*

Epílogo:

Una rebelión que se diluye a sí misma

La anterior teoría sobre la difusión social del narcotráfico en Colombia no pretende aportar nuevos elementos teóricos a la explicación del crimen como tal. De hecho, muchos de los factores identificados como causas del auge del narcotráfico tienen su fundamento en las teorías tradicionales de la criminología. Es evidente que la explicación basada en el resentimiento de los criminales de origen humilde y el desarrollo de las relaciones comerciales de Antioquia tiene sus fundamentos en la teoría

criminológica del conflicto.⁵³ De igual modo, a lo largo del texto se advierten elementos de otras escuelas criminológicas. Los desarrollos iniciados por Sutherland (1939) sobre la asociación diferencial como causa del aprendizaje social del crimen fueron replicados en el mecanismo de aprendizaje colectivo del crimen. De las aproximaciones teóricas más recientes de Anderson (2000) se tomaron las relaciones entre comportamientos criminales y definición de estatus y códigos en el orden social.

Los aportes están en un aspecto particular del crimen: *su capacidad de difundirse en el orden social para convertirse en un asunto de consideración en la estructura de poder político de la sociedad*. En la mayoría de las sociedades el crimen es solo un problema de política pública. Incluso en muchos casos donde hay presencia de crimen organizado y corrupción generalizada el problema no alcanza a incidir en la estructura de poder político. Se trata solamente de un asunto de sobornos a cambio de inmunidad por algún sector de las autoridades estatales. Las organizaciones criminales no tienen incidencia en la definición de las autoridades y los funcionarios que están a cargo del manejo del estado, mucho menos tienen capacidad de influir sobre la forma general en que el poder político es ejercido. Sin embargo, cuando el crimen por diferentes razones se filtra en los mecanismos que definen el orden de un grupo significativo de la sociedad su incidencia en la estructura de poder político es un evento probable. La definición de los cargos de gobierno se torna vulnerable al respaldo de sectores sociales que dependen de una

53. En su Teoría del Conflicto Turk (1969) explica los comportamientos criminales como una categorización de sectores poderosos sobre sujetos sociales sin poder. Cuando las normas entre el poder y los sujetos sociales no concuerdan se dan lugar a situaciones de conflicto que dependen de la organización de los criminales y lo extendido de las normas contrarias al poder.

actividad criminal para mantener el orden existente. Y quienes ocupan estos cargos deben considerar en su ejercicio del poder los efectos que tienen sus actuaciones, ya sean tolerantes con el crimen o radicalmente represivas, en temas del orden social que no tienen que ver directamente con el crimen. Un nuevo foco de investigación debe ser entonces los mecanismos y las causas que explican por qué en ciertos casos el crimen se convierte en un elemento estructural del orden social y cómo el crimen adquiere poder político —si es que lo adquiere— desde el proceso de difusión social.

El caso colombiano con el narcotráfico constituye un ejemplo extremo de la difusión de un crimen en el orden social y, como consecuencia, de la incidencia del crimen en el poder político. Los mismos mecanismos que propiciaron la infiltración del crimen en el orden social fueron utilizados para reclamar un espacio en la estructura de poder político del país. Así como el deseo de redimir su pobre valoración social y la tradición clientelista delinearon la forma que adquirieron las empresas narcotraficantes, estos mismos factores dieron forma a los mecanismos de protección política utilizados por el negocio. Los narcotraficantes no se conformaron con el goce de una riqueza inusitada en la clandestinidad. Un profundo sentido de reivindicación social llevó a algunos de ellos a proyectar el dominio sobre las organizaciones y las actividades criminales al dominio de comunidades y de amplios espacios sociales. Desde la organización de ejércitos privados hasta la financiación de las campañas a todos los cargos públicos del país fueron concebidos como una proyección del poder personal de una élite criminal. Y en ese propósito fueron sumamente exitosos porque pudieron desafiar al estado, bien fuera a través de sangrientas guerras

como la sostenida por Pablo Escobar o de extensos acuerdos políticos como los establecidos por los paramilitares. De esa manera el crimen al pasar por el filtro del orden social se rebeló contra las instituciones estatales que lo pretendían reprimir.

La gran paradoja estaría en que al traspasar el umbral de lo puramente criminal e interactuar con el poder político, el narcotráfico paulatinamente perdió su significado de rebelión y terminó ajustando las demandas y el resentimiento de sectores inconformes a la primacía de sectores establecidos. La lógica imperante de las relaciones entre patrones y clientes imponía demasiadas restricciones a cualquier proyecto de desafío a la estructura de poder establecida. El clientelismo era efectivo para construir poderosas organizaciones criminales, pero era demasiado vulnerable al control de la situación por otros sectores de las élites que evitaban que el desafío de poder se desbordara y que las rentas del negocio no dejaran de ser canalizadas hacia el fortalecimiento de su posición en el orden social. En el largo plazo el poder y la riqueza que se derivaba del narcotráfico no quedaría en manos de los grandes capos del negocio, es decir de aquellos criminales de origen humilde motivados por un profundo inconformismo social. Quienes se especializaron en empresas legales que funcionaban alrededor de servicios de lavado y en la prestación de protección política a los narcotraficantes, tenían mayores posibilidades de sobrevivir a las arremetidas de la justicia y a las vendettas entre los miembros de las organizaciones criminales. De igual modo empresarios y políticos contaban con las destrezas y los comportamientos sociales necesarios para interactuar con otros sectores de las élites nacionales y regionales. Podían reunirse en público con ellos a hacer negocios o acuerdos políticos sin llamar la atención. Por su misma capacidad de supervivencia su relación con las

clientelas era más estable, y podían ofrecer más trabajo durante más tiempo a los miembros de sus redes clientelistas. Al final la rebelión se diluiría entre la absorción de los narcotraficantes dentro del orden social de numerosos espacios periféricos y entre la delegación que el estado haría del poder político a las elites que surgieron con el proceso de expansión del narcotráfico en estos centros periféricos.

Bibliografía

- Appadurai, Arjun (1991). *Las mercancías y la política del valor*. Published in *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*. Arjun Appadurai. Ed. Cambridge University Press Editorial.
- Alonso, Luis E. (2005). *La era del consumo*. Madrid. Siglo XXI.
- Anderson, Elijah. (2000). *Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City*. W. W. Norton & Company.
- Arango Jaramillo, Mario. (1988). *Impacto del narcotráfico en Antioquia*. Medellín: Editorial J M Arango.
- Arango, Carlos, Misas, Martha y López, Enrique. (2006). “Economía subterránea en Colombia 1976-2003: una medición a partir de la demanda de efectivo”. En: *Revista ESPE*. Banco de la República. N° 50. Junio.
- Arias Gerson (2009, 25 de julio). “¿Qué verdad necesita el país?”. Sitio web: www.semana.com. Disponible en: <http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line-/verdad-necesita-pasi/126612.aspx>
- Beltrán, Isaac y Salcedo, Eduardo. (2008). “Narcotráfico y parapolítica en Colombia, 1980-2007”. *Evolución del Capital Social Perverso*. Borrador de Método. N° 50.
- Betancourt, Darío. (1994). *Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Una historia social de la mafia colombiana*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- (1998). *Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos. Valle del Cauca 1890-1997*. Bogotá: Ediciones Antropos.
- Blok, Anton. (1974). *The Mafia of a Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*. Harper & Row.
- Blok, Anton. (2001). “Honour and Violence”. *Polity*. 2001.

- Botero, Fernando. (2003). *La industrialización en Antioquia. Génesis y consolidación 1900-1930*. medellín: Hombre Nuevo Editores.
- Brew, Roger.(1977). *El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920*. Bogotá: Publicaciones del Banco de la República.
- Camacho, Álvaro. (1988). *Droga y sociedad en Colombia : el poder y el estigma*. Valle: CIDSE, Universidad del Valle, CEREC.
- Cambio. (2008). “Senador Juan Carlos Martínez se enreda por presuntos vínculos con narcotraficantes”. Domingo 2 de noviembre de 2008.
- Castillo, Fabio. (1987). *Los Jinetes de la cocaína*. Bogotá: Edit. Documentos Periodísticos.
- Castro Caycedo, Germán. (1996). *La bruja. Coca, política y demonio*. Bogotá: Editorial Plantea.
- Cepeda, Iván y Rojas Jorge. (2008). *A las puertas de El Ubérrimo*. Bogotá: Debate.
- Cervantes, José. (1980). *La noche de las luciérnagas*. Bogotá: Plaza & Janes.
- Christie, Keith. (1986). *Oligarcas, campesinos y política en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional.
- Claver Téllez, Pedro. (1993). *La guerra verde: Treinta años de conflicto entre los esmeralderos*. Bogotá: Intermedio Editores.
- Cloward, Richard A., and Ohlin, LLoyd E. (1960). *Delinquency and opportunity. A theory of Delinquent Gangs*. The Internatinal Library of Sociology.
- Cohen, Albert. (1966). *Deviance and control*. Prentice Hall.
- Confesiones de un narco (2003). Bogotá: Intermedio Editores.
- Cortes, Fernando. (1993). *Rodríguez Gacha. El mexicano*. Bogotá: Intermedio Editores.
- Dickie, John. (2004). *Cosa Nostra: a history of the Sicilian Mafia*. London: Hodder & Stoughton.
- Don Juan, (2008). “Griselda Blanco: La dama de la mafia”. Octubre 25.
- Duffield, Mark. (1998). “Post-Modern Conflict: Warlords, Post-Adjustment States and Private Protection”. *Civil Wars 1*.
- Douglas, Mary e Isherwood, Baron. (1981). *The world of goods*. Routledge.
- Duncan, Gustavo. (2006). *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Editorial Planeta Colombia.

- Duncan, Gustavo, y Muñoz, Camila. (2010). Y refundaron el país. “La mediación política en Colombia después de las armas y las drogas”. Claudia López. Bogotá: Ed. Random House Mondadori.
- Eddy, Paul. (1989). *The Cocaine Wars*. Bantam.
- El Tiempo* (2010a) “Así se vive en el Bajo Atrato Chocoano”. Marzo 6.
- El Tiempo* (2010b) “Capturan a cuatro lavadores de dinero de la organización criminal de los hermanos Comba”. Abril 23.
- El Tiempo* (2010c) “El ‘dossier’ que enreda con las Farc a varios magnates del Tolima”. Marzo 29.
- El Tiempo* (2010d) “Por cada dólar que ‘cae’, los contrabandistas ‘corona’ 20”. Mayo 20.
- El Espectador* (2010a). “‘Rasguño’ dice que finalizó campaña e Dilian Francisca Toro”. Marzo 19.
- El Espectador* (2010b). “Ex senador reitera su inocencia. Gómez Gallo de nuevo a la cárcel”. Enero 22 de 2010.
- Fajardo, Luis H. (1968). *La moralidad protestante de los antioqueños. Estructura social y personalidad*. Valle: Universidad del Valle, Ediciones Departamento de Sociología.
- Fals Borda, Orlando. (1979). *Mompox y Loba: Historia Doble de la Costa*. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
- Fernández, Alfonso. (2005). “Clientelismo y guerra civil en Cartagena. Sobre las estrategias políticas de la élite Cartagenera”, (1885-1895). Memorias. Sitio web: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Vol. 2.
- Ferrell, Jeff. (1998). “Culture, crime and cultural criminology”. En: Anderson, Sean E. y Howard, Gregory J. *Interrogating popular culture: deviance, justice, and social order*. Willow Tree Press, Inc.
- Franco, Vilma. (2006). *Poder regional y proyecto hegemónico – El caso de la ciudad metropolitana de Medellín y su entorno regional 1970-2000*. Medellín: Instituto Popular de Capacitación (IPC).
- Guarnizo, Luis. (2006). “El Estado y la migración global colombiana”. Migración y Desarrollo 1º semestre.
- Grillo, Ioan. (2010). “Confessions of a Colombian Drug Assassin”. Telegraph, abril. 2010.

- Gugliotta, Guy y Leen, Jeff. (1989). *Kings of cocaine*. Simon & Schuster.
- Gambetta, Diego. (2007). *La mafia siciliana. El negocio de la protección privada*. Fondo de Cultura Económica.
- Guillén, Fernando. (1996). *El poder político en Colombia*. Bogotá: Planeta.
- _____. (1963). *Raíz y futuro de la revolución*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo.
- Gutiérrez de Pineda, Virginia. (1968). *Familia y cultura en Colombia*. Instituto Colombiano de Cultura.
- Hobsbawm, Eric J. (1969). *Primitive rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries*. W. W. Norton & Company.
- Jaramillo Vélez, Rubén. (1998). *Colombia: la modernidad postergada*. Bogotá: G. Rivas Moreno.
- Jaramillo, J. E. Mora L. y Cubides F. (1989). *Colonización, coca y guerrilla*, 3ed. Bogotá: Alianza Editorial Colombiana.
- Kenney, Michael C. (2000). “La capacidad de aprendizaje de las organizaciones colombianas de narcotráfico”. En: *Análisis Político*, N° 41.
- Krauthausen, Ciro. (1998). *Padrinos y Mercaderes, Crimen organizado en Italia y Colombia*. Bogotá: Editorial Espasa.
- Lilly, J. Robert, Cullen, Francis T. y Ball, Richard. (2006). *Criminological Theory: Context and Consequences*. 4 ed. Sage Publications, Inc.
- Legarda, Astrid. (2005). *El verdadero Pablo. Sangre, traición y muerte... En las confesiones de Alias “Popoye” su principal lugarteniente*. Bogotá: Ediciones Dipon.
- Londoño, Oscar. (1989). *Colonización del Ariari, 1950-1970: aproximación a una historia regional*. Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo de los Llanos.
- López, Andrés. (2008). *El cartel de los sapos*. Bogotá: Editorial Planeta.
- López Toro, Álvaro. (1970). *Migración y cambio social en Antioquia durante el siglo XX*. Bogotá: Documento de la Universidad de los Andes.
- Marino, Giuseppe Carlo. (2002). *Historia de la mafia. Un poder en las sombras*. Barcelona: Javier Vergara.
- Mayor Mora, Alberto. (1984). *Ética, trabajo y productividad en Antioquia*. Bogotá: Tercer Mundo.

- Molano, Alfredo. (1987). *Selva adentro: una historia oral sobre la colonización del Guaviare*. Bogotá: El Áncora Editores.
- Moore, Barrington. (2005). *Principios de la desigualdad social y otros ensayos*. Editorial Hacer.
- Múnera, Alfonso. (1998). *El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)*. Bogotá: Banco de la República, Áncora editores.
- Negrete Barrera, Víctor. (2007). *Lucha por la tierra y reforma agraria en Córdoba*. Montería: Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú.
- _____. (2003). "Conflicto urbano, clientelismo y resistencia en Córdoba (Colombia)". En: *Revista Colombiana de Antropología*. Vol. 39. Enero-Diciembre 2003.
- Ocampo, Gloria Isabel. *La instauración de la ganadería en el valle del Sinú*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- Ocampo, Gloria Isabel, y Dover, Robert. (2006). *Del Estado privado al neoestatismo: el caso de Empresas Públicas de Medellín como aproximación a las relaciones entre Estado, empresa y política*. En *Globalización, cultura y poder en Colombia: una mirada interdisciplinaria*. Medellín: Ed. La Carreta Editores.
- Orozco, Jorge Eliecer. (1987). *Ledher, el hombre*. Bogotá: Plaza de Janés Editores.
- Ortiz, Carlos. Miguel. (1999). *Urabá: Tras las huellas de los inmigrantes. 1955-1990*. ICFES.
- Parsons, James. (1961). *La Colonización Antioqueña en el Occidente Colombiano*. Bogotá: Archivo de la Economía Nacional, Banco de la República.
- Reyes, Alejandro. (1978). *Latifundio y poder político*. Bogotá: Editorial CINEP.
- Reyes, Gerardo. (2008). *Nuestro hombre en la DEA*. Bogotá: Editorial Planeta.
- Safford, Frank. (1967). Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano. Berkeley, C.A.: Center for latin America Studies, University of California.
- Salazar, Alonso. (1990). *No nacimos pa' semilla*. Bogotá: Editorial CINEP.
- _____. (2001). *La parábola de Pablo*. Bogotá: Editorial Planeta. 2001.
- Salazar, Alonso, y Jaramillo Ana M. (1992). *Medellín las subculturas del narcotráfico*. Bogotá: Editorial CINEP.

- Sanchez, Gonzalo y Meertens, Donny. (2001). *Bandits, peasants, and politics: The case of "La Violencia" in Colombia*. University of Texas Press.
- Sánchez Jr, Antonio. (2003). *Crónicas que da miedo contar*. Bogotá: Editorial A. Sánchez S. Bogotá, Colombia.
- Serrano, Alfredo. (2009). *Paracos*. Bogotá. Debate.
- Sin autor. (2003). *Confesiones de un narco*. Bogotá: Intermedia Editores.
- Sutherland, Edwin. (1924). *Principios de Criminología*. Chicago: University of Chicago Press. 1924
- Thoumi, Francisco. (1994). *Economía política y narcotráfico*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.
- _____ (2009). "Necessary, sufficient and contributory factors generating illegal economic activity, and specifically drug-related activity, in Colombia". *Iberoamericana*, IX, 35.
- Tilly, Charles. (1985). "War Making and State making as Organized Crime". En: *Bringing the State Back In*. Peter Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol, eds. Nueva York: Cambridge.
- Torres Arias, Edgar. (1995). *Mercaderes de la muerte*. Bogotá: Intermedio Editores, Círculo de Lectores.
- Turk, Austin. (1969). *Criminality and Legal Order*. Chicago: Rand McNally.
- Urdinola, Iván. (s.f.). *Historia de mi vida*. Sin mas datos.
- Uribe de Hincapié, María Teresa. (2001). *Nación, ciudadano y soberano*. Medellín: Corporación Región.
- Villamizar, Andrés y Espejo, Germán. (2006). *El Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia: de la Contención a la Ofensiva*. Fundación Seguridad y Democracia. Documentos Ocasionales.
- Villarraga, Álvaro y Plazas, Nelson. (1994) *Para Reconstruir los Sueños (Una historia del EPL)*. Bogotá: Fondo Editorial para la Paz. Progresar. Fundación Cultura Democrática.
- Walters, Glenn D. (2002). *Criminal belief systems*. Praeger Publishers.
- Zamocs, León. (1985). *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*. Bogotá: Editorial Cinep-UNRISD.

Nota de autores

Gustavo Duncan. Es Magister en Seguridad Global de la Universidad de Cranfield y estudiante de doctorado en Northwestern University. Es profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes. Autor del libro *Los señores de la guerra* (2006) y de numerosos artículos sobre violencia y Estado en Colombia. Contacto: gustavoduncan@yahoo.com.

Ana María Jaramillo. Es Socióloga (Universidad de Antioquia) y Magister en Historia (Universidad Nacional). Investigadora Corporación Región: Grupo Colciencias Ciudadanías, conflictos y políticas sociales. Ha publicado entre otros los libros *Poniendo tierra de por medio: Migración forzada de colombianos en Colombia, Ecuador y Canadá* (2008) y *Los rostros del miedo* (2002). Contacto: ajaramillo@region.org.co

Alberto J. Naranjo R. Es Economista (Universidad de los Andes, Colombia), Magister en Economía (Universidad de los Andes, Colombia), Doctor en Economía (Universidad de Estocolmo, Suecia). Profesor investigador de la Universidad EAFIT, Jefe Departamento de Economía (Universidad EAFIT) (2008-presente). Intereses de investigación: drogas ilícitas, violencia, economía del conflicto, economía del fútbol. Contacto: anaranj9@eafit.edu.co

Jorge Giraldo Ramírez. Es Doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Profesor y Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit. Ha publicado entre otros los libros *El rastro de Caín* (2001) y *Guerra civil posmoderna* (2009) y ha coeditado *Ciudadanía y derechos humanos sociales* (2001), *Carl Schmitt: política, derecho y grandes espacios* (2007) e *Isaiah Berlin: utopía, tragedia y pluralismo* (2011). Artículos suyos han sido publicados en diversas revistas especializadas nacionales y extranjeras. Contacto: jorgegiraldo@eafit.edu.co

El punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen es la opaca y cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales y principal generador de violencia y problemas humanitarios, en el contexto de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos.

ISBN: 978-958-8719-02-3



9 789588 719023